Alma Guillermoprieto

ESTA IMPROBABLE TIERRA PROMETIDA

Historias de América Latina en este siglo



DEBATE

Esta improbable tierra prometida

Historias de América Latina en este siglo

Alma Guillermoprieto

Traducción de
Laura Emilia Pacheco

DEBATE

Introducción
Una vida de reportera en América Latina

Vivía yo en Bogotá, Colombia, en noviembre de 1988, cuando se difundió la noticia de una terrible masacre en Segovia, un pequeño pueblo minero a kilómetros de cualquier parte, pero al que se podía llegar en avión desde Medellín. El reporte de la matanza tardó horas en viajar hasta la capital, pero luego estalló en todos los noticieros del país. Nos enteramos de que, en tan solo hora y media de carnicería, decenas de personas habían sido asesinadas ese largo fin de semana. Después de la matanza, los diarios publicaron durante días planas enteras de fotografías de los deudos frente a los ataúdes llorando bajo la lluvia torrencial. Sin embargo, a pesar del escándalo y la conmoción que hubo esa semana, no logré encontrar en la prensa de Bogotá un solo recuento que me ayudara a entender cómo había podido ocurrir semejante atrocidad.

Me sentí horrorizada y a la vez fascinada por la noticia: el pueblito oculto en algún rincón perdido entre las montañas y los valles de la rugosa geografía colombiana; el hecho de que la capital permaneciera impasible frente a crímenes brutales cometidos en distintos pueblos e indiferente a las historias de dolor de sus habitantes; la incapacidad de ministros y de presidentes tan refinados para tomar el control de su país; la naturaleza mítica de la

historia de Colombia, empapada en sangre. Y luego estaba el horror de la masacre en sí, perpetrada, según se reportó, por un par de docenas de hombres, ninguno de los cuales pudo ser identificado por las fuerzas de seguridad.

Obviamente, me tocaba ir. Hice mi primer viaje a Segovia en marzo del año siguiente, e incluso entonces, meses después del hecho, desde el momento en que dejé el aeropuerto, una claustrofóbica atmósfera de terror me cayó encima como si fuera la manta de un secuestrador. Sentí que faltaba el oxígeno en ese aire abrasador, y aunque el pretexto de mi visita era escribir sobre una mina de oro británica que había en la zona, y a pesar de que me recibió el gerente para conocerla, durante cada minuto que duró ese viaje me invadió una aprehensión que me recorría la espalda y me ponía el pelo de punta.

En la mina hice algunas entrevistas para un reportaje que finalmente publiqué en *The Guardian*, y enseguida fui hasta el pueblo: un territorio sin ley, como del viejo Oeste. La gente me murmuraba que quien había organizado la masacre era un hombre llamado Fidel Castaño: ganadero, traficante de drogas de poca monta y dueño de la cantina local, con un negocito extra de contrabando de esmeraldas colombianas a Brasil y de diamantes brasileños a Colombia. La gente decía que diez años antes a su padre lo había secuestrado una de las múltiples organizaciones guerrilleras que plagaban Colombia. La familia Castaño pagó un rescate considerable que los guerrilleros aceptaron, aun cuando el padre había muerto en cautiverio de un ataque cardíaco, de modo que lo único que Fidel Castaño y su familia recibieron a cambio de su dinero fue un cadáver. De ahí la masacre.

La noche del 11 de noviembre, mientras el comandante del batallón local del ejército y sus tropas dormían tranquilamente —o al menos eso fue lo que declararon después—, unos asesinos enmascarados recorrieron la calle principal de Segovia de arriba abajo, tachando nombres de una lista, y cuando por fin terminaron su labor, habían dejado atrás cuarenta y seis cadáveres. Supongo que la mayoría de las víctimas eran personas de quienes Fidel Castaño y sus hermanos sospechaban que colaboraban con los guerrilleros que secuestraron a su padre. En el pueblo la gente murmuraba que entre los asesinos había voluntarios del batallón del ejército y resultó que tenían razón.

Una de las versiones que escuché acerca de por qué la masacre ocurrió tanto tiempo después del secuestro del patriarca de los Castaño sostenía que en realidad fue consecuencia de la elección de una joven alcaldesa cuyo partido político estaba aliado con la guerrilla, y que también había influido el reciente robo de un camión de reses de la familia Castaño por parte de esa misma guerrilla. Hablé con la alcaldesa que, comprensiblemente, se mostró taciturna, y después conversé más detalladamente con su guardaespaldas, locuaz y mucho más simpático. Me fui del pueblo a la mañana siguiente. Unas semanas más tarde, volví. La visita resultó aún más alarmante, y tuve que marcharme de allí a toda prisa.

Al poco tiempo, dos colegas de uno de los principales diarios de Bogotá, *El Espectador*, fueron a cubrir la misma historia. De camino al pueblo desde el aeropuerto los obligaron a salir del taxi y arrodillarse en la carretera, donde los ejecutaron. Nunca volví a Segovia, pero nueve meses después de los asesinatos averigüé que la justicia detuvo a un puñado de hombres, y los acusó de la

masacre. Investigué el nombre de uno de los prisioneros y fui a visitarlo a una cárcel no particularmente segura en las afueras de Medellín, donde estaba recluido.

No mencionaré aquí su nombre. Quizá ya esté libre y trate de llevar una vida normal. Quizá no estuvo involucrado en los crímenes de los cuales se le acusó. Tal vez esté muerto, o haya salido de la cárcel y aún trabaje de vez en cuando como sicario. Le dije quién era yo y qué hacía, pero no estoy segura de cuánto entendió. Su vocabulario era limitado, y parecía un poco simple, pero tenía los nervios de punta. Estaba alterado, no como alguien que está a punto de disparar un arma en un repentino ataque de ira, sino como alguien que espera recibir una paliza en cualquier momento. Esa angustia le daba ganas de hablar, no acerca de los asesinatos, sobre los que negó cualquier participación, sino acerca de su vida. Tenía veintiséis años, cabello cobrizo, y según recuerdo, era musculoso pero menudo, y sudó y no dejó de hacer vibrar una rodilla a lo largo de nuestra conversación.

Llamémosle Néstor. Trabajaba como minero independiente buscando oro, lo cual consistía, según me dijo, en subir cualquier colina cercana que él juzgara prometedora y, con un compañero, escarbar la tierra con un pico. Si encontraban una veta, se turnaban entre ambos para cuidar el sitio. En una jornada decente, la veta podía producir un puñado de pepitas de oro, intercambiables, quizá, por provisiones y comida suficiente para una semana. En su caso, el compañero de Néstor era uno de sus hermanos. Un día hallaron oro, y seis hombres subieron por la colina y asesinaron a su hermano, mientras Néstor se ocultaba detrás de una roca, rezando para que no lo mataran.

Había otro hermano menor al que Néstor siempre se refería como «mi hermanito». Ese *hermanito* era drogadicto y vendía pequeñas cantidades de *basuco*, un subproducto de la cocaína, para pagar su adicción. En ese momento yo trataba de hallarle sentido al recuento circular de Néstor, y ahora intento hacer lo mismo con mis notas de esa entrevista ocurrida hace tanto tiempo —el *hermanito* quedó ciego cuando sus rivales le sacaron los ojos con un machete—. Néstor creía que su *hermanito* pudo haber comenzado a vender drogas sin darse cuenta de que estaba invadiendo una zona controlada por un grupo guerrillero distinto al que mató al papá de Fidel Castaño. En todo caso, esos dos grupos se financiaban, sobre todo, patrullando cultivos de coca, que se vendía a traficantes para su exportación. El *basuco*, el residuo que queda después del proceso de manufactura, se vendía de manera local a una nueva generación de adictos. Ya sea que el motivo fuera o no vender *basuco* más allá de su terruño, un día los guerrilleros bajaron a rastras al *hermanito* de Néstor de un autobús suburbano y lo acribillaron frente al resto de los pasajeros. O quizá se tratara de dos *hermanitos* distintos, uno cegado y el otro acribillado, además del que fue asesinado en la mina…, quién sabe. Cuando mi hora asignada terminó y cerré el cuaderno de notas, estaba tan saturada de la balbuceante desesperación de Néstor que ya no lograba pensar.

Pero ahora puedo ver cómo Néstor, en caso de que alguien se le hubiera acercado, le hubiera entregado una ametralladora y le hubiera dicho: «Vamos a matar terroristas. Aquí tienes un dinerito», hubiera podido responder: «Claro, ¿cuándo empezamos?». Y puedo conjeturar también algo acerca del hombre que probablemente lo contrató, Fidel Castaño, el traficante de poca monta, quien fundó un

grupo paramilitar en ese tiempo, que —coludido con gran parte del ejército y la policía, y financiado por los ganaderos y los traficantes de cocaína— aterrorizó el campo y fue responsable de buena parte de los cientos de miles de asesinatos que se llevaron a cabo en Colombia entre 1988 y 2001. Lo que entendí fue esto: históricamente, Colombia ha sido un país aislado, pobre y tremendamente elitista. A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, Colombia nunca tuvo una revolución o reforma social significativa, y hasta hace poco su economía era demasiado pequeña como para lanzarse a un auténtico capitalismo moderno, con sus consiguientes beneficios de oportunidad y movilidad social.

Así que el crimen se convirtió en un medio principal, quizá *el* medio principal, de ascenso en la sociedad. Fidel Castaño era tahúr, propietario de cantinas y contrabandista, lo que le proporcionó un capital inicial. Después se convirtió en asesino y eso le dio poder, así que tomó esa pequeña asignación —su herencia y el capital inicial, por así decirlo— y se jugó la suerte en busca de más poder. Primero, coludido con ganaderos locales, fundó un grupo paramilitar para el departamento de Antioquia y estableció una relación de trabajo pionera con la guarnición local del ejército. Luego replicó ese modelo por todo el noreste de Colombia, hasta que, bajo el mando de su hermano Carlos, el movimiento paramilitar se convirtió en un ejército tan poderoso como las fuerzas guerrilleras a las que combatía.

La masacre de Segovia fue la primera y la más grande de las docenas de masacres paramilitares que se dieron a lo largo del siguiente cuarto de siglo en Colombia. Y aunque entendí su importancia, mi reportaje sobre el tema —un primer esfuerzo para *The New Yorker*— nunca se publicó. Ahora pienso que no logré

comunicar lo que me motivó para escribir esa historia: el hecho de que la política exterior prohibicionista de Estados Unidos con respecto a las drogas creó un voraz mercado ilegal y llevó a la muerte violenta a un millón o más de latinoamericanos —sobre todo hombres, la mayoría de ellos jóvenes— en el último medio siglo. Todo comenzó a principios de los años setenta: las encuestas del presidente Nixon colapsaban; el enojo popular al ver las condiciones en las que volvían los combatientes de la aventura estadounidense en el sudeste asiático; el propio disgusto de Nixon con la cultura fiestera de las drogas de los jóvenes estadounidenses desató una furia caótica que terminaría por hacerlo caer; y el resultado de esa mezcla ha sido una guerra puritana, represiva y descaradamente racista, nominalmente en contra de las drogas. Quienes la diseñaron pensaron que sería una guerra vía *interposita persona*: extranjeros en tierras extranjeras exterminarían a otros extranjeros para proteger a la ciudadanía estadounidense, no de los comunistas esta vez, sino de los vampirescos traficantes de drogas. Sabemos cuál fue el resultado de la guerra en las comunidades minoritarias dentro de Estados Unidos: la devastación que causó en las comunidades negras; la transformación de las pandillas de jóvenes en los vecindarios latinos; las crecientes cifras de adicción en comunidades blancas pobres y ricas, pero ese no es mi tema aquí.

Ya hace años que América Latina tiene el índice de homicidios más alto del mundo. Las cifras fluctúan según tiempo y lugar, pero en distintos momentos en Honduras, El Salvador, Venezuela, partes de México, ciertas ciudades de Brasil, algunas regiones de Colombia y, a últimas fechas, incluso en Ecuador —ese otrora tranquilo país— se han llegado a dar hasta ochenta y tres homicidios por cada cien mil

habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI), en los dieciocho años desde que el presidente Felipe Calderón involucró fatídicamente al ejército en la guerra contra las drogas de su país, han muerto más de medio millón de sus conciudadanos de manera no solo violenta, sino frecuentemente atroz. Y esta cifra no refleja el daño total; los desaparecidos, los mutilados, los traumatizados, los huérfanos, el creciente número de familias en las que mujeres pobres, y a menudo sin capacitación laboral alguna, luchan solas para criar hijos esforzados y obedientes, y hasta lo arriesgan todo para enviarlos a un lugar seguro: Estados Unidos.

Una *yo* más joven habría imaginado que Segovia era una historia sobre asesinos malvados que se enfrentan a civiles inocentes, y vaya que si había muchos hombres malvados involucrados: el ejército y los comandantes de la policía, Fidel Castaño, los líderes de la guerrilla, los capos de la droga. Pero la parte más interesante y difícil de la historia es la forma en que el destino de las víctimas y sus asesinos parecía entrelazarse —el padre asesinado por guerrilleros, el hijo del padre asesinando a otros padres de otros hijos— hasta que los protagonistas de esta historia infinita se volvían como aquellas figuras talladas dentro de las esferas chinas de marfil que ruedan en una lucha sin fin, sin escape y sin ganadores. Aun así, las raíces de Segovia se encuentran en lo que con el tiempo podrá entenderse como el ejercicio más temerario que ha hecho Estados Unidos de su inmenso poder en América Latina. Sigo profundamente agradecida con Néstor, quien me ayudó a entender esto, pero en su momento nunca logré desentrañar la historia y lo que significaba

para mí, de forma que pudiera hacerla entendible para otros también.

La gente me pregunta con frecuencia por qué me gusta escribir historias que suelen ser terriblemente violentas y crueles. La respuesta es que, desde luego, no me gusta. Esto no es a lo que esperaba dedicar una buena parte de mi vida. Cuando me inicié en el periodismo en 1978, como reportera en Nicaragua informando acerca de un levantamiento popular dirigido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional contra Anastasio Somoza, era evidente que el país estaba a punto de deshacerse de un terrible dictador. Mis colegas y yo presenciamos el triunfo de los sandinistas y jamás imaginamos que cuarenta años después escribiríamos acerca de cómo Daniel Ortega, el sandinista que fue presidente de 1985 a 1990, y de nuevo a partir de 2007, ha superado a Somoza en pura maldad arbitraria. O en cómo la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, ha adquirido, además de gran poder, todas las excentricidades propias de las esposas de los dictadores: el maquillaje estrafalario, las sesiones espiritistas, las lecturas públicas de poemas de su propia autoría, la ofrenda de su propia hija para el lecho de su marido. No podríamos haber previsto que el tratado de paz que terminó con la prolongada guerra interna de El Salvador en 1992 no detendría la violencia. Más bien llevaría al surgimiento, dos generaciones después, de bandas criminales, en gran medida conformadas por los diez mil jóvenes nacidos en El Salvador cuyos padres huyeron de la violencia hacia Estados Unidos y fueron deportados por la Administración Obama, quien los envió de regreso a un país que apenas recordaban. Pero no podía dejar de escribir solo porque las historias que surgían no eran las que me habría

gustado narrar. Recogí el hilo de lo que ocurrió en Segovia, empecé a entender algo al respecto y, aunque en definitiva no era mi intención pasar los siguientes veinticinco años observando a grupos de adolescentes asesinarse entre sí, y viendo cómo el narcotráfico causaba no solo ese desastre sino también la erosión de estructuras cívicas a lo largo de todo el hemisferio, difícilmente podía evadir esta tarea: acabé siendo reportera, e intentaba entender mi camino en medio de una lóbrega neblina.

Una tierra sembrada con los dientes de dragón de las drogas no es terreno fértil para la democracia. En los años ochenta y noventa, una buena parte de los que entonces observábamos el acontecer de la región hallamos motivos para la esperanza a medida que colapsaban las dictaduras y las elecciones se convertían en una parte rutinaria de la vida política. Pero pronto se nos recordó que las elecciones no son sino apenas un producto final de una vida democrática. La democracia no solo necesita un campo de juego nivelado y elecciones libres de sobornos y miedo, sino, sobre todo, igualdad entre sus ciudadanos. Así que no es de sorprender que en la región menos igualitaria del mundo los pueblos, sistemáticamente engañados por sus gobiernos —sujetos a fuerzas de seguridad que solo mantienen a salvo a los criminales, privados del derecho a una educación decente, respeto, transporte adecuado, y una vida tranquila—, sientan cinismo y amargura cuando se les llama a ejercer el voto. En una reciente encuesta de Latinobarómetro, la organización que estudia las actitudes ciudadanas sobre el mundo en el que viven y la democracia, resultó que menos del 50 por ciento de los latinoamericanos piensa que la democracia sea la mejor forma de gobierno. En México, «algo más de un tercio [del electorado]

apoya la democracia, mientras que otro tercio apoya la opción autoritaria». Más aún, «si las cosas se ponen muy difíciles», el 42 por ciento apoyaría un gobierno militar en vez de uno democrático. En algunos países los ciudadanos ya han votado así: en Brasil por Jair Messias Bolsonaro; por Hugo Chávez en Venezuela y, de manera infinita, por Nicolás Maduro, su bufonesco sucesor; y, desde luego, Nayib Bukele en El Salvador, que tiene muchos, muchos adeptos en el continente, quienes desearían poder votar por alguien como él.

Las historias de esta colección fueron escritas desde América Latina y publicadas en este primer cuarto del siglo XXI en tres revistas, con lectores sobre todo en Estados Unidos. Casi todas han sido luego traducidas al español. Esta es mi tercera recopilación de historias desde 1995, pero, como es natural, sus preocupaciones son distintas, conforme los malestares de la época han evolucionado más aprisa de lo que habría sido posible imaginar hace treinta años. La primera colección, *The Heart that Bleeds* (publicada en español bajo el título *Al pie de un volcán te escribo*), editada por mi añorado amigo y mentor, el legendario Robert Gottlieb, reunió historias que aparecieron en *The New Yorker* en su forma pulida y bajo la amorosa guía del irreemplazable John Bennet. La violencia fue el tema de algunas de ellas —sobre todo, las relativas a Colombia y una sobre Perú, que entonces se encontraba cautivo bajo el terror generado por el movimiento armado de Sendero Luminoso—. Sin embargo, había en general un espíritu celebratorio que recorría el libro: en Centroamérica y Sudamérica se había levantado recientemente la mano férrea de la dictadura; el precio de nuestras

materias primas era alto, y se cumplía con los rituales de la democracia electoral con orgullo y esperanza. En México, fue el tiempo del primer Tratado de Libre Comercio, firmado entre México y Estados Unidos, y la gran pregunta que atormentaba el alma de mis compatriotas era si resultaba posible ser mexicano y moderno a la vez.

La segunda colección, *Looking for History* («Buscando la historia»), recopila historias escritas tanto para *The New Yorker* como para *The New York Review of Books*. La generosa bienvenida que me extendió Robert Silvers, el imponente editor y fundador del *Review*, me dio libertad para escribir de una manera más meditativa acerca de los problemas de la democracia en América Latina, donde la fiesta de las elecciones libres del siglo XX se había acabado y, al parecer, quedaban solo unos cuantos países que bebían los sobrantes del champán antes de que llegara la resaca. La violencia de las drogas se institucionalizaba, los ruinosos sistemas educativos colapsaban, y el principal producto de la democracia parecía ser la corrupción. También había, desde luego, progreso: las economías de América Latina han avanzado y se han modernizado, el sistema de salud es casi adecuado en muchos centros urbanos, y una clase media emergente ha logrado echar raíces. Pero la industria ha florecido a expensas de sus trabajadores, que no siempre reciben un salario capaz de permitir la movilidad social. Estadísticamente, si se nace en la pobreza, lo más probable es quedarse así, tanto uno mismo como los hijos, de modo que el enorme glaciar de la injusticia ha seguido moviendo a nuestras sociedades hacia la corrupción y la violencia.

Looking for History estaba lleno de preguntas cuyas respuestas muchos de nosotros no lográbamos encontrar. La principal era: ¿cómo cambiar? Tras el fracaso de los movimientos revolucionarios armados; después de la ley de hierro de las dictaduras decididas a lograr el progreso mediante el orden (*Ordem e Progresso*, reza la bandera brasileña aún); a raíz del fracaso a trompicones de la democracia electoral formal; luego de haber intentado todo lo que estaba en nuestra mano, y estancados todavía en los mismos lodos del ayer, ¿cómo cambiar por fin?

Algunas de las historias de esta nueva recopilación surgieron a partir de la fe perdida de algunos de los que nacimos a mediados del siglo xx. Recordamos los sueños de cambio que fallamos tan rotundamente en alcanzar y nos preguntamos: ¿qué estábamos pensando? El texto sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo no ofrece respuestas, pero busca describir, al menos, la fisionomía de esa tierra ahora devastada.

Por otro lado, los relatos sobre Venezuela y Bolivia tratan de eventos en lugares que alguna vez llenaron de esperanza a muchos y que ahora son, en distintos grados, desastres. Cuando se firmó un acuerdo de paz en El Salvador en 1992, después de largos años de guerra entre un Estado asesino y un movimiento guerrillero utópico y severo, no fue fácil sentir gran entusiasmo —el país estaba física, financiera y emocionalmente devastado—, pero al igual que muchos observadores, creí entonces que por lo menos, y por fin, habría un final para décadas de una violencia espeluznante. Después de una ausencia de casi treinta años, escribí un texto surgido del estupor ante lo que encontré cuando volví a El Salvador en 2010. Esperanzas más modestas rodearon el ascenso de Evo Morales, quien no llegó al

poder en Bolivia mediante un utópico levantamiento armado, sino que se sentó en la silla presidencial después de una elección justa en 2005. Su caída fue notable porque, aunque tuvo logros significativos, padeció el sempiterno vicio presidencial: no quería despegarse de esa silla.

En gran medida, este libro es, entonces, la historia de la desilusión y de un futuro resquebrajado; un intento por fijar la imagen de este momento en la historia de un continente para que, quizá, los lectores encuentren similitudes con su propia experiencia de nuestro tiempo y busquen caminos que los alejen de nuestro dilema actual. Pero si la vida siempre fuera tan sombría, no valdría la pena vivir, y en todas partes la gente encuentra motivos para celebrar, amar y contemplar la belleza. Estoy infinitamente agradecida a mi profesión por la oportunidad de dedicarle tiempo a historias que no tratan sobre la muerte, sino sobre la descomunal, desbordante, profusa y desafiante vida de América Latina. Pongo como ejemplo el desbordado amor de los mexicanos por la comida sabrosa, empezando por los tamales.

Hubiera querido incluir muchas más historias como esa en esta recopilación. Quisiera que este libro no llevara este título. Quisiera que el humor que pueda haber aquí no fuera tan mordaz. Pero he sentido la obligación de observar y describir, para que quede registro, el triunfo de la violencia como forma política de expresión y el declive de la democracia como aspiración en este siglo XXI. Espero que, en un futuro no muy lejano, una escritora mucho más joven sea capaz de narrar e informar cómo la paz se consolidó a lo largo y ancho de estas tierras.

De demonios y dolor

1
La misión del padre Maciel

De todos los terribles escándalos sexuales en los que se ven enredados los jerarcas del Vaticano, quizá ninguno dañe tanto sus instituciones como la asombrosa historia del cura mexicano Marcial Maciel. Los crímenes cometidos contra niños por otros curas y arzobispos pueden provocar ira, pero también hacen que uno quiera desviar la mirada. Con el padre Maciel, sin embargo, uno apenas logra despegarse de este abominable drama conforme se va desarrollando en la prensa mexicana, página a página, revelación tras revelación.

El padre Maciel, que nació en México y murió en 2008 a la edad de ochenta y siete años, fue bien conocido en el mundo católico. Superando obstáculos que suelen ser insalvables, fundó la que sería una de las órdenes religiosas más dinámicas, rentables y conservadoras del siglo xx, que hoy cuenta con casi ochocientos curas y aproximadamente setenta mil hombres y mujeres en todo el mundo, integrantes del movimiento apostólico laico internacional Regnum Christi. La Legión de Cristo, que como orden tiene casi setenta años, es comparativamente pequeña, pero de gran influencia: opera quince universidades, y alrededor de ciento cuarenta mil estudiantes están inscritos en sus escuelas (en Nueva

York, sus miembros enseñan en once escuelas parroquiales). Desde hace décadas, sus líderes mantienen un notable acceso a la jerarquía vaticana.

Exitoso y cercano al papa Juan Pablo II, Maciel fue también un cura bígamo, pederasta, drogadicto y plagiario. Oriundo de Michoacán, un estado de fervorosa religiosidad en el suroeste mexicano, creció durante los años de la Guerra Cristera (1926-1929), un conflicto atroz que, en el México provincial, enfrentó a los católicos más tradicionales (los cristeros) con el gobierno anticlerical de la capital. Uno de los tíos de Maciel era el general comandante de los cristeros; otros cuatro tíos eran obispos. Uno de ellos, Rafael Guízar y Valencia, lo llevó a un seminario clandestino en Ciudad de México. Maciel era un veinteañero que ni siquiera había tomado los votos cuando creó una nueva orden religiosa con la ayuda de otro de sus tíos.

La nueva orden pretendía ser a la vez cosmopolita y estricta, pero, dada la juventud de su fundador y su falta de preparación general, no es de sorprender que las metas de la Legión de Cristo fueran tan imprecisas (aunque, en un fascinante estudio sobre Maciel del historiador y psicoanalista Fernando M. González, nos enteramos de que uno de los estatutos de la orden especificaba que los sacerdotes debían ser *decentes sint conspectu*, *attractione corripiant*: «agraciados y atractivos»). A los veintisiete años, el joven padre Maciel obtuvo una audiencia con el papa Pío XII, quien, según la historia oficial de los legionarios, lo instó a usar la orden para «formar y ganar para Cristo a los líderes de América Latina y del mundo». Esta ha sido la inquebrantable misión de la orden a lo largo

de seis décadas, que, con asombrosa velocidad, emergió como una fuerza conservadora capaz de rivalizar incluso con el Opus Dei.

El discurso de Maciel se enmarcaba, en gran medida, en el discurso anticomunista de Francisco Franco, me dijo Roberta Garza Medina, editora del semanario *Milenio* y hermana del vicario general de los legionarios. El conservadurismo de los legionarios, añade,

> se expresaba, sobre todo, en la postura que tenían con respecto a los roles de género. Las mujeres tenían que adoptar una actitud pasiva. O te tocaba la maternidad o, si eras soltera, participabas como lega en el Movimiento Regnum Christi… A Maciel no le interesaba mucho la política en sí: lo que le interesaba era enganchar gente en el Movimiento —gente con poder— para luego sacarle el jugo.

Para el movimiento conservador dentro de la Iglesia, me dijo un cura que había abandonado la orden, «Maciel era alguien que podía surtir a la iglesia de feligreses, curas y dinero».

Evidentemente, Maciel fue un hombre de gran magnetismo. Decenas de mujeres acaudaladas aportaron generosas cantidades de dinero a las buenas obras de los legionarios, y la revista mexicana *Quién*, por lo general conocida por sus páginas de sociales y no por sus reportajes de investigación, publicó hace poco la historia de una de las viudas más ricas de México, Flora Barragán de Garza, quien donó más de cincuenta millones de dólares durante los años de gloria de Maciel. «Le entregó prácticamente toda la fortuna de nuestro padre», contó la hija de Barragán al entrevistador de *Quién*, y añadió que, al final, la familia tuvo que intervenir para que la anciana no quedara en el desamparo. Su generosidad permitió que Maciel viajara en primera clase a lo largo de su vida errante, pero

también le aportó el capital para fundar la red de escuelas privadas a la que los mexicanos ricos y conservadores enviaban a sus hijos a estudiar.

En 1977, Blanca Estela Lara Gutiérrez, una mexicana que vivía en Cuernavaca, vio en la portada de la revista *Contenido* el rostro del hombre con el que vivía en unión libre desde hacía veintiún años. Tuvo dos hijos con él y estaba convencida de que era detective privado o «agente de la CIA», el cual, comprensiblemente, aparecía en casa solo de vez en cuando, por motivos de trabajo. Ahora se enteraba de que su esposo era sacerdote y de que su nombre real era Marcial Maciel. Según la revista, encabezaba una orden cuyas estrictas reglas y extremo conservadurismo parecían ocultar secretos repugnantes. El artículo abundaba en la información que salió a la luz por primera vez gracias a Gerald Renner y Jason Berry en el periódico *Hartford Courant*, de Estados Unidos, y revelaba que nueve hombres habían informado a sus superiores en Roma que Maciel abusó sexualmente de ellos cuando eran seminaristas adolescentes bajo su cuidado. Todos eran sacerdotes: dos habían ayudado a establecer la orden de Legionarios en Estados Unidos. Otro aún era cura, y el resto habían abandonado ya la orden.

Las acusaciones no eran nuevas, ni tampoco serían las últimas. En 1938 Maciel fue expulsado del seminario de su tío Guízar y, poco después, de otro seminario en Estados Unidos. Según testigos, una noche Maciel y su tío tuvieron un pleito monumental a puerta cerrada, y otro testigo, un legionario que conoció a Maciel desde la niñez, le contó al psicoanalista Fernando González que la furia del

obispo tuvo que ver con el hecho de que Maciel se encerrara con llave en la pensión donde se hospedaba con algunos de los niños más jóvenes de su seminario. El obispo Guízar murió de un infarto fulminante al día siguiente del pleito.

Después se supo que Maciel hacía que sus estudiantes y seminaristas le consiguieran Dolantin (morfina). Esto llevó a su suspensión como titular de la orden en 1956. Inexplicablemente, se le readmitió dos años después. Mucho más tarde, alguien se percató de que su libro *Salterio de mis días*, más o menos una lectura obligatoria en las instituciones de los legionarios y una especie de libro de horas, o guía de oraciones, era prácticamente un plagio total de *Salterio de mis horas*, escrito por un español sentenciado a cadena perpetua al final de la Guerra Civil española.

Ignorante y mendaz, Maciel, sin embargo, era un genio de la política y las relaciones personales. Pero eso no era todo: en una serie de artículos aparecidos en el *National Catholic Reporter*, el incansable Jason Berry detalló los diversos mecanismos mediante los cuales Maciel recibía dinero y después lo canalizaba al Vaticano. Por lo general, los enviados de Maciel entregaban sobres con miles de dólares en efectivo a ciertos jerarcas claves de la Iglesia. Las audiencias privadas con el papa se cobraban a una tasa de hasta cincuenta mil dólares por visita, dinero que se canalizaba a través de Stanislaw Dziwisz, el sacerdote polaco que fue secretario privado del pontífice desde 1966 hasta la muerte de Juan Pablo II.

Según un exjesuita que conoce la historia, una de las primeras donaciones considerables que recibió el movimiento de Solidaridad en Polonia procedió de Maciel, que reunió el dinero entre la élite conservadora religiosa que había cultivado con tanto empeño. No

hay duda de que el polaco Karol Wojtyla, para entonces ya Juan Pablo II, se enteró de este acto de generosidad y vio con buenos ojos la postura ideológica de Maciel, quien estuvo a su lado durante sus primeras tres visitas a México: el dinero de los legionarios, sus sacerdotes y su muy activo movimiento laico, el Regnum Christi, respaldaron la campaña del papa para expulsar de posiciones de poder a sacerdotes socialmente radicales o liberales y consolidar su catolicismo conservador.

Es difícil no pensar que estas fueron las razones por las cuales el Vaticano ignoró la detallada y desgarradora carta enviada en 1998 por ocho de los denunciantes de Maciel (el noveno miembro del grupo ya había muerto). Aunque el público se enteró por primera vez de las acusaciones a través del *Hartford Courant* y de la prensa mexicana, que reprodujo la historia de inmediato, el Vaticano se rehusó a actuar. Más bien, el papa Juan Pablo II alentó la beatificación de la madre de Maciel y de su tío, el obispo cristero Guízar, aquel que murió de un infarto después de descubrir que Maciel tenía conductas impropias con niños (el obispo es ahora San Guízar; la madre de Maciel aún está en proceso de beatificación). Fue apenas en 2006, tras la muerte de Juan Pablo II, cuando un comunicado del Vaticano anunció que a Maciel se le había invitado «a llevar una vida reservada de oración y penitencia». Vivió tranquilamente sus últimos años y murió en una bonita casa de retiro en Jacksonville, Florida. Los legionarios, sin embargo, han seguido creciendo en número y riqueza.

Resulta arriesgado para alguien que no sea creyente tratar de evaluar de qué forma la narrativa de Maciel afectará el prestigio de la Iglesia en su totalidad, porque una persona ajena puede entender muy poco de cómo se vive una fe entre sus miembros. Hace algunos días, los trabajadores que me construían una cocina prepararon el altar que ellos levantan cada 3 de mayo en el sitio donde se encuentren trabajando. La fecha de la Santa Cruz conmemora la ocasión mística en la que, a los tres siglos de su muerte, se hallaron los maderos con los que crucificaron a Cristo, pero también coincide con las festividades que inauguraban la temporada de lluvias en la época prehispánica. Los albañiles de mi casa tallaron y barnizaron amorosamente una pequeña cruz de madera, escribieron el año, la vistieron con una especie de ropón blanco que adornaron con listones azules, la rodearon de flores en floreros improvisados con latas y botellas de refresco, encendieron una vela y se quedaron un rato bebiendo junto a ella.

Sin duda, ellos saben o habrán oído hablar de algún cura que tiene una «empleada doméstica» o quizá una «sobrina» que vive con él en la parroquia, porque estas cosas nunca han sido poco comunes aquí —ni, probablemente, en ninguna otra parte—, aunque el esfuerzo para ocultarlas puede ser mayor en otras latitudes. Pero los paraguayos, por ejemplo, no han abandonado a su jovial presidente, el exsacerdote Fernando Lugo, a pesar de que es bien sabido que tuvo al menos tres hijos (él piensa que tal vez sean más) cuando todavía era obispo.

La homosexualidad también se ha tolerado en esta parte del mundo donde impera el machismo. Hasta cierto punto, casi se espera de los hombres que usan falda, como, por ejemplo, los

sacerdotes. Es posible que para muchos católicos el bautismo, la confesión y la misa semanal sean casi procedimientos burocráticos, como votar o sacar la licencia para conducir, y que la verdadera fe sea algo que ocurre en los altares domésticos o a través de los mágicos caminos de rituales mucho más antiguos, permitiendo que los sacerdotes vivan su vida, siempre y cuando se desempeñen bien en los sermones y los entierros. Pero, evidentemente, el abuso sexual de niños y su encubrimiento ya son otro asunto.

Resultó que la relación de Maciel con Lara Gutiérrez no había sido exclusiva. Unos diez años después de conocerla, inició otra relación prolongada con una mesera de diecinueve años en Acapulco, ante quien se presentó como un «agente petrolero». Tuvo una hija con ella. De acuerdo con un artículo reciente publicado en el periódico español *El Mundo*, Maciel tuvo varios hijos más con distintas parejas.

Tras descubrir que su esposo no era un agente de la CIA sino un sacerdote pedófilo, Lara Gutiérrez no se atrevió a declarar que estaba casada con él. Quizá la aterraba el hombre que ella creía que «era su Dios», como declararía una década más tarde. Quizá simplemente le dio vergüenza. En todo caso, guardó silencio mientras varias de las víctimas de Maciel y unos cuantos periodistas seguían presentando evidencia —sobre todo Gerald Renner, muerto en 2007, y Jason Berry, en el *National Catholic Reporter*—. Pero entonces, el pasado marzo, dos años después de la muerte de Maciel, Lara Gutiérrez se presentó con sus tres hijos en uno de los programas de entrevistas más prestigiosos de México y escuchó en silencio mientras dos de ellos declaraban que su padre, Marcial Maciel, los obligaba a masturbarlo, y que su primer intento de violarlos, dijo el mayor, ocurrió cuando tenía siete años.

Tenemos una doble visión de Maciel: vemos a la figura beatífica que conocen sus seguidores —una mano larga y elegante colocada sobre el pecho, la otra alzada dando la bendición— y, como si lo viéramos a través del ojo de una cerradura, al otro Maciel, pesadillesco, exigiendo a jóvenes que lo masturben y luego asegurándoles a los niños traumatizados que el Vaticano lo autorizó a paliar su terrible dolor físico con estos métodos. Pero, gracias a las investigaciones de Fernando González, sabemos que Maciel también fue producto de un abuso terrible. En su lecho de muerte, un hombre que de niño había crecido al lado de Maciel por fin reveló lo que sabía. El niño venía de una familia pobre en el pequeño y devoto pueblo de Cotija, en el estado de Michoacán, y Maciel era hijo de un próspero comerciante del lugar. Era de modos delicados y por lo tanto una ofensa viviente para su padre machista. El psicoanalista Fernando González nos cuenta que un día el padre de Maciel le gritó: «¡Te voy a mandar seis meses con los arrieros para que te hagas hombrecito! ¡No quiero maricones en mi casa!».

A Maciel y a su amigo los enviaron al campo con unos arrieros conocidos de la familia. El niño amigo de Maciel, ya viejo, confesó que los arrieros los habían violado a los dos. «Mi padre va a pensar que yo los provoqué —dijo el Maciel de once años a su amigo—. Me quiero ahorcar». También sabemos por varias fuentes que sus hermanos lo azotaban con regularidad hasta que por fin ingresó al seminario de su tío a los dieciséis años. Su vida puede leerse como un esfuerzo monumental por lograr el tipo de gloria capaz de recompensar la más abyecta humillación.

Los legionarios —es decir, Maciel— financiaron la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Felipe Mártir en Roma, donde Maciel quería que lo enterraran. Pero, sorprendentemente, Maciel el sacerdote casi siempre escenificó sus dramas pederastas en la enfermería, en cualquiera de los seminarios donde se hallara, como si ese fuera el lugar donde pudiera sanar. Les explicaba a sus víctimas que los actos de masturbación eran un remedio para su dolor físico, pero quizá lo que realmente esperaba en la enfermería era algún tipo de cura emocional. Comoquiera que fuese, sabía lo enfermo que estaba: dejó instrucciones a sus delegados para no iniciar su proceso de canonización sino hasta pasados treinta años de su muerte —con la esperanza, adivinamos, de que para entonces el recuerdo de sus pecados se hubiera borrado —.

Muy por aparte del daño que sufrieron las víctimas de Maciel, está el apremiante problema de por qué la Iglesia católica como institución no lo condenó cuando se ordenó sacerdote, o al fundar la orden de los legionarios, o cuando la historia de su pederastia apareció en la portada de revistas, o cuando el papa Benedicto XVI encontró que había suficiente evidencia para concluir que Maciel debía pasar el resto de su vida en reclusión, o incluso cuando los rumores llegaron a ser tan fuertes que justificaron una investigación del Vaticano a toda la orden. La respuesta no sorprende a nadie: en una época en que las iglesias se están vaciando, la Legión de Cristo ha sido una rica fuente de conscriptos, dinero e influencia. En México, todos —desde el milmillonario Carlos Slim hasta Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox— le dieron dinero o le pidieron favores a Maciel.

No fue sino hasta el año pasado cuando el sucesor de Karol Wojtyla, el papa Benedicto XVI, por fin autorizó una *visitación* —la forma que tiene la Iglesia de decir «investigación»— a toda la orden. Como de costumbre, la prensa y algunos religiosos marginados se habían adelantado mucho al Vaticano. Gracias a la prensa, sabemos que los legionarios mantuvieron a cerca de novecientas mujeres bajo votos no vinculantes como *consagradas*, o casi monjas, en condiciones de severa privación emocional. Según informes que aparecieron en fecha reciente en el diario *Milenio*, las mujeres, miembros del Regnum Christi, viven en comunidad, aunque no están ordenadas. Se les permite ver a sus padres una vez al año y pasar dos semanas con el resto de su familia cada siete años. Se espera que donen la mitad de su patrimonio a los quince años de consagrarse y, al cumplir un cuarto de siglo de vocación, que entreguen la totalidad de sus posesiones. Dos veces al mes tienen la obligación de realizar una conversación confesional con sus superioras, quienes a su vez reportan el contenido de esas pláticas a sus propios superiores dentro de los legionarios. Los visitadores del Vaticano que condujeron la reciente investigación sobre Maciel al parecer se sorprendieron al descubrir la existencia de las consagradas, y hallar en sus estatutos estas y otras violaciones de la ley canónica.

Al final, el escándalo de Marcial Maciel, repugnante y grotesco como es, podrá ser más bien un escándalo de la Iglesia católica. Ahí sigue la pregunta inquietante acerca del popular papa Juan Pablo II y sus relaciones con el sacerdote demoniaco. Ahí sigue también el hecho

primordial de que los legionarios —junto con Benedicto XVI, y ciertamente Juan Pablo II— representan la parte moralmente más conservadora de la Iglesia, y que ahora aparecen enredados en míseros escándalos de índole moral. Y sigue ahí, sobre todo, el hecho de que toda una institución internacional, caudalosa, está ahora bajo sospecha y que, durante décadas, la mayor institución de todas, la Iglesia católica, parece haberla encubierto. ¿Qué sabían los colegas legionarios de Maciel? ¿Cuándo lo supieron? ¿Quiénes eran sus cómplices? Los católicos que siempre identifican a sus sacerdotes con las películas de Bing Crosby o Cantinflas van a necesitar algún tiempo para asimilar tanta novedad.

Pero también está el asunto del futuro de la Iglesia, y de sus sacerdotes y monjas como seres sexuales. No es necesariamente psicología barata especular que la extrema represión sexual del tipo que impone la Iglesia católica a sus miembros conduce a la perversidad, un asunto que ha aflorado inconvenientemente una y otra vez a lo largo de los siglos. Parecería que muchos sacerdotes y monjas optan por obedecer las reglas, pero a la manera del dicho «obedezco, pero no cumplo». Ofrezco lo siguiente apenas como evidencia anecdótica, pero en mi contacto ocasional, amigable y a menudo lleno de admiración con curas y monjas de la Iglesia católica, un número significativo estaba en una relación de pareja. Hace años asistí a una gran fiesta de la iglesia en un pueblito al que llegaron sacerdotes y monjas de todos los alrededores a concelebrar la misa. Absolutamente todos vinieron, abierta e incluso desafiantemente, con sus parejas, ya fueran gays o heterosexuales. En 1979, al tiempo de la primera visita de Juan Pablo II a México, conversé con un sacerdote español progresista sobre su doble vida.

Tenía pareja, una mujer madura, desde hacía años. ¿Por qué no abandonaba la Iglesia, le pregunté, si tantas de sus normas violaban sus propias convicciones y su deseo de vivir como hombre honesto? Recuerdo que me dijo que la posibilidad de hacer el bien dentro de una institución tan enorme e influyente como la Iglesia era mayor que las oportunidades de hacer el bien fuera de ella.

¿Estará cambiando esa ecuación?

The New York Review of Books, 24 de junio de 2010

Posdata

En 2019, después de una cumbre vaticana sobre el abuso sexual, el papa Francisco (2013-2025) actualizó la ley canónica, obligando a los sacerdotes y a las monjas a denunciar ante sus superiores la pederastia y todas las demás formas de abuso sexual. Los sacerdotes condenados por semejante abuso serán expulsados del sacerdocio. En la mayoría de los juicios civiles relacionados con el abuso sexual por parte de curas parroquiales, las víctimas han estado dispuestas a llegar a un acuerdo con la parroquia a cambio de grandes sumas de dinero, lo que ha llevado a no pocas iglesias a declararse en quiebra. El escándalo en curso también ha afectado la inscripción en escuelas católicas, pero los Legionarios de Cristo todavía existen y operan algunas escuelas y universidades. El deseo sincero de Juan Pablo II de canonizar a Maciel se vio frustrado cuando su protegido acabó viviendo más años que él.

2
Confesiones de un asesino

1

Se ha publicado un libro extraordinario en Colombia, país de singular e infinita violencia fratricida. Apareció en librerías de toda la nación para la temporada navideña del 2001-2002, y ya va por la decimoprimera reimpresión. Se trata de la autobiografía —narrada a un tercero— de Carlos Castaño, el responsable de organizar, ejecutar e inspirar buena parte de los casi veinte mil asesinatos políticos ocurridos en Colombia durante los últimos diez años.

En 1994, tras la muerte de su hermano mayor, Fidel, Carlos Castaño asumió el mando de un pequeño escuadrón regional de la muerte. Su hermano lo había fundado en 1981 para vengar el secuestro y posible asesinato del padre de los Castaño, llevado a cabo por la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacida en 1964). El patriarca de la familia Castaño tenía un próspero rancho con cerca de seiscientas cabezas de ganado entre los cerros del departamento de Antioquia, una especie de viejo Oeste donde la minería, la violencia, la ganadería, el juego y el trago son, hasta el día de hoy, actividades interconectadas. La familia tenía cierta amistad con los militantes locales de las FARC, a

menudo dedicados también a la siembra o a la minería. Dos de los muchachos Castaño incluso se consideraban simpatizantes de izquierda y leían con admiración publicaciones como *China Reconstruye.*

Sin embargo, una noche de 1979 los guerrilleros decidieron emboscar a Castaño padre en su rancho, lo patearon y lo llamaron «oligarca hijueputa», según los trabajadores testigos del secuestro. Carlos Castaño escribe que los secuestradores le pidieron el equivalente de treinta mil dólares de rescate a Fidel. Cuando Fidel —dueño de un bar en Segovia, y notable y hábil tahúr y contrabandista, entre otras cosas—, reunió la cifra, los guerrilleros exigieron treinta mil dólares más. Luego el padre murió, o lo mataron, durante el cautiverio.

Aunque todas las fechas y los números relacionados con los hermanos Castaño son aproximados, parece que Fidel tenía treintaiún años y Carlos catorce cuando ocurrió este evento traumático. Para cuando Fidel murió en una emboscada guerrillera, en 1994, la organización que creó para vengar la muerte de su padre había crecido hasta contar con varios cientos de hombres. Estaba asentada sobre todo en las regiones agrícolas contiguas de Córdoba y Urabá, pero también en el terruño de los Castaño en el departamento de Antioquia (con capital en Medellín), donde es fama que las drogas son el gran negocio. Desde su inicio, el escuadrón de la muerte encontró apoyo entre algunos militares y las fuerzas de orden público. Corre el rumor de que, en Córdoba, Fidel Castaño era tan popular entre la tropa que aterrizaba su helicóptero en el techo de la comandancia de la policía local. La organización fue notoria desde sus inicios, y los medios, y hasta sus mismos seguidores, se

refieren a los integrantes de la organización como *paramilitares*, *paras* o *paracos*, pero en su libro Carlos no usa el término: prefiere la palabra *autodefensas*, como en Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, o ACCU, que se volvió el núcleo de la coalición de asesinos que formó unos tres años después de reemplazar a Fidel.

Se dice que actualmente este grupo de alcance nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia o AUC, tiene cerca de diez mil integrantes tremendamente bien equipados, entrenados y muy motivados. Tanto las AUC como la organización que buscan aniquilar, las FARC, están ampliamente financiadas por las ganancias del narcotráfico, un negocio atrincherado en territorios que se disputan los dos grupos rivales. En menos de diez años de terror, las AUC le arrebataron el control a las FARC en zonas donde solía ser fuerte. La organización de Castaño demostró ser mucho más eficiente en esta tarea que el propio ejército colombiano, bajo cuya mirada indiferente las FARC crecieron a un ritmo estable durante décadas.

El secuestro y la muerte del padre de los Castaño es el *leitmotiv* que hilvana el recuento que ahora ofrece su hijo de su propia vida inverosímil. A diferencia de su enemigo jurado, Manuel Marulanda —el anciano, lacónico fundador y líder sobreviviente de las FARC—, Carlos Castaño es de todo menos inescrutable. Menor de cuarenta años, voluble, obsesivamente autorreferencial, vanidoso, inquisitivo y astuto, Castaño se ha convertido en el autor —y heroico protagonista— del que ya es uno de los mayores best sellers colombianos de todos los tiempos. Como tantos ejemplares del libro son copias piratas, sobre todo las que se ofrecen por la calle, no hay

manera de saber si Castaño ha vendido más libros que Gabriel García Márquez —el monumento nacional viviente— o Deepak Chopra. Si aún no lo ha logrado, quizá solo sea cuestión de tiempo. La omnipresencia de Castaño en la escena política colombiana es incuestionable, y es inverosímil que se retire pronto. Además, es popular.

No hay prácticamente ningún aspecto de su libro, sea como objeto o como texto, que no resulte fascinante. Tengo en mis manos un ejemplar de la primera edición en pasta dura, una rareza en América Latina, por lo cara. Es, además, una edición exclusiva, con una fotografía del autor a cuatro tintas y de alta resolución en la tapa. ¡Y qué foto! Un hombre de férrea quijada nos mira, retador. Lleva uniforme de camuflaje y sombrero de comando. Los colores nacionales aparecen en el brazalete que lleva cosido en la manga. Parado al frente de una imponente catarata, su figura está enmarcada por la jungla que lo rodea. Cuando le mostré el libro a un joven conocido mío al que le brillan los ojos cada vez que escucha la palabra *guerrilla*, de inmediato quedó deslumbrado. Le costó aceptar que la glamurosa figura de la fotografía era, en efecto, un hombre cuyo objetivo en la vida es matar a cuantos más guerrilleros pueda antes de que lo maten a él.

El aspecto más astuto de la presentación del libro es quizá su título: *Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos*. Ya sea que a Castaño o a su amanuense, Mauricio Aranguren Molina, se les haya ocurrido o no, es una descripción seductora y precisa de su contenido, porque, aunque Castaño narra una historia sórdida, en muchos capítulos parece hacerlo con franqueza. Relata su primer asesinato con todo lujo de detalles repugnantes, y nos brinda el

recuento, paso a paso, de cómo en 1990 montó el asesinato del principal candidato presidencial de izquierda, Carlos Pizarro, en una «acción verdaderamente patriótica». Por lo general, la gente escribe un libro confesional cuando está pasando por algún tipo de tormento espiritual. Con frecuencia puede ser una manera de hacer las paces con uno mismo y con el mundo, cuando se acerca la muerte. Es tentador sentir lástima por Castaño al verlo esforzarse tanto y tan fallidamente por hacer las cuentas consigo mismo.

¿Cómo se consuela un hombre que con sus propias manos ha ejecutado quizá a cientos de los que él llama «objetivos militares individuales», o «múltiples», cuando su conciencia no le deja dormir por las noches, tal y como parece ocurrirle a menudo? «No puedes engañar a tu conciencia, porque es el espejo del alma», dice. Pero enseguida agrega: «El examen al que me someto no es fácil. Pero aún encuentro alivio cuando concluyo que la culpa no es mía; la culpa pertenece a aquellos que secuestraron a papá». ¿Cómo ve las principales diferencias entre él y su hermano mayor, que era más impulsivo, más amante del placer y más aventurero? «No guardo rencor».

El libro está lleno de ese tipo de declaraciones. Le gusta cantar, pero prefiere recitar poesía, sobre todo los versos idealistas de izquierda de Mario Benedetti. Se refiere a sus «intelectuales», que le dan consejos y listas de lectura. Se opone a los reporteros o a los investigadores de derechos humanos que acusan a sus tropas de matar a sus víctimas a machetazos o desmembrarlos con una motosierra: sus hombres, dice, siempre han respetado el derecho humano fundamental de morir con dignidad, con una bala. El que haya algunos cuerpos que aparecen partidos en dos o tengan las

extremidades mutiladas «como resultado de una ráfaga de ametralladora», según alega, es otro asunto.

Acerca de su hermano Fidel, dice: «La guerra le permitió hacer las cosas que más quería: atacar a la guerrilla y convertirse en un hombre rico». Feroz admirador de Israel, donde recibió entrenamiento militar, dice: «*Golda Meir y mi madre son para mí*, sin duda alguna, las mujeres que representan lo *máximo*, en su género, por la excelencia». Tiene conflictos con la escritura llena de clichés de los periodistas que escriben en los tabloides: «Cinco minutos fueron suficientes para eliminar al criminal», eso es lo que siempre dicen, se queja, pero «¡no, no, no! Tomó días enteros de labor y sincronización» llevar a cabo un crimen: en este caso, el asesinato en el aeropuerto de un rey de la droga que, imprudentemente, se enemistó con nuestro héroe.

Sin embargo, uno resiste el impulso de reír o encogerse de hombros o lanzar el libro a un lado, porque junto con la megalomanía y la visión moral retorcida, nos llega una buena parte de la historia secreta de Colombia, en la que hombres como Castaño siempre han jugado un papel, reuniéndose en elegantes escondites con los empresarios y los políticos más prominentes del país, estableciendo con ellos acuerdos o incluso listas negras; intercambiando información y armas con un grupo guerrillero para luego voltearse en contra de ellos o de algún aliado anterior; participando en grandes borracheras con militares de alto rango; revisando los detalles de una operación conjunta en la que activistas de izquierda o paupérrimos simpatizantes de la guerrilla serán eliminados gracias

a la información proporcionada por el ejército y ejecutada por los paramilitares, o viceversa.

En esta historia oculta, los lectores del libro de Castaño se enteran de cómo el grupo guerrillero M-19, ahora disuelto, estableció relaciones de amistad con Pablo Escobar, el legendario exportador de cocaína. En 1985, *el Eme* organizó un asalto al Palacio de Justicia —una mole de concreto en el centro de Bogotá, frente al Congreso y la casa presidencial— en el transcurso del cual murieron calcinadas más de cien personas, incluidos treinta y cinco guerrilleros y once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El asalto dejó al M-19 herido de muerte y moralmente desacreditado ante la ciudadanía. A partir de una amnistía general, en 1989, muchos militantes que no fueron informados del plan para atacar el Palacio de Justicia, ni estuvieron allí aquel día funesto, siguen activos en organizaciones no gubernamentales y en política. El ataque fue financiado por Pablo Escobar, y Fidel Castaño aportó algunas armas. Al menos eso dice Carlos, que asegura que estuvo presente en la reunión en la que se decidió el ataque.

Castaño también afirma que, en los inicios de su escuadrón de la muerte, los hermanos ganaron experiencia y prestigio a raíz de que los mandó llamar un tal Grupo de los Seis: media docena de eminentes y prósperos colombianos que le habrían proporcionado discretamente una lista de objetivos útiles a los asesinos. Carlos describe reuniones privadas en las que unos cuantos políticos importantes lo invitaron a participar en un golpe de Estado contra el presidente Ernesto Samper, a quien Castaño dice despreciar por «su decisión de aceptar dinero del tráfico de drogas para financiar su campaña».

Sea que el menor de los hermanos Castaño estuviera o no presente en estas reuniones, si es que ocurrieron siquiera alguna vez, Carlos tiene un oído privilegiado para el diálogo. Por supuesto que el tema de su credibilidad está en el centro de todo lo que relata. Castaño no menciona un gran número de masacres de civiles vinculadas a su apellido, ni el nombre de su organización. Niega haber participado en las que sí menciona, aunque en muchos casos los sobrevivientes y los testigos oculares lo han implicado a él, a su hermano o a sus socios. Sin embargo, cuando describe algún incidente del que tengo cierto conocimiento, su información parece fiable, aunque él la interprete de manera parcial o engañosa. Por ejemplo, Castaño acusa a la joven que fue alcaldesa de Segovia en 1989 de ser una colaboradora de la guerrilla, y de evitar que él transportara el ganado de su familia a otro departamento para venderlo sin antes cumplir con el requisito de vacunar a los animales. Escuché esta misma historia en el aterrador pueblo de Segovia de boca de la propia alcaldesa, en los días de su enfrentamiento con Castaño. Rita Tobón, una joven muy hermosa que, si no era guerrillera, ciertamente era simpatizante, se postuló a la alcaldía y resultó electa con la boleta del frente legal de las FARC, el partido Unión Patriótica.

Sentada en un restaurante oloroso a manteca, rodeada de guardaespaldas, comiendo con desgana su pollo a la barbacoa y comprensiblemente nerviosa, me dijo que Castaño transportaría a su ganado fuera de Segovia sobre su cadáver. Como muchos otros con quienes hablé entonces, culpaba a los Castaño de uno de los asesinatos masivos más grandes en la historia reciente de Colombia, en el que cuarenta y cinco hombres, mujeres y niños fueron

masacrados por un puñado de sicarios. Uno de sus guardaespaldas afirmó ser sobreviviente de una masacre anterior a la de Segovia, también financiada por Castaño, al parecer como venganza contra toda la región donde el patriarca de la familia estuvo una vez cautivo. Desafiando la evidencia, Castaño rechaza en su libro haber participado en cualquiera de estas dos atrocidades, pero la extraña sinceridad con la que retrata el inicio de la carrera de su hermano mayor como rufián de poca monta coincide con lo que averigüé en Segovia en aquel entonces sobre Fidel.

Carlos también recuerda con cierto detalle la tarde en que su carro volcó y él se fracturó el brazo. Iba acompañado de una joven, hermana de un importante líder regional de las FARC. En ese momento estaba secuestrada por Castaño, pero, como él mismo reconoce, tenían una relación de cama. Cuando lo escuché por primera vez de boca de alguien que conocía bien los engranajes de las autodefensas, me contó que la historia era más enredada. Todos los detalles del accidente de auto eran los mismos, con una diferencia fundamental: en una especie de síndrome de Estocolmo mutuo, según mi fuente, Castaño se había enamorado perdidamente de su víctima, y ambos habían decidido huir juntos la noche del accidente, que tal vez fue orquestado por sus subordinados al enterarse del plan de fuga. En todo caso, los eventos de esa noche convencieron al líder de retornar a su verdadero destino.

Resulta significativo que algunos de los personajes principales de la historia reciente de Colombia que aparecen mencionados por nombre en *Mi confesión* aún no han objetado la versión de los eventos que presenta el autor. Por ejemplo, Castaño cuenta que Gabriel García Márquez reclutó al ex primer ministro español Felipe

González para que ayudara al presidente saliente colombiano, Andrés Pastrana, a armar un plan de paz que ya contaba con la aprobación de Castaño (el plan fracasó cuando las FARC lo rechazaron). García Márquez no ha negado ni la historia en términos generales ni sus detalles, a diferencia del enorme e inútil esfuerzo que hizo por negar la autoría de un espantoso poema que todavía circula en redes.

De igual manera, el apoyo de Pablo Escobar al asalto del Palacio de Justicia ya se ha documentado de manera convincente, sobre todo por el periodista colombiano Ramón Jimeno. Si el violento incendio en el que murieron tantos fue obra del ejército o de la guerrilla es un viejo debate que queda sin resolver. Nadie sabrá la respuesta, pero tanto Jimeno como Castaño argumentan que Escobar se interesó en el ataque a la sede de la Corte Suprema de Justicia porque los organizadores del M-19 prometieron destruir los expedientes de los capos de la droga solicitados en extradición por Estados Unidos. Una de las secciones más fascinantes del libro describe en detalle lo que ya se sabía en términos generales desde hace mucho: que Escobar murió cuando Carlos Castaño finalmente se hartó del tipo con el que alguna vez hizo negocios y pasó a dedicar toda su atención a la cacería del principal traficante colombiano. El grupo que creó a medida —los Pepes (acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar)— dirigió la persecución mientras el propio Castaño, según dice, informaba regularmente al alto mando de la policía lo que iba descubriendo sobre el paradero de Escobar.

En julio, el Congreso estadounidense redujo las restricciones al uso de casi mil setecientos millones de dólares para el combate al narcotráfico en Colombia, a fin de que los fondos también puedan usarse en operativos contra la guerrilla y los paramilitares. Asimismo, se aprobaron pequeñas cantidades de dinero para «proteger las inversiones de Estados Unidos», como el oleoducto que lleva el petróleo a su punto de exportación en el Caribe, blanco habitual de los ataques guerrilleros desde hace años. Sobre todo, la legislación reciente significa que setenta relucientes helicópteros ahora podrán emplearse para transportar personal armado en operaciones de combate y vigilancia. Pero, desde el punto de vista de Carlos Castaño, el cambio político más importante es la decisión de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos de pedir la extradición tanto de los líderes guerrilleros como de los paramilitares involucrados en el narcotráfico. Las primeras solicitudes de Washington nombran a un prominente líder regional de las FARC, así como a uno de los asociados de Castaño en las AUC. Hasta ahora, nada se ha dicho de la extradición del mismo Castaño, pero hay que suponer que no es por falta de interés.

Así, el libro de Castaño es, entre otras cosas, un ambicioso intento de eludir la extradición presentándose como un patriota revolucionario políticamente motivado y moralmente preocupado, que además busca razonar largo y tendido sobre las realidades de la lucha contrainsurgente en Colombia. Sí, afirma una y otra vez, es cierto que él y su organización financiaron sus operaciones con el dinero de la coca y la vendieron a los traficantes en territorios

controlados por las autodefensas. Pero esto es una guerra, y él es el único que la anda peleando.

Últimamente, Castaño anda en pleito con sus comandantes regionales por asuntos de principios y liderazgo. En estos meses, ha estado usando el elaborado sitio web de las AUC para exponer las tensiones y desacuerdos entre las distintas organizaciones regionales. Después de renunciar el año pasado a la jefatura nacional en favor de un alto mando colegiado, ha empleado el poder que le resta para presionar a favor de un compromiso oficial de las AUC con los derechos humanos. En el sitio web incluyó una sección de quejas y abjuró de asesinar civiles y secuestrar a «no políticos» por un rescate.

Al principio hubo quienes pensaron que Carlos Castaño intentaba pulir su imagen porque quería lanzar su candidatura a la presidencia, pero la realidad de la nueva política antiterrorista de la Administración Bush ha sofocado cualquier ambición política que el líder de las AUC haya podido tener hace un año. Ahora parece que solo se está reposicionando. A mediados de julio, Castaño y su comandante en jefe militar, Salvatore Mancuso, anunciaron que sus autodefensas locales se separaban de las AUC, la organización nacional que Castaño creó en 1997. Ya se reparó el distanciamiento, pero una de sus causas, repitió Castaño una y otra vez, fue que «unas cuantas» fuerzas regionales de las AUC estaban «feudalizadas» por el tráfico de drogas (se detecta aquí la mano de los intelectuales de Castaño). Según dice, ahora comprende que eso no estuvo nada bien, igual que no estuvo bien que las fuerzas policiales en ambos lados de la frontera venezolana tomaran parte en el secuestro, patrocinado por las AUC, de un rico empresario

venezolano. Con semejantes comentarios, Castaño simplemente intenta conferirse alguna legitimidad a sí mismo y a su organización. Quiere negociar con el Gobierno, como lo quisieron las FARC hasta el año pasado. Quiere que las Naciones Unidas participen en esas negociaciones. Quiere estatus de combatiente.

Pero, sobre todas las cosas, quiere dictar los términos en los que pasará a la historia en los libros de texto de Colombia. Para un vengador de película de serie B como Carlos Castaño, el único destino peor que la muerte sería cumplir cadena perpetua en una celda en alguna parte de Estados Unidos, o no poder morir como héroe, que equivale más o menos a lo mismo. Presentó su caso en un editorial divagante publicado en el sitio web de las AUC:

> Hoy más que nunca, la continuidad de la existencia [de las autodefensas] resulta vital. Nuestros logros en asuntos políticos y militares contra las guerrillas no pueden negarse; van a negociar con el Gobierno más temprano que tarde, fundamentalmente como resultado de la presión… [de nuestra] irregular organización.
>
> [Las autodefensas nacionales] fueron un escenario en la búsqueda de nuestra esencia, el descubrimiento de nuestro destino… Hoy sabemos que ha llegado el momento para fortalecerlo, no desbandarlo… Seguimos buscando nuestra esencia, pero hoy, gracias a Dios, sabemos que ni el tráfico de drogas ni el terrorismo formarán parte de este encuentro con nuestro destino.

Desde luego que intenciones tan magníficas no pueden venir sin problemas. Uno es que, sin los ingresos de la droga, será difícil conseguir los tres millones de dólares al mes que Castaño dice requerir para financiar su organización. Otro es que puede que, a algún colega, por aquí o por allá, no llegue a conmoverle demasiado tanta pureza moral. Castaño todavía puede toparse con la muerte tal

y como ayudó a que la muerte se topara con Pablo Escobar: a través de la traición de sus asociados.

3

En mayo, Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente por uno de los márgenes más grandes en la historia de Colombia. Uribe es apenas el octavo presidente consecutivo colombiano elegido libremente desde que las élites del país formularon un acuerdo denominado Frente Nacional para rotar el poder entre los partidos Liberal y Conservador cada cuatro años, entre 1958 y 1974. Fue la manera que se les ocurrió para poner fin a veinte años de una brutal lucha intestina conocida simplemente como La Violencia.

Los últimos años de vida política democrática han coincidido con el aumento más abrupto de violencia ideológicamente motivada desde los años cincuenta, en la cúspide de La Violencia. Solo en 2001, dos mil colombianos murieron luchando o, la mayoría, asesinados, por motivos relacionados con la ideología o la política, como, por ejemplo, la lucha de los narcotraficantes por apropiarse de tierras pertenecientes a grupos indígenas, o el deseo de las FARC de evitar que los habitantes de un pueblo colaboren con sus enemigos. Andrés Pastrana, antecesor de Uribe, salió de la presidencia en desgracia: su esfuerzo de tres años por traer la paz al país llevó al grotesco interregno en el que, a lo largo de esos años, los guerrilleros de las FARC disfrutaron de rienda suelta en una *zona de distensión* de cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados —dos veces el tamaño de El Salvador—. En febrero de 2002, Pastrana suspendió la

zona, también llamada de *despeje*, y ordenó al ejército reanudar operaciones militares contra las FARC. En los hechos, el control guerrillero de la zona no ha variado gran cosa desde que se suspendió el alto al fuego y se reanudaron los combates.

Dada la extrema debilidad del Gobierno colombiano, una primera pregunta es si el presidente electo, Álvaro Uribe, podrá refrenar a las FARC, a las organizaciones paramilitares ahora fragmentadas y caóticas, y a los sectores corruptos de los militares mediante la fuerza o la persuasión, sin importar cuánta ayuda reciba de los Estados Unidos. Hay pocas esperanzas de que Uribe vaya a ser capaz de negociar exitosamente con las mismas FARC que lograron sabotear los tres años de negociaciones de Pastrana. Pero si el nuevo presidente decide abrir un nuevo frente en la guerra y enfrentarse a las AUC, ¿podrá convencer al ejército y a las antiguas fuerzas policiales de apuntar sus armas en esa dirección?

Uribe es un político personalista del viejo Partido Liberal, con visos conservadores y una declarada obsesión con la autoridad. Cuando entendió cuánto detestan los colombianos la política tradicional, renunció al partido el año pasado y se convirtió en el primer candidato independiente del país que ha triunfado en las urnas. A lo largo de su campaña, enfrentó reiterados cargos que lo acusaban de haber favorecido e incluso financiado a las autodefensas de Castaño, aunque no ha surgido ninguna evidencia que lo sustente. Durante su campaña, Uribe afirmó su compromiso de combatir a «los violentos de ambos bandos». Uno de los primeros actos de su presidencia fue solicitar la mediación de las Naciones Unidas en la búsqueda de un

diálogo con los guerrilleros. Pero, en sus primeros días como presidente, también tomó una serie de decisiones arriesgadas que bien podrían terminar dándole alas, si no directamente a las autodefensas, sí a un tipo de vigilantismo que puede resultar todavía más difícil de controlar.

La toma de protesta de Uribe el 7 de agosto de 2002 estuvo marcada por un incompetente y sangriento intento de las FARC de sabotearlo. Comandos guerrilleros lanzaron explosivos cuyo objetivo era el Palacio de Nariño, sede del Gobierno. Una descarga dañó los terrenos del palacio, incluido el edificio mismo. Otras fueron a dar a un barrio pobre, a unas cinco cuadras de su blanco. En total, veinte hombres, mujeres y niños perdieron la vida. Fue una repetición del brutal evento ocurrido poco antes en un pueblo remoto del suroccidente colombiano, donde las tropas guerrilleras que les pisaban los talones a las autodefensas lanzaron explosivos a una iglesia en la que se habían refugiado los pobladores. En el atentado murieron 119 personas, incluidos 47 niños. Esos ataques solo aumentaron el apoyo a la iniciativa de Uribe, anunciada el día después de tomar juramento, de crear una red nacional de un millón de informantes que supuestamente alimentarán al ejército y a las fuerzas de seguridad con información acerca de *los violentos*, para usar el término todoterreno de Uribe. (Algunos de esos violentos, posiblemente integrantes de las FARC, mataron a su padre en un intento de secuestro). Se cree que algunos informantes recibirán armas para defenderse, y la perspectiva de armar a poblaciones de civiles en regiones de Colombia que ya están a punto de la guerra civil generó alarma entre los activistas de derechos humanos, así

como entre muchos exfuncionarios del Gobierno involucrados en intentos anteriores de traer la paz al país.

Uribe ha dicho una y otra vez que decidió postularse al nada envidiable cargo de presidente por un fuerte sentimiento de deber patriótico, y hay que reconocer que, si alguna vez un país necesitó un salvador, ese país es Colombia. Pero las FARC y Carlos Castaño también se sienten obligados a llevar a cabo su labor patriótica por Colombia, al igual que ciertos sectores de las fuerzas policiales y militares, a menudo culpados en los tribunales o en reportes de derechos humanos de colaborar con las AUC. La verdadera cuestión radica en si es posible que los colombianos sobrevivan a semejante fervor. Por el momento, no parece probable que Álvaro Uribe sea capaz de convencer tanto al liderazgo de las FARC como al autor de la autobiografía más vendida de Colombia de que el patriotismo requiere que los guerreros dejen que el país encuentre su camino sin ellos.

The New York Review of Books, 10 de octubre de 2002

Posdata

Carlos Castaño fue asesinado por sus propios hombres en 2004. Se dice de manera fidedigna que su hermano menor, Vicente Castaño, ordenó su muerte. No se conoce el paradero de Vicente. Hay quien dice que también murió a manos de sus hombres; otros afirman que vive en el extranjero, con otro nombre.

3
Con dinero baila el perro

En las horas que siguieron a su despaciosa huida de una prisión de máxima seguridad en México, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo por su complexión baja y fornida, apareció de vuelta en Twitter, rebotando por el éter, cacareando y vanagloriándose como un frenético personaje de caricatura. «Nunca digas nunca», clamó en @ElChapoGuzmán el narcotraficante más buscado. «¡No hay jaula para este Chapo tan grande!». Mandó saludos a la familia, agradeció a sus colaboradores, alabó a sus hijos, afirmó que esperaba con ansia volver a trabajar con su compadre, Ismael «Mayo» Zambada —que se hizo cargo del Cartel de Sinaloa durante el encierro del Chapo— y con don Rafa —Rafael Caro Quintero—, un patriarca del mundo narco que fue liberado de prisión de manera escandalosa dos años antes por un juez complaciente, y que hoy sigue prófugo. En un momento de amargura y reflexión pasajera, Guzmán se dirigió groseramente al entonces primer mandatario, Enrique Peña Nieto: «Y tú @EPN, no me vuelvas a llamar delincuente porque yo doy trabajo a la gente no como tu pinche gobierno actual». De vuelta al modo maníaco, el especialista en trampas se burló: «Más vale maña que fuerza y eso a mí me ha funcionado».

Poco importa si los tuits los escribió o no el mismo Guzmán, quien apenas sabe leer y escribir, o sus subalternos (están llenos de errores de ortografía). Él y sus hijos mayores, igual de fanfarrones que el padre, tienen las mismas cuentas de Twitter desde hace años. Los tuits se tomaron por auténticos y provocaron fervientes respuestas de cantidad de mujeres jóvenes que tuitearon emojis de amor, y de hombres jóvenes que alabaron su valentía o clamaron: «¡Bienvenido, Gran Señor!». Otra forma de sumisión tuitera se hizo popular entre los hombres que entraron a la red para exclamar: «¡Eres la Verga!».

Al arranque hubo un tuit vengativo que, a mi parecer, ofreció la primera prueba fehaciente de que, en efecto, Guzmán no se entregó el año pasado en medio de un trato pactado, sino que lo capturaron las fuerzas especiales del ejército y la marina (otra versión sugiere que quizá lo detuvieron agentes estadounidenses disfrazados de fuerzas mexicanas). «Ahora salieron en desbandada buscando dónde esconderse, esos que me pusieron a juicio, el marino que me llevó al helicóptero y el maricón que *me puso*» —expresión narca que significa «el que me traicionó posicionándome de forma que me atraparan»—. Y luego citó un viejo dicho en español que resume tanto su *modus operandi* como la humillante condición en la que se encuentra México en el presente: «Con dinero baila el perro».

«Esa fuga yo le pongo que valió unos cincuenta millones de dólares». Este cálculo tan profesional proviene de un hombre llamado Jhon [*sic*] Jairo Velásquez Vásquez, mejor conocido como Popeye, el guardaespaldas número uno, mensajero y asesino a sueldo de Pablo Escobar. Salido de prisión después de veintidós años tras las rejas, compulsivamente parlanchín, un poco tenso, habló de

la fuga de Guzmán con un reportero de Univisión. «El caso del Chapo Guzmán es muy delicado, porque él está en una cárcel de alta seguridad», explicó Popeye. En efecto, las cárceles de alta seguridad tienen sensores que avisan inmediatamente si se está haciendo una excavación. Por lo tanto, concluyó el hombre que alguna vez se fugó de una cárcel en Medellín con Pablo Escobar, «ahí cuadraron a los de los sensores, cuadraron a los de las cámaras. Esa fuga es con dinero. En esa fuga tienen que ver los guardias del penal y mucha gente afuera».

El Centro Federal de Readaptación Social el Altiplano, mejor conocido como Almoloya, tiene paredes de un metro de ancho y comunicación restringida, y, de hecho, siguen ahí todos los líderes de las organizaciones rivales a la de Guzmán, cada uno en su propia celda de confinamiento solitario. A Guzmán, que es la cabeza de la Federación —una imprecisa reunión de clanes de la droga que trabajan en conjunto en el estado de Sinaloa—, se le envió de inmediato a Almoloya tras su arresto, el 22 de febrero de 2014. Antes se dio una persecución en el estado natal de Guzmán, que duró una semana y terminó en un hotel residencial junto al mar en la bonita ciudad playera de Mazatlán. Era la víspera del carnaval, que incluye varios concursos de belleza —Guzmán es propenso a las reinas de belleza, está casado con una—, y cuando se le preguntó qué hacía en un lugar tan público, sencillamente respondió que no había visto a sus dos hijas pequeñas en mucho tiempo. Esto se interpretó como que Guzmán había tomado un riesgo heroico para ver a su familia, pero también podía significar que hizo lo mismo que hacía todos los años: tomarse unos días para ver a las reinas de

belleza del carnaval desde el cómodo balcón de su hotel, en compañía de su esposa e hijas, sin temor al peligro.

En el helicóptero que lo llevó el año pasado a Almoloya —ya había escapado de otra cárcel en 2001—, el narcotraficante más notorio del mundo comentó que era responsable de cerca de mil muertes, pero en varias cortes mexicanas se le ha acusado solo de tráfico de drogas y crimen organizado. A medida que las investigaciones que anteceden al juicio comenzaron su lento avance a través del sistema legal, al prisionero se le confinó en una celda sin ventanas, equipada con una cámara de video las veinticuatro horas. Lo llevaban al patio para que hiciera ejercicio en solitario durante una hora, y se le permitía la visita familiar una vez al mes, aunque cada visita estaba supeditada a la aprobación específica de un juez. A pesar de estas restricciones, se dice que el verano pasado se las arregló para organizar una huelga de hambre en protesta por las infames condiciones de la cárcel. Aunque el Gobierno admitió la existencia de la huelga, rechazó que Guzmán estuviera involucrado. Pero por entonces ya estaban en marcha los planes para su fuga. De hecho, parece que se iniciaron casi al momento de su detención y, como presumiendo, se usó el mismísimo recurso que se ha convertido en su marca distintiva: un túnel bien iluminado, equipado con un tercer riel.

Una de las fotografías más divertidas que se publicaron después de la burlona fuga de Guzmán muestra a la procuradora general de México, Arely Gómez, acuclillada junto a un agujero de unos cincuenta centímetros, cuidadosamente tallado y reforzado, en el suelo de una casa de bloques de hormigón a medio terminar. La casa está en medio de un maizal a aproximadamente kilómetro y

medio de la cárcel —a plena vista de las torres de vigilancia de Almoloya—, y a menos de ochocientos metros de un regimiento del ejército. En la foto, Gómez mira hacia el agujero negro con melancolía, como si deseara que saltase desde el fondo un conejo blanco. El conejo, sin embargo, ya había saltado hacia algún transporte desconocido unas buenas doce horas antes. «Hasta ese momento —según un boletín oficial casi suplicante— la jornada había transcurrido de manera normal e incluso, cerca de las 20 horas, se le había suministrado [a Guzmán] su dosis diaria de medicamento».

Un útil detalle que Alejandro Rubido, el comisionado nacional de Seguridad del Gobierno, no aportó durante una conferencia de prensa en la que no se permitió a los periodistas hacer preguntas, y en la que se confirmó la fuga de Guzmán, fue la hora precisa en que los guardias se percataron de que el preso había escapado. Según el comunicado oficial, a las 8.52 p. m. la cámara de vigilancia de veinticuatro horas que había en su celda registró que Guzmán se retiró al área de la regadera, «donde también acostumbra a lavar sus platos». Gracias a una feliz coincidencia, el punto ciego de la cámara era justamente ese. Cuando el personal de la cárcel se dio cuenta de que hacía largo rato que Guzmán no se dejaba ver en la cámara de vigilancia, prosigue el comunicado, «se activaron los protocolos de emergencia». Seguir un protocolo puede llevar largas horas, y es posible que, durante todo el tiempo que le llevó a Guzmán llegar a la escotilla de escape de su túnel, recorrerlo, asearse en una regadera improvisada, elegir una muda de entre una pila de ropa nueva que lo esperaba en la casa de seguridad y avanzar por los caminos rurales llenos de lodo y baches hacia la

carretera principal (o hacia un helicóptero, ¿cómo saberlo?), la persecución ni siquiera hubiera comenzado.

Solo quedaba que la policía y las unidades federales de investigación se maravillaran ante el túnel que las tropas de Guzmán excavaron, sin falla ni tropiezo, unos dieciocho metros por debajo de la casa abandonada, debajo del maizal y las tierras de pastoreo, bajo el complejo penitenciario y a lo largo del camino entre ambos puntos, exactamente hasta el área de cincuenta por cincuenta centímetros que ocupaba la ducha en la celda de Guzmán. Él y sus ingenieros parecen tener una fijación con las obras hidráulicas: el acceso a su primera gran obra, una creación de sesenta metros de largo que transportaba marihuana del estado de Sonora a Arizona por debajo de la frontera, se activaba mediante una palanca camuflada como llave de agua afuera de una casa particular. Días antes de su arresto el año pasado, se dice que Guzmán evadió a quienes lo perseguían mediante un túnel oculto bajo una bañera equipada con una palanca hidráulica en una de sus múltiples residencias en Sinaloa.

Se requirió una habilidad admirable para cavar lo que quizá sea el túnel de escape más largo de la historia, a casi veinte metros bajo tierra. Había drenajes, cableado y caños que evadir. Y a pesar de su carácter de tramposo empistolado, Guzmán ha demostrado su obsesión y compromiso con los detalles. Sin duda fue él quien insistió en que las dimensiones interiores del túnel fueran de setenta centímetros de ancho y 1,73 metros de altura, para no tener que agacharse (él mide poco menos de 1,70 metros). El túnel estaba equipado con ventilación y electricidad. También, al parecer, con una motocicleta adaptada a un riel fijo que le permitió avanzar, en

minutos y con gran estilo, bajo los campos lodosos hasta la casa en medio del maizal y el cambio de ropa que lo esperaba. *El Universal*, un periódico de Ciudad de México, calculó que se necesitaron 291 viajes de camión de volteo para remover 2.040 metros cúbicos de tierra y escombros extraídos en el proceso de construcción. Los narcocorridos que narran el segundo escape de prisión del Chapo Guzmán ya están en YouTube.

«¿Y ahorita qué pasará con el señor Chapo Guzmán?», preguntó Popeye retóricamente.

> Cuando yo me volé con Pablo se nos vino la DEA, se nos vino la CIA, se nos reactivó toda la inteligencia del mundo. Eso le va a pasar al señor Chapo Guzmán. Yo le auguro… dieciocho meses en la calle. Yo siento lo que siente el Chapo Guzmán cuando yo me volé de la cárcel La Catedral con Pablo Escobar [en 1992]. Pablo Escobar estaba muy tranquilo, lo mismo está el señor Chapo Guzmán en este momento, pero sabe que ya no se puede volver a juntar con las personas con las que se juntaba, porque van a ir detrás de la familia de él, de la mujer. ¿Qué va a hacer ahora? Él va a tener que romper todo vínculo que tenía. Con los únicos que él se va a ver es con los socios en el tráfico de drogas y los que le manejan el aparato militar… Va a ser muy difícil cazarlo, [pero] pierde porque pierde, porque ahorita los norteamericanos lo ponen a valer veinte millones de dólares. El que tenga precio cae porque cae.

Las consecuencias más perjudiciales de la gran aventura reciente de Guzmán no las sufrirá el Gobierno del cada vez menos popular presidente de México, Enrique Peña Nieto, ni quienes tienen cuentas que saldar con el Chapo, ni las tropas relacionadas con los grupos enemigos con los que necesariamente entrará en conflicto, ni los soldados, periodistas, jueces, políticos o policías a quienes puede mandar matar, aunque aumenten en miles más el narcopanteón de

México. Los clanes de la droga de Sinaloa no sufrieron mucho durante el tiempo que el Chapo estuvo preso, y el negocio parece estable. El mundo de la droga ya se ha reconfigurado, y existe alguna pequeña posibilidad de que no estalle un aumento de la violencia, aun cuando, como parece inevitable, Guzmán sea recapturado o se le dé muerte.

En una de esas mañanas soleadas en Ciudad de México, cuando parece que el mundo es como debe ser —con niños en vacaciones jugando en las banquetas, un tráfico casi manejable y un mirlo que canta dulcemente en los cables del teléfono —, Emmanuel del Real, tecladista de una de las bandas de rock más idolatradas de México, Café Tacvba, contempló los daños de la nefasta broma montada por el capo embaucador durante el fin de semana. Los Tacvbos tienen un enorme poder de convocatoria entre los jóvenes de los vecindarios más pobres de México, y era en ellos en quienes estaba pensando Del Real.

> El mensaje que la fuga le va a dejar a todos esos muchachitos que trabajan en el narco, o que están pensando en hacer su vida dentro del crimen organizado, y que de por sí ya creen que el Chapo es más inteligente, más astuto, más poderoso, más adinerado, y también mucho más divertido, ¡es que lo es! Van a pensar que el Chapo es la prueba de que, igual que en *Star Wars*, el lado oscuro es el más poderoso. Y eso es terrible.

Debería ser un asunto sencillo mantener a un peligroso criminal en prisión. Sin embargo, Joaquín Guzmán Loera no duró ni ocho meses en su jaula. Como dice uno de los muchísimos narcocorridos en YouTube sobre su más reciente escape:

El dinero es muy bonito
Ningún policía lo resiste
Nomás de mirar los billetes
Ya les agarra la risa

Uno se ríe solo hasta que comienza la rabia.

The New York Review of Books, 14 de julio de 2015

Posdata

Joaquín Guzmán fue capturado de nuevo en 2016 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. Juzgado en una corte federal de Nueva York por diez cargos relacionados con narcotráfico, fue sentenciado a cadena perpetua. En su ausencia, el tráfico de drogas ha continuado sin tregua, y los grupos de Sinaloa que antes encabezaba Guzmán parecen haber tomado el control del tráfico de cocaína incluso en Colombia.

En 2024, un hijo de Guzmán secuestró al compadre y socio comercial más importante de su padre, Ismael Zambada, y lo entregó a las autoridades estadounidenses. El hecho desató una guerra mortal entre las dos familias que ya lleva más de un año y no parece tener fin. Se piensa que la traición y entrega de Zambada, organizada por los hijos del Chapo, tenía como fin negociar mejores condiciones carcelarias para Joaquín Guzmán, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado.

4
El pavoroso duunvirato de Nicaragua

Sergio Ramírez, ilustre historiador, novelista y exvicepresidente de Nicaragua, bien podría encontrarse hoy en una mazmorra, al igual que tantos de sus desafortunados amigos que, junto a otros doscientos miembros de la oposición, fueron recluidos en estos últimos meses por el régimen del presidente Daniel Ortega y su estrambótica esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Pero cuando Ramírez y su esposa Tulita observaron cómo la policía se llevaba uno por uno a los opositores de la pareja Ortega-Murillo bajo acusaciones de traición a la patria, entendieron que era hora de salir del país que los vio nacer. Fue una decisión sabia: en septiembre, Ramírez se enteró de que el Gobierno lo acusa de lavado de dinero y de «provocación, proposición y conspiración».

Ramírez tiene setenta y nueve años, y es un cruel destino para alguien que ama y ha servido a su país de manera tan constante saber que tal vez nunca volverá a verlo, ni a sus amigos presos, ni el amado escritorio donde se sentaba a escribir rodeado de libros. Por otro lado, para un escritor toda experiencia es alimento, y su prolífico despliegue de novelas y ensayos históricos —sesenta años de producción ininterrumpida— es un tributo a la trágica y absurda historia de su hermoso país. Los nicaragüenses sobreviven a su

suerte gracias a un sentido del humor digno de un pícaro. La más reciente novela de Ramírez, *Tongolele no sabía bailar*, es un relato sombrío, muy agudo y surrealista acerca de los dolorosos eventos de la primavera de 2018, cuando estallaron las protestas estudiantiles en Managua y en otras ciudades del país, y la represión de Ortega y Murillo dejó trescientos muertos.

Ramírez cuenta la historia a través de un personaje, el detective Dolores Morales, quien resultó seriamente herido en la lucha por derrocar al dictador Anastasio Somoza allá en los años setenta y que, como resultado, lleva una prótesis por pierna. Los demás personajes del libro, sin embargo —que aparecen retratados con ese diálogo veloz y el infalible oído del autor para el dulce y extravagante español de Nicaragua, con sus *vos*, sus símiles disparatados y su alegre uso de la vulgaridad siempre que la ocasión lo exige—, son los más fascinantes. Está, entre otros, Tongolele, un oficial de inteligencia de alto rango que trabaja en los rincones más oscuros del Gobierno; un heroico y apacible cura de pueblo; una deslumbrante mujer que maneja a todos los vendedores y vendedoras itinerantes del país, y se procura una entradita adicional pasándole información a Tongolele; y la consejera místico-espiritual de alguien que se identifica solo como *la compañera*. Esa alguien sería la vicepresidenta Murillo, y aunque nunca se la ve en la novela, Ramírez aprovecha la oportunidad para taconear en su sombra con fruición.

El recuento que hace la novela de un alzamiento popular en mayo de 2018 es preciso, pero cuando la inventiva de Ramírez se dispara, su retrato de la Nicaragua de hoy, bajo el puño del inverosímil duunvirato Ortega-Murillo, se vuelve más veraz. Ramírez fue el

segundo al mando durante los primeros diez años del régimen sandinista, y conoce íntimamente a Ortega y a sus compinches en el submundo del poder, pero también sabe de la vida cotidiana de los *nicas*. Para quienes no son nicaragüenses, sin embargo, una pequeña guía podrá resultarles útil.

A Ortega, de setenta y seis años, le encanta usar la palabra *vendepatria* como insulto, aunque alguna vez accedió a vender los derechos de una franja de Nicaragua de 278 kilómetros de longitud, que atravesaría el país del Atlántico al Pacífico, a un tenebroso empresario chino que tenía la intención, dijo, de construir un canal que compitiera con el de Panamá. Murillo, de setenta años, lleva un recuento meticuloso de cada ofensa o desaire que ha sufrido a lo largo de su vida, y se mantiene en estrecha comunicación con espíritus que le revelan quiénes son sus adversarios ocultos. Ante la insuficiencia de policías y batallones del ejército para mantener a raya a todos los enemigos de la pareja, ahora despliega grupos paramilitares contra los pacíficos manifestantes. Murillo también hizo que se instalaran por todo Managua coloridas y rebuscadas siluetas de árboles de metal, a fin de canalizar a través de ellos la energía positiva de los cielos. Pruebas contundentes indican que Ortega es un pedófilo y un violador. Codo con codo, la decrépita pareja ha creado lo que monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua (actualmente en el exilio), ha llamado «una situación de… irracionalidad, violencia y maldad que sobrepasa la imaginación».

¿Quiénes son estas gentes? ¿Cómo llegaron hasta donde están? ¿Y por qué, tras cuarenta y dos años de sandinismo, siguen ahí?

Podría decirse que la verdadera vida de Ortega comenzó en prisión. Hijo de un padre itinerante, fue un chico de barrio que, junto con sus amigos, se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en aquel entonces una organización microscópica donde ejercían como brigada de recaudación de fondos. Es decir, él y sus amigos atracaban tiendas y bancos. A los quince años, lo encarcelaron y torturaron durante unos días. Un año más tarde fue apresado en Guatemala y sufrió abusos terribles. En Nicaragua lo metieron a la cárcel, pero salió gracias a una amnistía general. En 1967, a los veintidós años, le dieron una sentencia de catorce años por robar un banco, que se suspendió siete años después, cuando sus camaradas guerrilleros —entre ellos un muchacho llamado Hugo Torres— juntaron a unos cuantos rehenes en una cena de ricos y los intercambiaron por él y otros trece prisioneros. Los pocos poemas que Ortega publicó hace mucho se centran, sobre todo, en la vida en prisión, y son desoladores.

Si me das comida me culiás,
por tres cigarros la mamo.

Describe episodios de tortura que las autoridades de la prisión ejercían sobre él de manera casi recreativa:

Patéalo, así, así
en los güevos, en la cara
en las costillas.
Pasá el chuzo, la verga de toro,
hablá, hable hijueputa.

En una perspicaz y rigurosa biografía escrita por el periodista Fabián Medina Sánchez, *El preso 198*, él argumenta que en realidad Ortega nunca ha salido de una celda. Cita una entrevista que apareció en la revista *Playboy* de 1987 en la que Ortega describe lo incómodo que se sintió cuando lo liberaron en 1974 y lo enviaron a Cuba con autorización de ir *por la libre* adonde quisiera, y cómo, durante un breve regreso a Nicaragua en 1976, descubrió que se sentía mucho más a gusto en la clandestinidad, encerrado en el cuarto de una casa de seguridad, trabajando en ropa interior en el calor húmedo de Managua, reuniéndose con los miembros de la red urbana sandinista y coordinando la comunicación con los guerrilleros en las montañas. Medina nos cuenta que, después del triunfo sandinista en 1979, Ortega se hizo construir un cuartito en su nueva y espaciosa casa, con una pequeña ventana cubierta con una cortina y una hamaca colgada, al estilo de la prisión, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Ordenó que le hicieran un cuarto similar, aunque sin la ventana, en el edificio del banco que en un inicio le sirvió de sede al nuevo Gobierno.

Ramírez, que, como vicepresidente de Ortega de 1985 a 1990, esencialmente administraba el país, confirmó esto en una conversación, y añadió que cada vez que iba a recoger a Ortega de mañanita para ir a algún evento le sorprendía el hecho de que nunca se sentara a desayunar, sino que comía aprisa, de pie, y no era proclive a nada que no fuera el típico arroz con frijoles, tortillas, queso y café negro nicaragüenses. Ingredientes de mejor calidad que la porquería que le servían con un cucharón en la cárcel, pero el mismo menú.

Ortega tiene un hermano menor, Humberto, elocuente, ambicioso y muy listo. Hace muchos años él me comentó —estoy parafraseando, pero no por mucho— que cada familia tiene un hijo audaz y destacado, y otro que, dijo Humberto, pues no lo es tanto. Humberto tiene más personalidad que su hermano, lo que no es difícil, considerando que Daniel es tan memorable como una escoba, y hay un consenso entre algunos exsandinistas bien informados que entrevisté en Costa Rica hace poco de que, en 1978, la idea de traer sus escasas fuerzas guerrilleras de la montaña —donde anduvieron dando vueltas inútilmente durante años— a las ciudades, donde podían detonar un movimiento político contra el dictador Somoza, fue, en efecto, idea de Humberto, o de Humberto asesorado insistentemente por Fidel desde La Habana.

Entonces, ¿por qué es presidente Daniel y no Humberto? Según se dice, porque la lucha de poder entre Humberto y los otros dirigentes guerrilleros del FSLN habría desbaratado a la organización. Con renuencia se aceptó la propuesta de Humberto de colocar al inofensivo Daniel en la posición más alta, primero como miembro de una junta de transición entre el FSLN y los civiles, en la que Sergio Ramírez era el máximo representante civil, y luego como el candidato presidencial sandinista triunfador, en 1984. Pero nos estamos adelantando a nuestra historia, porque aún tenemos que describir el trascendental encuentro entre Daniel y Rosario, su futura esposa y vicepresidenta.

Al igual que la historia de Nicaragua, que es en un grado sorprendente la historia de más o menos seis apellidos, los traumas

familiares tienden a repetirse. Además de su recuento de la vida y épocas de Ortega, el libro de Medina *El preso 198* aporta un capítulo informativo sobre su esposa. En 1967, nos dice, Rosario Murillo, una joven vivaz y rebelde de dieciséis años, dio a luz a una niña en Managua. En el hospital, su madre le quitó a la bebé de inmediato. Firme creyente en el espiritismo, adicta a la ouija, no dejó que Murillo amamantara a la niña ni una sola vez, convencida de que su leche tenía humores siniestros. Expulsó a la joven de casa, obligándola a contraer matrimonio con el reticente padre de la criatura, despistado e igualmente joven. La infeliz pareja procreó otro hijo antes de que el padre muriera, al parecer de una sobredosis, en 1968.

Mientras tanto, la abuela bautizó a la primera bebé con su propio nombre: Zoilamérica. Aquí resulta útil comprimir algo de historia explicando la elección del nombre. Se pronuncia exactamente como las palabras «Soy la América» —no en el sentido de «Estados Unidos», sino de América Latina y el hemisferio— y, cuando se puso de moda hace unos cien años, era un nombre sumamente político, porque expresaba el rechazo a los marines de Estados Unidos que ocuparon Nicaragua de 1912 a 1933. También implicaba admiración por Augusto César Sandino, que encabezó una guerra de guerrillas contra los invasores y murió asesinado por el director de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García. Somoza se hizo presidente en 1937, fundando así lo que sería una dictadura familiar. Las guerrillas que derrocaron al último Anastasio Somoza en 1979 tomaron su nombre del héroe Sandino para bautizar su movimiento, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o FSLN. Sandino era tío de la

matriarca Zoilamérica, de modo que ella portaba el nombre con más orgullo aún.

Rosario Murillo creció hasta convertirse en una mujer adulta e intrépida. Se casó por segunda vez; se metió a grupos de poesía; escandalizó a su madre asistiendo a fiestas en las que se fumaba marihuana; tras la muerte de su madre recuperó a sus dos hijos, Zoilamérica y Rafael Antonio; la contrataron como secretaria del dueño y editor en jefe del venerable periódico de oposición *La Prensa*; se unió a la estructura clandestina de apoyo al FSLN; se divorció; publicó un primer y delgado volumen de poesía (los mexicanos cantan rancheras, los nicaragüenses escriben poemas); se casó por tercera vez, con un sandinista de rango medio llamado Carlos Vicente Ibarra; estando embarazada, huyó del país junto con su nuevo esposo en un momento particularmente brutal de represión somocista contra los sandinistas clandestinos. Su primera parada fue Caracas. Ambos estaban convencidos de que su vida en política había terminado y lo único que querían era irse a París a estudiar cine y hacer películas. Murillo deambulaba entre las distintas piezas y retratos en la casa donde había nacido el héroe de la independencia latinoamericana, Simón Bolívar, cuando se topó con un compatriota nicaragüense con el que había sostenido correspondencia mientras él estaba en prisión: un hombre impasible con gruesos lentes cuadrados: Daniel Ortega. Según Murillo, de inmediato se sintió impresionada por «su flacura, su magnetismo, para mí electrizante».

Por su parte, Ortega diría después: «Yo soy de pocas palabras, soy más bien de acción. Hay una comunicación que es más importante, más fuerte y más profunda que la comunicación de las

palabras, que es la de los ojos…». Poco después de cruzar miradas con Murillo y, suponemos, tras haber renovado ella su compromiso con el sandinismo, Ortega fue nombrado vocero del FSLN en el exterior, con base en Costa Rica. Luego, la muy embarazada Murillo llegó a San José con su esposo y sus hijos. Ibarra fue enviado rápidamente a Cuba a estudiar cine, y Ortega y Murillo se mudaron juntos, exiliados hambrientos con pocos recursos pero gran fervor revolucionario, viviendo casi escondidos en el extranjero.

Eventos dramáticos marcaron la vida tumultuosa de la pareja. El exjefe de Murillo en *La Prensa* era Pedro Joaquín Chamorro, cuyos ancestros incluían cuatro presidentes de Nicaragua. Participó en expediciones armadas contra el primer Somoza y estuvo encarcelado en las monstruosas prisiones del segundo. Figura de alta visibilidad y arrojo en la sociedad nicaragüense, fue asesinado —presumiblemente por órdenes del tercer Somoza— en enero de 1978, lo que encendió una rebelión popular que no duró mucho, pero que fue apenas un primer intento.

En agosto de ese año estalló una nueva insurrección, en la que la notable Dora María Téllez, entonces de veintidós años, fue la segunda al mando: la Comandante Dos. Encabezados por Edén Pastora, el Comandante Cero, los guerrilleros se tomaron un edificio conocido popularmente como la Chanchera, o, de manera más formal, el Palacio Nacional, donde estaban asentados tanto el Senado como la Cámara de Diputados. «Nos fuimos a Palacio disfrazados de guardias todos, Edén Pastora, Hugo Torres, yo y los veinticinco miembros del comando», recordó Téllez en una entrevista que le hice un año después. «Las camionetas, que supuestamente iban a ser verde olivo, quedaron verde chocoyo

(verde perico) porque no había otra pintura». Para cuando las fuerzas de seguridad se percataron de que no habían puesto suficiente atención en los matices de verde, los guerrilleros ya controlaban todos los puestos estratégicos del edificio y vigilaban a unos dos mil rehenes.

La gallardía de Pastora, la juventud y seriedad de Téllez y la desfachatez de la acción guerrillera en sí, de inmediato le granjearon al Frente Sandinista la atención mundial, junto con un grado enorme de simpatía. Cuando Somoza aceptó la negociación (tenía parientes entre los retenidos) los guerrilleros se quedaron con una veintena de rehenes y designaron a Téllez negociadora en jefe. Dos días después, Somoza aceptó los términos del rescate y dejó en libertad a cincuenta y nueve prisioneros sandinistas. Guerrilleros, prisioneros liberados y un puñado de rehenes viajaron en un autobús escolar amarillo hacia el aeropuerto, donde abordaron un avión a Cuba. Pero en el camino, tanto Somoza como sus contendientes tuvieron una gran sorpresa: la carretera al aeropuerto estaba flanqueada por miles de nicaragüenses, la mayoría evidentemente muy pobres, que se carcajeaban con una risa nueva: ¡esos muchachos le metieron la verga a ese hijo de la gran puta del Somoza! El reclutamiento sandinista escaló a niveles casi inimaginables durante los siguientes meses, y la insurrección se extendió por todo el país.

En julio de 1979, Somoza huyó de Nicaragua. El liderazgo sandinista convergió en Managua, asombrado por la velocidad de su propio triunfo. Eran, en su mayoría, terriblemente jóvenes, con poca educación —al igual que Ortega, muchos de ellos habían dejado los estudios para tomar las armas contra Somoza— y dependientes de que Castro los aconsejara en cada paso. No lograron darse cuenta

de una de las leyes cruciales en política: se puede ceder el poder voluntariamente, pero es imposible pedirlo de regreso. Y así, Daniel Ortega fue nombrado para una junta de transición cívico-sandinista y colocado en el sendero que lo llevaría a convertirse en el hombre más poderoso de esa tierra. Con Murillo y sus tres hijos, a los que a la larga adoptó, se mudó a una lujosa casa confiscada a uno de los hombres más ricos de Nicaragua. En todo Managua los guerrilleros andaban de cacería confiscando y ocupando residencias, entre más lujosas mejor. ¿Dónde más —podrán haber pensado— se supone que deben vivir los triunfadores? Probablemente no en las casas de los oligarcas que suplantaron.

Resulta imposible probar que, cuando montó las labores domésticas en su nuevo dominio, Murillo ya sabía que su marido solía escabullirse al cuarto donde dormía Zoilamérica, su hija mayor, que entonces tenía once años. Fueron años de abuso, condonado o ignorado por su madre, según me dijo ella en una entrevista, antes de que se sintiera lo bastante fuerte para denunciar en público a su abusador. Por fin, el 2 de marzo de 1998, Zoilamérica —una mujer de treintaiún años, alta, esbelta y visiblemente nerviosa, con un título en sociología— se sentó frente a una multitud de reporteros y anunció que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, era un violador:

> Desde la edad de once años fui abusada… [por el presidente] repetidamente y por muchos años… Recuperarme de los efectos de esta larga agresión, acompañada del asalto sexual, amenazas, acoso, chantaje, no ha sido fácil.

En un documento de cuarenta páginas dolorosamente detalladas, que se presentó a la corte diez semanas después de la conferencia de prensa, Zoilamérica relató, entre otras cosas, que en Costa Rica, cuando era pequeña, Ortega se metía al cuarto que compartía con su hermanito. Ortega la tocaba mientras ella se quedaba petrificada, llena de vergüenza, fingiendo con horror estar dormida. Más tarde, en Managua, la depredación sexual de Ortega continuó en una privacidad que era posible gracias a que su nueva casa tenía muchas habitaciones. A Zoilamérica le dieron su cuarto propio, donde él podía acariciarla en relativo aislamiento. Era obligada a pasar muchas horas en el cuarto sin ventanas de la oficina de Ortega. Él la espiaba a través del ojo de la cerradura del baño, y luego le dio por entrar directamente. A la larga, escribió ella, Ortega «ya no solo me observaba mientras me bañaba; él… se masturbaba. Era horrible a esa edad ver a un hombre recargado en la pared con una mano para no caerse, y sacudiendo su sexo como perdido, sin conciencia incluso de sí mismo».

Con el tiempo, Zoilamérica llegó a la pubertad. Ortega entró a su cuarto una noche, la examinó y le dijo: «Ya estás lista», y la violó.

En la primera de las novelas del detective Morales de Sergio Ramírez hay un detalle oculto. Es muy pequeño, pero los lectores nicaragüenses saben por qué está ahí: Morales observa a un hombre mayor al volante de una camioneta, quien, con gran entusiasmo, le cuenta una historia a una niñita que está sentada a su lado. Ella escucha con los ojos clavados en el camino. Un abuelo y su nieta, piensa Morales en un raro momento de sentimentalismo. Luego ve que la camioneta entra al estacionamiento de un hotel de paso. La

segunda novela del detective Morales gira sobre la historia de una joven que desde la infancia ha sido violada por su padrastro, un poderoso empresario.

El caso de Zoilamérica contra Ortega no fue a ninguna parte: uno de los múltiples jueces con los que el presidente llenó el sistema judicial dictaminó que los cargos por sus supuestos crímenes habían prescrito. Años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó por recomendar que la disputa se resolviera entre las dos partes involucradas. Tal vez la reacción pública habría sido distinta si Murillo hubiera salido en defensa de su hija, pero, dice Zoilamérica, ella tenía ataques de celos, la acusaba de seducir a su padrastro, la corrió de la casa igual que su madre lo había hecho con ella, y luego, cuando por fin estalló el escándalo, se paró lloriqueante y resollando junto a Ortega en un mitin, mientras él le gritaba a la multitud «Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sandinista».[1]

Ahí comenzó la transformación física de la pareja. Murillo antes se vestía con sencillez, aunque con cierto estilo, y, para Nicaragua, con algunos modelos medio atrevidos. Hoy tenemos a la Murillo del maquillaje estrafalario, el vestido estilo hindú color rosa o turquesa, las docenas de anillos que usa para canalizar las buenas vibras y los aretes gigantes con los que se arma a diario. Consulta al espíritu del hermano de Augusto César Sandino de manera regular (uno se pregunta, ¿y por qué no de una vez con el gran héroe?) y deambula por su casa prendiendo varitas de incienso ante imágenes de querubines y de Buda. Con su voz aflautada, pasa bruscamente de

predicar paz y amor, como lo demanda el espíritu de Sai Baba, su maestro hindú, a denunciar:

> Esos cerebros disminuidos que funcionan recibiendo mensajes son como computadoras que se activan cuando reciben mensajes de otras galaxias, realmente de otros planetas, que vienen a elevar su condición apátrida. La condición de gente que no conoce de Amor Patrio, la condición indigna de los que esperan que las naves espaciales emitan señales que les activen un poco sus disminuidos cerebros.

El escándalo de la violación sistemática de su hijastra se apagó, pero su veneno sigue filtrándose por la historia de Nicaragua. Obligó a los sandinistas de todos los niveles a aceptar cada vez más mentiras de sus líderes: que los sandinistas no se involucraron en actos pequeños o grandes de corrupción; que en verdad eran demócratas de corazón o eran socialistas de corazón; que la mayoría de la población en verdad los amaba; y, desde luego, que Zoilamérica mentía. Incluso cuando, como observó un sagaz periodista nicaragüense, en la promiscuidad del todo-se-vale que siguió a la victoria sandinista, en el círculo interno de Ortega se creía generalmente que su guapa hijastra, ya crecida, de hecho era su amante: «Lo que sorprendió a todos fue su revelación de que la había violado desde niña».

A lo largo de los años de abuso a Zoilamérica (para cuando hizo pública su acusación, en un intento por detener la incesante persecución de Ortega, ella ya estaba divorciada y con dos hijos), la política nicaragüense siguió avanzando en su camino circular. En 1990 Ortega fue vencido en los comicios por la quinta persona en volverse presidente que llevara el apellido Chamorro: Violeta

Chamorro, una mujer altiva y rigurosa, devota ama de casa y viuda del asesinado editor Pedro Joaquín Chamorro. Jimmy Carter, entre otros, convenció a Ortega y a la cúpula del partido sandinista de que reconocieran la victoria de Doña Violeta. Cinco años después, Sergio Ramírez, exvicepresidente de Ortega, renunció al partido y fundó un movimiento de oposición con otros sandinistas disidentes, incluidos Dora María Téllez y Hugo Torres, mientras Ortega pasó los siguientes diecisiete años intentando recuperar la presidencia.

Fabián Medina nos recuerda que Ortega finalmente triunfó gracias a una hábil intromisión que sus jueces hicieron en la Constitución para permitir que los candidatos ganen con apenas el 35 por ciento del voto. Otra nueva serie de componendas y trampas le permitieron volver al poder en 2007 con el 38 por ciento del voto. Desde entonces no ha dejado el poder. Su sandinismo corrupto y dictatorial ha destruido los logros más dignos de orgullo del movimiento. El terco periodista Carlos Fernando Chamorro —antiguo sandinista, hijo de Doña Violeta y Pedro Joaquín, y fundador y editor de la invaluable revista en línea *Confidencial*— lo dijo de manera concisa:

> Ortega restableció el fraude electoral como práctica, prohibió y reprimió a la oposición y estableció un monopolio sobre los poderes —la Suprema Corte, la autoridad electoral y la Oficina del Contralor—, transfiriendo las que fueron alguna vez joyas de la transición democrática, las Fuerzas Armadas y la policía, al control político… de la pareja presidencial.

No hay forma de saber si Cristiana, la hermana mayor de Carlos Fernando Chamorro y una de las potenciales oponentes de Ortega, habría sido electa presidenta el 7 de noviembre de no haber estado bajo arresto domiciliario desde junio. Pero la pareja reinante, con

una red que espía las «relaciones personales» y con encuestadores privados de primera a su servicio, debió haber considerado con pavor que, de hecho, la victoria de Chamorro era probable, o no se habrían arriesgado a recibir el oprobio internacional y las renovadas sanciones que inevitablemente siguieron a la represión de Cristiana —que habría sido la sexta integrante de la familia Chamorro en convertirse en presidenta de Nicaragua— y al igualmente indignante encarcelamiento de otros seis candidatos que podrían haber contendido contra Ortega y la copresidenta honoraria Rosario Murillo (Ortega la promovió de *vice* a *co*-presidenta justo antes de la elección).

Comoquiera que sea, las elecciones en Nicaragua vinieron y se fueron, y no pasó nada que no estuviera previsto: Ortega y Murillo permanecen en la presidencia a pesar de un abstencionismo de entre el 40 y el 80 por ciento, dependiendo de quién haga el conteo. Con la ayuda de jueces al servicio de la pareja, su victoria se certificó como justa, aun cuando los siete precandidatos no han sido liberados, ni tampoco los más de doscientos activistas, líderes de oposición, abogados, periodistas y ciudadanos de a pie que comparten celdas con ellos desde junio. Hay varios presos muy mayores, y todos padecen terribles condiciones de hambre y tortura psicológica.

Pero las así llamadas elecciones son un capítulo de poca importancia en esta desalentadora telenovela. Lo importante es qué sucederá después. ¿Renovar o endurecer las sanciones internacionales puede lograr algo más que las privaciones cada vez mayores de la ciudadanía empobrecida? ¿Acaso la terrible racha de asesinatos de Ortega-Murillo contra líderes estudiantiles y

campesinos en 2018 aterró permanentemente a la población, lanzándola a la desesperación y la indiferencia? ¿Se rebelará el obeso y complaciente sector empresarial —tan recientemente el mayor aliado del Gobierno— ahora que la policía encarceló a dos de sus más importantes representantes? Los nicaragüenses que viven en casa y en el exilio esperan con ansias la respuesta. Quizá nada ocurra. Quizá, con esa manera impredecible que tiene la historia de despertarse a empellones y despegar impulsándose a medio galope, llegará algún enorme cambio para aliviar el sufrimiento de esa afligida tierra.

The New York Review of Books, 16 de diciembre de 2021

Posdata

En febrero de 2023, tras una intensa negociación con la Administración Biden, el duunvirato Ortega-Murillo ordenó la liberación de doscientos veintidós presos políticos, quienes, sin saber adónde se dirigían o por qué, subieron a un avión que aterrizó en Washington D.C. Entre ellos iba Dora María Téllez, pero no Hugo Torres, el exguerrillero que alguna vez participó en un arriesgado operativo para liberar a Daniel Ortega y a sus otros compañeros presos. Torres murió encarcelado. El obispo católico de Matagalpa, Rolando Álvarez, que quiso permanecer en la cárcel en solidaridad con el resto de los prisioneros que ahí quedaban, fue inmediatamente sentenciado a veintiséis años y privado de sus derechos ciudadanos de por vida. En enero de 2024 fue liberado

contra su voluntad y exiliado en la Ciudad del Vaticano. Doña Pinita Gurdián y otros dos familiares de los prisioneros murieron sin volver a ver a sus hijos. A algunos, el Gobierno les ha confiscado el pasaporte preventivamente, para que no puedan viajar adonde están sus parientes en el exilio. Poco después de la liberación de rehenes, un decreto del Gobierno canceló su ciudadanía y la de tantos otros que huyeron de su país para evitar que los apresaran. A Sergio Ramírez, el apreciado novelista y anterior vicepresidente de Nicaragua, le quitaron la ciudadanía junto con su pensión. Su casa también fue confiscada. Unos días después, un comunicado anunció que su título de abogado quedaba «anulado», sea lo que sea que eso quiera decir. Las procesiones y festividades católicas tradicionales están prohibidas.

Quizá ningún evento ha sido tan sorprendente como la muerte de Humberto Ortega, hermano de Daniel y verdadero líder del movimiento que derrocó a Anastasio Somoza. Murió el 30 de septiembre de 2024, después de pasar tres meses bajo arresto domiciliario. Cuatro meses antes había concedido una de sus muy pocas entrevistas al sitio de noticias argentino *Infobae*, sin duda confiando en que su relación con su hermano lo protegería de su abominada cuñada. Con osadía, declaró que Daniel no tendría ningún sucesor natural, pues ni Rosario Murillo ni sus sobrinos y sobrinas estaban cualificados para ocupar el puesto de Daniel. Poco después la policía rodeó su casa. Se cree que sufrió un infarto el 12 de junio y fue llevado rápidamente a un hospital militar, donde murió como prisionero del régimen que él había ayudado a levantar. Hoy hay más de cien antiguos aliados del Gobierno, y otros que creían ser aliados actuales, además de ancianos guerrilleros y personas que

en algún momento simplemente dijeron algo que no debían, sufriendo arresto domiciliario o cárcel. Como dice Carlos Fernando Chamorro, la pareja presidencial —o Murillo, puesto que Daniel Ortega está cada vez peor de salud— sigue devorándose a sí misma.

5
En la tierra de los niños asesinos

Estoy de vuelta en El Salvador por primera vez en treinta años, y no reconozco nada. Fluidas carreteras llevan del aeropuerto a San Salvador, la capital, e incluso a estas horas de la noche, a lo largo de la extensión de dunas que separan la carretera del océano Pacífico, hay puestos de aire festivo donde los clientes se estacionan para comprar cocos y comida típica. Pero lo que yo recuerdo es un camino de dos carriles lleno de baches, un sol inclemente que revelaba cada detalle de la piel tirante de los cadáveres, un hueco en el suelo arenoso, la fulminante noticia de que cuatro mujeres de Estados Unidos, tres de ellas monjas, acababan de ser desenterradas de esa fosa poco profunda.

—¿Hay algún monumento o letrero que marque el sitio donde fueron asesinadas las cuatro americanas durante la guerra? —le pregunto al chofer de la furgoneta del hotel.

—Sí, allá en la universidad, la UCA, donde los mataron.

—No, esos fueron los seis curas jesuitas, años más tarde, en San Salvador. Me refiero a las monjas, aquí, en 1980.

—Ah, vaya —me responde—. De esas sí no me recuerdo.

Aquel suceso, la violación y el asesinato de cuatro devotas religiosas que iban del aeropuerto a la ciudad, sin duda fue

memorable para personas como Robert White, embajador de Estados Unidos ante El Salvador durante el último año de la Administración Carter. En el funeral al día siguiente, tieso de rabia, parecía un blanco potencial más de una junta golpista de extrema derecha que ya no entendía de límites. Ese mismo año habían asesinado a Óscar Arnulfo Romero, el valiente arzobispo de San Salvador, para la evidente felicidad de una clase gobernante que solía llamarlo Belcebú. Semanas después de su asesinato, orquestado en los pasillos más oscuros del régimen por el notorio ideólogo Roberto d'Aubuisson, el Gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, redobló sus esfuerzos militares en El Salvador y dedicó miles de millones de dólares a la lucha de la junta contra la coalición insurgente de guerrillas marxistas radicales, agrupadas bajo el amplio nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Esa guerra, que habría de durar doce años, dejó alrededor de setenta mil muertos, pero el conflicto comenzó mucho antes de que naciera más de la mitad de todos los salvadoreños que están vivos hoy, y terminó hace ya casi dos décadas. ¿Por qué habría de recordarlo el joven chofer de una furgoneta? Y, sin embargo, El Salvador de hoy, azotado por la violencia más cruda desde que empezó la guerra, resulta inconcebible sin aquellos años de derramamiento de sangre; ligado irremediablemente a Estados Unidos por un río de migrantes que se formó durante el conflicto, perseguido siempre por el fantasma del asesino Roberto d'Aubuisson, fundador del partido que gobernó este país de manera ininterrumpida hasta la elección de 2009.

A los salvadoreños les gusta decir que, si alguien se tomara la molestia de plancharlo, su país sería bien grande, pero es pequeñito y arrugado, porque la lava de sus volcanes inactivos frunce y pliega caprichosamente el paisaje. San Salvador, la capital, se asienta en un valle al pie del volcán Quezaltepeque. Adivinando, podría decirse que hoy día la ciudad tiene más centros comerciales que, digamos, Fort Lauderdale, y cuenta con plazas, glorietas y vecindarios tranquilos con guardias de seguridad en cada cuadra. Es muy verde, e incluso los barrios pobres encaramados en el piedemonte de las afueras de la ciudad parecen frondosos para quienes están acostumbrados a tipos de pobreza más urbanos.

Sobre una ladera del volcán se asienta el municipio de Mejicanos, pueblo legendario por su combatividad durante la guerra. Una calle larga y estrecha sube y baja hacia allá, serpenteando por el contorno de un cañón angosto. En ese camino precipitado es posible ver que las frondosas sombras están profusamente salpicadas de casas y chabolas improvisadas. Aquí y allá, algún nudo de hombres flacos se apiña en torno a lo que parece una pipa de crack; por lo demás, la calle está en silencio y vacía.

El barrio y la calle se llaman Montreal, y son notorios. El año pasado un transporte público de Montreal que hacía el viaje al centro de Mejicanos quedó envuelto en llamas cerca del mercado. En total diecisiete personas murieron a causa de las quemaduras. La cifra incluía un niño de dieciocho meses, pero se dice que al menos varios de los muertos eran miembros de una de las dos bandas rivales de maras, grupos feroces que son el aporte de El Salvador al negocio de la droga y al mundo del crimen transnacional en el que

está implantado. Hijos de la guerra y de Estados Unidos en más de un sentido, las maras son responsables de la espantosa violencia que se padece hoy. Atrajeron la atención pública por primera vez hace unos veinte años, cuando lo que había sido el conflicto rabioso de la guerra cedió el paso a una sensación de amenaza permanente que no deja de crecer.

Más o menos en esa época, Marisa d'Aubuisson de Martínez, hermana de Roberto d'Aubuisson, decidió crear un proyecto para las mujeres del mercado y sus hijos más pequeños en un vecindario parecido a Mejicanos. La personalidad enérgica de Marisa y su risa fácil contrastan con el carácter hipnotizante y quimérico de su hermano. Tampoco se parecen en su quehacer público: ella es una activista católica de toda la vida, seguidora del valiente arzobispo que su hermano asesinó. Roberto, quien moriría de cáncer de garganta en 1992, se pasó a la política electoral en los años ochenta. Conforme la guerra se iba apagando, Marisa también cambió, alejándose de los sueños utópicos de un mundo nuevo para enfocarse en proyectos más realizables. Un día conversé con ella en la sencilla y soleada oficina donde trabaja.

«En ese entonces la ayuda internacional buscaba sobre todo a proyectos ambiciosos, *macroproyectos* —dijo Marisa—. Pero yo tenía ganas de proponer algo muy pequeño». Con dinero internacional fundó una organización llamada Centros Infantiles de Desarrollo (CINDE) que establece guarderías, sobre todo para los hijos de mujeres que se ganan la vida vendiendo en el mercado. Ahora ya hay tres guarderías CINDE, incluida una en Mejicanos, a la que se le agregaron instalaciones para preescolar y kínder. Hace algunos años, el CINDE creó un programa conocido como Refuerzo Escolar en el

que los niños mayores pueden hacer su tarea en un lugar seguro y con la guía de un adulto. El «refuerzo» que está en Montreal es uno de los pocos sitios en ese barrio donde los fuereños pueden sentirse bienvenidos y a salvo de las maras.

El CINDE de Montreal es un espacio al aire libre con un techo de zinc pegado a dos cuartos improvisados que rara vez se usan, porque se calientan como un horno. La fresca tarde en que llegué, los niños disfrutaban de un recreo alborotado y alegre, pero cuando la maestra de turno hizo sonar el silbato volvieron de inmediato a las mesas de trabajo de la cancha cubierta y se lanzaron a terminar la tarea casi con voracidad. Todos los que estaban ahí, desde las educadoras hasta los monitores voluntarios, trabajaban febrilmente. Interrumpí el trabajo de las niñas mayores, que tenían ambiciosos nombres en inglés —como Jennifer y Natalie—, para preguntarle a una si estaba ahí para aprender o para divertirse. De inmediato respondió con seriedad: «Aprendo y me divierto». Sus calificaciones habían mejorado de seises y sietes el año anterior a un promedio estable de ocho, pero le costaba trabajo, dijo, la materia que menos le atraía: matemáticas.

Quizá el entusiasmo general por el estudio se debía a la situación de último oasis en el infierno del centro mismo. Durante un recreo vi a una jovencita muy linda que pateaba una pelota de futbol con sus compañeritas de juego como si todavía fuera una niña, pero era alta para su edad y ya núbil, y me sentí casi enferma de temor por ella, pues ya había escuchado una y otra vez que, en los territorios que dominan, los mareros obligan a las jovencitas a someterse a la violación sistemática; obligación que por lo general se inicia con un estupro en masa. O, cuando es día de *visita marital* —el día en que a

la esposa o pareja establecida se le permite privacidad con su esposo encarcelado—, a las niñas mayorcitas se les puede enviar como «esposas» a las prisiones donde los miembros de la mara cumplen su condena. Nadie sabe con exactitud qué tan a menudo se permite la visita íntima en las prisiones salvadoreñas. Como me señaló un amigo, un prisionero en cualquiera de las cárceles más infames podría tener acceso a cuartos de visita íntima, siempre y cuando cuente con el beneplácito de los «dueños» del lugar. Desesperadas por mantener a sus hijas lejos de cualquier forma de contacto con las maras, las familias las envían al campo para que se críen con parientes, pero no todos tienen primos o tías en las zonas rurales, y el barrio de Montreal y sus peligros eran la circunstancia inevitable de esta niña.

Y lo mismo para los niños. «Tenemos aquí un niño que viene todo el tiempo y es inteligentísimo, de verdad tiene algo especial —me susurró una de las maestras, cautelosa—. Pero está a nada de irse con la mara. ¡Y es un *cipote* todavía, un muchachito! Hemos hablado con él, aquí tratamos de no disfrazarle la realidad a nadie, pero está listo. Cualquier día se va, y no tenemos manera de evitarlo».

En el mercado de Mejicanos descubrí algunos de los beneficios disponibles para los niños que se unen a las maras. Las marchantas del mercado me explicaron su vida en números: por cada metro y medio lineal que ocupan sus puestos, le pagan a la municipalidad 35 centavos diarios de renta (el dólar es la moneda oficial). Gastan cincuenta centavos en pasajes, multiplicados por el número de hijos en edad escolar que tengan. Compran cuatro dólares de productos agrícolas al mayoreo, más tres dólares para llevar la mercancía hasta su puesto. Las ganancias del día, menos cuatro dólares para la

compra del día siguiente, menos autobús y taxis, dejan tres o, en un día bueno, cuatro dólares para los gastos de la familia.

Luego está *la renta*: la extorsión diaria que cobran los mareros, pero nadie quiso sacar esa cuenta conmigo. También quedó sin aclarar si en Mejicanos la renta en los alrededores del mercado la cobran los miembros de la banda de la Mara Salvatrucha —también conocida como MS-13— o el grupo rival que cada vez adquiere más fuerza, Barrio 18. Varios menores, integrantes de Barrio 18, ya fueron juzgados y sentenciados por prenderle fuego a un autobús, pero aun así nadie, ni siquiera las maestras del CINDE, quiso hablar conmigo sobre el caso.

Una tarde en el mercado charlaba con una mujer particularmente vivaz —llamémosle María— que me contaba cómo el CINDE y su programa de microcréditos le habían cambiado la vida, porque ahora tenía una carretilla para transportar sus mercancías de un lado a otro, cuando llegaron al puesto dos adolescentes, quinceañeros, cuando mucho. La conversación se cortó al instante, mientras los dos muchachos escogieron algunas mercancías baratas y se fueron sin que hubiera ningún intercambio de dinero. María me miró con una especie de terror suplicante cuando le pregunté si la estaban *renteando* los mareros. «No tanto, no tanto —murmuró—. No me piden dinero. Todavía no. Solo… regalitos».

«Nosotros no renteamos», declamó José Cruz enérgicamente, como para hacérselo saber al mundo. «Esa es una invención de la prensa». Tiene una gran voz, ojos orientales sobre pómulos altos, ninguno de los tatuajes en el rostro que caracterizan a los mareros,

un cuerpo entrenado y una presencia fantásticamente autoritaria. «¿Cómo está?», dijo como por megáfono al entrar a la sala de visitas de la cárcel. Me extendió una mano esposada, y a partir de ese momento no dejó de sermonearme. Al final de nuestra conversación se me acercó un guardia y, mientras uno de sus compañeros vigilaba, susurró que, como líder de la mara Barrio 18, Cruz era la cabeza *de facto* de la penitenciaría. Es él, dijo el guardia, quien decide quién da entrevistas a la prensa (él mismo las da); a qué guardias de la prisión se les permite entrar en el área donde cuarenta y cinco o cincuenta prisioneros quedan confinados todas las noches en cada celda de seis por seis metros de largo; y es él también el que decide quién recibe un castigo.

Cruz tenía metas muy claras: a la edad de veintinueve años ya había cumplido siete de su sentencia por homicidio. Le faltaban otros quince y quería salir a tiempo y con vida. «Soy un prisionero rehabilitable», me informó. No pierde los estribos. En la noche, según escuché, se retira temprano (di por hecho que disfrutaba de un recinto más amplio que los demás) y dormía sin sobresaltos. Después de nuestra conversación, me dijeron que bajo el *do-rag* —o bandana amarrada en la cabeza que estilan los mareros encarcelados— José Cruz sí tenía tatuajes: dos ojos a la altura del cerebelo que le permitían —y él no era el único en creerlo— vigilar a sus enemigos en todo momento. Alardeó de que lo habían entrevistado periodistas de Francia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, «cualquier país que me digás», dijo, y ahora intentaba atraparme con su retórica: somos víctimas de la sociedad, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, aunque nada de lo que dijo me impresionó más que su presencia física, o la información

susurrada por el guardia, pero ampliamente conocida fuera de la cárcel, de que las golpizas y las ejecuciones a cuchilladas o a golpes eran un hecho de la vida en el ahora llamado Centro Penal de Quezaltepeque, antes cárcel de Quezaltepeque.

A diferencia de las mujeres del mercado en Mejicanos, el guardia no tenía ninguna razón en especial para guardar silencio: no es ningún secreto que el sistema de prisiones está en bancarrota y que es imposible controlar un sistema carcelario en el que los prisioneros —prácticamente la mitad acusados de asesinato o declarados culpables— viven amontonados en las celdas como ganado industrial. En El Salvador hay sesenta y cinco homicidios por cada cien mil habitantes, que es más de tres veces la tasa actual de México y significativamente más que el total anual de víctimas en los años ochenta, durante la segunda mitad de la guerra. En una población carcelaria de veinticinco mil personas por centro, un tercio nunca ha recibido sentencia. El hacinamiento es tan extremo que este año el sistema penitenciario se negó a aceptar más reclusos. Los nuevos detenidos están en los separos de la policía, pero dada la tasa del crimen y el número de detenciones, también los separos se sobrepoblaron rápidamente.

Los presos han hecho motines y huelgas pacíficas para exigir mejores condiciones, pero ellos no encabezan la lista de prioridades de nadie. Son apenas una más de las muchas catástrofes de El Salvador, donde, veinte años después de la guerra que se supone salvaría al país —del capitalismo o del comunismo, dependiendo de qué lado se estaba—, hay medio millón de hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por madres solteras que intentan criar a sus hijos de manera segura. El Gobierno está quebrado, el índice de

pobreza es del 38 por ciento y la economía, que escaló ligeramente de su crecimiento negativo del -2 por ciento en 2008 solo gracias al incremento del precio del café, parece estar paralizada.

Sería fácil culpar de este desastre social y económico exclusivamente al partido fundado por Roberto d'Aubuisson —la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)—, que, durante los veinte años que siguieron a la firma de los acuerdos de paz en 1992, gobernó con evidente —o mejor dicho, obsesivo— interés en el bienestar de las grandes fortunas del país (en 2009 se acabó la hegemonía de ARENA: Mauricio Funes, candidato del partido creado por las antiguas guerrillas, el FMLN, ganó la presidencia). Pero también hay que contar con el hecho enorme de la guerra: las carreteras y obras de infraestructura destruidas; el colapso de la sociedad rural; el incremento del número de barrios habitados por campesinos desplazados de las áreas remotas del país que fueron escenario principal de la guerra; la práctica sistemática de la crueldad; la pérdida de una élite educada; la enorme reserva de armas que quedó a disposición después de la guerra y de la que nadie mantuvo un registro. Nada de esto, sin embargo, alcanza a ser una explicación completa o satisfactoria de la proliferación de maras, estimada actualmente en alrededor de veinticinco mil miembros en activo, con otros nueve mil en prisión.

El fenómeno comenzó en Los Ángeles, donde los hijos de los inmigrantes que huyeron de la guerra tenían padres a los que nadie veía con respeto, y recibían el bombardeo constante de anuncios de bienes de consumo que no podían tener. Crecieron en barrios bravos

y heredaron enemigos ajenos y las luchas territoriales de otros. Entre los salvadoreños de segunda generación en Los Ángeles, un número significativo terminó creando sus propias pandillas para enfrentar a las bandas mexicanas y afroamericanas, en cuyos territorios se habían establecido sus padres. De los dos grupos que ahora han tomado el mando de prácticamente cada región pobre de El Salvador, los miles de integrantes de la mara Barrio 18 toman su nombre de la calle 18 en Los Ángeles. En cuanto a la Mara Salvatrucha —los pioneros—, la única explicación de su nombre en la que todos coinciden es que «Salva» debe significar salvadoreño.

Conforme la política migratoria de Estados Unidos se fue enfocando en deportar al mayor número posible de inmigrantes indocumentados, sin importar su situación, una gran cantidad de deportados salvadoreños, algunos de los cuales nacieron en Estados Unidos y apenas hablan español, se ven de vuelta en El Salvador. Un cierto porcentaje de estos retornados involuntarios son mareros, que, al llegar, o bien se unen a la rama local de su organización o tratan de huir de regreso a casa (es decir, a Estados Unidos), engrosando el río de migrantes que pasan por México cada año. En el camino, los traficantes mexicanos —ya no solo de drogas, sino de negocios suplementarios altamente lucrativos, como la trata de personas, la prostitución infantil y la extorsión a migrantes— suelen reclutar a los mareros para los asaltos, los robos y la violación, que ahora son parte previsible de la travesía de los migrantes por México.

Los viajeros más desafortunados son secuestrados en México, donde se les retiene en espera del pago de un rescate que por lo general varía entre quinientos y dos mil dólares. Si sus familias no

logran reunir la suma con suficiente rapidez, las víctimas de secuestro son asesinadas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), más de once mil migrantes fueron secuestrados en los seis primeros meses de 2010. No existen estadísticas sobre el número total de muertos, pero sabemos que en agosto del año pasado setenta y dos migrantes fueron secuestrados y asesinados en un solo incidente. Seis meses después, otros ciento noventa y cinco cuerpos fueron exhumados en el mismo distrito municipal. Es probable que entre los asesinos hubiera mareros.

Howard Cotto, subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, ha estudiado a las maras durante años. Disciplinado y de conversación fácil, Cotto es producto de los acuerdos de paz que se firmaron entre el Gobierno del derechista partido ARENA y las guerrillas del FMLN, cuyas cláusulas incluían la reestructuración ordenada por Naciones Unidas de varios cuerpos de la antigua policía asesina en una sola fuerza, que también integraría y entrenaría a miembros de las dos partes en conflicto.

Entre risas, otro comandante de policía, Jaime Granados, me describió a la resultante Policía Nacional Civil como «el cipote [niño] feo que nadie quiere», sobre todo debido a sus esfuerzos por mantener la neutralidad. «Somos buenos policías, muy buenos —dijo —. Pero nadie nos apoya». La policía no tiene suficiente financiamiento ni suficiente equipo (hay un solo experto forense para todo el país), y la corrupción va en aumento, pero se han logrado conservar algunos cotos de eficiencia y profesionalismo, y los diplomas y certificados internacionales colgados en la pared de la

oficina de Howard Cotto —uno es del FBI— son signos del prestigio del comandante.

Cotto estima que, en los barrios, la comunidad de apoyo a las maras llega quizá a las ochenta o noventa mil personas, y que, si se incluyen los mareros activos o en prisión, suman cerca del 1,5 por ciento de la población salvadoreña. Dentro de la estructura nacional del tráfico de drogas, las maras se encuentran en el punto de venta al menudeo, pero Cotto no atribuye su crecimiento a la bonanza del tráfico de drogas en Centroamérica, ahora que la región se ha vuelto el principal corredor para mover la mercancía sudamericana a Norteamérica. «Evidentemente, las bandas forman parte del crimen organizado, como también los traficantes de drogas, y de armas, y de autos robados, etcétera —me dijo Cotto una mañana en su oficina austera—. Pero los traficantes construyen organizaciones altamente jerarquizadas apoyadas en actividades muy puntuales (trata de personas, contrabando, drogas), y reclutan a partir del negocio. Las maras hacen lo contrario: reclutan de abajo para arriba».

Los mareros distribuyen drogas en el barrio a la vez que se presentan como sus defensores, dijo Cotto.

> Pero en realidad, ellos no están defendiendo el barrio; lo aterrorizan. El barrio es el terreno donde extorsionan, distribuyen drogas, matan y hacen dinero. Pero no viven con grandes lujos, al contrario. No son narcos. Sus orígenes están en la comunidad, y a lo que le temen más que a la muerte misma es a perder su autoridad allí, porque en el momento que hagan eso, están muertos. Pero sí es una gran manera de vivir con cierta comodidad y repartirle dinero a un poconón de personas; su fuerza radica en no romper la cadena de distribución del dinero. Es por eso que le pueden decir [a sus subordinados]: «Pelea por mí».

Cotto hablaba con soltura bajo una glacial ráfaga de aire acondicionado. «La vida de [un marero] es muy corta», agregó.

> Los sentencian a treinta años en un santiamén. Pero ellos ven que en este país tenés dos opciones: ser un *loser* y seguir estudiando, y vamos a ver si lográs encontrar trabajo cuando te gradués, o podés ser un *man* poderoso a los catorce o diecisiete años. Podés mandar, quedar a cargo de la distribución de drogas en el barrio. No tendrás que respetar a tus mayores jamás, vas a ser vos el que le diga a un vecino: «Te me vas de este barrio ya», y serás vos el que se quede con su casa. Vas a poder decirle a esa chica que te gusta pero a quien vos no le gustás: «¿Sabés qué? Vas a ser mía te guste o no, o de quien yo te diga».

A estas alturas, Cotto ha visto muchos cadáveres: decapitados, desmembrados, quemados. Se dice que la primera cosa que tiene que hacer un marero, sin importar cuán joven sea, es matar a alguien arbitrariamente. Después de eso están listos para reprogramarse. Pero la escena de asesinato más perturbadora a la que llegó fue en un bastión de la mara, en uno de los hogares colectivos que los muchachos llaman *casa destroyer*. «Me quedé atónito —dice—. Entramos a la casa y todos los chicos estaban ahí, en círculo. Y al centro estaba el muerto. Llevaba horas ya, pero no se habían [deshecho de él]. Se habían quedado ahí nomás, platicando, relajados».

Alexis Ramírez, quien se unió a las maras cuando tenía quince años, no parece alguien capaz de matar irreflexivamente, aunque está pagando una condena de cincuenta años por homicidio y le faltan

cuarenta y ocho. Tiene la tez oscura, labios llenos que parecen esculpidos, grandes ojos negros, y se ve mucho más joven que los veintinueve años que tiene. Le pregunté si, cuando estaba libre, no había sido peligroso para él caminar por la calle cubierto de tatuajes, y me sonrió de soslayo. «Si sabés cómo caminar no hay peligro. De esquina a esquina…, así es como me he recorrido todo El Salvador». Hizo un movimiento medio bailado, como de agacharse esquivando un golpe juguetón. Fue un guiño que me hizo ver cómo habría podido, efectivamente, agacharse y escurrirse y sonreír para sortear muchos obstáculos.

Me dijo que venía de una buena familia; su padre, miembro de una iglesia evangélica, «siempre andaba metido en asuntos de la Iglesia», mientras que su madre, «durante aproximadamente quince años ha estado perseverando en las cosas de Dios». Sus hermanos trabajan en una carpintería. Su suegro logró llevarse a la esposa de Alexis fuera del país hace poco, al parecer para alejarla de su influencia. La pareja perdió la custodia de sus dos hijos, que ahora tienen cinco y nueve años y están al cuidado de sus abuelos.

Alexis aún estaba en la escuela cuando decidió unirse a las maras. «Vi los tatuajes [de los mareros de su barrio]. Vi el trato que ellos tenían entre sí, de respeto —dijo—. En mi barrio no le robaban a la gente; la cuidaban. Eso me gustó».

Tenía —le comenté— una vida bastante sombría por delante. ¿No estaba arrepentido de su decisión?

«Cuando tomamos la opción de ser lo que somos —respondió—, sabíamos que no hay vuelta atrás». Intenté adivinar, sin éxito, si ese gesto coqueto y un poquito alegre de agache y giro que me había mostrado era un auténtico remanente de lo que alguna vez fue una

persona entera y amable, o un truco obsequioso que un asesino sin piedad guardaba en su arsenal.

José Eduardo Villalta, de veinticuatro años, tiene la palabra *dieciocho* (como en Barrio 18), tatuada en francés y en inglés en sus brazos y dedos, con los numerales en latín y distintos símbolos y códigos en cualquier parte donde quepa un tatuaje. No tiene encanto, pero en el transcurso de nuestra conversación resultó que viene del campo y que su madre lo visita con frecuencia. Le pedí que me contara cómo se cultiva el maíz en una milpa, y conforme me lo iba explicando —quemar, rozar, arar, sembrar, desyerbar— tuve la visión momentánea de un joven respirando aire fresco. Tiene la mayor parte de su sentencia de cincuenta años por delante, y le pregunté si no le parecía deprimente.

«No —dijo con firmeza—. Aquí me siento a gusto. Esta es mi casa».

The New York Review of Books, 10 de noviembre de 2011

Posdata

Treinta años después de que un tratado de paz puso fin a un largo y sangriento conflicto, la violencia indescriptible que llegó a dominar la vida de El Salvador alcanzó un abrupto final, cortesía del presidente Nayib Bukele, de cuarenta y un años, quien se complace en referirse a sí mismo como «el dictador más *cool*». Al momento de escribir estas líneas aún no ha cumplido con todos los requisitos en el manual del dictador, pero ha abarrotado las cortes con su gente, que

alteró la Constitución para permitirle múltiples reelecciones, un primer paso importante hacia la dictadura. Bukele es inmensamente popular en su país natal y en el extranjero, echando mano de recursos de dictador moderno para destruir a la Mara Salvatrucha, y a todos sus rivales, que habían terminado por convertirse en una mafia transnacional. *Cool* tal vez no, pero hábil, sí. En marzo de 2023, el Gobierno de Bukele lanzó una serie de videos cortos, exquisitamente filmados, que tienen como protagonistas a cientos de hombres vestidos en idénticos bóxers largos, blancos, con el torso desnudo y la cabeza rapada, esposados entre sí y todos tan agachados que es imposible ver sus rostros. En secuencias cuidadosamente ensayadas, los prisioneros corren a ritmo, se arrodillan al unísono, se acuclillan todos juntos y se deslizan unos contra otros para formar una canoa humana, mientras hombres en uniforme negro que sostienen macanas los arrean por los patios de una gigantesca y nueva prisión de alta seguridad; se supone que la más grande del continente. En otros países plagados de violencia, estos videos han sido un éxito.

Los hombres que corren agachados se identifican como miembros de la Mara Salvatrucha o de alguna de sus bandas rivales, pero en realidad podrían ser casi cualquier persona. Según Amnistía Internacional, bajo el estado de excepción declarado por Bukele, que aún está vigente, «salvaguardas procesales, como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa, están suspendidas, lo que ha permitido la detención arbitraria de sesenta y seis mil personas en tiempo récord». Según cifras oficiales, El Salvador tiene una población carcelaria total de más de cien mil hombres, sobre todo jóvenes, lo que lo convierte en el país con el índice de

encarcelamiento más alto del mundo: más del 1,5 por ciento de su población está en prisión. Uno puede imaginar, más allá de los videos, las condiciones reales en que viven los reos.[2]

El expresidente Mauricio Funes, así como el también expresidente y exdirigente guerrillero Salvador Sánchez Cerén, se encuentran refugiados en Nicaragua.

Los Centros Infantiles de Desarrollo fundados por Marisa d'Aubuisson de Martínez sobreviven.

6
La verdad o la vida

Digamos que eres un reportero mexicano que gana una miseria chambeando en una estación local de televisión, en algún lugar de provincia —el estado de Durango, por ejemplo—, y que un día te llega una amable invitación de parte de un poderoso grupo de narcotraficantes. Imagina que son los Zetas y que, gracias a sus esfuerzos en tu ciudad, en fecha reciente varias docenas de personas han muerto de diversas formas indescriptibles, mientras la justicia se hace de la vista gorda. Entre los muertos está uno de tus colegas. Ahora considera la invitación, que es para asistir a una conferencia de prensa que se llevará a cabo puntualmente el próximo viernes, en un sitio no muy remoto, justo en las afueras de la ciudad. ¿Quizá pensabas ir al cine en vez de presentarte a la reunión? No olvides, menciona la invitación, que los Zetas tomarán asistencia.

Ahora imagina que llegas el día indicado al sitio designado y que te reciben varios hombres exageradamente amables, vestidos con ropa cara. Terminados los saludos, tienen algo que decir y cambia el tono. Nos gustaría, dicen, que sean considerados con nosotros en sus coberturas. Hemos visto o escuchado ciertos reportajes o artículos noticiosos que son injustos y, digámoslo, desagradables

para nosotros. Desagradables. Les tenemos puesto el ojo. Nos gustaría que consideren las consecuencias de seguir ofendiéndonos. Sabemos que no desean el resultado. Quedan advertidos: no tenemos compasión. Pueden irse.

1

Escuché la historia de una conferencia de prensa similar hace un par de años, poco después de ocurrida, y no hace mucho la confirmó el supervisor de uno de los reporteros que estuvieron presentes. Da alguna idea de la verdadera dificultad de practicar el periodismo en la provincia mexicana, donde docenas de reporteros han sido asesinados desde el inicio del siglo, algunos tras una prolongada tortura.

Hay diferentes cálculos para el número total de víctimas. Por ejemplo, Artículo 19, la organización británica que defiende la libertad de expresión, da la cifra de setenta y dos reporteros y fotógrafos asesinados en México desde el año 2000, y afirma que, de estos, cuarenta y cinco murieron desde 2006, cuando arrancó la presidencia de Felipe Calderón. Otras organizaciones dan una cifra de más de ochenta. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), entre otros, hace una lista de solo veintisiete asesinatos desde 1992. Sin embargo, sí mantiene otra lista, abierta, para las muertes de periodistas en las que las autoridades ni siquiera han presentado una hipótesis del motivo. Cuando estos dos conjuntos de víctimas se suman, el total es de sesenta y cinco. «México tiene el número más alto de casos sin confirmar en el mundo…, y la verdadera razón por

la que tantos de los casos que examinamos siguen sin confirmar es que no existe ninguna investigación oficial [de estos crímenes] —me dijo Joel Simon, director del CPJ—. De modo que no sabemos por qué los mataron».

Sea cual sea la forma en que uno calcule el total, desde 1997 solo han sido juzgados, condenados y sentenciados los autores de tres homicidios de periodistas, y en dos de esos casos existen grandes dudas de que los hombres juzgados hayan sido los autores intelectuales del crimen, o tan siquiera los gatilleros.

En años recientes, todos los asesinatos de periodistas y prácticamente todas las amenazas contra ellos, así como las desapariciones y secuestros, se han llevado a cabo fuera de la capital mexicana. Cuando cubrí el juicio a Raúl Salinas de Gortari, el hermano mayor del desacreditado expresidente Carlos Salinas, en 1997, aprendí que ser reportero de uno de los cientos de medios pequeños que existen fuera de Ciudad de México es un trabajo duro y a veces humillante. Raúl Salinas era un personaje poderoso y desagradable. Podrían haberlo enjuiciado —y tal vez debieron hacerlo— por las muchas preguntas sin resolver acerca de los aproximadamente cien millones de dólares que languidecían en varias cuentas suizas de su propiedad, pero al final pasó diez años malos en una cárcel dura, por un cargo de asesinato para el cual la evidencia era ridícula. El presunto esqueleto de una de las supuestas víctimas de Salinas fue desenterrado en el jardín de su casa con la ayuda de una supuesta vidente. Al final resultó que, a petición del fiscal encargado del caso, el esqueleto lo había sembrado el exyerno de la vidente, que exhumó a su propio padre, muerto hacía mucho, para aportarlo a la causa.

Farsa o no, el juicio del hermano de un expresidente, en un país en el que los poderosos gozan de una impunidad casi absoluta, era sin lugar a dudas el juicio del siglo; un gran evento escénico, a pesar de que, bajo el sistema legal mexicano, no hubo jurado y se llevó a cabo en una prisión de alta seguridad, a un par de horas en auto de Ciudad de México. Fui allá todos los días durante una semana, para aguardar horas enteras bajo un sol de plomo, con la esperanza de estar presente el día en que las autoridades permitieran —más o menos de manera arbitraria— el acceso del público al proceso judicial.

Mis colegas en las afueras de la penitenciaría resultaron ser reporteros locales de la cercana ciudad de Toluca, la mayoría de ellos corresponsales a medio tiempo para los grandes medios de la capital. Pronto me di cuenta de que se turnaban la cobertura (o más bien se turnaban la espera afuera de la cárcel, como yo, para la eventual oportunidad de cubrir el juicio) a fin de que cada uno pudiera dedicarse a actividades distintas que les permitieran improvisar diariamente el sustento. El reportero de una de las dos estaciones de televisión era vendedor de bienes raíces por la mañana; otro trabajaba en las tardes como locutor de radio. Se esperaba de todos que reclutaran anunciantes para sus medios (si recuerdo bien, la comisión por estos anuncios formaba parte de sus frágiles ingresos).

Algunos llegaban a la prisión en transporte público. Varios no tenían computadora. Otro tuvo que pedir prestada una grabadora. No eran idealistas, pero el trabajo era emocionante. Habían ascendido con garra por el sistema de clases mexicano y se sentían orgullosos de ello. No me quedó claro cuántos eran egresados de

alguna escuela de periodismo o de la universidad: para bien o para mal, hoy muchos reporteros de provincia todavía no cuentan con una licenciatura. Trabajaban sin descanso, ansiaban capacitación profesional y respeto, y sabían mucho más de lo que publicaban o transmitían.

Dadas las circunstancias, no es de sorprender que reporteros locales como los que conocí entonces agradezcan el sobre de dinero que les puede ofrecer un traficante de drogas como endulzante de una amenaza de muerte. En el periodismo mexicano, los sobornos que ofrecen las oficinas gubernamentales a sus reporteros de la fuente, conocidos como *chayotes*, son un suplemento tradicional al ingreso.

Esos pagos fueron promovidos y realizados por el Gobierno mismo desde los primeros días del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ofrecidos con mayor o menor sutileza según el rango de la persona que los recibe. Un editor de provincia me dijo que esa práctica era más común en Ciudad de México, pero un editor de la capital me dijo que era al revés. «Sorprendentemente, el *chayote* (o también, el *chayotazo*) ha sido impermeable a todos los vientos de modernidad», dice Luis Miguel González, editor de noticias del diario de negocios *El Economista*, un culto y desapasionado observador del mundo en el que trabaja. «Resulta difícil para los extranjeros entender la despreocupación con la que se ve la práctica del *chayote* en los medios en general —continuó—. Chayo-sobornos, chayo-tours, chayo-comidas… todo forma parte del chiste».

A veces se le entrega dinero a un reportero o a un editor con el propósito específico de que difame a algún enemigo político. Otras,

el sujeto de un reportaje particularmente favorable lo da en señal de agradecimiento. Pero más que nada, el dinero se reparte como salario mensual a los reporteros de una fuente. A cambio, se espera que esos reporteros publiquen boletines del Gobierno como si fueran noticias, y que mantengan su propio reporteo dentro de los límites delineados por quien entrega el *chayote.* Obvio, los reporteros de alto nivel que se enorgullecen de su independencia se sentirían ofendidos con semejante soborno. En su lugar, como me comentó González, podrá ofrecérseles la oportunidad de que les mienta una fuente gubernamental de alto nivel.

Es difícil determinar qué tan inmoral puede parecerles el *chayote* a los reporteros mexicanos, en vista de que su propio Gobierno institucionalizó la práctica. No aceptar el soborno o emolumento de un funcionario puede verse incluso como un acto hostil, casi una amenaza. No son muchos los editores que apoyen a un reportero que se niega a aceptar las reglas del juego. Son aún menos los que pagan un salario que permita vivir; en el estado de Tabasco, donde los Zetas tienen gran poder, el incansable periodista salvadoreño Óscar Martínez encontró que a los reporteros se les paga sesenta pesos —alrededor de cinco dólares— por historia.

En los años ochenta hubo un gran estallido reformista en los medios mexicanos; incluso algunos dueños y editores compartieron el entusiasmo por la nota veraz y bien escrita. El mismo Salinas de Gortari quiso acabar con el *chayotismo*. Como resultado, hoy hay gran cantidad de reporteros estupendos y extraordinariamente valientes que luchan por reportear y publicar historias sobre todos los aspectos de la difícil situación en México. Pero la práctica de *chayotear* ha vuelto poco a poco a sus niveles históricos. Como

editor en activo, a González, de *El Economista*, le toca capotear situaciones difíciles: «Te ofrecen un viaje oficial a equis lugar. Gratis. Y luego te dicen que en el viaje va a haber noticia. Rechaza el viaje y pierdes la noticia». Mi propia impresión muy general a través de los años es que la gran mayoría de los periodistas especializados se ven a sí mismos como buscadores de la verdad que operan dentro de confines extremadamente estrechos. González resume la actitud con la que salen a diario a cubrir la noticia: «Acepta el soborno, pero no te corrompas».

Eso equivale a decir que la relación de los reporteros mexicanos con sus peligrosos vecinos narcos no es tan diferente de su relación histórica con los representantes del Gobierno. Si es así, quizá no resulte tan útil la distinción, tan delicada, que hacen las organizaciones en defensa del periodismo entre los muertos sospechosos de haber aceptado sobornos del narco y los muertos que no lo hicieron.

Digamos que una conferencia de prensa de los Zetas produce una honda impresión en la reportera A, sobre todo después de que al reportero B lo asesinan por colaborar con la policía. La reportera A decide adecuar su historia a lo que ella imagina será del gusto de quienes le han dicho que le tienen el ojo puesto, e incluso acepta instrucciones específicas, orientación y pedidos sobre medida. Digamos que un día la asesinan los enemigos de los Zetas que la han identificado como una colaboradora del enemigo. En la improbable circunstancia de que un observador lograra saber cómo y por qué murió la reportera A, la pregunta permanecería: ¿Era una colaboradora criminal del narcotráfico o fue víctima de una mortal

extorsión? En cualquier caso, lo más probable es que ambos reporteros, la A y el B, solo estuvieran intentando seguir vivos.

2

Hace poco viajé a la encantadora ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, para hablar con funcionarios acerca de una reciente ola de asesinatos de periodistas: ocho muertos en apenas dos años, dos de ellos desmembrados, sus cabezas exhibidas cerca de la puerta de otro periódico. Xalapa tiene un clima agradable, una universidad ambiciosa, uno de los mejores museos del país y, en los últimos dos años, una guerra embravecida entre poderosos grupos rivales del narco.

El estado tiene también una vocera notable, Gina Domínguez, tan famosa que apareció en la portada de una revista local de sociales el mes pasado. Un enorme ramo de rosas decora su espaciosa oficina. Su amable equipo de trabajo, altamente calificado, habla de ella con entusiasmo. Gracias a un cambio en la ley estatal, ella ahora supervisa las relaciones públicas para todas las ramas del Gobierno del estado y no solo para el gobernador. Es común escuchar que ella es el verdadero poder en Veracruz. En línea, rumores más venenosos se ocupan del tiempo que pasó como secretaria de prensa de Mario Villanueva —el exgobernador del estado de Quintana Roo, extraditado a Estados Unidos bajo cargos federales por narcotráfico — y la culpan de sobornar a los editores de periódicos locales e incluso nacionales.

El día que llegué, todos los periódicos de Veracruz tenían la misma nota en primera plana —tomada más o menos íntegra del comunicado de prensa emitido por la oficina de Domínguez— sobre la detención de cuatro hombres y una mujer. Los titulares anunciaban que con esas detenciones (que, de hecho, se habían llevado a cabo una semana antes de que se anunciaran al público) quedaban resueltos los asesinatos de cuatro de los ocho reporteros. Los detenidos confesaron haber actuado como sicarios para el grupo de narcotraficantes de la costa del Pacífico conocido como el Cartel del Milenio.

Más aún, el comunicado de prensa y las historias que aparecían en los medios declaraban que los acusados identificaron al asesino de un quinto periodista que, según ellos, trabajó para el bando enemigo, los Zetas. Los sospechosos dijeron también que ellos mismos habían matado a «algunos» otros reporteros, lo que, a su vez, según el comunicado, «ocasionó después la muerte de incluso más reporteros, asesinados… por los Zetas». Y mejor todavía: el grupo de asesinos confesó libremente la autoría de treinta y un asesinatos más. O por lo menos así se dijo en el comunicado. ¡Treinta y seis asesinatos resueltos de un solo golpe!

En su oficina, la secretaria de prensa Domínguez habló en un tono tan perfectamente neutro, con una expresión tan absolutamente invariable, que no guardo memoria alguna de su personalidad. Parpadeó una vez y cambió de tema cuando sugerí que a los reporteros acostumbrados al sistema oficial de sobornos ahora se les pedía elegir entre la sartén del Gobierno castigador y el fuego del narco corruptor, pero, salvo por ese detalle, surfeó con suavidad cada pregunta.

¿Podía entrevistar a los detenidos? Me hizo una lista de los intrincados impedimentos legales para ello. ¿Por qué la ola de crímenes contra reporteros se incrementó tan abruptamente cuando fue electo el gobernador para el que ella trabajaba ahora? En Veracruz, como en el resto del Estado, apuntó, la guerra entre los grupos dedicados a la droga siempre cambia de un estado a otro, y el asesinato de periodistas es uno de los fenómenos que lo acompañan. El récord del Gobierno en su exitosa lucha contra los crímenes violentos era sobresaliente, me dijo, impasible, y se había llegado más lejos que en cualquier otro estado en la promoción del periodismo profesional. ¿Era cierto que trabajó para el desprestigiado gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva? En efecto, así fue durante dos meses, pero había abandonado el estado mucho antes de su detención, dijo.

A lo largo de la entrevista —fue muy generosa con su tiempo— no se desvió del mensaje: «Siempre hemos mantenido que el asesinato de estos periodistas nada tuvo que ver con la libertad de expresión». Las confesiones de los cinco detenidos, insistió ella, dejaban claro que las víctimas no eran reporteros de tiempo completo y que las acciones de los reporteros de la fuente policial promovían los intereses de los grupos criminales. Salvo un solo caso, enfatizó, todas las víctimas estaban vinculadas a la fuente policial.

Al día siguiente, tanto Artículo 19 como el Comité para la Protección de los Periodistas mencionaron la escasez de evidencia presentada por el procurador general del Estado en el caso de los cinco acusados de matar a treinta y seis periodistas. Hace unos días, al preguntarle a Darío Ramírez, encargado de la oficina regional de Artículo 19 en México, si sabía cómo iba el caso contra los

sospechosos, me explicó por qué no lo sabía. La lógica de los representantes del Gobierno, me dijo, «es dejar que los casos "se enfríen" sin producir un resultado efectivo. No hay acceso a la investigación, de modo que no sabemos en qué etapa se encuentra».

3

El 13 de noviembre de 2008, el reportero Armando Rodríguez, colaborador de *El Diario*, periódico decano de Ciudad Juárez, esperaba en su auto con su hija mayor, que entonces tenía ocho años, a que su esposa terminara de arreglar a la más pequeña para llevarla a la escuela. Ella escuchó disparos y por un momento pensó que solo se trataba de parte de la banda sonora general de Ciudad Juárez. Cuando se asomó por la ventana unos segundos después, era demasiado tarde. Acribillado, Rodríguez se había desplomado sobre el cuerpo de su hija. Había muerto protegiéndola.

Armando Rodríguez —conocido en todas partes como el Choco, por «chocolate», debido al color de su piel— se inició en el periodismo como camarógrafo de Blanca Martínez, que entonces era reportera de televisión. Se casaron, y mientras Blanca se hizo editora del semanario local de la Iglesia católica, Rodríguez convenció a un periódico de Juárez para que lo contratara, y muy pronto se pasó a *El Diario* como reportero.

Se dedicó de lleno al reporteo de la fuente que le encargó *El Diario*: la policía, especialmente cuando ocurrió una serie de *feminicidios*, o asesinatos en serie de mujeres jóvenes de Ciudad

Juárez, y luego cuando subió una nueva ola de violencia relacionada con el narco en 2008. Como viejo estadista ya del patrullaje policial, al Choco lo respetaban sus editores y sus colegas por su reporteo sin tregua.

«Dicen que era temperamental —me contó su viuda por teléfono — pero era porque le apasionaba tanto su trabajo…». La primera vez que recibió una amenaza de muerte, el periódico lo convenció de tomar un descanso, pues tenía pendiente una cirugía. Siguieron muchas amenazas más. Durante las semanas previas a su asesinato, Choco Rodríguez publicó artículos que relacionaban a parientes de la procuradora general de Chihuahua, Patricia González Rodríguez (no tiene parentesco con el reportero), con el narcotráfico. El 12 de noviembre escribió una historia sobre la ejecución en el mundo del hampa de dos oficiales de policía que, según el Choco, trabajaban directamente con la procuradora general, señalando de manera implícita la posibilidad de que la procuradora misma tuviera nexos con el tráfico de drogas. La historia apareció en el número del 13 de noviembre, que empezó a circular en la calle hacia la 1.30 a. m. Unas horas después el Choco estaba muerto.

Le pregunté a Blanca Martínez cómo iba la investigación sobre el asesinato de su marido y la voz se le hizo chiquita. «Ese diciembre vinieron a interrogarme —dijo—. No recuerdo si eran de la Policía Federal o Estatal. Me preguntaron sobre su trabajo, me preguntaron si cargaba un arma [no tenía armas]. Uno de ellos me dijo que tenían instrucciones precisas [del Gobierno federal] de investigar el caso. Esa fue la primera y única vez que me buscó el Gobierno». No había habido detenciones, me dijo. No había pistas. La investigación estaba inactiva. Pasaron años antes de que le permitieran ver el

expediente del caso, que solo constaba de unas pocas hojas, y solo pudo hacerlo brevemente. Estaba, además, el hecho de que el principal investigador federal murió acribillado un año después del asesinato. Su reemplazo fue ejecutado al breve tiempo.

Pocos asesinatos en México han sido foco de tanta indignación en los medios o de tanta presión como el del Choco. Se ha convertido en una causa para los reporteros y editores de Juárez, así como para varias asociaciones de medios en Ciudad de México. El crimen también se volvió una especie de bandera para el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, la más influyente organización de su clase. En el otoño de 2010, después de muchas solicitudes, el CPJ pudo reunirse con el presidente Felipe Calderón, cuya administración probablemente quedará para siempre marcada por su funesta decisión de meter al ejército en la lucha contra el narcotráfico. La corrupción y la atroz violencia que resultó persisten hasta el día de hoy.

Durante su conversación con los delegados del CPJ, el presidente enfatizó que estaba tan preocupado como ellos por el destino de los reporteros en México, e igualmente decidido a que se hiciera justicia en el caso de cada crimen en contra de periodistas en el país. Que es más, anunció, acababa de resolverse el caso de la muerte del Choco Rodríguez. El culpable era un sicario confeso, bajo arresto desde hacía meses. No mencionó antes haber asesinado a Rodríguez, pero recuperó la memoria.

Semanas antes de la reunión del CPJ con Calderón, a un reportero de *El Diario* lo contactó alguien que aseguraba tener un hermano, un asesino convicto, que pagaba su sentencia en la penitenciaría de Juárez. Ese hermano era el líder de una banda de asesinos, y ya

había confesado varios asesinatos. Pero la persona que llamó de parte de ese criminal estaba preocupada porque cada fin de semana sacaban al convicto y lo llevaban a una base militar. Ahí, lo torturaban sin piedad para que confesara el asesinato del Choco Rodríguez, pero él insistía en que no había cometido ese crimen.

El día después de que la delegación del CPJ se reunió con Calderón, los editores y reporteros de *El Diario* lograron armar el rompecabezas: el sicario torturado se llamaba Juan Soto Arias, y era la misma persona que el presidente Calderón identificó ante el CPJ como asesino confeso de Rodríguez. «Cualquier pizca de confianza que tuviéramos en la investigación se desintegró en ese momento —me dijo Joel Simon, el director del CPJ—. Alguien estaba actuando de una manera increíblemente cínica. No sabemos qué tan arriba llegó esto, pero no viene al caso: lo importante es que el presidente de México nos dio información incorrecta y fácilmente comprobable como incorrecta». La investigación está muerta desde ese incidente, «como todas las investigaciones sobre el asesinato de periodistas», señaló Simon. Se reporta que Soto Arias continúa en prisión cumpliendo una sentencia de doscientos cuarenta años por los asesinatos que confesó inicialmente. Nunca se le acusó oficialmente de matar a Armando Rodríguez.

Un día, hace poco, sostuve una larga conversación telefónica con Rocío Gallegos, quien, en la época en que lo mataron, era la editora del Choco Rodríguez. A partir de ese primer asesinato, los reporteros han recibido muchas amenazas y un joven interno fue asesinado.

El Diario es inusual por su relativa prosperidad y porque se preocupa por el bienestar de su gente, dijo Gallegos. Los reporteros de planta reciben becas para estudiar periodismo y asistir a seminarios. Tienen seguro médico y de vida, y la mayoría está a sueldo. Puesto que el periodismo en Tamaulipas, hogar de los Zetas, prácticamente ha desaparecido, las noticias siguen fluyendo desde Juárez en *El Diario*, aun cuando la ciudad se fue convirtiendo en la más peligrosa del mundo. Gracias, sobre todo, a un acuerdo al que parecen haber llegado las mafias de la droga de la costa del Pacífico y los traficantes de drogas locales, similar a uno que hubo en Tijuana, la violencia en Juárez ha disminuido bastante en los últimos doce meses. Incluso antes de la muerte del Choco, la hostilidad de los narcotraficantes hacia los medios era clara: una semana antes de su muerte, recordó Gallegos, alguien colocó la cabeza cercenada de un hombre al pie de una estatua pública que honra a los voceadores.

Le pregunté a Gallegos, ahora editora de noticias en *El Diario*, cómo había cambiado la vida en el periódico después de tantos años de derramamiento de sangre:

> Comprendimos que teníamos que renunciar a las exclusivas —me dijo—. Si conseguíamos o no una primicia se volvió irrelevante. [Había lugares] adonde simplemente no podías enviar a un reportero solo.
>
> ¡Estábamos tan mal preparados para esta situación!
>
> Nos superó. Llegábamos [a la redacción] desde un sitio en donde las madres de las víctimas estaban llorando, las familias estaban llorando, y nosotros teníamos que sentarnos a escribir. O eran las tres de la mañana y me encontraba consolando a una reportera ahogada en llanto porque acababa de recibir una amenaza de muerte en su celular. A fuerza tenemos que

pensar: ¿cómo nos ha afectado todo esto? Pienso mucho en esos colegas que han tenido que ir a fotografiar veinte cuerpos. ¿Cómo los ha afectado a ellos?

Le pregunté qué le habría gustado ver en aquellos años de terror. «Justicia —respondió—. Menos agresión. Pero, sobre todo, habría querido justicia, porque el asesinato de nuestros colegas no ha recibido justicia. Me gustaría saber quién los mató y por qué».

The New York Review of Books, 22 de noviembre de 2012

Posdata

La exvocera del Gobierno del estado de Veracruz, Gina Domínguez, fue detenida en 2017 y condenada a un año de cárcel por asuntos relacionados con la corrupción. Según la cuenta que lleva la organización de defensa de los periodistas, Artículo 19, el número de reporteros asesinados ha aumentado de sesenta y dos en 2012, cuando se publicó este texto, a un total de ciento setenta y cuatro hasta la fecha.

7
Los 43

1

En febrero del año pasado manejé desde Ciudad de México por la carretera del Sol, y tomé la desviación a Apango, un pueblo en la sierra del estado de Guerrero. La carretera principal termina en Acapulco, pero no había palmeras ni *glamour* adonde yo iba. En un silencioso camino de dos carriles pasé por pueblos donde aún se habla náhuatl, amuzgo o me'phaa. Era la temporada seca, y los cerros cubiertos de matorrales mostraban todos los tonos de marrón, salpicados solo por las sedosas flores blancas de los árboles de casahuate. En Apango, un pueblo limpio y ordenado, con una bonita plaza central llena de flores, pregunté por Estanislao Mendoza Chocolate, o don Tanis, como se le conoce respetuosamente. Quería preguntarle por su hijo, que desapareció una noche de 2014, secuestrado junto con otros cuarenta y dos estudiantes de una escuela normal rural, sin que nadie volviera a saber de ellos.

Cuando llegué, don Tanis ya me aguardaba ansiosamente en la puerta de su casa. De cara redonda, vestido con cuidado, se veía más joven que sus sesenta y cinco años, y tenía un modo vivaz y los ojos tan marcados por el sufrimiento que era difícil no rehuirle la

mirada. Me mostró su casa —una colección de cuartos de hormigón sin revocar, con un bombillo en el centro de cada uno—, construida gracias a los veinte años que pasó como migrante estacional en California. Había una bodega con inmensos tanques de aluminio llenos de maíz para la venta y para las tortillas de la familia. El cuarto de su hijo permanecía intacto después de tantos años: un catre desvencijado, una silla, algunas fotografías y afiches borrándose lentamente en la pared. «Yo quería tener mi rancho, con animalitos, y él me estaba ayudando a montarlo, pero eso ya quedó parado», comentó, evitando por todos los medios pronunciar el nombre de su hijo, como lo haría a lo largo de nuestra conversación.

Su hijo, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, era mayor que el resto de sus compañeros de primer año en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Alto, un hombre hecho y derecho, con un peinado a lo Elvis del que estaba orgulloso, a juzgar por el autorretrato rústico que dibujó en el muro exterior de la casa, anunciando los cortes de pelo que ofrecía a los vecinos. Pregunté por qué se inscribió tan mayor a la escuela. «¡Nunca es tarde para aprender!», dijo don Tanis, sonriente. «Me gustan mucho los niños y siempre quise ser maestro». Sospecho que también quería una oportunidad para alejarse del día a día de trabajos duros y mal pagados de albañil, con apenas una entradita adicional como peluquero. En Ayotzinapa, los alumnos de comunidades indígenas o campesinas —en México estas son categorías adyacentes— tienen derecho a alojamiento y alimentación gratuita, y la oportunidad de procurarse una vida mejor como maestros rurales. En 2014, el semestre inició el 20 de julio, y, como todo el mundo sabía, en la primera semana a los alumnos se les sometió a toda clase de privaciones, prácticas agotadoras de

autodefensa y un matoneo institucionalizado. Afuera, muchos creían que se trataba de un entrenamiento guerrillero, pero me pareció más bien la proyección de la idea de que, en un mundo que no está hecho para estudiantes como los de esa escuela, la sobrevivencia es una batalla sin tregua.

Los estudiantes sin recursos, campesinos en su mayoría, podrán encontrar una sensación de pertenencia en las diecinueve escuelas normales rurales que hay en México, pero pronto aprenden que sus diplomas no les ayudarán a cerrar la brecha abismal entre ellos y los que mandan. Como resultado, muchos se radicalizan, por lo general en el antiguo sentido marxista-leninista. En el estado de Guerrero, uno de los más pobres de México, florecieron múltiples movimientos guerrilleros campesinos en los años sesenta y setenta, y dos de sus líderes, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas —ellos mismos campesinos—, tenían nexos cercanos con la normal. Aunque sus respectivos movimientos fueron exterminados por el ejército en una guerra sucia que se extendió a lo largo de los años setenta, sus retratos aparecen en un mural rojo y negro que desborda un muro de la escuela, al lado de Lenin, Guevara y Marx.

Por lo general, los *ayotzis* eran tolerados en la región, pero no eran muy apreciados: la gente los llamaba alborotadores, agresivos y revoltosos. A menudo cargaban palos y se tapaban la cara con paliacates o pasamontañas cuando tomaban las casetas de peaje en la carretera, exigiendo pago «para la revolución». Cuando necesitaban viajar en grupo a una marcha de protesta en alguna parte o a una reunión en alguna otra normal rural, solían requisar autobuses en la carretera, dejando a los pasajeros varados de noche en el asfalto o bajo el ardiente sol de Guerrero.

El viernes 26 de septiembre los alumnos salieron a buscar autobuses. Unos cien de ellos, casi todos de primer año, viajaban en dos autobuses que habían requisado en días anteriores. Tenían una necesidad especialmente urgente de más transporte, porque se acercaba el 2 de octubre. En esa fecha, en 1968, docenas de manifestantes fueron acribillados por tropas del ejército. La tropa actuó bajo órdenes del Gobierno: buscaba suprimir un movimiento estudiantil de protesta que llevaba semanas y prometía seguir creciendo. Desde entonces, el 2 de octubre ha sido una fecha consagrada de protesta estudiantil. En un mitin reciente con las asociaciones estudiantiles de otras escuelas normales rurales, los delegados de Ayotzinapa se habían comprometido a conseguir el transporte a la capital para todas las escuelas. No asistir a la marcha conmemorativa anual en Ciudad de México habría sido inconcebible. «¡Dos de octubre no se olvida!». Se dispusieron a encontrar más autobuses.

Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, queda a quince minutos de Ayotzinapa en auto, y por lo mismo la terminal central de autobuses de «Chilpo» era el lugar favorito de los ayotzis para tomar autobuses —tanto así que era un evento frecuente, e incluso, negociado—. Pero ese día los policías del pueblo expulsaron a los estudiantes. Cuando llegó la noche, seguían sin tomar ningún otro autobús y, en su búsqueda, terminaron lejos de su territorio, en las afueras de una ciudad pequeña en medio de una llanura ardiente: Iguala. Serían como las nueve de la noche cuando un pequeño grupo de estudiantes por fin logró asaltar un autobús que se dirigía a la terminal de Iguala. El conductor convenció a los ayotzis de que le permitieran llevar a los pasajeros a su destino, antes de regresar

con ellos al campus de la normal, para esperar ahí la hora de llevarlos a la capital. ¡Ingenuos estudiantes! Una vez en Iguala, el conductor esperó a que bajaran los pasajeros para encerrar rápidamente a los estudiantes dentro del autobús. Minutos después, los demás ayotzis llegaron a rescatar a sus compañeros. Gritando y golpeando las paredes y las puertas del muelle de la terminal, se apoderaron de tres autobuses más, para un total de cinco, y se prepararon para volver, triunfantes, a su escuela.

Fue entonces que empezó su recorrido a la desaparición.

Era una noche festiva en el pueblo. La esposa del alcalde acababa de presidir una alegre ceremonia en la plaza central, las cafeterías seguían abiertas, la gente paseaba o se apuraba a llegar a casa. Sin embargo, alrededor de media docena de miembros uniformados de la policía de Iguala, a los que muchos habitantes conocían de vista, abrieron fuego contra los autobuses conforme iban saliendo de la terminal. Un sistema de monitoreo electrónico en todo el estado registró el pavor a medida que cientos de mensajes surcaban las redes sociales. «No salgan, hay balacera. Hay dos muertos». «Apagamos las luces y pusimos el candado». Los que huían de la escena vieron cómo las patrullas cerraban las calles, bloqueando cualquier posible escape a los autobuses. Los rumores y el temor iban de un lado a otro: «El ejército salió, la policía ni se esconde». «Anoche mataron, estaban drogados». «Llegaron los ayotzinapos, dicen que secuestraron tres autobuses». Para el atardecer del día siguiente, la policía de Iguala y de otros dos pueblos más pequeños había matado a nueve personas, incluidos tres estudiantes, y dejaron a otro en coma. Pero aún estaba por conocerse lo más

atroz: en los días y semanas posteriores, docenas de familias llegarían a comprender que faltaban cuarenta y tres de sus hijos.

Según cálculos oficiales, que muy probablemente subestimen el total, en México hay más de ochenta mil personas desaparecidas desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón intensificó la así llamada «guerra contra las drogas», trayendo al ejército para que se enfrentara a ciudadanos mexicanos. Con el respaldo de la DEA, la policía y el ejército se concentraron en lo que se llamó *the kingpin strategy* («la estrategia de la pieza clave»), apostando a que, si se capturaba a los capos del narcotráfico, sus organizaciones desaparecerían. «¡Puf!», como dijo alguna vez un agente de la DEA que explicó la estrategia en una conferencia de prensa. En realidad, funciona más o menos igual que tratar de acabar con las hormigas dispersándolas de su nido. A lo largo de los años, han sido capturados o muertos muchos de los más notorios líderes del narcotráfico, lo que permite a los presidentes mexicanos y a sus aliados antinarcos en Estados Unidos presumir de muchas victorias. Pero rara vez mencionan que la muerte o la captura de cada uno de estos líderes provoca el surgimiento de varios aspirantes más a la posición de capo. En su lucha, la paranoia de los traficantes hace que se volteen contra sus socios de mayor confianza, y que los subalternos busquen consolidar su propio espacio bajo el sol matándose unos a otros. Con el asesinato como práctica cada vez más frecuente y desensibilizante, los traficantes ejercen formas cada vez más grotescas de violencia contra sus enemigos y contra la población civil. Los secuestros que llevan a

desapariciones son ahora cotidianos en todo el país. La «guerra contra las drogas» también obligó a que el precio de cultivos de alto rendimiento, como la marihuana y la amapola, subiera a niveles absurdos, lo cual sirvió para enriquecer a los traficantes y no para reducir el apetito de los consumidores. Las patrullas militares asignadas a la destrucción de sembradíos se corrompen por dinero. Arrancan las plantas de amapola de una o dos parcelas y hacen un informe: misión cumplida. La situación es estable, siempre y cuando nadie traspase los límites de un delicado acuerdo tácito. El narco está entreverado con las economías regionales y con el oficialismo a todos los niveles. Conozco al dueño de un bar en Ciudad de México que tuvo problemas con un grupo de narcotraficantes que exigía el derecho a vender drogas en su bar. Por fin, recibió una invitación a comer con una autoridad local y descubrió que el otro invitado era el jefe del grupo narco que lo tenía amenazado. Los gobernadores de los estados de Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas purgaron condenas por crímenes relacionados con la droga, tanto en México como en el extranjero. Con demasiada frecuencia, los jueces y las fuerzas de seguridad se encuentran en la nómina del narcotráfico y, como resultado, la justicia para los familiares de los desaparecidos prácticamente no existe.

Según la asociación de reporteros investigativos Quinto Elemento Lab, por ejemplo, el poblado de Úrsulo Galván en el estado de Veracruz, con apenas treinta mil habitantes, produjo, entre otros cementerios clandestinos, una fosa común que contenía cientos de cuerpos. Entre 2018 y 2020 se hallaron más de doscientas fosas en Tecomán, Colima, un poblado que tiene poco más de cien mil habitantes. No todas estas muertes se dieron en un solo año, pero

hablamos solo de las fosas que se han descubierto. Depende de los familiares de los desaparecidos buscar a sus seres queridos, y por todo el territorio nacional se pueden ver grupos de buscadores rascando la tierra, en busca de cualquier señal de que ha sido perturbada en fecha reciente. Cada nuevo grupo de nombres flota en el ciclo de noticias durante un día o una semana, y desaparece en el aire. «Ya nos acostumbramos», dice la gente.

Ninguno de los políticos, narcotraficantes, fuerzas de seguridad ni personal militar que participaron en la desaparición en masa o en el encubrimiento en curso de la desaparición de los cuarenta y tres estaría sujeto a sucesivas investigaciones, casi una década después del crimen, si no fuera por don Tanis Mendoza y otros familiares como él. Implacables, tercas y en extremo vulnerables, las familias se manifiestan una vez al mes en el centro de Ciudad de México, colocándose frente a cámaras, gritando, reclamando en la entrada de edificios del Gobierno, negándose a moverse, exigiendo el regreso de sus hijos. Gracias a ellos, a unas semanas de la desaparición de los muchachos, el número 43 apareció pintado en las paredes, en autobuses, ventanas y puertas de todo México y, por un tiempo, en toda Europa y las Américas. En un lugar tan lejano como Australia, la gente marchó también. «Nos faltan 43», coreaban. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos».

«Antes, cuando me topaba con marchas de protesta de estudiantes o trabajadores, decía: "Holgazanes, pónganse a trabajar" —reflexionó don Tanis—. Ahora digo: "Ya entendí"».

El viernes 27 de septiembre de 2014, antes del atardecer, don Clemente Rodríguez, padre de un ayotzi de nombre Christian Rodríguez Telumbre, salió corriendo al campus de Tixtla cuando se enteró de que su hijo estaba en problemas. «Los líderes estudiantiles nos informaron que habían atacado a nuestros muchachos. Yo quería tomar un machete e ir a pelear con quien le hiciera daño a mi hijo, pero me dijeron que no era posible, que no había condiciones». Esperó hasta el amanecer para viajar a Iguala desde su hogar en Tixtla. «Se me hizo eterna la noche», dijo don Clemente. Al día siguiente, en Iguala, «buscamos a nuestros hijos por todas partes: en los hospitales, en el juzgado. Pensé: "Si mi hijo hizo algo malo, lo tendrán retenido en la cárcel". Pero nadie nos dio noticia ni ahí ni en ningún lado». Para cuando amaneció, Vidulfo Rosales, un hombre fornido de unos cincuenta años, abogado y defensor de derechos humanos en el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, en la región montañosa de Guerrero, también escuchó lo que ocurría en Iguala. Vistiéndose a la carrera, le pidió aventón al dueño de un vocho destartalado, quien hizo un viaje de cuatro horas por un camino de terracería destrozado. Rosales tiene años de experiencia en la intersección que existe entre derechos humanos y violencia, pero su conductor voluntario, nada ducho en estas lides, se negó a llevarlo más allá de Chilpancingo. «La noticia de lo que había pasado en Iguala se conoció en seguida —explicó Rosales—. Había retenes por todas partes; la gente estaba embravecida». Se puso en contacto con cuatro empleados más de Tlachinollan que tenían auto y estaban acostumbrados a situaciones incendiarias, y juntos siguieron camino hasta Iguala. Él y sus colegas

trabajaron frenéticamente todo ese sábado, localizando estudiantes que hubieran sobrevivido o se hubiesen ocultado durante la noche, preguntando en la morgue y el hospital, y consiguiendo una escolta oficial que llevara de vuelta a la escuela a los estudiantes que habían logrado localizar. Solo tras días de angustia, en los que un puñado de rezagados logró volver a la escuela, se entendió claramente el alcance de la tragedia: decenas de estudiantes seguían desaparecidos.

En cuestión de días, las marchas de protesta estallaron por todo el país. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales expresaron su preocupación por lo ocurrido en Iguala. Perseguido por el escándalo, el presidente Enrique Peña Nieto, un político engominado pero con la cabeza vacía, se vio obligado a pedir una investigación. «Después de Iguala, México debe cambiar», declaró, y al mes del crimen su procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó su investigación ante la prensa. Los estudiantes, afirmó Murillo Karam, habían sido secuestrados por un puñado de policías municipales corruptos de la ciudad de Iguala y sus pueblos vecinos: Huitzuco y Cocula. Siguiendo órdenes del alcalde, la policía entregó sus cautivos a miembros de un grupo narcotraficante local, los Guerreros Unidos. Varios de los policías acusados, agregó Murillo, ya habían sido detenidos y habían confesado. Después, al alcalde se le declaró culpable de un secuestro, junto con otros cargos. Murillo Karam exhibió las fotografías de algunos hombres: harapientos, abatidos, sucios y, como los reporteros con experiencia sospecharon de inmediato, torturados. Los matones habían llevado a los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos a un tiradero de basura cerca del pueblo de Cocula, dijo Murillo Karam, y ahí mataron a los que

quedaban vivos. Los asesinos hicieron un fuego a cielo abierto con llantas, gasolina y madera para incinerar los cuerpos de los jóvenes y reducirlos a cenizas tan pequeñas que nunca sería posible identificarlos, aseveró Murillo Karam. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal, de alto o bajo rango, participó en el crimen, aseguró. Los padres de los muchachos muertos debían resignarse, insinuó el entonces oficial de justicia de más alto rango del país. En cuanto a los criminales, todos serían detenidos. «Este es un llamado para encontrar la fórmula para que esto, que nunca debió ocurrir, no se repita jamás», concluyó Murillo Karam.

Esta versión de los hechos, que a Murillo Karam luego le daría por llamar la «Verdad Histórica», es lo que la mayoría de las personas que han oído hablar del crimen recuerdan hoy. Pero la evidencia muestra que los estudiantes de Ayotzinapa no murieron en el tiradero de basura, que el alcalde de Iguala no fue quien dio la orden de matarlos y que los militares sí estuvieron involucrados. Fue solo años después, en 2021, que la participación del procurador se esclareció, cuando un grupo de investigadores independientes pudo acceder a un disco duro con una serie de imágenes tomadas por un dron de la Marina Nacional en las primeras horas del 27 de octubre, exactamente un mes después de las desapariciones. Las imágenes muestran dos camionetas *pickup* de la Marina estacionadas al borde del basurero, junto a tres grandes costales blancos. Son las 6.30 a. m. Un grupo de hombres se apresura a ir y venir entre los costales y las camionetas. Encienden una hoguera, y el humo se eleva en lo alto durante casi una hora. Cuando volvemos a ver el tiradero de basura —parecería que algunas imágenes de la secuencia fueron borradas, o bien nunca se tomaron—, los costales ya no se ven. A

las 8.31 a. m. llega el procurador general Murillo Karam para supervisar él mismo la escena, mientras al menos dos hombres van y vienen nuevamente por entre el hedor de la basura. Expertos forenses de la oficina del Procurador General descienden al basurero y desplazan o se deshacen de pequeños objetos. No hay una imagen de ello, pero sabemos qué ocurrió después: Mercedes Doretti, miembro fundador del renombrado Equipo Argentino de Antropología Forense, que estaba buscando rastros de los estudiantes en un segundo sitio cercano, fue llamada al basurero. En efecto, Doretti y otros miembros del grupo argentino sí encontraron fragmentos de hueso humano, pero pasarían meses allí buscando en vano fragmentos grandes o enteros, de un tamaño suficiente para usarse en una identificación de ADN. Años después, viendo el video una y otra vez, no pude sino preguntarme por qué las dos camionetas de la Marina que llegaron primero al basurero —sin autorización de la oficina del Procurador General— llevaron objetos al tiradero de basura, encendieron el fuego y mantuvieron guardado el registro de sus acciones en un archivo digital oculto marcado como *Top secret*. Murillo Karam, quien ahora está bajo arresto domiciliario y muy enfermo, defendió públicamente su investigación, y sus abogados sostienen su inocencia.

«Desde el principio supe que no era verdad», dijo don Tanis cuando le pregunté acerca de la versión de Murillo Karam sobre los eventos que el Gobierno empezó a llamar la «Verdad Histórica». Siempre de voz suave, don Tanis bajó aún más el tono. «Cuando se asa un cerdo —me explicó con cuidado—, siempre queda un charco de grasa al final. Pero en el tiradero de basura no quedó nada». Había otra evidencia fácilmente accesible para contradecir la versión

de la Verdad Histórica de los eventos: la vegetación alrededor del tiradero estaba sin chamuscar, y además había llovido a cántaros esa noche. Don Tanis y las otras familias dolientes sabían que sus hijos no habían muerto en el tiradero de basura. Los querían de regreso, vivos, pero ¿cómo iba a escucharse su débil voz frente al rugido del Gobierno? Ahora, años después, sentada con don Tanis en su casa, le pregunté cómo él y su esposa habían logrado transitar desde permanecer despiertos la noche entera, preguntándose si sus captores le habrían dado de comer a su hijo ese día, hasta repasar las infinitas posibles maneras en que pudo haber muerto, unirse con todos los demás padres y familiares, marchando juntos una y otra vez, cada familiar mostrando la foto de un hijo desaparecido, gritando que quiere que se lo devuelvan vivo. «Fue el amor por nuestros hijos lo que nos unió. Ni siquiera nos conocíamos de antes». Y fue también el apoyo de la comunidad de derechos humanos lo que facilitó su unión, añadió don Tanis.

«Para el cuarto o quinto día, en el Centro Tlachinollan nos percatamos de que no podíamos hacer este trabajo solos», me dijo Vidulfo Rosales cuando hablamos vía internet. Rosales es de un poblado en los altos de Guerrero que se llama Totomixtlahuaca (mil doscientos habitantes), donde él fue uno de los pocos estudiantes en pasar más allá del noveno grado. Y llegó más lejos aún: se graduó en la Facultad de Derecho y se unió al Centro Tlachinollan, trabajando en casos de desaparición forzada, tortura y asesinato de indígenas y activistas de derechos humanos. Me contó que, tras el caos que se desató a raíz de la desaparición de los cuarenta y tres, al principio pensó que el Centro Tlachinollan sabía qué hacer. «Teníamos varios protocolos para esas situaciones —dijo cuando

hablamos—. Pero nos dimos cuenta de que esto era más de lo que estábamos preparados para hacer. Estaban los muertos, docenas de desaparecidos, todo el asunto de los autobuses, los agresores y las familias». Rosales acudió a otras organizaciones en Ciudad de México, sobre todo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Pro), fundado por los jesuitas, que a su vez llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Equipo Argentino de Antropología Forense. En noviembre, el presidente Peña Nieto se vio obligado a aceptar el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que México es miembro. La comisión convocó a expertos internacionales especializados en descubrir y procesar violaciones de derechos humanos, y bautizó al nuevo grupo con el incómodo nombre de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En abril de 2015, el GIEI llegó a México. Fue el primer gran triunfo de los padres.

3

Esta primavera, me reuní una tarde con dos investigadores del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, en un café junto a un parque de Ciudad de México. Beristain, médico y psicólogo, trabaja con víctimas de trauma para comisiones de derechos humanos en América Latina. Buitrago, fiscal colombiana, envió tras las rejas a varios generales responsables de monstruosas violaciones a los derechos humanos. Los dos recordaron el momento en que el grupo del GIEI visitó por primera vez el campus de Ayotzinapa. «Incluso

antes de entrar al plantel había gente esperando para acompañarnos —dijo Buitrago—. Padres, estudiantes y la banda de la escuela. Nos colocaron en el cuello una guirnalda de flores tras otra. Cada uno de los oradores que nos dio la bienvenida repetía lo mismo: lo único que nos pedían, dijeron, era que siempre les dijéramos la verdad, que no mintiéramos, que no nos vendiéramos. Soy abogada, creo en las instituciones. Pero cuando escuché esa frase ("no mientan, no se vendan") repetida tantas veces, pensé que esta tenía que ser la máxima expresión de una ciudadanía que ya no creía en nada».

Pronto, los miembros del GIEI aprenderían la lección mexicana. En el café, Beristain y Buitrago soltaron la risa al recordar a los empleados de la oficina del Fiscal General que les decían cosas como: «Nunca verán una investigación tan completa como la que hicimos nosotros», cosa que afirmaron al entregarles su reporte. «Nos dijeron, impávidos, que una banda de narcotraficantes incineró cuarenta y tres cadáveres usando solo llantas, ramas y veinte litros de gasolina», dijo Buitrago. Después de que el GIEI expresó sus dudas al respecto, Beristain añadió: «Nos llevaron al sitio y nos mostraron un árbol al cual le habían cortado dos ramas muy verdes hacía poco», asegurándoles a los investigadores que también con estas ramas habían alimentado el fuego. «Y luego nos dijeron a coro —Beristain y Buitrago sofocaron la risa— "¡Ahora sí le atinamos!"».

Hablaban del encargado de la investigación en la oficina del fiscal para el crimen organizado, que estaba orgulloso de haber superado una objeción con tanto esmero, incluso si eso implicaba alterar la evidencia prácticamente ante los ojos de los comisionados del GIEI.

Al GIEI y al grupo argentino les tocó pasar la mayor parte de los doce meses que duró su mandato comprobando que la narrativa de

eventos que ofrecía el Gobierno era imposible. Se les bloqueó a cada paso, sobre todo por parte de los militares, que se negaron a darles acceso a la mayoría de los documentos que el grupo solicitaba. El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se rehusó a otorgarle permiso al GIEI para hablar con quien fuera del batallón de Iguala. «Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales», declaró. Buitrago, la comisionada colombiana del GIEI, tiene un notable perfil andino —pómulos prominentes, nariz definida, ojos muy negros ligeramente achinados—, y era casi divertido verla periódicamente en las conferencias de prensa del GIEI, porque señalaba las mentiras y explicaba con lujo de detalle los hechos con una claridad casi inaudita para el discurso oficial mexicano. «Nos dieron declaraciones firmadas por el personal de la oficina del Fiscal General que eran falsas —dijo sobre sus primeros meses en México—. La información obtenida a través de documentos legales no era cierta. Había procesos judiciales en los que toda la información estaba manipulada». Al final de su primer año, no les renovaron el contrato, de modo que en abril de 2016 hubo una reunión de despedida en un auditorio repleto de Ciudad de México. Una vez más, les colocaron guirnaldas de flores en el cuello, y cada padre los abrazó con fuerza. «Justo al final un hombre se paró y gritó: "¡No se vayan!". Y luego otro se puso de pie y empezaron a corear "¡No-se-va-yan!". Ahí casi nos morimos todos», dijo Beristain.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer candidato independiente en más de setenta años en ser elegido presidente, y prometió limpiar la desastrosa investigación heredada de su antecesor. Fue un nuevo día de victoria para los padres de los

cuarenta y tres, pero ya habían aprendido a desconfiar. Confirmaron nuevamente a Centro Pro como su representante legal, e insistieron en el regreso del Equipo Argentino de Antropología Forense y el GIEI. Omar Gómez Trejo, un joven abogado de modos engañosamente tranquilos, era el secretario del GIEI cuando se le designó para encabezar una nueva unidad de investigación del caso de Ayotzinapa, en la oficina del Procurador General. Todos los equipos quedaron bajo el paraguas de una oficina liderada por Alejandro Encinas, un hombre que podría ser tomado por pariente de Santa Claus, siempre dispuesto a uno de esos estrepitosos abrazos aleteados con los que los mexicanos se saludan entre sí. Encinas no solo era un aliado político de López Obrador desde mucho tiempo atrás, sino que también fue regente de Ciudad de México, y era inmensamente poderoso por derecho propio. Probaría ser un intermediario clave para los distintos equipos durante los años siguientes, presionando a López Obrador para que interviniera cada vez que una oficina gubernamental —sobre todo de las Fuerzas Armadas— se negaba a permitirles acceso a los investigadores a documentos o instalaciones oficiales. Beristain, el psicólogo del grupo del GIEI, estaba exultante cuando los equipos pudieron retomar su trabajo. «Desde luego que sabía cómo era el terreno por el que nos movíamos —me dijo hace poco en una videollamada—. Pero confié en el compromiso directo [que el presidente] nos había expresado a las familias y a nosotros. Habían aceptado que volviéramos, sabiendo cómo era el trabajo que hacíamos». Gómez Trejo también estaba jubiloso. «Teníamos a la oficina del Procurador General, al presidente, al GIEI, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas y, sobre todo, a los

representantes legales de las familias, todos trabajando para asegurar que se hiciera justicia, que se supiera qué había pasado con los muchachos», me dijo. Pero ni siquiera el «hágase» del presidente fue capaz de anular las trampas que le tendieron los militares a la investigación.

A principios de 2023 me sorprendió encontrarme en posesión de un documento confidencial: el expediente judicial de más de seiscientas páginas que el fiscal especial para Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, llevó ante un juez en agosto de 2022. Era el resultado de dos años de incansable búsqueda en archivos, de recolectar evidencia y de horas de entrevistar a cientos de sospechosos, sobrevivientes, oficiales del Gobierno, transeúntes y familiares de los desaparecidos. El documento me resultó perfectamente incomprensible en una primera pasada, gracias a las complejidades del sistema legal tradicional mexicano —que en casos de crimen organizado aún no implementa los juicios con jurados, sino que depende de argumentos ritualistas que se le presentan al juez por escrito—. Pero una vez traspasada la barrera de la jerigonza legal, vi que estaba repleto de información, sobre todo respecto a un grupo traficante que tenía su sede en el estado de Guerrero: Guerreros Unidos (GU), responsables de la desaparición de los cuarenta y tres.

Guerreros Unidos nació en 2009, cuando los marinos acribillaron y mataron a Arturo Beltrán Leyva, un poderoso capo de la droga que vivía en Cuernavaca. Como suele suceder, tras su muerte los subalternos de Beltrán se dividieron en varios clanes familiares más pequeños. Uno de estos se llamó Los Rojos y se apoderó de Tixtla, un pueblo de la sierra de Guerrero, donde se ubica el campus de Ayotzinapa. Los Rojos se beneficiaban de un cómodo negocio:

compraban cristal de metanfetamina y pasta de amapola a un grupo aliado que controlaba la fase final del proceso de producción de heroína en los campos de la región de La Montaña, en Guerrero. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Los Rojos también se dividieran: una parte se juntó con un grupo de hermanos, medios hermanos y primos, varios de los cuales habían crecido en los suburbios de Chicago. Entre todos, formaron el grupo disidente Guerreros Unidos. Una nota del *Chicago Sun-Times* reveló que dos de los hermanos fueron repartidores de pizza en Chicago, en el restaurante Mama Luna's; un primo, Pablo Vega, trabajó en fábricas locales, y todos pasaron tiempo en la cárcel por crímenes menores. Para 2012, los muchachos de la pizza y sus primos criados en México ya tenían el negocio en Iguala, una ciudad con una terminal de autobuses lo suficientemente grande como para que cualquier actividad inusual pasara desapercibida, pero no tanto como para llamar la atención. Esto fue fundamental para el éxito del grupo, porque la especialidad de la banda era adaptar compartimentos invisibles en autobuses de pasajeros que cubrían una ruta ciertamente inusual: Iguala-Chicago. Los compartimentos secretos se llenaban de droga, y el autobús salía a cumplir su ruta. Ya en su destino, Pablo Vega descargaba y distribuía la mercancía, reemplazaba el producto con paquetes de dólares y enviaba el autobús de regreso a Iguala.

En 2022, la DEA permitió al fiscal Gómez Trejo y a un asistente pasar horas en la oficina de Chicago, leyendo la transcripción de veintitrés mil mensajes que intercambiaron Pablo Vega, sus familiares y otros integrantes del clan. Resultó que la agencia ya se había topado con Vega en 2014, durante una investigación de lavado

de dinero, y les había intervenido los celulares a él y a otros miembros de los GU en Chicago. Los mensajes de sesenta caracteres, escritos en celulares Blackberry, se reportaron primero en la prensa mexicana y, posteriormente, en inglés en *The New York Times.* Son soporíferamente aburridos de leer en una primera vuelta, pues en su mayoría consisten en bruscas discusiones sobre dónde estacionar a la «Tía» —el autobús— y cuántos «floreros» repartir. Pero, según me dijo Gómez Trejo cuando lo busqué, conforme iba leyendo a toda velocidad los mensajes impresos, se iba mareando de felicidad. Había mensajes en los que Vega y sus compañeros hablaban de los oficiales del ejército y del Gobierno que aceptaban sus sobornos. Mencionaban visitas específicas, fechas y exigencias de dinero. Era, como me dijo, «prueba objetiva y rotunda —no solo la declaración de un testigo— que vinculaba a una autoridad del estado con el crimen organizado». En otras palabras, era información «objetiva sobre aspectos clave de nuestra propia investigación en México». Le permitiría construir la acusación.

Otros textos revelan a un manojo de ineptos, casi analfabetos, destinados al fracaso. En uno de los primeros cargamentos que el grupo envía de Iguala a Chicago, el autobús cargado de producto se estrella «porque estaba lloviendo». Alguien deja un automóvil cargado de drogas estacionado de manera ilegal, así que se lo lleva una grúa, pero nadie puede encontrar las llaves de repuesto, y como entretanto al joven que conducía lo ha atrapado migración, los chicos de Pablo no tienen manera de reclamar el auto del depósito de vehículos. Un colaborador clave desaparece en Ciudad de México, y los días pasan mientras el grupo hace un débil intento por comprender qué le sucedió («¿Cómo se llama? Solo lo conozco como

el Cuate»). La esposa de Vega lo sermonea constantemente, y cuando lo hace él le envía un mensaje a una novia y le pide que le mande *una foto sexi*. Un cargamento tiene éxito y se distribuyen miles de miles de dólares, pero dos meses más tarde le cortan el agua a la casa de Vega en México porque no tiene para pagar la factura. El equipo de Vega siempre está hambriento de trabajo porque nunca hay suficiente producto: al parecer la competencia tenía acaparado el mercado. La cuñada de Vega, viuda de un fundador de los GU, hermano de Vega y conocido como el Minicooper —presumiblemente porque le faltaba altura—, se queja sin cesar de que ella siempre es la última en ser tenida en cuenta. Alguien anuncia que ya se puso a vender zapatos tenis para llegar a fin de mes. Peor todavía; los primos, supuestamente unidos por vínculos místicos de linaje compartido, siempre están sospechando entre sí de traición. Y, claro, también está el peligro real que siempre enfrentan: las grandes ligas de la escena nacional —el grupo Sinaloa, la Familia Michoacana, el Cartel Jalisco Nueva Generación—, que durante años han tratado de apropiarse del control del estado de Guerrero, rico en opio.

Quizá porque la competencia tampoco destacaba por su brillantez, GU logró consolidar su operación en ciernes e incluso imbuir su dominio sobre Iguala de una suerte de mística. Para entonces, se supone que el fiscal del estado ya estaba en la nómina, al igual que el médico forense, encantado de pasarle a los Guerreros los nombres de la cosecha diaria de cadáveres. Según explicó en una declaración jurada «Juan», un miembro fanfarrón y de sangre fría de GU que a la larga se convirtió en testigo del Estado, «el propósito de toda persona que pertenezca a la organización [es] mandar drogas a

Chicago y vigilar y hacer lo necesario… es por eso que tiene que haber apoyo de funcionarios públicos —como los oficiales de policía — a todos los niveles». GU a menudo lavaba su dinero a través de contratos de obras públicas y otros métodos tradicionales. También contaban con el conveniente recurso de una cadena de joyerías operada por la enérgica esposa del alcalde de Iguala, que era, además, hermana de dos sicarios de Beltrán Leyva que habían muerto años antes. El clan se encargó de que otro asociado —Francisco Salgado Valladares, un gordo con ojitos de cerdo, jefe de un feroz grupo de policías de Iguala autodenominado los Bélicos— fuera designado como subcomandante de la policía.

Para agosto de 2014, según testigos citados en el expediente del juicio, así como en los veintitrés mil chats de SMS, uno de los primos, encargado de relaciones con el Gobierno, a quien llamaban el Güero Mugres, parecía tener acceso directo a un oficial del Batallón 41 de Iguala. También había establecido relaciones amistosas con un cierto José María Crespo, recién llegado al Batallón 27 de Iguala, con el rango de capitán; un «gran tipo», aunque los mensajes entre los primos se quejaban de los «putos» militares y de su inagotable hambre de dinero. Conforme crecía el grupo, empezó a reclutar personal fuera de la familia: un carnicero por aquí, el dueño de un lavado de autos por allá, todos a sueldo del clan, además de docenas de recaderos, insignificantes vendedores ambulantes de droga y «halcones» que mantienen el ojo puesto en el paradero de cada residente, visitante o transeúnte en la zona controlada por los GU. Sus jefes exigen informes, sobre todo en cuanto a los desplazamientos del ejército —largas secuencias de los veintitrés mil mensajes están dedicadas a reportes minuto a minuto

de la ubicación exacta del patrullaje diario del ejército— y, sobre todo, de cualquier indicación de la presencia de grupos rivales, a los que se refieren como «contras». Vehículos desconocidos que entran en la zona de control del grupo son detenidos y revisados para ver si traen alguna señal del enemigo. Perseguidos por el temor a sus rivales, los GU matan sin motivo, aumentando mes a mes el espantoso conteo de cuerpos en Guerrero.

4

Eran las nueve de la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando cerca de un centenar de estudiantes de Ayotzinapa llegaron a la terminal de autobuses de Iguala, a bordo de las dos unidades que los habían transportado desde su escuela. Según los mensajes de texto que los estudiantes enviaron aquella noche, eran las 9.16 p. m. cuando emergieron victoriosos: habían rescatado a sus camaradas y, además, se llevaban tres autobuses adicionales, para un total de cinco.

> Desafortunadamente, al calor de la llegada se nos hizo fácil tomar los autobuses. Quizás no tuvimos la precaución… me incluyo, porque yo, la verdad, no revisé los autobuses. Yo vi que no tenían gente. Vi que tenían chofer. Y vámonos en ese, ¿no? Fue así.

Luis, como lo llamaré, es uno de más de veinte ayotzis que aceptaron dar su testimonio de manera anónima ante el GIEI y el fiscal especial Gómez Trejo. Luis, reservado, serio, orientado al deber, era estudiante de segundo año en aquel entonces, y ahora es

maestro. Encontrarse conmigo en un café del centro de Chilpancingo era simplemente una tarea más en su agenda ese día, y en general habló poco, sobre todo acerca de la noche en que sobrevivió. Me esforcé por escucharlo en medio del vapuleo de la música del café y el rugido y chillido del tráfico. «La policía comenzó a disparar en cuanto salimos de la estación de autobuses —dijo Luis—. Corrieron tras nosotros, disparando al aire. Entonces me asusté, pero luego pensé: bueno, ya se van, ya se fueron. Pero cuando me volví, pude ver que había más policías disparando directamente contra nosotros». Los jóvenes gritaron que no traían armas y lanzaron rocas a sus agresores, pero la policía llevaba pistolas.

Luis habló con visible esfuerzo acerca de las muchas cosas terribles que ocurrieron después: alumnos asustados lanzando piedras y gritando insultos desafiantes a los policías que les disparaban, transeúntes corriendo a refugiarse del fuego, gritos de pánico. Dos de los autobuses avanzaron lentamente en fila india y a paso de tortuga, a lo largo de una angosta calle del centro y, justo cuando estaban por dejar la zona centro de Iguala para tomar el carril lateral hacia la carretera, la policía los obligó a detenerse.

«Recuerdo que me bajé porque hubo un momento en que se detuvo la caravana donde yo iba, en el segundo autobús. Me bajé y vi que a lo lejos había una patrulla de la policía atravesada en la bocacalle». En uno de esos detalles incongruentes que la mente capta durante un trauma, otro estudiante recordó que la conductora de la patrulla que les acababa de cerrar el paso era una mujer policía con el cabello pintado de un desagradable rojo encendido. Bajo fuego, Luis y otros estudiantes le gritaron a la policía que un camarada estaba herido. «¡Se está muriendo!», gritaron, pidiendo

ayuda, aún sin comprender la situación. Luis recuerda que miró «estúpidamente» los casquillos gastados al rojo vivo que había regados por todas partes. «Son fuegos artificiales —pensó—. Tal vez nos están lanzando cuetes». La ayuda no llegaba. En alguna parte un estudiante gritó, sangrando a causa de una herida de bala en la mano, y los estudiantes que aún seguían en el autobús textearon una y otra vez en sus celulares, pidiendo una ambulancia para él, para el chico tirado en la calle, y ahora para un estudiante de primer año que tenía un pulmón colapsado, y al que por eso se le conocía como Pulmón, presa de un ataque de pánico severo en ese instante, poniéndose azul, sin poder respirar. En un momento de misericordia que no se repetiría —o sencillamente porque una ambulancia apareció por fin y los paramédicos serían testigos incómodos—, hubo un alto en el tiroteo y Pulmón fue subido a una patrulla de policía y entregado a salvo a la ambulancia. Otra ambulancia se llevó a Aldo Gutiérrez Solano con una bala en la cabeza. Hasta hoy sigue en coma.

«Al poco tiempo de eso llegó el bus en el que yo había viajado —me contó Luis—. Me acuerdo que llegó muy golpeado porque se balanceaba, así como que estuviera ponchado, como que iba bailando. Total que llegó aquí cuando estaba todo bloqueado y ya no pudo avanzar. Y al poco rato vimos que los empezaron a bajar a todos los compañeros. Como unos doce o quince, yo conté doce o quince. Los acomodaron, los acostaron sobre la banqueta».

Otros contaron veinte o veinticinco. Media docena de camionetas *pickup* estilo militar de la policía se colocaron detrás del autobús, con las luces intermitentes encendidas. Otros sobrevivientes que testificaron ante Trejo y el GIEI piensan que, a estas alturas, algunos

de los chicos ya estaban muertos, y al parecer muchos no podían caminar. «Vi salir a algunos que estuvieron en ese autobús conmigo —recordó Luis—. La policía los extendió a lo largo de la banqueta, boca abajo, y luego los amontonaron en la parte trasera de las camionetas». Luis jamás volvería a verlos.

Por fin, el capitán de policía de Huitzuco, un pueblo cercano, les hizo un gesto circular de «vámonos» a los policías que disparaban desde atrás del convoy de buses, y Luis supo que había sobrevivido.

Minutos después, sobre la salida a la carretera que lleva a Chilpancingo, y en un puesto de control casi directamente frente al Palacio de Justicia municipal, la policía detuvo al segundo autobús que había salido desde la escuela y que había intentado una ruta de escape distinta. Un quinto autobús, de los tres que los ayotzis habían tomado en la terminal, fue detenido más tarde cerca de este punto, y la policía les ordenó a los estudiantes que salieran y huyeran. Lograron escapar sin heridas de bala ni golpes. Frente al edificio de la corte la policía lanzó gas lacrimógeno por las ventanas de otro autobús para obligar a los estudiantes a salir. Un testigo anónimo citado en los archivos de la corte vio a un policía arrancar una rama flexible de un árbol que estaba cerca, quitarle las hojas y luego azotar a los estudiantes con la rama cuando salían tambaleándose del autobús, mientras otro policía los pateaba y golpeaba. En Iguala ya no quedaban más unidades de policía para llevar a todos los estudiantes prisioneros, de modo que se convocó a más policías municipales de Huitzuco y del pueblo cercano de Cocula. A estos ayotzis también los ataron, amontonaron y subieron a las camionetas de la policía. Llegaron miembros uniformados de la Policía Federal, se estacionaron y presenciaron el desarrollo de la

escena en el carril lateral. Un agente de inteligencia del Batallón 27 condujo su motocicleta hasta ahí, tomó algunas fotografías con su teléfono celular y regresó a su cuartel. Llovía a cántaros cuando la policía desapareció en la noche con su cargamento: seres humanos de carne y hueso observados por testigos por última vez hacia las 10.30 p. m. En las primeras horas del 27 de septiembre, los estudiantes ya eran fantasmas: invisibles, inencontrables, inexistentes.

Sin embargo, la violencia aún no terminaba. En el pueblo los disparos cesaron, los estudiantes que huyeron de los ataques buscaban frenéticamente un lugar seguro y enviaban mensajes pidiendo ayuda a sus compañeros de escuela. Un puñado de ayotzis salieron a toda prisa del campus hacia Iguala. En el camino, un estudiante de mayor edad llamó a los reporteros radicados en Chilpancingo. Mientras se desarrollaba a medianoche una improvisada conferencia de prensa en la esquina donde poco antes la policía había detenido a los autobuses, la grabadora de un reportero registró disparos: un automóvil se había detenido y un hombre abrió fuego antes de que el auto arrancara de nuevo. Dos estudiantes yacían en el suelo, muertos al instante. Más o menos a esa misma hora, en el carril lateral a la carretera, policías municipales de Iguala y del vecino Huitzuco atacaron un autobús que tenía como pasajeros a miembros de los Avispones, el equipo de futbol de Chilpancingo, que se dirigían a casa tras celebrar una victoria sobre el equipo local. Antes de que la policía se percatara de que atacaba a un autobús de jóvenes que no eran de Ayotzinapa, le dispararon y mataron al conductor, a un joven de quince años

miembro del equipo y a una mujer que pasaba por ahí a bordo de un taxi.

Una última víctima fue descubierta el sábado ya por la mañana, tirada afuera de una cancha de futbol. Fue identificada como un ayotzi de primer año, Julio César Mondragón. Había cumplido veintidós años. Como muchos de los estudiantes atrapados en Iguala, había texteado a su familia un recuento de los acontecimientos de esa noche. Su último mensaje a su esposa embarazada fue una despedida: «Cuídate y cuida a mi hija. Dile que la amo. Adiós». Cuando lo hallaron, estaba severamente golpeado y tenía múltiples fracturas. Le faltaba gran parte del rostro.

En el silencio que precede al amanecer, el sábado 27 las patrullas de policía recorrían las calles llamando a los ayotzis entre burlas. Desde un techo donde se habían puesto a salvo, Luis los escuchó chiflarles: «¡Sabemos que se están escondiendo!». Un grupo aterrorizado que había quedado en el centro se fue escurriendo de un edificio a otro, buscando ayuda para un compañero que había recibido un disparo en la mandíbula. Por fin llegaron a una pequeña clínica privada, suplicando apoyo al personal de guardia para su camarada gravemente herido (los enfermeros se negaron). Los ayotzis aguardaron el día en la sala de espera y en el segundo piso, aterrados de que la policía los fuera a encontrar. Hacia la medianoche, fueron a abrirle la puerta a alguien que la golpeaba duro. Un tumulto de soldados armados con ametralladoras entró a la fuerza a la sala de espera, tomó posición y apuntó sus armas a los estudiantes. Los seguía un imponente hombre en uniforme: José Martínez Crespo, el capitán del Batallón 27. «La verdad, me alegré de verlo», testificó un estudiante, pensando que los ayudaría.

«Bajen a todos esos mierdas» del segundo piso, instruyó Crespo a un soldado. Pidió que tomaran una fotografía de la escena: veinticinco exhaustos y abatidos jóvenes que miran el piso. «¡A ver, hijos de su puta madre, ahora sí se toparon con la mera verga! —saludó Crespo—. Andan muy cabroncitos y se creen muy verga, ahora sí, ¿qué tan cabrones son?». Crespo hizo que se desnudaran hasta la cintura, ordenó que tomaran foto del rostro de cada uno y se apuntara su nombre. «Y den sus nombres reales —les advirtió—. Porque si no, nunca los van a encontrar». Por fin se fue, diciendo que «iba a ver lo de unos muertos» —lo más probable es que se refiriera a los dos estudiantes asesinados en la conferencia de prensa—, pero que volvería. Los estudiantes huyeron y sobrevivieron esa noche. Hoy Crespo está en una prisión militar, acusado de colaborar con los Guerreros Unidos.

Qué es lo que Crespo hacía o creía hacer, y bajo órdenes de quién, sigue sin quedar claro. Después diría a sus superiores que había ido a la clínica a constatar que no hubiera gente, después de recibir un reporte de presencia de hombres armados allí, y que él y sus hombres trataron con toda cortesía a los estudiantes… pero no mencionó las fotografías. ¿Se las llevaron para mostrarlas a los GU, para que vieran si había integrantes del grupo narco rival de Los Rojos infiltrados entre los estudiantes? ¿O llevaba la información de vuelta a su batallón, donde el sistema de monitoreo que abarcaba todo el estado señalaba claramente dónde estaban los hombres armados? Sin necesidad de equipos tan sofisticados, habría sido casi imposible que los oficiales de los dos batallones militares de Iguala ignoraran lo que sucedía afuera de sus rejas. El Batallón 27 enviaba regularmente patrullas armadas a la ciudad. Hacía mucho que tenían

la costumbre de infiltrar soldados como informantes entre el cuerpo estudiantil (uno de ellos moriría, según parece, junto con los otros alumnos de primer año que terminaron en Iguala). Ambas bases monitoreaban constantemente un sistema de videovigilancia de calles y carreteras en todo el Estado, y la Secretaría de la Defensa de México estuvo entre las primeras agencias del mundo en adquirir Pegasus, un programa israelí muy caro, semejante a un virus, que permite a quien lo tiene monitorear el contenido total del teléfono celular de la víctima en tiempo real. Incluso mientras el ataque se llevaba a cabo, la inteligencia militar estaba unida vía Pegasus a varios teléfonos de los miembros de los GU. Pero nadie en el ejército intervino para detener la acción de la policía. Esto es lo que le parte el alma al fiscal Gómez Trejo. «Si sabían, ¿por qué no salvaron a esos muchachos?», se pregunta todavía.

Por qué los militares no salvaron a los jóvenes es quizá una de las preguntas sin resolver más importantes de la investigación. La otra es por qué a los de GU les pareció necesario emprender la cacería de unos cien estudiantes y asesinar, posiblemente, a casi la mitad de ellos. Quizá, como creía el GIEI, uno de los autobuses que requisaron en Iguala estaba cargado de drogas, o armas, pero eso no explicaría por qué desaparecieron solo los ayotzis que estaban en los dos autobuses que partieron del campus de la escuela esa misma mañana. Otra teoría —existen muchas— sostiene que los GU habían atacado a Los Rojos la semana anterior y que quizá estaban esperando el contrataque. Hay un pequeño indicio de que esta línea de investigación podría tener validez. El día después del ataque a Iguala, un primo de los GU, a quien le gustaba llamarse Silver, le envió un texto a Pablo Vega a Chicago. «Primo, los contras vinieron

al pueblo todos revueltos con los ayotzinapos. ¡Y se armó la vergaseraaa!». Una masacre contra jóvenes indefensos llevada a cabo por matones paranoides, ineptos y sedientos de sangre: eso sí tiene sentido.

Tenemos una última imagen de los cuarenta y tres ayotzis antes de perderlos de vista para siempre. El chofer de uno de los autobuses requisados dijo a los investigadores que vio a algunos de los estudiantes en la estación de policía de Iguala, tendidos boca abajo en el piso la noche del crimen. Otro testigo, que por casualidad entró a la estación la mañana siguiente, dijo haber visto una fotografía de los estudiantes en una pantalla del computador del magistrado, y que escuchó al magistrado (en este caso, una posición más parecida a la del alguacil de una cárcel que a la de alguien encargado de procurar justicia) bromear sobre cómo les habían dado una paliza a los ayotzis, y presumir de su participación en ella. El magistrado, que logró conseguir asilo en Estados Unidos en 2020, niega que los estudiantes fueran llevados a la estación de policía aquella noche.

Los investigadores armaron este recuento de los hechos lentamente, a lo largo de muchos meses, verificando cientos de entrevistas con sobrevivientes, testigos oculares y participantes en los eventos. Pero la respuesta a la pregunta fundamental que buscan los padres de los estudiantes —¿qué pasó con sus hijos después de la última vez que se les vio aquella noche?— sigue siendo elusiva: de aquellas siete u ocho horas faltantes, solo pueden reconstruirse fragmentos y adivinarse la historia que hay detrás.

Hacia las 11.30 p. m., según un documento liberado por las Fuerzas Armadas, pero que a los investigadores les resultó imposible

corroborar, el subjefe de policía de Iguala le envió un mensaje a Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, el jefe de los GU en Huitzuco, Cocula y alrededores: «Tengo veintiún paquetes [personas atadas o cuerpos] dentro del autobús que está por partir». A lo que el Gil respondió desde su base en una zona conocida como Loma de Coyotes: «OK, aterrízalos ahí». Para entonces, algunos de los estudiantes ya habrían muerto a causa de la golpiza, pero los sobrevivientes podrían hablar, crear problemas. ¿Qué hacer con ellos?

Según Juan, el testigo del Estado, los miembros de GU recibieron órdenes de alguien en el alto mando: «Pártanles su madre» a los estudiantes, lo cual puede significar «molerlos a palos» o, dado el contexto, «elimínenlos». Lo que parece probable es que al menos la mitad de los estudiantes fueron llevados ante el Gil, donde —tener que escribir esto es espantoso— fueron descuartizados a hachazos. ¿Por qué no dispararles?, se pregunta uno. ¿Por qué no concederles esa única, pequeña misericordia? Juan dice que no conoce el nombre de las víctimas porque a ninguno de los asesinos se le ocurrió preguntar. Un insignificante mandadero testificó que a él y a un compañero los enviaron a comprar productos de limpieza y a recoger los cuerpos mutilados, que metieron en bolsas negras de basura.

Los cuerpos de cinco o seis estudiantes se entregaron a otro integrante de GU, quien probablemente los disolvió en tambores de ácido. Los restos de los jóvenes que murieron en Loma de Coyotes fueron llevados —siempre según el expediente judicial— a una o más funerarias equipadas con hornos crematorios. Juan dijo a los investigadores que se llevó varios días asegurar que los restos

estuvieran absolutamente calcinados para que nadie —ciertamente no las familias afligidas— pudiera identificarlos. Siempre tan descuidados con sus víctimas —por esos mismos días y en la misma región, distintos grupos de dolientes que buscaban a sus familiares encontraron ciento cincuenta cuerpos, ninguno de los cuales pertenecía a un ayotzi—, esta vez los GU se esmeraron para que los estudiantes en verdad desaparecieran. «No pensamos que este asunto se fuera a volver tan mediático», dice Juan, irritado por la publicidad.

5

Ocho años después, el 18 de agosto de 2022, María Luisa Aguilar, de Centro Pro, acompañó a las familias a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que se les había convocado con muy poca antelación. López Obrador se había reunido con los padres varias veces a lo largo de los años, siempre cortés y amable, sentado con ellos en una mesa redonda para escuchar sus sugerencias y preocupaciones acerca de la investigación. Aguilar, a cargo de relaciones internacionales para el Centro Pro, siempre asistió a esas reuniones, junto con Santiago Aguirre Espinoza, representante legal de los familiares. Aguilar es una mujer esbelta, de aspecto asombrosamente joven, que debe haber aprendido el arte de mantener la calma durante los seis años que trabajó para el Centro Tlachinollan de derechos humanos, en La Montaña, en Guerrero, que por entonces era una de las regiones con más violencia del narcotráfico en todo México. En cuanto entró a la

reunión en el Palacio Nacional junto con los padres, supo que algo estaba mal: esta vez, al entrar, el presidente se paró detrás de un podio, flanqueado por buena parte de su gabinete, incluido su procurador general y su secretario de Defensa; figuras en quienes los padres no confiaban. Los padres fueron conducidos a sillas en el auditorio.

La persona designada por el presidente para supervisar todo el esfuerzo de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, que había sido hasta ese momento amigo de la investigación, leyó las «conclusiones» oficiales del Gobierno acerca del crimen. Encinas afirma lo contrario, pero los forenses argentinos, Gómez Trejo y su grupo de policía investigativa, los del GIEI, Malú Aguilar y Santiago Aguirre del Centro Pro, y ciertamente los padres, afirman que no se les avisó con tiempo sobre el contenido del informe. Utilizando información reunida por varios equipos durante los dos años anteriores, Encinas narró el crimen y la subsecuente investigación. Habló de la participación judicial en el secuestro, los asesinatos y el encubrimiento, y denunció el papel de la policía y el ejército «por omisión o comisión» en las desapariciones. Por primera vez definió lo ocurrido en Iguala como un «crimen de Estado»: un reconocimiento histórico por parte de una administración mexicana. Pero mientras el GIEI, Gómez Trejo, las familias y sus abogados escuchaban y se veían unos a otros cada vez más afligidos, Encinas presentó también una serie de mensajes de WhatsApp hasta entonces desconocidos, supuestamente capturas de pantalla de mensajes SMS enviados por oficiales locales y por miembros de los GU. Para cualquiera familiarizado con las formas brutales y casi analfabetas del clan de los GU en sus textos, estos mensajes largos, escritos con buena

ortografía, resultaban falsos a primera vista. Y en contradicción con todo lo que el GIEI y Gómez Trejo habían descubierto sobre la desaparición de los cuarenta y tres, los textos se remontaban a la versión falsa del procurador priista Jesús Murillo Karam y su «Verdad Histórica». Se minimizaba la participación de los militares y se atribuía la orden de matar a los estudiantes a una figura relativamente menor: el alcalde de Iguala (Encinas niega haber avalado la «Verdad Histórica»). Peor aún, por tratarse de capturas de pantalla de WhatsApp, era imposible rastrear y verificar el origen de los textos. Hacia el final del encuentro, Malú Aguilar escuchó alarmada cómo Encinas le decía a las familias que, después de tantos años de no perder la esperanza, toda la evidencia llevaba a concluir que, desgraciadamente, sus hijos estaban muertos. Consternadas, las familias y sus defensores se retorcieron en sus asientos cuando escucharon por primera vez lo que Aguilar describe como «detalles muy gráficos» sobre cómo murieron a manos del clan de los GU, supuestamente, los cuarenta y tres hijos de las familias presentes. López Obrador terminó la reunión sin aceptar preguntas. «Las familias estaban verdaderamente trastocadas —dijo Aguilar—. Las madres estaban desconsoladas; hombres que no se permiten llorar en público lloraban».

«El presidente cerró diciendo que lamentaba el sufrimiento de los padres —recordó Aguilar—. Y luego les dijo que su movimiento no había sido en vano». Las palabras buscaban consolar, pero el evento destrozó emocionalmente a las familias y marcó el principio del fin de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Hasta ese momento, a las familias y a sus equipos les había parecido que la justicia —el tan buscado objetivo de los esfuerzos del fiscal Gómez Trejo— estaba por fin al alcance. Mientras Gómez Trejo asistía a la reunión en el Palacio Nacional, sus investigadores presentaban su largo y arcano expediente judicial ante un juez, solicitando órdenes de arresto para los ochenta y tres participantes en los eventos en Iguala o el subsiguiente encubrimiento. Entre los indiciados había miembros de GU, soldados, oficiales de policía, el magistrado de las instalaciones de la policía de Iguala, la juez de Chilpancingo que ordenó la destrucción de las grabaciones de vigilancia estatal de la noche del evento, el procurador general del estado de Guerrero de aquel tiempo, Iñaki Blanco, el capitán José Martínez Crespo y los comandantes de los dos batallones de Iguala. Gómez Trejo llegó feliz a la desastrosa reunión con los padres, salió conmocionado, y se fue enseguida a Israel a buscar la extradición del jefe de investigaciones del ex procurador general Murillo Karam. Una semana después, regresó a un mundo distinto. A los integrantes de su equipo de policía investigativa los habían enviado a un «reentrenamiento». Un equipo de auditores tomó posesión de todos los archivos que había en su oficina. En una reunión con su jefe, el procurador general, se le dijo que no se le permitiría abrir ninguna nueva línea de investigación. Días después, bajo autoridad del procurador general, el mismo juez que había aprobado las ochenta y tres órdenes de arresto solicitadas por Gómez Trejo rescindió veintiuna, incluidas las de Blanco, quince militares y la juez de Chilpancingo que borró los videos de las cámaras de vigilancia en Iguala. Pocos días después, Gómez Trejo renunció, y le retiraron sus guardaespaldas. Dos de los cuatro miembros del GIEI, sintiendo que

legitimarían un fraude si se quedaban, también renunciaron y se fueron del país. Los dos restantes, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, decidieron quedarse porque no soportaban dejar a los padres tan indefensos. Después me enteré de que, mientras Gómez Trejo sopesaba su renuncia, un oficial de alto rango lo llamó a un lado, le puso el brazo confianzudamente sobre el hombro y le dijo, más o menos textualmente, que realmente había logrado «encabronar» al presidente: López Obrador había negociado el arresto de cinco militares con el alto mando de las Fuerzas Armadas, «y tú, cabrón —le dijo el oficial a Gómez Trejo—, ¡fuiste y presentaste órdenes para veinte!». El procurador general y el presidente no respondieron a solicitudes de comentarios al respecto.

Era un alarmante indicio del poder real de los militares mexicanos, beneficiarios de la generosidad sin precedentes de López Obrador. El presidente les entregó la construcción y administración de aeropuertos, carreteras, líneas de ferrocarril, aduanas, agencias de turismo y más, tanto al ejército como a la Secretaría de Defensa. Aún más grave, le dio a esta última la supervisión de lo que alguna vez fue la Policía Federal, ahora reestructurada como Guardia Nacional. En 2020, el general retirado Salvador Cienfuegos, que impidió que los investigadores del GIEI entrevistaran a miembros del ejército, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles acusado de conspirar, en su calidad de secretario de Defensa, «para manufacturar o distribuir una o más sustancias controladas… con [los miembros de un grupo dedicado a las drogas del estado de Nayarit]». Parte de la imputación, revelada en el Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, alega que Cienfuegos envió soldados a atacar a los enemigos del clan de Nayarit. Pero después de que el

presidente López Obrador amenazó con suspender las operaciones de la DEA en México si a Cienfuegos no se le retiraban los cargos y se le enviaba a casa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino y los fiscales regresaron a Cienfuegos a México. Se bajó del avión en condición de hombre libre. «No lo vemos como un acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y a nuestras Fuerzas Armadas», declaró Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores. Cuatro meses después, oficiales de justicia mexicanos decretaron que no había evidencia de que el general hubiera tenido relación alguna con el grupo dedicado al tráfico de drogas de Nayarit. En octubre de 2023, López Obrador le otorgó una medalla.

Gómez Trejo se mudó a Estados Unidos con su esposa y su bebé, temeroso por la seguridad de su familia. Cuando comí con él en Nueva York hace poco, parecía tranquilo, y no tan demacrado como cuando dejó México. Trabaja como consultor internacional en asuntos de derechos humanos. Carlos Beristain y Ángela Buitrago, los dos miembros del GIEI que sintieron que aún se podían lograr algunas cosas pequeñas si se quedaban en México, ofrecieron una conferencia de prensa en julio de 2023 exigiendo respuestas que, según ellos, solo los militares pueden dar. Luego renunciaron y se fueron del país. El presidente designó a un nuevo investigador especial, que reincorporó silenciosamente varias de las veintiuna órdenes de arresto que se habían revocado, y no hizo más. Hoy predomina la convicción de que, en términos reales, la investigación sobre los cuarenta y tres desaparecidos ha llegado a su fin.

Hace poco, conversé una tarde con Santiago Aguirre Espinoza, del Centro Pro, tan esbelto y alegre como su colega Malú Aguilar y tan

perpetuamente apurado para correr a su siguiente cita y hacerse cargo de alguna nueva crisis. Aguirre, como Aguilar, también pasó años en Guerrero, en el Centro Tlachinollan. Le pregunté cuál era su balance de los últimos nueve años de esfuerzos a favor de las familias de los cuarenta y tres. «Se han logrado algunos avances —me dijo—. Que los militares [Crespo y los comandantes de los dos batallones de Iguala] fueran acusados de crimen organizado es muy importante. Significa que el Gobierno acepta que estuvieron involucrados. Pero desde el punto de vista de las familias —continuó con un tono inusualmente sombrío—, su principal objetivo era encontrar a sus hijos y eso no se logró. Están enojados y tristes, y algunos dudan que su lucha haya valido la pena». Por su parte, Beristain, que ha vuelto a su casa en España, lamentó que el grado de participación de los militares en el caso siga sin esclarecerse. Hay cientos de páginas de expedientes militares que aún faltan, dijo: «Páginas que el GIEI cree que podrían aclarar qué fue exactamente lo que les pasó a los estudiantes y por qué dos administraciones han sentido la necesidad de taparlo».

Últimamente a López Obrador le ha dado por denunciar al Centro Pro y a Vidulfo Rosales, del Centro Tlachinollan, en sus conferencias matutinas diarias. Los celulares de los tres ya han sido hackeados varias veces con el programa de Pegasus. En una conferencia de prensa reciente, el presidente confirmó que cuando su gran aliado, Alejandro Encinas, se quejó de que a él los militares también le habían hackeado el celular con Pegasus, él, el presidente de México, le recomendó que «no le diera ninguna importancia». En septiembre, Encinas dejó la Comisión para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum, la sucesora designada por López Obrador. A

medida que los seis años de su Gobierno llegan a su fin, las relaciones del presidente con sus supuestos enemigos se vuelven más tirantes. Hace poco, la jefa de la corresponsalía para México del *New York Times* comenzó a verificar los datos para una nota sobre una investigación en Estados Unidos, ya cerrada, acerca de los posibles negocios del narcotráfico con socios cercanos al presidente. Como es de rigor, le envió al mandatario un cuestionario —privado— pidiendo su respuesta frente a la investigación. Su reacción fue atacar verbalmente a la reportera al día siguiente. Leyó su nombre y su número de teléfono en voz alta durante la siguiente conferencia de prensa. Esto puede ser ilegal, pero López Obrador afirmó que lo volvería a hacer, porque «por encima de la ley está la autoridad moral del presidente». El *Times* sintió que, después de ese estallido, no tenía más opción que publicar la historia. En una entrevista extraordinariamente rara —dos horas enteras con una periodista rusa de un canal menor de cable en español—, López Obrador reconoció que Ayotzinapa sigue siendo una asignatura pendiente: «Aún hay tiempo —afirmó Obrador—. Es un asunto prioritario para el Estado mexicano dar con el paradero de los estudiantes».

Seis años después de la masacre, en su casa en Tixtla, Clemente Rodríguez y su esposa, Luz María Telumbre, recibieron una visita del fiscal especial Omar Gómez Trejo, Encinas, y Aguirre y Aguilar del Centro Pro. El grupo estaba ahí para informar a la pareja sobre el resultado del análisis de un fragmento de hueso de seis centímetros que el equipo de Gómez Trejo había encontrado en un barranco seco cerca de Cocula. El Equipo Argentino de Antropología Forense

certificó que el ápice de ADN recuperado del fragmento pertenecía a Christian Rodríguez Telumbre, una de solo tres identificaciones positivas que se han podido lograr en todo este tiempo. «Intentamos llevar algo de dignidad y una sensación de ceremonia al evento», me dijo Gómez Trejo sobre la visita. Pero era un intento inútil de reemplazar a un joven de veinte años que saltaba alegremente por la casa de sus padres ensayando los pasos de las danzas folklóricas que tanto le gustaban, con un pedacito de hueso roto y carbonizado que tuvo que gasificarse para hacer la identificación. Cuando me encontré con doña Luz María en Ciudad de México la primavera pasada, al inicio de una de las marchas de los padres, le pregunté sobre ese momento. Es una mujer hermosa, con un trato relajado y afectuoso, pero no había manera de ocultar el tajante filo en su voz cuando respondió: «Les di las gracias —dijo—, y les pregunté de qué parte del cuerpo era ese huesito». Se le informó que era parte del talón derecho de Christian. «Pero he visto personas que pierden un pie y siguen con vida —dijo, sin alzar la voz—. No estoy satisfecha. Quiero a mi hijo».

Era Día de Muertos en Ciudad de México cuando un año después me topé de nuevo con don Clemente Rodríguez en el Centro Pro. Le pregunté si aquella noche pondría una foto de su hijo en el altar de la familia en Tixtla. Hubo un largo silencio antes de que por fin respondiera: «No puedo». Don Clemente estaba en el pueblo para dar una charla en una escuela local y, como de costumbre, llevaba para vender algunas de las artesanías que hacen su familia y sus amigos. Antes se ganaba la vida vendiendo garrafones de dieciocho

litros de agua purificada, pero el constante viajar para hacer campaña por el retorno de sus hijos ha arruinado el sustento de las familias, que ahora ganan un poco de dinero haciendo cestería de palma, horneando pan o bordando textiles que ponen a la venta al inicio y al final de sus manifestaciones. Don Clemente tiene un sentido del humor muy fino, pero está tan profundamente lastimado y tan permanentemente exhausto que rara vez aflora. Esta vez, vi cómo se desplomó su cara mientras buscaba las palabras para explicar la ausencia de su hijo en el altar. «No tengo un cuerpo que llorar —dijo—. No sé en qué lugar está. No tengo nada que sea él».

La esperanza de que les devolvieran a sus hijos fue el motor de la movilización de las familias. Fue la motivación que los mantuvo firmes a lo largo de años de duda, temor y lucha, lejos de sus familias y sus milpas. «Vivos se los llevaron. Vivos los queremos». ¿Qué padre sería capaz de matar a su hijo en su propio corazón? Don Tanis me corrigió suavemente cuando me referí a su hijo en pretérito.

Hace un año volví a Guerrero por la misma carretera larga y reseca que lleva a Acapulco, pero esta vez tomé la salida a Tixtla para visitar a Rafael López. Su hijo, Julio César López Patolzin, fue uno de los tres estudiantes que el ejército infiltró en Ayotzinapa, y el único que, suponemos, perdió la vida en la masacre. Inevitablemente, el padre se convirtió en una especie de paria entre las otras familias cuando se hizo público el papel de su hijo en la escuela, y me pareció un destino particularmente cruel: perder a un hijo y luego no poder recibir el consuelo que los otros familiares en efecto encuentran en compañía de las demás familias dolientes. Don Rafa, cuadrado y regañón, rengueando por una herida en el pie, me

llevó a ver el pedacito de tierra que ya no puede sembrar sin su hijo. Me mostró una foto de Julio César en su graduación de preparatoria: un muchacho de piel oscura, incómodo en la rigidez de su camisa formal y su chaleco, sosteniendo su diploma en una mano tensa. Más tarde don Rafa me entregó una hoja de papel con las palabras «Proyecto de vida» escritas con brillante tinta azul en cuidadosa letra de molde, arriba de una lista de metas. Don Rafa lo encontró entre las cosas de su hijo cuando ya no estaba él. «Me gustaría viajar por el país aprendiendo cosas distintas y conociendo gente nueva», comenzaba. Más abajo, Julio César —le pusieron el nombre por el boxeador Julio César Chávez— afirmaba que le gustaría estudiar en Ayotzinapa para convertirse en maestro de educación física. También le gustaría unirse al ejército, decía otra meta que tenía una estrella, a fin de poder estudiar y convertirse en médico militar. Y le gustaría ganar dinero, «para ayudar a mis padres como me han ayudado a mí».

Después de tratar de ganarse una vida decente en cualquiera de las múltiples formas del subempleo disponibles para un chico pobre —trabajando en el mercado, vendiendo dulces, boleando zapatos—, acabó por alistarse en el ejército, y pasaba su tiempo patrullando los campos de amapola en la región de La Montaña, en Guerrero. Finalmente, dijo su padre, Julio César se lastimó y ya no pudo seguir patrullando. Quería salir del ejército para estudiar, pero renunciar al salario puntual de un soldado raso no era tan sencillo. Es fácil, en cambio, imaginar a su comandante en ese momento, ofreciendo una alternativa: «Ve a Ayotzinapa si quieres estudiar, y quédate con el sueldo. Pero échanos la mano». Debe haber protestado ante la injusticia de su destino antes de morir.

Don Rafa es un hombre áspero, pero insistió en acompañarme hasta la salida de la carretera para que no me perdiera, así le tocara gastar en el transporte de regreso a su casa. En la caseta de cobro había una nueva cosecha de ayotzis, exigiendo cuotas «para la revolución». Los GU no existían más, Los Rojos eran una organización diezmada, eclipsada por nuevos grupos rivales. En Chilpancingo, alguien filmó a la nueva alcaldesa desayunando en un restaurante con el nuevo capo local. En general, don Rafa me había parecido un severo realista, pero me dijo que la madrina del muchacho, recientemente fallecida, había visitado a su hija en un sueño. «Dijo que había buscado a Julio César allá del otro lado, por todas partes —dijo don Rafa—, y no encontró señal de él. Dijo que lo siguiéramos buscando acá en este mundo». Me indicó que me detuviera justo antes de llegar al retén militar, a orillas del pueblo. «Cuando era bebé, yo lo tapaba de noche con su zarapito para que no tuviera frío, y me quedaba cuidándole el sueño», dijo, antes de bajarse del auto. Hablaba casi para sí mismo. «Cómo es la vida, ¿no? Cuidamos y criamos a nuestros hijos para que luego el Gobierno nos los arrebate».

The New Yorker, 11 de marzo de 2024 (versión abreviada)

Posdata

El 10 de julio de 2023, unas dos mil personas iracundas salieron a marchar por la carretera México-Acapulco, escenario de tantas protestas a lo largo de los años. Bajo el sol ardiente del mediodía,

cargando pancartas, la multitud linchó a cinco hombres, se abalanzó sobre una tanqueta blindada de la policía, la llevó a Chilpancingo, la estrelló contra las rejas del edificio administrativo del estado y se desbocó por la ciudad, incendiando autos. Muchos de los manifestantes habían llegado de pueblos de los alrededores para exigir que se atendiera a sus problemas —no hay créditos para el campo, no ha llovido durante meses, no hay cosecha, no hay forma de sobrevivir—, pero resultó que los manifestantes más violentos, que iban al frente de la marcha, tenían otra exigencia: la libertad de dos hombres, conductores asociados con los nuevos líderes locales del tráfico de drogas, arrestados a principios de esa semana. Entre una cosa y otra, con todos los demás conflictos y dramas que ocurrieron ese mes, y todos los meses, a lo largo y ancho del país, la mortal narcomarcha en Guerrero vino y se fue sin grandes consecuencias, pero para quienes se percataron de ello, marcó un giro radical en la confrontación del crimen organizado con el Estado. Los grupos dedicados al tráfico de drogas aprendieron algo sobre la infinita campaña de los padres de los cuarenta y tres de Ayotzinapa para encontrar a sus hijos; ahora le enseñaban a sus bases de apoyo cómo marchar. Unas semanas después, en Frontera Comalapa, una ciudad al sur del estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala, se alinearon multitudes en la carretera para ovacionar una procesión de la mafia de Sinaloa, que avanzaba lentamente por el pueblo en *jeeps* y camionetas *pickup*, blandiendo ametralladoras. Los sinaloenses acababan de derrotar de manera aplastante a sus rivales del Cartel de Jalisco Nueva Generación, y de todos es sabido que estos últimos son señores particularmente crueles. En el estado norteño de Sonora, un líder del pueblo rarámuri suplicó a los jefes

de los narcotraficantes locales que les cambiaran al narcocomandante de esa zona por alguien que no fuera tan despiadado. En Guerrero, como en otros estados, los curas están actuando silenciosamente como intermediarios entre los capos de la droga y las poblaciones de víctimas, para ver si pueden establecerse condiciones de vida menos penosas. En todos los casos, no tienen en cuenta al Estado mexicano. México enfrenta ahora una plaga de agrupaciones letales dedicadas al comercio de la droga, lo que es un problema criminal; la apropiación de gran número de pueblos pequeños, lo que es un asunto de soberanía; y un enorme problema de seguridad pública en todas partes, que hasta ahora no ha podido resolver ni reducir. Al reestructurar a la corrupta Policía Federal como una nueva Guardia Nacional bajo la jurisdicción nominal de la Secretaría de Seguridad Pública, pero oficialmente administrada y operada por la Secretaría de Defensa, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó un nuevo problema: de ahora en adelante, si un grupo criminal le ordena a su población sometida que realice una marcha, esa Guardia Nacional que ahora es parte de las Fuerzas Armadas, ¿abrirá fuego contra los mexicanos? Y si no disparan, ¿qué pasa después? Este es quizá el asunto más riesgoso que Claudia Sheinbaum, la presidenta entrante, tendrá que enfrentar.

De gobernantes y rebeldes

8
Evo Morales, el redentor fracasado de Bolivia

Volando a medianoche sobre los Andes, los pasajeros se darán cuenta de que ya entraron a Bolivia porque los pueblos y aldeas se vuelven visibles: pulcras líneas de luz entrecruzadas, cada calle iluminada. Quizá la terminal del aeropuerto internacional de El Alto no tenga el mejor diseño o los estándares de construcción más puntuales, pero, en esta elevada meseta —el altiplano andino—, durante las gélidas horas que preceden al amanecer, uno podría llorar de gratitud al sentir la calefacción. Hace treinta años, El Alto no era una ciudad, sino una mancha de calles oscuras y sin pavimentar que se desparramaban desde el aeropuerto, y el aeropuerto era simplemente una destartalada pila de maletas y unas casetas de migración de tecnología estrictamente manual. Los visitantes que se daban de frente con el estupor de los 3.900 metros sobre el nivel del mar bostezaban por falta de oxígeno, se dejaban caer en un taxi y descendían, zarandeados, por un camino lleno de baches y curvas cerradas hasta la capital, La Paz.

Hoy El Alto representa todo lo que logró durante sus catorce años en el poder, de 2006 a 2019, el Gobierno de Evo Morales —conocido por absolutamente todos sus compatriotas como el Evo—. El Alto es la segunda ciudad más grande de Bolivia, y desde la nueva autopista

de seis carriles que va del aeropuerto a La Paz se puede admirar uno de los signos más visibles de la transformación evista: las góndolas entrecruzadas de un sistema último modelo de transporte aéreo, bautizado como Mi Teleférico. Hay ocho líneas con 1.400 góndolas que sirven a 37 estaciones, todas construidas en apenas ocho años. Tres de las líneas bajan en picada de El Alto a La Paz, una ciudad de ochocientos mil habitantes hundida en un cañón árido y desarbolado. Antes, desplazarse en autobús podía arrebatar dos horas de vida a un trabajador. Ahora, en teleférico, el viaje se hace en cuestión de minutos.

Pero lo realmente importante es que El Alto en sí apenas ha cambiado desde diciembre de 2005, cuando los alteños, además de otros muchos bolivianos muy diversos, votaron abrumadoramente por Evo. Los vendedores callejeros siguen ofreciendo de todo, desde fetos de llama para uso ritual hasta carcasas para celular recubiertas de brillantitos. El agua sigue escaseando. El tráfico todavía es una pesadilla. Las mujeres indígenas mayores se siguen vistiendo al estilo chola, con sus tradicionales faldas superpuestas y su bombín. Son aimaras, descendientes de los pobladores del extremo meridional del Imperio inca, y aunque un porcentaje significativo del millón de personas que vive en El Alto es quechua (otro grupo étnico andino) o mestizo, o incluso chino, esta es una ciudad aimara en su identidad, en sus hábitos y en su idioma —la única gran ciudad indígena en todas las Américas, y ha sido apasionadamente pro Evo, su paisano aimara—.

Sin embargo, cuando en 2019 Evo se postuló para un cuarto periodo —cuestionable desde el punto de vista constitucional— y celebró un triunfo posiblemente fraudulento, fue en El Alto donde se

llevaron a cabo algunas de las batallas más feroces entre los aimaras tradicionales que estaban a favor de Evo y los aimaras evangélico-cristianos que se oponían a él, mientras que en cientos de manifestaciones en toda Bolivia se exigía su renuncia a diario. Tres semanas después, con el país ya al borde de una guerra civil, Evo abordó un avión con destino a México.

La semana pasada se llevaron a cabo nuevas elecciones y ocurrieron dos eventos contradictorios: el partido Movimiento al Socialismo (MAS) triunfó en las urnas, pero a Evo —el expresidente que definía al partido, transformó a su empobrecido país y es considerado por muchos, sobre todo por él mismo, como su salvador — le fue suprimida toda influencia. Al menos en un futuro inmediato no volverá al poder.

Juan Evo Morales Ayma nació en 1959 en el remoto altiplano andino de Orinoca, y según contó a los vientos durante su primera campaña presidencial, era tan pobre que soñaba con ser lo suficientemente rico como para subirse a un autobús de pasajeros y con placidez echar por la ventana los cascos de naranja que iba chupando, como los pasajeros que veía cuando caminaba con su padre del pueblo a la ciudad. A los diecinueve años, recién salido del servicio militar y ambicioso, él y su familia se dieron cuenta de que no había futuro en la aridez del altiplano. Se unieron a una creciente oleada de andinos que se desplazaban hacia las húmedas y fértiles tierras bajas de una franja casi virgen del territorio nacional: el Chapare. Era ahí donde se cultivaba la hoja de coca que extranjeros estrafalarios y con prisa compraban a cambio de carretadas de dinero. Cosecha andina

tradicional y legal, de connotación religiosa, los campesinos bolivianos mascan la hoja de coca como un estimulante ligero. Hasta bien entrados los años noventa, se empleó como ingrediente de la Coca-Cola. Pero una tonelada de hojas también puede refinarse para preparar alrededor de un kilo de pasta base de cocaína. En los años ochenta, en el apogeo de la relación pasional de los Estados Unidos con la coca, los campesinos del Chapare llegaron a ganar hasta catorce mil dólares al año, para ellos una suma inconcebible.

Fue entonces que Evo se unió al creciente movimiento sindical de los campesinos cultivadores de coca como secretario de deportes (es un fanático del futbol), convirtiéndose a la larga en el combativo líder de los cocaleros integrantes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Como tantos de sus hermanos de la federación, se veía a sí mismo como campesino primero, antes que aimara, pero siempre como militante sindical. Aquellos fueron tiempos difíciles: Washington imaginó que podía eliminar el comercio de la cocaína —encabezado sobre todo por contrabandistas colombianos y distribuidores estadounidenses— convenciendo a una serie de dirigentes de la derecha dura para que, en su representación, entablaran una guerra contra los productores cocaleros. Entrenadas en Estados Unidos, las fuerzas especiales bolivianas volaron en helicóptero al Chapare, donde a su llegada murieron hombres, se violó a mujeres y ardieron las casas de los agricultores. Evo emergió de aquellos años de enfrentamiento con una visión del mundo vagamente marxista y ferozmente antiestadounidense.

Junto con otros líderes campesinos y simpatizantes de izquierda, en 1988 se apoderó del MAS —que por entonces era un partido

medio improvisado y semifascista—, y al año siguiente fue elegido al Congreso. Como congresista de un solo periodo, luchó por el derecho de los campesinos del Chapare a cultivar coca (el cultivo tradicional de la coca para consumo local en forma de té o de hojas para mascar es permitido en las zonas de cultivo histórico de Bolivia). Sobre todo, encabezó violentas confrontaciones callejeras que llevaron a dimitir a dos sucesivos presidentes: Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, y su vicepresidente y sucesor, Carlos Mesa, en 2005.

Luego de derrocar a Mesa, y antes de su exitosa candidatura a la presidencia en 2005, Evo parece haberse dado cuenta de que no podía ganar una elección nacional siendo un líder sindical pobre, cocalero, peleonero y radical. Cerca de la mitad de la población se identificaba con alguno de los muchos grupos indígenas de Bolivia, y poco a poco Evo orientó su mensaje hacia ellos. Por esos días escuché a Evo en Cochabamba, adornado con una inmensa guirnalda de flores al cuello, en un mitin que abrió con un par de frases que quizá estaban en quechua y en el que, lo más a menudo posible, invocó a la *Pachamama*, la pródiga madre tierra andina. Habló del Collasuyo, el extremo más meridional del Imperio inca, que en su extensión coincide más o menos con la Bolivia de hoy. En estos mítines, la *wiphala* —un emblema multicolor que representa la tolerancia racial, la igualdad de derechos y el Collasuyo— se veía cada vez más.

Los opositores de derecha se burlaban de los orígenes indígenas de Evo, mientras que los líderes indígenas a quienes no les gustaba Evo señalaban que nunca había vestido ropas nativas y prácticamente no hablaba aimara. Pero su cambio de imagen

significó mucho para los votantes indígenas y, con el tiempo, para él mismo. «No me considero el primer presidente indígena, sino el primer presidente elegido por el pueblo indígena —le dijo al periodista Raúl Peñaranda—. Me considero el primer presidente sindicalista. Pero luego, revisando las cosas, viniendo como vengo yo de un *ayllu* [comunidad tradicional] en Orinoca, donde… aún no hay propiedad privada incluso hoy, me considero indígena».

Evo y su vicepresidente, Álvaro García Linera, transformaron Bolivia de manera radical, sobre todo durante la primera década de gobierno. A pesar de que sus orígenes no son indígenas, García Linera, un hombre de tez muy blanca y con aspecto de profesor, cofundó en 1986 una organización guerrillera indigenista y terminó pagando cinco años de cárcel. Rápidamente, Evo cumplió la promesa de llevar a la población indígena al frente de la política nacional. Convocó a una asamblea constituyente en la cual más de la mitad de los delegados eran del MAS, y en su mayoría, indígenas. Cerca de un tercio de los delegados eran mujeres vestidas con las faldas cortas y los sombreros de paja planos característicos de las tierras bajas quechuas, o bien con los bombines y las faldas largas superpuestas de las aimaras. En el luminoso patio del edificio colonial en Sucre donde se llevó a cabo la asamblea, hablé con muchas de esas mujeres mientras salían apresuradas de una sala de reunión a otra, rebosantes de ideas y orgullosas de la seriedad de su tarea.

La nueva Constitución, promulgada en 2009, declaraba que el agua limpia para beber y el sistema de alcantarillado eran derechos universales, concedía a las comunidades indígenas un amplio

margen de autoridad sobre sus territorios y garantizaba una cuota mínima de escaños en el Congreso para los representantes nativos. Gracias al elevado precio mundial del recurso exportable más importante del país, el gas natural —que en esos años alcanzaba en promedio los ocho dólares por cada trescientos metros cúbicos—, la economía se abrió camino, con un crecimiento anual de casi 5 por ciento, y el Gobierno tuvo espacio para experimentar e innovar durante su primera década. «Yo tuve que gobernar con el gas a 1,70 dólares», dice frecuente y amargamente Carlos Mesa, predecesor de Evo. Aunque fuera por unos cuantos meses, la ministra de Justicia fue una trabajadora doméstica quechua que ascendió en el MAS organizando a otras mujeres como ella. En Bolivia, donde los indígenas aún sentían la brutal opresión de la conquista, su recién descubierta visibilidad y las reformas constitucionales trajeron un gran cambio sanador en las relaciones raciales. Temerosos, muchos blancos y mestizos se resistieron ferozmente al cambio; sin embargo, teniendo en cuenta que alguna vez Bolivia tuvo cinco presidentes en un solo año, los empresarios agradecieron la nueva estabilidad.

Fue suficiente para que los defectos y la brutalidad del Gobierno de Evo parecieran casi irrelevantes, casi tolerables. Se dio, por ejemplo, la persecución a periodistas y a medios. El Gobierno compró diarios y estaciones de televisión y obligó a expulsar a quienes ejercían el periodismo crítico. Aunque había proclamado su identidad indígena, Evo chocó a menudo con grupos nativos, sobre todo los de las tierras bajas tropicales, donde la decisión de permitir a Shell Oil y a Petrobras de Brasil entrar a una reserva forestal condujo a meses de confrontación con los habitantes del lugar.

Y luego está la decisión de Evo de aumentar la extensión de tierra que un colono podía desmontar en la selva con el tradicional método de tala y quema. Los nuevos colonos eran en su mayoría migrantes paupérrimos del altiplano que nunca habían visto un bosque o un pastizal, y no tenían idea de cómo desmontar un terreno con fuego. Como resultado, el año pasado los incendios ardieron durante casi dos meses en la región de bosque seco de la Chiquitania, lo cual condujo a la pérdida irreparable de más de doce mil kilómetros cuadrados de bosque virgen y la destrucción de su fauna (este año el fuego ha consumido una franja aún más extensa del mismo territorio).

También hubo niveles monumentales de corrupción, como la del senador del MAS que recibió ochocientos mil dólares para obra pública en un pueblo inexistente, o la negativa de Evo a negociar con la oposición en el Congreso, y su costumbre de hostigar a sus oponentes con imputaciones inventadas, con lo que los mantenía ocupados en los juzgados. Luego estaba su lado grotesco: sus repetidas referencias a su potencia sexual, por ejemplo (juguetón, dice que nueve meses después de visitar una aldea, todas las mujeres dan a luz, prueba de su frase «Evo cumple»). El rancio sexismo, sus políticas antiambientales, la corrupción y el amor al poder por el poder mismo pueden haber llevado a sentir a los votantes y a los miembros de su partido —sobre todo a los más jóvenes— que, a pesar del tremendo entusiasmo de los primeros años de innovación de Evo en el Gobierno, empezaba a parecerse al tipo de semidictador decimonónico con el que los bolivianos ya estaban demasiado familiarizados.

En 2016 Evo llamó a un referéndum para decidir si debía permitirse que compitiera por cuarta vez por la presidencia. Perdió por un estrecho margen y prometió acatar el resultado. Sin embargo, en 2017 el Tribunal Electoral, un cuerpo independiente pero muy controlado por el partido en el poder, dictaminó que restringir la posibilidad de postularse sería una violación a los «derechos humanos» de Evo. «Yo no quiero, pero tampoco puedo decepcionar a mi pueblo», admitió Evo, sonrosado. Prometió que, de ganar las elecciones de octubre de 2019, permanecería en funciones solo hasta 2025.

La votación se llevó a cabo el 20 de octubre del año pasado. Los principales contendientes eran Evo y Mesa, un expresidente, periodista e historiador de profesión, político moderado, que parece arrastrarse a regañadientes a cada elección, pero que de todas formas compite. A las 7.40 p. m., con casi el 85 por ciento de los votos contados, Evo tenía el 45,28 por ciento y Mesa el 38,16. Esto era motivo de preocupación para el presidente y de entusiasmo para sus oponentes: bajo la ley boliviana, cuando existe una diferencia de menos de diez puntos entre los dos candidatos punteros, debe llevarse a cabo un desempate en segunda vuelta. Todos entendieron que, en una segunda vuelta, con los partidos de oposición sumando fuerzas detrás de Mesa, Evo perdería. Pero no hubo festejos para la oposición, porque antes del siguiente informe de resultados preliminares se suspendió el conteo de votos, y no fue sino hasta las 6.30 p. m. del día siguiente que se anunció el nuevo resultado: le daba a Evo una ventaja de 10,14 puntos sobre Mesa.

Es posible que Evo haya ganado por ese margen, o incluso por uno aún más amplio, pero el cierre temporal del conteo aniquiló su credibilidad. En la tarde del 21 de octubre, sin advertencia alguna, salieron a las calles miles de blancos del altiplano y del trópico —estudiantes universitarios, doctores, comerciantes alteños y, en todas partes, cristianos evangélicos que proclamaban que Evo había llevado a Satanás al palacio de gobierno—, todos a evitar que Evo tomara posesión.

Durante las siguientes tres semanas las ciudades se vieron abarrotadas de manifestantes contra Evo que atascaron las calles y bloquearon el tráfico en las carreteras, exigiendo que dejara el cargo. Aun para ellos resultaba pasmoso: las marchas, las violentas reyertas entre los manifestantes en favor de y contra Evo, el saqueo que aterrorizaba a un país que por lo general no ha sido terriblemente violento, la electrizante energía de los estudiantes de bachillerato y de la universidad, apáticos por costumbre, que montaron guardias de veinticuatro horas y erigieron barricadas por toda La Paz. Fue una explosión que trascendió toda diferencia regional, étnica y de clase social.

Para el 8 de noviembre una cascada de gobernadores, senadores y miembros del gabinete, todos del MAS, habían renunciado, y la alianza de Evo con las fuerzas militares y de seguridad se tensó hasta romperse. Ese día la policía de La Paz fue filmada arrancando el símbolo de la *wiphala* de sus uniformes, y en otros sitios la policía se unió a los manifestantes.

El 9 de noviembre, multitudes insurrectas obligaron a Evo a gobernar, o a tratar de hacerlo, desde el hangar presidencial en el aeropuerto de El Alto. Esa tarde, el general Williams Kalimán,

encargado de las Fuerzas Armadas y aliado crucial de Evo, anunció: «Nunca nos enfrentaremos con el pueblo al que nos debemos», cortando efectivamente sus lazos con el presidente. A las tres de la mañana del 10 de noviembre, los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos emitieron un reporte largamente esperado enumerando las irregularidades de la elección, incluido el uso de «redes de computación clandestinas» que podían servir para hackear el sistema de conteo de votos.

Aquella mañana, el Gobierno le preguntó a la oposición si la encargada del Senado y miembro del MAS, Adriana Salvatierra —quien era la siguiente en la línea de sucesión—, sería un reemplazo aceptable en caso de que Evo renunciara. Después de que rechazaron a Salvatierra, no quedó claro quién podría suplir a Evo (todo el mundo daba por hecho que el vicepresidente García Linera iría adonde fuera su jefe). Evo ofreció convocar nuevas elecciones, pero era demasiado tarde. Hacia el mediodía, el sindicato más numeroso de la confederación, la Central Obrera Boliviana, rompió filas con el Gobierno y pidió la renuncia del presidente.

A las 3.45 p. m. el general Kalimán «sugirió» que Evo dejara el cargo, pero para entonces él ya abordaba un avión rumbo a su base en el Chapare, acompañado por García Linera. Desde allá, un Evo demacrado anunció que renunciaba en nombre de la paz. Un «golpe de Estado cívico, político y policial» era responsable de su derrota, dijo. Curiosamente, entre los golpistas no incluyó a las Fuerzas Armadas. Dos días después, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador lo condujo al exilio.

Si los eventos que llevaron a Evo Morales a viajar a México fueron o no un golpe de Estado es tema de cierto debate, pero por lo general los golpes de Estado están diseñados no solo para remover a los gobernantes, sino también para reemplazarlos. Esta vez no fue el caso. Conforme caía la noche del 12 de noviembre, los bolivianos contemplaron su país rebelde y descabezado, y se preguntaron qué vendría.

Fue entonces cuando una senadora llorosa y más bien desconocida, Jeanine Áñez, tomó el micrófono y, para sorpresa general, declaró entre sollozos que ella era la segunda vicepresidenta del Senado y por lo tanto la próxima en la línea sucesoria, por lo que estaría a cargo durante el periodo de transición y convocaría a nuevas elecciones presidenciales. Dijo también que no tenía planeado postularse a la presidencia. En los siguientes días, se descubrió que Áñez era profundamente religiosa, y también presentadora de televisión del ultraconservador y empobrecido departamento del Beni. También era la racista que escribió en un tuit sobre Evo «¡Pobre indio! ¡Aferrado al poder!», y sobre los rituales de Año Nuevo de los aimaras: «¡Satánicos! ¡Nadie reemplaza a Dios!». Marchó a su inauguración clamando «Dios ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al Palacio Nacional» mientras sostenía en alto un enorme ejemplar del libro sagrado.

Pero el caos se prolongó días enteros: en todo el país la policía se negó a reportarse al trabajo. Los anti- y proevistas se mantuvieron entrampados en confrontaciones feroces en El Alto, el MAS estaba completamente desmoralizado, y por lo menos diecinueve personas más fueron asesinadas por el ejército y las fuerzas de seguridad. Frente al colapso inminente del país, lo que quedaba de la directiva

del MAS y su oposición negociaron un acuerdo político, y para fines de noviembre las calles volvieron a la tranquilidad. Áñez formó un nuevo Gobierno, programó elecciones para el 3 de mayo, se procuró un equipo de consejeros, adquirió unos cuantos trajes de sastre, le bajó el tono a su maquillaje y anunció su candidatura a la presidencia.

La devastadora acumulación de casos de coronavirus obligó a posponer las elecciones dos veces. Luego de semanas de mala gestión, Áñez se retiró de la contienda en septiembre. El MAS nominó a Luis Arce Catacora, quien fuera durante muchos años ministro de Economía de Evo.

Candidato improbable, Arce ganó las elecciones en un triunfo que representaba el regreso de su partido y de Evo. Visto desde cierta perspectiva, muchos de los grandes logros de la era de Evo podrían atribuírsele a Arce, quien puso fin a los recurrentes ciclos de hiperinflación que con frecuencia hicieron de la vida boliviana un desafío surrealista. A diferencia de Evo —con sus fuertes rasgos indígenas y sus elegantes sacos de alpaca embellecidos con diseños prehispánicos—, la apariencia y la vida de Arce son intrascendentes: casado, tres hijos, ningún escándalo. Se mantiene siempre en un discreto trasfondo, pero fue el responsable de la ingeniería económica que financió la transformación de Bolivia. El ingreso per cápita se triplicó y nació una nueva clase media indígena. El número de bolivianos en extrema pobreza se redujo del 38 al 16 por ciento de la población. Se construyeron carreteras en un país en el que eran prácticamente desconocidas. Desde luego, Arce le debe la

abundancia que permitió estos cambios al exorbitante aumento del precio del gas natural, pero podría haber gastado el dinero de maneras peores. No volverán los viejos y buenos tiempos para el presidente Arce: el colapso de los precios del combustible y la pandemia del coronavirus que golpeó a Bolivia con una fuerza devastadora se encargaron de ello.

A Evo, que idolatraba al líder venezolano Hugo Chávez, le sobró dinero para gastárselo en proyectos tipo Chávez: un multimillonario museo sobre sí mismo en el remoto caserío donde nació, un costoso avión presidencial. Además, ciertos sectores del MAS lograron robar descaradamente y sin consecuencias, pero, en términos generales, Arce condujo la economía para beneficio de la vasta mayoría de los bolivianos. Eso, junto con su imagen anodina, lo volvieron una opción reconfortante para el electorado tras años de agitación y conflicto.

Para la base indígena del MAS, este mestizo necesitaba una sola certificación: era el elegido de Evo. Esto vuelve todavía más notable que, aun cuando estaba celebrando la victoria con su estilo pacato, Arce enfatizó —no solo una o dos veces— que ni Evo ni ningún otro miembro de su gabinete tendría un puesto en el nuevo Gobierno. «Cumplieron su ciclo —le dijo a un periodista—. Ahora habrá renovación». Otros líderes en pro de la renovación del MAS concordaron. «No es el momento adecuado» para que vuelva Evo a Bolivia, declaró Eva Copa, presidenta del Senado y miembro del MAS, y con admirable sutileza aclaró: «Él tiene temas por solucionar todavía».

Entre esos temas está Noemí Meneses, la agradable y alegre joven compañera de Evo en el exilio. Ella le dedica apasionados tuits, y no

parece que él haya perdido su fervorosa devoción por ella, a pesar de que Meneses ahora tiene diecinueve años cumplidos y no los núbiles catorce que tenía cuando, según toda la evidencia, comenzó su relación con Evo. Hay *selfies* y fotos de los pies entrelazados de los dos vistiendo calcetines idénticos; las pantorrillas de él gruesas y peludas, las de ella de la mitad del tamaño.

La relación de Evo con Noemí no era ningún secreto: Meneses aparece en fotografías y en videos de mítines; siempre presta con una toalla para enjugar el rostro de su ídolo después de un partido de futbol; junto a miembros del gabinete o en visitas oficiales a las islas Malvinas o a Santa Cruz. Pero la breve administración de Áñez, jubilosamente, echó mano de la relación, porque es evidente e indefendible. Meneses denunció en una declaración escrita que en julio ella y sus hermanas fueron secuestradas por la policía, retenidas veinticuatro horas, amenazadas y obligadas a declarar que las fotos que los oficiales habían obtenido eran de ella y de Evo (posteriormente, su confesión y docenas de sus *selfies* se filtraron a la prensa).

Ella afirma que su relación romántica con el expresidente comenzó apenas el 24 de mayo de este año. Según se ha reportado, al parecer hay al menos otra joven que estuvo involucrada con Evo y tuvo un hijo con él a los dieciséis años. Las jóvenes le dan un nuevo significado al recurrente deseo de Evo de retirarse a una parcela «con mi quinceañera y mi *charango*». No era broma.

La mayoría de los cargos de la oposición contra Evo, por terrorismo, enriquecimiento ilícito y pedofilia (o sea, Meneses), se han ido anulando. En consecuencia, ha anunciado su regreso a Bolivia para el 9 de noviembre, un día después de que Arce tome

posesión. Ha declarado a los reporteros que se retirará a su vieja base en el Chapare, pero —según acaba de decir— solo tras una breve vuelta de la victoria por tres provincias. Ya en casa, se dedicará a actividades sindicales y a criar una variedad de pez tropical. Resulta difícil imaginar que esta nueva vida pueda mantenerlo contento por mucho tiempo.

Por el momento, lo que queda del Gobierno de Evo es el partido que fundó. Resulta imposible sobrestimar lo duros que son los militantes del MAS. Saben derrocar gobiernos. Arce puede estar a cargo del país, pero dentro de su inquieto partido representa una minoría. Tendrá que enfrentarse a los evangélicos, los separatistas de derecha, los demagogos blancos de la adinerada provincia de Santa Cruz, y también a la clase media y a la élite instruida que apoyó a Carlos Mesa. También deberá reconciliarse con los militares y con la fuerza policial, y quizá lo más difícil de todo: unificar al partido bajo su mando. Le esperan años duros, pero ganó esta elección con cinco puntos más de los que obtuvo Evo el año pasado. Quizá ese 5 por ciento que no votó por Evo en 2019 esta vez expresaba su admiración por las múltiples virtudes de Arce como ministro de Economía. O quizá solo sea que, después de tanta agitación y derramamiento de sangre, tras catorce años del militante Evo, lo insulso y aburrido suena muy bien.

The New York Review of Books, 3 de diciembre de 2020

Posdata

Al cierre de este texto, Luis Arce concluía su presidencia con una tasa de popularidad del 19,5 por ciento. Asediado por derecha e izquierda, limitado por una economía colapsante y el resurgimiento del virus inflacionario que ha sido el tormento de la economía boliviana, reconoció que sería inútil proponerse como candidato del MAS de nuevo. En efecto, en las elecciones del 17 de agosto de este año, el MAS sufrió una derrota tan humillante como predecible: obtuvo el 3,15 por ciento de los votos. Ninguno de los dos candidatos que se disputarán la presidencia en una segunda vuelta el próximo 19 de octubre es evista, y los dos son sorprendentes. Uno, Jorge «Tuto» Quiroga, porque ya fue presidente suplente en 2001-2002 (tiempo en el que presidió el asalto a los cocaleros del Chapare que hizo de Evo Morales un líder político con presencia nacional). Quiroga perdió frente a Evo en las elecciones presidenciales de 2005, volvió a perder en 2014 y, por último, en 2020 fue derrotado, ya no por Evo, sino por Luis Arce, pero todavía tuvo ánimos para postularse otra vez este año. Alcanzó el 27 por ciento de la votación en la primera vuelta. El candidato más fuerte es el menos pensado, el democristiano Rodrigo Paz, quien obtuvo el 32 por ciento de los votos en la primera vuelta. Tuto Quiroga ocupó varios puestos ministeriales durante el Gobierno del más o menos olvidado Jaime Paz Zamora, y Rodrigo Paz es el hijo del expresidente. Es decir, después de un intento fracasado por renovar el Estado y la representación de la ciudadanía en la política, Bolivia vuelve a los mismos personajes de los tiempos pasados.

Evo Morales sigue en su estrepitoso y autoimpuesto exilio en el Chapare. La expresidenta Jeanine Áñez sigue en la cárcel, sentenciada a diez años por «incumplimiento del deber» y

«resoluciones contrarias a la Constitución». Se espera que con el cambio de presidente ella pueda lograr un indulto o simplemente la excarcelación.

9
No llores por mí, Venezuela

En el *reality show* que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, presenta a intervalos irregulares pero frecuentes para deleite de su nación, él es la única estrella. Casi todos los domingos se le puede ver en *Aló Presidente*, programa que dura el día entero y es materia obligada para cualquiera interesado en conocer la agenda política de la semana siguiente —aunque también pueda ser que a la hora que al presidente se le ocurra, interrumpa los noticieros y las telenovelas para entrar en cadena nacional a hablar, no importa de qué.

La televisión es su medio natural: elocuente, retacado, a sus anchas siempre, desabrochado y medio folklórico incluso en los momentos en que arremete contra la prensa o algún miembro incumplidor de su propio gabinete, Chávez es indiscutiblemente fascinante, y hasta entrañable, cuando se apropia de las ondas hertzianas. En *Aló Presidente*, programa que suele iniciar hacia las once de la mañana, podrá recordar algún episodio de su vida, como el fallido golpe militar que por primera vez lo dio a conocer al público allá en 1992, cuando era un idealista teniente coronel. En momentos como esos suele prorrumpir en cantos o recitar algún poema.

El presidente también comparte brevemente la pantalla con sus invitados al estudio. Pide a los beneficiarios de cierto programa

gubernamental que describan su participación en él. Intelectuales y embajadores que están de visita son invitados a saludar al público. Los miembros de su gabinete rinden cuentas de sus actividades. Los invitados de primera fila escuchan y aplauden, y quizá también piensan con anhelo en la hora de la cena y en una escapada al baño —una vez admitidos a una presentación que dura mucho más que los Óscares, no pueden escapar— mientras Chávez diserta sobre política, Jesucristo, historia, los eventos de la semana, béisbol e, *in extenso*, sobre sí mismo. El *show* de Chávez no acaba nunca, pero, como cualquier *reality*, nunca dura lo suficiente: ¿a quién reprenderá o despedirá mientras está al aire? ¿Qué dirá sobre su esposa la víspera del día de San Valentín? (la respuesta correcta es: «¡Marisabel, esta noche te doy lo tuyo!»). Y en vista de que ya convenció a Julio Iglesias, el *crooner* mundialmente famoso que no deja de envejecer, para que gorjeara *O sole mio* con él y con Jiang Zemin, presidente de la República Popular China, ¿con quién cantará ahora?

Cuando entra en cadena nacional, suele hacerlo solo:

> ¡Hola, amigos! Muy buenas tardes para todos ustedes. Cadena nacional. Sin límite de tiempo. Hemos vuelto a la estrategia original. Hemos hecho un cambio, una bola curva al jardín exterior durante algunas semanas con las cadenas nacionales de los jueves, pero no, esta noche regresamos al picheo original. Es decir, lo que convenga, cada vez que haga falta. Podrá ser una cadena nacional a la semana, o tres o cuatro a la semana, de acuerdo a la dinámica de los acontecimientos. O una vez al mes. Vamos a evaluar según cómo vayamos de acuerdo a lo que pueda estar sucediendo en Venezuela y en el mundo. Y también sin límite de tiempo. Son las 9.15 y creo que vamos a terminar alrededor de la medianoche. Hablaremos sobre una serie de temas que estoy sumamente interesado en explicarles, en reflexionar con ustedes,

> porque vivimos tiempos que requieren mucha reflexión, mucho pensamiento, y también acción, claro. Estamos viviendo un momento cumbre de la historia de Venezuela y todos los venezolanos deben ser dignos de la cumbre de este momento supremo. Con los ojos bien abiertos. Alertas, porque hay muchas campañas que tratan de desinformar todos los días. De modo que nosotros, los revolucionarios, debemos ser claros con esto. Nosotros los bolivarianos debemos ser muy claros. ¿Qué está pasando? ¿Qué camino está tomando la revolución? ¿Cómo está avanzando el proceso revolucionario? Cada día con mayor optimismo. Tengo más optimismo cada día, más alegría: esta mañana canté una canción, y esta tarde la estaba cantando también, ahora no recuerdo cuál. Quizá me acuerde después. ¡Cantando! ¡Alegre! ¡Cuidando a la gente! Resolviendo problemas. Mirando al futuro.[3]

De alguna manera, en la pantalla todo cobra sentido.

Resulta difícil imaginar que cualquier otro jefe de Estado pudiera lograr semejante actuación, semana a semana, durante casi seis años. Fidel Castro es demasiado inhibido, George W. Bush no tiene la imaginación necesaria, y prácticamente cualquier otro gobernante que nos venga a la mente carece del mismo grado de poder, pero esto último le sobra al presidente de Venezuela. Hace diez años era un militar retirado y golpista fallido, que dependía de sus amigos para tener dinero en el bolsillo y transportarse. Hoy, a los cincuenta y un años, encabeza el Estado con uno de los flujos financieros más grandes del mundo, goza de una popularidad del 80 por ciento, enfrenta a una oposición impetuosa pero desmoralizada, y quizá incurablemente desorganizada, y al parecer resulta un imán para las mujeres. Su ascenso al poder ha sido pasmoso.

Hugo Chávez nació en una familia paupérrima en una época en que el petróleo enriquecía desmesuradamente a su país. Los Chávez vivían lejos de las provincias del fantástico auge petrolero, en un pueblo a orillas de los vastos llanos centrales de Venezuela. Su padre terminó el sexto grado de primaria y más tarde se capacitó como maestro rural, pero aun así no ganaba lo suficiente para mantener a la familia. Por lo tanto, cuando Hugo nació, a él y a su hermano los enviaron a vivir con su abuela paterna, Rosa Inés, a Sabaneta, un pequeño pueblo cercano. Chávez le dijo a Aleida Guevara, hija del Che y biógrafa suya, que fue un niño activo y feliz, que se la pasaba correteando por todo Sabaneta después de clases para vender las frutas cristalizadas que su abuela preparaba en una olla en casa. Narrador cautivante, Chávez habló de cómo se trepaba a los árboles de aguacate para bajar los frutos y se escabullía al cine a ver comedias mexicanas, y cómo ayudaba a la abuela, Mamá Rosa, a regar el patio, mientras ella le hablaba a las plantas para que crecieran y él les cantaba. Pero también está esto:

> [Después de que su hermano menor Narciso nació, sus padres también se fueron a Sabaneta] y mi padre construyó una casita… en diagonal a la casa de mi abuela, que era de paja. Mis padres vivieron allí con los demás niños a medida que fueron creciendo… [La suya] era una casita de [bloques de cemento], una casa rural, con techo de asbesto y un piso de cemento.

Chávez no dice qué le parecía este arreglo porque, aunque quedó en buenos términos con sus padres (su madre, Elena, es en gran medida la matriarca de la progenie Chávez), su lealtad y su amor familiar están reservados para los recuerdos de Mamá Rosa.

Hugo Chávez padre parece haberle heredado a su hijo su amor por la política y su inextinguible deseo de ser alguien. Con el tiempo, Chávez padre sería director de educación en su estado natal de Barinas (fue gobernador del estado hasta 2008), pero esto aún no ocurría cuando Chávez hijo —contra los deseos de Mamá Rosa, pero buscando su propio camino en el mundo— decidió ingresar a la academia del Ejército en Caracas.

En su indispensable biografía *Hugo Chávez sin uniforme: una historia personal* (2004), Cristina Marcano y Alberto Barrera Tyszka retratan al futuro mandatario como un cadete montuno, tímido y cortés —nada de escapadas imprudentes ni desenfrenadas noches de alcohol para él—, midiendo constantemente sus posibilidades sociales contra su ambición. Ama el ejército, ahí se siente como en casa y se gradúa octavo en su clase. Juega más que bien al béisbol, el deporte nacional, y sus compañeros se sorprenden de ver al provinciano haciendo de maestro de ceremonias en un concurso de belleza, y haciéndolo bien, seguramente. Se expresa con facilidad y resulta simpático. A los veintiún años, tras obtener un grado de ingeniero militar con una especialización en comunicaciones, ya es la estrella de su propio programa de radio. Nunca fue un alumno sobresaliente, pero bulle de ideas y en el ejército pronto se sitúa en el centro de un grupo de jóvenes conspiradores de izquierda.

Durante casi veinte años Chávez promovería un complot confuso y romántico, inspirado no en el marxismo o en alguna otra ideología, sino en los políticos y luchadores del siglo XIX, que fueron sus héroes incluso antes de convertirse en cadete. Richard Gott nos brinda

algunos capítulos útiles sobre esos héroes en su biografía *Hugo Chávez y la Revolución boliviana* (2005). Entre ellos estaba Ezequiel Zamora, líder de las fuerzas federales durante las interminables guerras civiles del siglo XIX, que luchaba bajo el lema «Tierra y hombres libres, elección popular y horror a la oligarquía». También Simón Rodríguez, el maravilloso pensador cosmopolita y aventurero político que firmaba como Robinson —por Robinson Crusoe— y que fue mentor de Simón Bolívar. Y Bolívar mismo, el supremo: el héroe temerario e inquieto que libertó una a una las provincias andinas de la corona española, pero que comprendió demasiado tarde que, una vez separadas, las nuevas naciones de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia jamás se fusionarían para formar la gran unión que había soñado.

Chávez venera a Bolívar, memoriza sus proclamas, se propone visitar sus santuarios: la casa del héroe en Bogotá, los sitios de todas sus grandes batallas, el árbol bajo el cual el Libertador solía descansar. Marcano y Barrera señalan que desde una edad temprana el futuro líder de Venezuela haría un esfuerzo por ligar todos los momentos fundacionales de su propia vida política a fechas bolivarianas. Ya en el poder, también cambiaría el nombre de su país por República Bolivariana de Venezuela. Pero la imagen inolvidable es la que se reporta como un rumor contado por uno de los muchos mentores de Chávez que luego se distanciaron de él: durante las primeras reuniones de gabinete en el Palacio de Miraflores, la residencia oficial, el presidente Chávez acercaba una silla vacía, afirma el presunto testigo, para que Bolívar se sentara.

¿Cómo fue posible que alguien como Chávez llegara a palacio? Mirándolo cantar y alegar y regañar en las pantallas de la sala de

sus casas, los miembros de la desconsolada oposición a Chávez luchan por comprender. En gran medida llegó porque quería llegar. Formó su primera célula clandestina dentro del ejército a los veintitrés años, trabajó constantemente para expandirla, viajó por el país consolidando un grupo central de conspiradores que, como él, soñaban con una mejor Venezuela y con el heroico papel que ellos mismos desempeñarían. Chávez insistía en que podían transformar su patria para bien, pero no estaba seguro de cómo. Era bueno para dar discursos exhortatorios, tanto a sus tropas como a los estudiantes a los que terminó enseñando historia en la academia militar.

Cuando conoció a Herma Marksman, una historiadora joven y bonita (su primera esposa Nancy y sus hijos ya estaban de vuelta en Sabaneta), le dijo desde el inicio que no podría casarse con ella (en parte porque su madre no le daría permiso para divorciarse de Nancy), pero quería que Herma compartiera su vida y sus sueños. Ella lo hizo durante nueve años, llevando mensajes por todo el país, tomando notas en los mítines, haciendo las llamadas necesarias para mantener viva la conspiración. ¿Conspiración para hacer qué? Chávez parecía esperar que alguna voz interior se lo hiciera saber. Contactó a antiguos líderes guerrilleros y de izquierda, vivió modestamente, fue ascendiendo rangos. El país lo necesitaría a él: necesitaba que lo salvaran. Cosa rara; parece que nunca pensó en meterse a la política.

Chávez adquirió su inquietud social en un país que, como él, ya había mejorado sustancialmente sus perspectivas. En 1935, a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, Venezuela entró a la era moderna: entró por fin en el siglo xx, como les gusta decir a los historiadores. Entonces tenía una población de apenas 3,5 millones, 90 por ciento de analfabetismo, ningún sistema de salud como tal, un entretejido de caminos en lugar de un sistema de carreteras. A Gómez, un monstruo de sonrisa amable que se convertiría en modelo de muchos tiranos ficticios, le gustaba manejar su país como si fuera una hacienda. La estrategia le funcionó; gobernó veintisiete años y murió en su cama. Otro dictador, el general Marcos Pérez Jiménez, el último en una línea de tiranos militares que gobernaron Venezuela durante gran parte de su historia independiente, fue derrocado en 1958, cuando Hugo Chávez tenía cuatro años. Conforme creció, se benefició de la estabilidad y la modernización que brindaban los regímenes civiles que siguieron a la dictadura militar de Pérez.

La envidiable continuidad política del país fue posible, en gran medida, gracias a la abundancia de petróleo que fluía desde sus puertos en aquellos años. Siete mandatarios, todos sobrevivientes de la lucha contra la dictadura, se sucedieron unos a otros de forma ordenada, rotando el poder entre dos partidos: uno, Acción Democrática (AD), miembro de la alianza Socialista Internacional; y el otro, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), aliado con los demócrata-cristianos. Pero el sistema engendraba administradores burocratizados más que hombres de Estado. El debate político se convirtió en un asunto de intercambios electorales casi ceremoniales entre dos partidos, ambos más

interesados en conservar los privilegios de la élite gobernante que en transformar una sociedad cada vez más desigual. Había muchísima corrupción, mucho despilfarro y, conforme la población rural emigró hacia los territorios petroleros y a Caracas, también se acumuló la pobreza urbana, junto con la ausencia de políticas públicas capaces de lidiar con las necesidades de los pobres.

Pero no todos los ingresos del petróleo se dilapidaron en la corrupción y el derroche: también se crearon ambiciosos sistemas educativos, carreteras, museos, represas, programas de salud y vivienda para una población que se multiplicaba demasiado rápido (el último censo arrojó alrededor de veinticinco millones de personas). El último de los presidentes que gastó dinero a lo grande fue Carlos Andrés Pérez, quien nacionalizó la industria petrolera y presidió la era de la «Venezuela saudita». En aquellos años, la bonanza del petróleo mantuvo el tipo de cambio (del bolívar, desde luego) tan alto que los miembros de las clases altas venezolanas que salían de compras —a Argentina, a Francia— se hicieron famosos por la frase «¡Qué barato, deme dos!». La corrupción se arraigó como forma de vida, y para cuando Carlos Andrés Pérez dejó la presidencia en 1979, el sistema bipartidista de Venezuela mostraba claros signos de bancarrota. A pesar de los rumores de gran corrupción personal que han quedado adheridos a su reputación, CAP, como siempre se le llamó, era reverenciado por los pobres al final de su primer mandato. Se le recuerda como la figura más carismática y contundente de la vida pública hasta el advenimiento de Chávez, quien impulsaría un golpe de Estado fallido contra él durante su segundo mandato. Además del petróleo, Venezuela produce muy poco que tenga valor de exportación. La compañía

petrolera del Estado, Petróleos de Venezuela, S.A., o PDVSA, representa el 80 por ciento de los ingresos de exportación, el 27 por ciento del producto nacional bruto y el 40 por ciento del presupuesto del Gobierno. Esos fondos resultaron insuficientes para financiar el voraz gasto público de CAP, quien dejó que su sucesor se encargara de la inflación resultante, la abrumadora deuda, el alto desempleo y un erario vacío.

En 1988 el expresidente hizo campaña y ganó un segundo mandato. Para entonces ya era un converso a la teoría del mercado conocida como el Consenso de Washington. CAP se declaró a favor de una devaluación del tipo de cambio, aumentó el precio de todos los servicios públicos y puso fin a los subsidios del Gobierno: un conjunto de medidas parecidas a las que se impusieron a lo largo de la región, con la esperanza de que, si la economía no se recuperaba, por lo menos resultaría más atractiva para los bancos y los inversionistas estadounidenses. Tres semanas después, los habitantes de Caracas llevaron a cabo el primer motín del siglo. Miles de caraqueños bajaron de los empinados «pueblos jóvenes» en los que por lo general estaban confinados, prendieron fuego a manzanas enteras y saquearon todo lo que encontraron en la ciudad.

Para cuando el presidente convocó a las tropas y declaró el estado de sitio, decenas de personas ya habían muerto. Al final, más de doscientas cincuenta personas perdieron la vida, y Hugo Chávez se quedó con la sensación de que, como le dijo a Gabriel García Márquez, se había perdido «el minuto estratégico»: los más pobres estaban en una situación desesperada, aún peor que de costumbre, y el Gobierno les estaba defraudando, imponiendo medidas de

austeridad cuando lo que se necesitaba era ayuda de emergencia. Y cuando se rebelaban, encima les disparaban. Los políticos eran corruptos, estaban al servicio de los ricos, y además eran incompetentes. El sistema civil bipartidista que Chávez había conocido toda su vida estaba agotado. Era momento de hacer su entrada, pensó, y había perdido la oportunidad. La recuperaría.

Cualesquiera que fueran sus intenciones el 4 de febrero de 1992, cuando por fin llevó a cabo su intento de golpe —para deponer a Carlos Andrés Pérez e instalar un Gobierno interino, o dar lugar a una junta que convocara a una asamblea constituyente— el levantamiento en sí fue un completo fracaso. Sus antiguos conspiradores lucharon como valientes en otras partes del país, pero el ejército no se dividió, y en la misma Caracas el propio Chávez tuvo que rendirse casi sin soltar un tiro. Sin embargo, ya había ganado. A la mañana siguiente de su rendición, los líderes del ejército le permitieron hacer una declaración televisada en vivo sobre el fallido golpe, con la intención de desalentar a los rebeldes que pudieran quedar. No insistieron en que leyera una declaración redactada. Habló durante menos de noventa segundos, pero fue suficiente para establecer una conexión emocional tan intensa con la audiencia que le garantizó un sitio permanente en la política nacional. La conspiración había fallado, dijo, con un guiño verbal, «Por ahora». Dos palabras que podrían haberle granjeado a un golpista común y corriente una sentencia aún más severa en la cárcel. Pero el chico de la suerte debe haber tenido buenos amigos en los altos rangos del ejército: a él y a sus camaradas se les acusó de simple «rebelión». Dos años después salió de la cárcel y se le concedió un retiro honorable del servicio. Cuatro años más tarde, en 1998, tras decidir

por fin que era necesario aliarse con los políticos, se colocó al frente de un movimiento propio y ganó con el 56 por ciento del voto en las elecciones presidenciales de diciembre.

La magnitud de la victoria de Chávez resulta interesante, porque en los seis años que lleva en el poder ha organizado varios tipos de elecciones (incluida una elección para la presidencia, una para elegir una asamblea constituyente y dos referéndums), y el porcentaje de su voto nunca ha llegado al 60 por ciento. En un país donde su público predilecto son los pobres y los muy pobres, que el año pasado en conjunto constituían alrededor del 68 por ciento de la población, casi la mitad de los que acuden a las urnas se niegan siempre a votar por él. Casi tres cuartas partes de la población adulta se ha mantenido al margen de las elecciones recientes. Chávez, quien conoce bien los resultados, apuesta por un juego peligroso: no gobierna como si fuera el presidente de una nación dividida, sino como si tuviera el mandato nacional de llevar a cabo su Revolución bolivariana, como si hubiera decidido que la silla presidencial era suya para siempre.

La definición del presidente Chávez de la Revolución bolivariana en curso, bajo la Quinta República, dentro de un sistema de democracia participativa, sigue siendo opaca. Al igual que Bolívar, a Chávez le gustaría lograr la unificación de América Latina. En Venezuela, él concentra el poder: ha declarado en varios contextos y de distintas formas que no es reacio a la palabra *caudillo*. La prioridad de la revolución son los pobres. Tiene algunos elementos de socialismo (aunque Chávez no siempre fue tan fan de Fidel Castro). A veces es

anticapitalista y otras veces no: Chávez, que a menudo habla de su propia fe religiosa, se refirió al capitalismo como «el demonio», pero bajo su Gobierno muchos empresarios han prosperado, y él ha dejado en claro que ve un papel significativo para el sector privado y, sobre todo, para la inversión extranjera. Para lo que parece no haber mucho espacio es para la oposición.

Transcurridos menos de tres meses de su investidura en 1999, el nuevo presidente ganó un referéndum para convocar a la asamblea constituyente que reemplazaría a la vieja acta constitutiva «moribunda» por otra que ahora concentra un gran poder en sus manos y amenaza la existencia misma de una oposición: ahora es ilegal que el Gobierno financie las campañas electorales de los partidos políticos.

Además, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional Constituyente —que, bajo la nueva Constitución, reemplazó al viejo cuerpo legislativo bicameral— disolvió la Corte Suprema de Justicia y creó el Tribunal Supremo de Justicia, aumentando el número de magistrados de quince a veinte (y en 2004 de veinte a treinta y dos), y se aseguró de que los nuevos estuvieran a favor de Chávez, lo que prácticamente garantiza una mayoría para el presidente. En el transcurso de una prolongada y muy riesgosa confrontación con la compañía petrolera estatal, PDVSA, Chávez también reemplazó la vieja meritocracia por su propio consejo de administración. Esencialmente, esto le ha permitido operar una política exterior basada en la venta de petróleo a países pobres en términos muy favorables a cambio de su apoyo en política internacional, y emplear los ingresos del petróleo para financiar sus diversos proyectos domésticos. Por otro lado, Washington está maniatado en su política

exterior en relación con Caracas. Aunque la Administración Bush parece detestar a Chávez y sus políticas pro-Castro, casi el 15 por ciento del suministro de petróleo de Estados Unidos proviene de Venezuela.

3

Una tarde, en el centro de Caracas, conversé con Marcel Granier —propietario de RCTV, la estación televisiva más grande de la ciudad—, sentada en su oficina cómoda y algo gastada. Hablamos sobre las dificultades de dirigir una estación de televisión rentable sujeta a tantas irrupciones prolongadas e impredecibles de Chávez en la pantalla. Granier me estaba contando de la vez que unos matones chavistas intentaron prender fuego a las instalaciones de RCTV (con todo el personal adentro), cuando miré las pantallas que había en su oficina y vi en uno de los canales a un hombre furibundo que agitaba la primera plana de *El Universal*, el principal diario de Venezuela. «¿Ese? —dijo Granier—. Es solo Isaías Rodríguez [el procurador general], que siempre está refunfuñando por algún artículo».

Me pareció alarmante tener a un miembro del gabinete renegando públicamente de una nota cualquiera en un diario, pero Granier no le prestó mucha atención. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo, me dijo. Phil Gunson del *Miami Herald* y de *Newsweek*, y Juanita León, de la revista *Semana* de Colombia, también se alarmaron al verse denunciados en vivo por oficiales de alto rango —León por el mismo

Chávez, en un *Aló Presidente*—, pero en realidad estos ataques son casi como una condecoración.

Después leí la transcripción de la conferencia de prensa de Rodríguez. Sus acusaciones eran enrevesadas y confusas, pero deduje que lo que en verdad lamentaba era que su oficina fuera atacada sistemáticamente por un taimado cuerpo de abogados de derechos humanos y por organizaciones internacionales de derechos humanos, en específico Human Rights Watch. Dijo que trabajaban en concierto con la prensa y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y la prueba de ello —o, en todo caso, parte de la prueba— era que *El Universal* había publicado un editorial denunciando que, bajo su liderazgo, la administración de justicia era corrupta, ineficiente y apenas funcional. Esto era injusto, dijo. Lo habían sacado directamente del nuevo manual de la CIA sobre golpes de Estado, insistió, y presentaría una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos —la misma comisión a la que con frecuencia también denostaba— acusando a los conspiradores de hostigamiento al Gobierno.

Sorprendentemente, Rodríguez tiene a mano un recurso más veloz: podría llevar al autor del ofensivo editorial a la corte venezolana y acusarlo de insultar y manchar el honor de un funcionario. Existe una vieja ley que incluye esta infracción, pero en el pasado muy rara vez se hacía cumplir, y el castigo consistía en el pago de una multa. Sin embargo, gracias a la revisión que la Asamblea Nacional hizo del Código Penal, en la que los miembros chavistas solo necesitan una mayoría de la mitad más uno para aprobar leyes —las cámaras bajas están repletas de chavistas—, si Rodríguez ganaba el juicio contra *El Universal*, el autor del ofensivo

editorial podría pagar de tres a cinco años de cárcel, aunque hoy parece poco probable que suceda. Al igual que otras medidas recientes sobre control de cambio de moneda, por ejemplo, la ley está diseñada para aplicarse de manera selectiva y para intimidar.

Hay otras formas más aterradoras, pero también menos visibles, de atacar a los opositores de Chávez. Por ejemplo, en el ejército, el castigo por desacato se ha vuelto despiadado y en ocasiones fatal. Cuando cinco cabos encarcelados murieron incinerados en sus celdas, un general explicó en vivo que existía la posibilidad de que se hubiera utilizado un lanzallamas para matarlos. Fue sentenciado a cinco años de cárcel por esa indiscreción.

Sin embargo, el instrumento utilizado con mayor frecuencia por Hugo Chávez contra sus opositores no es una ley, sino algo que en todas partes se conoce como *la lista*: la lista de firmas entregadas en 2004 para exigir un referéndum sobre el referendo revocatorio de Chávez. Las personas que están en la lista no pueden obtener empleo en el Gobierno, ni calificar para muchos de los programas de bienestar de Chávez, ni acceder a contratos gubernamentales. Alguna vez su uso fue subrepticio: los oficiales pedían la cédula, esto es, el documento de identidad, y se comparaba el número para ver si uno estaba en la lista. Pero a partir de diciembre, cuando un miembro chavista de la Asamblea Nacional subió la lista a internet, su uso se ha vuelto descarado. «La… lista seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero eso ya pasó», dijo Chávez en abril a los representantes electos de su partido, posiblemente con un guiño. En julio me reuní con una joven

candidata a doctorado que había acudido a la Biblioteca Nacional la semana anterior. La mujer que firmaba los pases le pidió la cédula. Molesta, mi conocida preguntó por qué. «Ay, mi amor —respondió la mujer—, para la lista».

Es demasiado pronto para juzgar qué tanto los múltiples programas barriales de bienestar social y educación lanzados por Chávez —se les conoce como *misiones*— han logrado rectificar las profundas desigualdades de Venezuela, pero ya sufren de un defecto inherente: al igual que con todo lo que crea Chávez, su existencia depende de él. Esto parecería reflejar la aparente convicción del presidente de que todo lo que ocurre y ha ocurrido —en Venezuela y en este hemisferio también— de alguna manera se relaciona con él. Durante una reunión con inversionistas uruguayos en julio pasado, Chávez señaló que se acercaba la fecha de su día de independencia nacional. Miren qué coincidencia, apuntó: también en julio —el 26 de julio de 1953— Fidel encabezó su asalto al cuartel de Moncada. Y en otro 26 de julio —de 1952— murió Evita, Eva Perón. «Y apenas dos días después —se asombró—, el 28 de julio [de 1954], ¡nací *yo*!». Ahí lo tienen: el acento melodramático, el vestuario performativo, el amor genérico por los pobres y el autoritarismo. Casi se podría pensar que Chávez es Evita reencarnada, y también de paso Perón, si no fuera por el hecho de que Perón murió demasiado tarde (1975) como para llevar a cabo una correcta transmigración de almas.

Tales son los términos alucinatorios en los que uno puede perderse fácilmente al hablar del estado de la política venezolana. En la Caracas de hoy, a menudo parece que no hubiera temas ni teorías, sino solo una rabia biliosa o una devoción incondicional —o un asombro que deja sin aliento—, todo provocado por el

presidente, quien se apropia de tanto oxígeno que no deja aire para discutir, por ejemplo, los méritos de sus Misiones Médicas de Salud en los barrios, o sus relaciones con Cuba, o si las siempre rebosantes reservas monetarias deberían usarse solo para garantizar el tipo de cambio o para financiar, como lo ha hecho Chávez, la multiplicación de misiones. ¿Cómo puede discutirse razonablemente si la cúpula gerencial de la compañía petrolera estuvo involucrada en la planeación del golpe cuando el presidente está ocupado despidiendo a siete de esos gerentes en *Aló Presidente* con un silbatazo y gritándoles: *¡Fuera!* ¿Y cómo puede un periodista, en este caso Jorge Gestoso de CNN en Español, discutir con Chávez sobre los méritos de esta forma de hacer política cuando Gestoso debe comenzar la entrevista insistiéndole a Chávez que el evento sí ocurió? El uso oficial de la mentira, las diatribas aterrorizadas de la oposición, el abandono de la civilidad por parte de la prensa y la televisión se dan fuera de la política y eliminan la razón.

El problema es que todo esto desafía cualquier descripción posible, ha escrito una observadora:

> Es por ello que los críticos están tan perdidos. No saben cuál es el lado débil de la política chavista porque es una combinación inaudita de cosas poco conocidas con un resultado completamente nuevo. El elemento populista, el elemento de compadrito, el espíritu marcial, la terquedad, el delirio bolivariano, el pragmatismo económico y la arbitrariedad monárquica son conocidos, junto con el autoritarismo al viejo estilo caudillista. Nada de esto es nuevo, pero la combinación de todo (a lo que debe añadirse su buena suerte, de la que tiene demasiada) es lo que resulta incomprensible.

Así, en un diario enmarañado y a veces brillante, la columnista Colette Capriles escribe como si hubiera pasado la mayor parte de

los últimos años recostada en su sofá en un estado levemente depresivo, observando desde ahí el desarrollo de los eventos en la pantalla.

Incluso tras una visita de pocas semanas, uno también puede empezar a sentirse claustrofóbico en Venezuela, como si todos ahí vivieran dentro de la cabeza de Chávez, y algunos emitieran pequeños chillidos mientras tratan inútilmente de escapar. Pero el presidente no tiene problemas a la vista: las distintas misiones —en favor de la cultura étnica, la alfabetización, la equivalencia universitaria, la salud pública popular, la defensa de los niños de la calle— están boyantes, en buena parte por la presencia de decenas de miles de cubanos altamente capacitados enviados por Fidel, y también porque están financiadas muy generosamente con fondos que bien podrían serles útiles a los hoy pauperizados ministerios de Salud y Educación. Quién sabe, dice Chávez, de pronto se queda en el poder hasta el 2024 o incluso el 2030.

¿Y por qué no? En un país con una economía del tamaño de la de la República Checa, el valor de las reservas monetarias de Venezuela es ahora de treinta mil millones de dólares. No es probable que los precios del petróleo bajen pronto. A pesar de toda la hostilidad que siente hacia Chávez, la Administración Bush no parece capaz de hacerle mucho daño. Hay elecciones locales y nacionales de varios tipos ya programadas de aquí al 2013, y Chávez y sus partidos políticos (tiene dos) esperan razonablemente ganarlas todas. Lo mejor es que no hay ningún político local —ciertamente no en su propio movimiento— que amenace su popularidad. Puede sonreír y avanzar, cantando. Alegre. Resolviendo problemas. Mirando hacia el futuro.

The New York Review of Books, 6 de octubre de 2005

10
La invasión sorpresa de Venezuela

La historia, a veces, se repite por pura malicia. Por ejemplo, en 1898 Estados Unidos decidió ayudar a Cuba en su larga lucha para independizarse de España y ganó. Los cubanos se mostraron agradecidos, pero no fueron libres todavía. Las tropas estadounidenses controlaban la isla y Estados Unidos se negó a retirarlas hasta que Cuba aceptara ocho condiciones que presentó el senador Orville Platt en 1901 al Congreso. Las cláusulas más importantes de la denominada Enmienda Platt estipulaban que Cuba debía arrendar terrenos a Estados Unidos por tiempo indefinido para que construyera bases navales (de ahí Guantánamo), que no podía firmar tratados con otros países, y que Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir militarmente en la isla, para proteger la independencia cubana o mantener un gobierno estable, cosa que hizo en cuatro ocasiones hasta que, en 1934, se derogaron las humillantes condiciones (pero no el arrendamiento de Guantánamo). El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos, debe de saberse de memoria la Enmienda Platt: el texto quedó grabado en el corazón de todos los isleños, fomentó su ferviente nacionalismo y, durante décadas, contribuyó a que muchos de ellos

estuvieran dispuestos a tolerar a Fidel Castro porque era quien se atrevía a desafiar a Estados Unidos.

Hasta el año pasado, esas disposiciones eran la expresión más directa de las ambiciones imperialistas de Estados Unidos, pero ahora Donald Trump ha reformulado y ampliado las condiciones que deben esperar los países sometidos. Poco antes de las dos de la madrugada del tercer día del nuevo año, se escucharon explosiones y el rugido de aviones sobre Caracas. Estados Unidos, reivindicando el derecho a destituir a su antojo al líder de una nación independiente, capturó al presidente *de facto* de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a su esposa, Cilia Flores, y de paso hizo añicos el principio que hace posible la coexistencia internacional pacífica. Todavía era el 3 de enero cuando trasladaron al matrimonio al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. A Maduro, un hombre bufonesco ya de por sí, lo pasearon llevando una especie de sombrero que seguramente le habría encantado a Goofy. Los periodistas que se reunieron apresuradamente en Mar-a-Lago no sabían casi qué preguntar a propósito de un acto de guerra no autorizado por el Congreso que, en realidad, era un secuestro. (El Gobierno lo denominó «extracción»). Todo ello resultaba grotesco, estúpido y horrible a partes iguales, además de asombrosamente increíble, hasta que nos paramos a recordar lo que ya había dejado claro la Enmienda Platt sobre el concepto que tiene Estados Unidos de sí mismo.

Llevábamos semanas viendo cómo Washington llevaba a cabo el mayor despliegue de poder naval y aéreo de las últimas décadas en torno a las soleadas islas del Caribe, con la intención, pensábamos ingenuamente, de quedarse allí algún tiempo, jugar a ser una

superpotencia a costa de los contribuyentes estadounidenses e intimidar a Maduro para que dimitiera. Pero no, el Gobierno de Trump iba a por todas y sin medir las consecuencias. La prueba fue Maduro con su ridículo sombrero.

María Corina Machado, la tenaz líder de la oposición conservadora venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025, contribuyó al desastre. En los meses previos a las elecciones presidenciales de julio de 2024, tenía unas encuestas tan favorables que el Gobierno venezolano consideró prudente inhabilitarla como candidata. Machado, que nunca se rinde, nombró al veterano político Edmundo González para que se presentara en su lugar. De acuerdo con prácticamente todos los observadores cualificados, el día de las elecciones ganó por un gran margen a Maduro, el sucesor designado por el expresidente Hugo Chávez, que ocupaba el poder desde 2013. En contra de todas las evidencias se proclamó vencedor.

La proclamación descaradamente fraudulenta no sorprendió a nadie; y da la impresión de que convenció aún más a Machado de que la transición pacífica a la democracia no era viable. En los primeros días del segundo mandato de Trump habló con Rubio, un viejo conocido que acababa de ser nombrado secretario de Estado. Rubio es experto en política exterior y un anticomunista de viejo cuño que odia en especial el decrépito régimen socialista de Cuba y a Venezuela, desde hace mucho tiempo aliado y proveedor de combustible de la isla. Maduro nunca iba a permitir unas elecciones justas, insistió Machado; era un presidente ilegítimo, estaba arruinando Venezuela y había que expulsarlo por la fuerza si era necesario. Después de las elecciones, la líder opositora se había escondido por prudencia, pero en las entrevistas y reuniones por

video decía que, si llegaba a ser presidenta, abriría el país a las inversiones extranjeras y sobre todo a las empresas petroleras, a la mayoría de las cuales había expulsado Chávez en 2007.

Sus argumentos estaban en consonancia con las ideas del nuevo Gobierno de Trump, que en su anterior encarnación parecía haber estado poco interesado por Venezuela o las aventuras en el extranjero en general. En febrero de 2025, poco después de la reunión de Rubio con Machado, y en una decisión que ya no parece casual, Estados Unidos calificó a ocho grupos traficantes de la droga en América Latina —tres de ellos con miembros que operan en Venezuela— como organizaciones terroristas extranjeras. En agosto, el ejército estadounidense estacionó tres destructores lanzamisiles frente a la costa venezolana y poco después añadió buques de asalto, un portaaviones, miles de soldados y aviones grandes y pequeños. En septiembre, el Departamento de Defensa pasó a llamarse Departamento de Guerra, tres días después de que once personas desconocidas murieran en su lancha motora en el Caribe por un ataque aéreo de Estados Unidos. Desde entonces, han muerto más de cien personas.

Machado aprobó estas acciones en las mismas circunstancias. Afirmó que la estrategia de Washington era «absolutamente correcta» y que «Maduro inició esta guerra y el presidente Trump la está terminando». Lo dijo después de recibir el Premio Nobel de la Paz y asegurar efusivamente que quien de verdad lo merecía era él. (Rubio y otros siete legisladores republicanos la habían apoyado a ella). Pero Trump, que por motivos inexplicables pensaba que tenía probabilidades de ganar el Nobel, no se lo tomó bien: el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, lamentó en las

redes sociales que el comité del Nobel hubiera antepuesto «la política a la paz» y no le hubiera dado el premio al presidente. El 3 de enero, durante una inquietante rueda de prensa matinal en Mar-a-Lago, Trump dejó claro que ni Machado ni González iban a ocupar el poder: «Ella no tiene ni apoyo ni respeto dentro del país».

Hay que reconocerle a Machado el mérito de que luchó desde el principio contra Chávez y su sucesor designado y de que nunca abandonó su país para irse a Miami o Madrid —aunque eso la obligara a pasar a la clandestinidad—, a diferencia de tantos de sus seguidores de piel clara y situación privilegiada, que llamaban a Chávez «mono». (Él disfrutaba describiéndose como «un poco indio, un poco negro»). Machado, hija de un empresario, podría haber tenido una vida fácil, pero en lugar de eso prefirió quedarse ronca de gritar en interminables marchas de protesta y vivir con intimidaciones y amenazas durante más de veinte años, porque tenía la intuición de que Chávez, el populista de izquierdas que fue elegido presidente por primera vez en 1998, no quería limitarse a uno o dos mandatos e iba a llevar a Venezuela a la ruina. Fue valiente, pero también ingenua si creía que, por solicitar la invasión de su propio país, se iba a granjear la gratitud del invasor.

«Nos han robado nuestro petróleo», declaró Trump a los periodistas ese día. Tiene la profunda convicción de que todo lo que desea —Groenlandia, el Premio Nobel, una mujer— le pertenece, aunque esté enterrado en un país a miles de kilómetros de distancia. Hubo un momento fascinante en el que Trump dejó claro que la invasión de un país no beligerante tenía poco que ver con los derechos humanos, la libertad o cualquier otra cosa que no tuviera valor monetario.

¿Iba a asegurarse de que los presos políticos del régimen de Maduro salieran en libertad? «Vamos a recuperar el petróleo —dijo —. Nos robaron nuestros bienes como si fuéramos bebés». El petróleo fue su prioridad en todas sus declaraciones de esa semana. «Vamos a hacer que el petróleo fluya como es debido». «Venderemos grandes cantidades de petróleo a otros países». Varios miembros de su Gobierno enumeraron otras riquezas que podrían extraer de Venezuela: diamantes, tierras raras, oro. Pero los diamantes y las tierras raras se encuentran en zonas de difícil acceso, rodeadas de selva, prácticamente gobernadas por el grupo guerrillero más antiguo del continente, el Ejército de Liberación Nacional colombiano, así como varios grupos más.

¿Iba a haber democracia y elecciones libres? «Vamos a gobernar el país», respondió Trump al descuido. ¿Gobernar el país, como una fuerza de ocupación? Pero ¿quién estaba al mando allí ahora? Resultó que la persona que Estados Unidos había decidido tolerar o apoyar como nueva presidenta de Venezuela —«Tengo entendido que acaba de tomar posesión», señaló Trump con indiferencia— era la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. ¿En serio? Pero entonces... ¡un momento! Solo una pregunta más: si quien estaba a punto de sustituir a Maduro era la política más próxima a él, que era una chavista igual de dura y corrupta, ¿por qué habían hecho falta todos los cadáveres, el terror, los aviones de combate y el alboroto para sacarlo del país?

La respuesta es, en parte, que al equipo de Trump no le importa quién gobierne Venezuela en este momento, siempre que mantenga a toda la gente callada y proporcione acceso al petróleo, y por ahora opina que Rodríguez parece cumplir con los requisitos. Cuando

Chávez estaba muriendo de cáncer, eligió como sucesor a Maduro, su vicepresidente, un hombre afable y devoto del gurú Sathya Sai Baba. Maduro, antiguo conductor de autobús y líder sindical que, según todo el mundo, no es de grandes luces, se vio pronto en apuros, cuando los mercados y la agricultura se derrumbaron, los alimentos empezaron a desaparecer de los supermercados, la inflación se disparó hasta hacer llorar a la gente y la industria petrolera que Chávez había destruido se resistió a renacer. Unos ocho millones de personas —casi una cuarta parte de la población— abandonaron el país, muchas de ellas a pie y con poco más que la ropa que llevaban puesta.

Para conservar el poder, Maduro recurrió a la enorme red de organizaciones de base que había dejado Chávez, la represión sistemática —para la que le resultó muy útil una red de espías infiltrados en esas organizaciones— y una trama de corrupción e influencias que forzó a todas las empresas, los organismos públicos y las fuentes ilegales de ingresos a vincularse a él. Repartió la corrupción, como si fueran prebendas, en cualquier sitio en el que se podía ganar dinero. Aun así, durante todo ese tiempo, permaneció fiel al legado de Chávez, el hombre que le había otorgado su destino.

Los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, no son los típicos chavistas procedentes del pueblo. Su padre era miembro de una milicia que secuestró a un empresario estadounidense en 1976. Murió después de ser torturado en prisión, cuando Jorge y Delcy eran niños pero tenían ya la edad suficiente para recordarlo. Se convirtieron en profesionales de talento (él es psiquiatra y ella abogada); ella aprendió francés e inglés, se aficionó a la ropa

elegante y los viajes y es una persona cosmopolita, pero también radical. Ambos pertenecen a lo que los venezolanos llaman «izquierda caviar». Delcy ha sido, entre otras cosas, ministra de Relaciones Exteriores, jefa de los servicios de inteligencia y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora quien dirige la Asamblea Nacional es Jorge, que sabe cómo hablar con los extranjeros, en particular con el enviado especial de Trump, Richard Grenell, con quien negoció durante todo el año pasado la forma de que Venezuela evitara una invasión.

Maduro nombró vicepresidenta a Delcy en las elecciones de 2018 y la colocó al frente de la industria petrolera estatal. Ella empezó de inmediato a reordenar las finanzas, abrió Venezuela al libre mercado y dio a entender que el país no se opondría a ciertas inversiones extranjeras en la industria petrolera. Puede que sea chavista —aunque no socialista—, pero Maduro la mantuvo cerca porque vio que estaba obteniendo resultados. El equipo de Trump también se dio cuenta. Al parecer, mientras Jorge hablaba con Grenell, ella hablaba con Rubio.

En una entrevista con *The New York Times*, Trump dijo que hablan constantemente. ¿Debaten si ella está verdaderamente al mando o todo eso es solo una fachada? A lo mejor hablan de los entre treinta y cincuenta millones de barriles de petróleo que, según Trump, Venezuela ha prometido «dar» a Estados Unidos. O quizá Rubio está tratando de averiguar, como todos los venezolanos y el resto de nosotros, quién es en realidad Delcy Rodríguez, porque un día «invita al Gobierno de Estados Unidos a trabajar juntos y cooperar» y al día siguiente proclama que el narcotráfico y los derechos humanos «fueron una excusa» para la intervención estadounidense,

«porque el verdadero motivo es el petróleo venezolano». Abundan los rumores de que Rodríguez, hija de un socialista radical que se negó a rendirse frente a la tortura, conocida por salirse con la suya y tratar de irrumpir en reuniones de las que se la ha excluido de forma explícita, ha firmado un acuerdo similar a la Enmienda Platt, con una vigencia de dos años, para permitir que Estados Unidos se adueñe de la industria petrolera de Venezuela, mientras ella se encarga de la gestión diaria del país con una burocracia y un aparato de seguridad prácticamente intactos. De ser así, es difícil que siga considerándose chavista, puesto que Chávez era, sobre todo, antiyanqui.

Quién sabe cuánto tiempo durará en su cargo o hacia dónde se inclina su verdadera lealtad. Quién sabe qué sector de las Fuerzas Armadas o qué generales estarán dispuestos a apoyarla en los próximos meses. Quién sabe si los cientos de presos políticos serán liberados o, por el contrario, se multiplicarán. Quién puede decir siquiera qué es el chavismo en este momento, aparte de unos dos millones de personas ligadas a él por intereses personales y puestos en la burocracia. Podemos leer portales de noticias y buscar en internet durante horas, y seguir sin entender lo que sucedió el 3 de enero.

Trump no ha dicho todavía cuál es su plan a largo plazo para Venezuela. Ha repetido que Estados Unidos va a dirigir el país por lo menos en un futuro inmediato, o «mucho más» que un año, explicó en la entrevista con el *Times*. Pero Trump, en teoría, dejará la presidencia dentro de tres años. Cuanto más tiempo prolongue Estados Unidos su presencia, más difícil será retirarse. ¿Quién tendrá que enfrentarse al final a los gritos de «Fuera yanquis de Venezuela»?

El 3 de enero señaló el fin de una forma de gobierno de estilo socialista soviético, no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y Cuba; el fin de los intentos de Estados Unidos de ser buen vecino; el fin de la posibilidad de que los presidentes elegidos democráticamente en todo el hemisferio sigan confiando en poder gobernar con libertad. Lo que está en tela de juicio es todo un orden mundial, pero no hay nada que ocupe el hueco, ni siquiera un plan realista para recuperar la industria petrolera venezolana. Hay que volver a preguntar: ¿para qué ha servido todo esto?

El País Semanal, 25 de enero de 2026

11
Colombia busca la paz

«¡Corre!», le gritó el hermano de María Magdalena Padilla a su madre.

«¡Ahí vienen subiendo, váyanse ya!». María Magdalena, una niña de diez años conocida como Mayito, vio el humo negro que subía desde la base del cerro, conforme avanzaban sobre el pueblo de El Salado los paramilitares —asesinos inspirados por una retorcida ideología de derecha— incendiando las casas de los pobladores a medida que se acercaban. La madre de Mayito vació todo el maíz de un costal para que los pollos tuvieran suficiente alimento, metió algo de ropa y huyó con Mayito en el lomo del burro de la familia, mientras sus dos hermanos mayores caminaban a su lado. Se ocultaron durante una semana entera, con poca agua y casi nada de comida, en una de las casuchas que las familias campesinas de por acá mantienen en sus cultivos. «Me acuerdo que en ese tiempo los niños nos mantuvimos siempre callados —dice Mayito ahora—. Como que ni siquiera lloraban los bebés».

Desde la distancia, la aterrada familia no pudo adivinar la magnitud de lo que ocurría en El Salado, un pueblo próspero en términos rurales, en el centro de un territorio que se disputaban un grupo guerrillero y sus adversarios paramilitares. El ataque produjo

uno de los episodios más atroces de las cinco décadas que ha acarreado ya una brutal guerra ideológica en Colombia.

A quienes no tuvieron tiempo de escapar los acorralaron frente a la iglesia en un campo que se usaba para jugar futbol. Obligaron a los familiares a ver cómo las víctimas, acusadas de simpatizar con los guerrilleros, eran llevadas de una en una al centro del campo, donde se las vapuleó, torturó, apuñaló, estranguló, acribilló. Los paramilitares golpeaban a quien gritara. Violaron a las jóvenes antes de matarlas. Asaltaron el centro comunitario y, en esta región del norte de Colombia donde la música y el baile son parte fundamental de la existencia, tomaron los instrumentos de la banda local y celebraron, borrachos, cada asesinato con redobles destemplados.

La masacre de El Salado y los pueblos aledaños duró seis días, a partir del 21 de febrero de 2000. Para cuando terminó, sesenta y seis personas habían muerto. De vuelta con su familia, la niña Mayito quiso huir de nuevo al ver las casas carbonizadas y sentir el persistente olor a muerte. Esta vez nadie de su familia inmediata se contaba entre los muertos, pero el trauma ya había ocurrido: varios años antes mataron al padre de Mayito, acusado también de simpatizar con la guerrilla. Su madre empacó las pocas pertenencias de la familia mientras otros sobrevivientes se apresuraban a enterrar a sus muertos en cuatro fosas comunes. En cuestión de una semana, los cuatro mil residentes de El Salado habían huido, uniéndose a dos millones o más de desplazados en el interior de Colombia, despojados de su familia, su hogar, su modo de vida y su paz.

Lo que distingue esta historia de otros episodios de horror y sufrimiento en Colombia es que la gente de El Salado volvió. En un

tenaz retorno a esta, la más improbable tierra prometida, los saladeros recuperaron su pueblo dos años después de la matanza, despejando a machete la maleza tropical que había invadido caminos, muros y cada cuarto vacío. Los habitantes blanquearon las casas de adobe y volvieron a sembrar los campos con el tabaco que les había permitido un ingreso tolerable poco tiempo atrás. No había escuela para los niños, pero Mayito Padilla, para entonces una niña de doce años, decidió fundar una en la que se ofrecieran ejercicios de alfabetización, las tablas de multiplicar y un curso de historia en el que sus treinta y siete estudiantes revisaban sus propias experiencias para no olvidar los terribles acontecimientos del pasado.

Hoy El Salado y Colombia están transformando su herencia sombría. La niña, conocida ahora como Miss Mayito, logró obtener un título en educación parvularia y se convirtió en la cabeza de relaciones comunitarias de su pueblo natal. Y después de medio siglo en que la guerra ha girado una y otra vez sobre sí misma, y tras cuatro años de arduas negociaciones, el grupo guerrillero más antiguo de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entregó las últimas armas en junio de 2017 a un equipo de las Naciones Unidas. Para entonces la violencia había reconfigurado al país entero. Ahora será necesario ganar una paz duradera centímetro a centímetro. El Salado, que comenzó su reconstrucción antes que otros territorios, le brindó a mucha gente la esperanza de que el país también pueda sanar.

Lo cierto es que, a lo largo de los dos siglos transcurridos desde que Colombia logró su independencia de España, han escaseado los años sin conflictos violentos. Hay quienes afirman que el ciclo más reciente de derramamiento de sangre estalló el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un líder del añoso Partido Liberal con tremendo arrastre popular. Su homicidio incendió Bogotá, la capital, y en el campo provocó una oleada de matanzas partidistas que duró una década y se conoce simplemente como La Violencia. Pero mucho antes de eso, los miembros del Partido Conservador ya masacraban liberales, y con triste frecuencia ocurría lo mismo, pero al revés.

En 1957 un acuerdo entre ambos partidos para poner fin a la violencia turnándose el poder condujo a casi una década de relativa paz. En las ciudades, no muchos les prestaron atención a unas cuantas docenas de familias campesinas que combatieron del lado del Partido Liberal y no lograron con ello los prometidos títulos de propiedad de las tierras que cultivaban. Los motivó un contundente organizador comunista, y fundaron una comunidad radical escondida en el piedemonte andino. Entre quienes sí se percataron de la existencia de ese pequeño núcleo estaban el ejército, el presidente en turno y un senador archiconservador que acusó a los campesinos de querer crear «repúblicas independientes» dentro de Colombia. En 1964, una operación militar llevó a centenares de soldados a la zona, a limpiarla de *alzados*. Más radicalizados todavía después del bombardeo aéreo que padecieron, los campesinos retomaron las armas, adoptaron el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y se embarcaron en una guerra de guerrillas que duraría cincuenta y dos años.

La pequeña banda de campesinos radicales, que no tenía armas ni tampoco capacitación militar, poco a poco fue reclutando vecinos y aldeanos de las cercanías, hasta que su número superó las más fantasiosas expectativas. En los años ochenta, las FARC crecieron de nuevo de manera exponencial gracias a la guerra contra las drogas, que comenzó en Estados Unidos y se desarrolló sobre todo en México y en los países andinos donde crece abundantemente la coca. La hoja de los tupidos arbustos de coca tiene propiedades curativas y energizantes, y para las poblaciones nativas de los Andes su uso es sagrado. Estas hojas constituyen el ingrediente principal de la cocaína, un compuesto químico desarrollado por primera vez en Alemania a mediados del siglo XIX. Cuando el cultivo de coca se declaró actividad criminal más de cien años después, los campesinos de los Andes simplemente trasladaron los campos de cultivo de la que es por mucho la cosecha más rentable del país hacia zonas cada vez más remotas del vasto interior de Colombia. A pesar de los territorios cada vez más azarosos, una u otra sanguinaria mafia de la droga siempre ha estado dispuesta a pagar un precio alto por una planta que de otra forma no tiene ningún uso.

Dada la interminable demanda de drogas recreativas desde Nueva York hasta Shanghái, la guerra contra las drogas sirvió, sobre todo, para elevar cada vez más su precio. Las FARC vieron una oportunidad e intervinieron. A cambio de proteger a los campesinos de la explotación de los traficantes y asegurar precios estándar para la hoja de coca que cultivaban, las FARC aplicaron un impuesto de exportación por cada kilo de pasta de coca procesada que salía de los territorios bajo su control.

Al poco tiempo, las tropas de las FARC tenían uniformes y botas estandarizadas, y también armas estandarizadas de combate. Se calcula que llegaron a contar con casi veinte mil combatientes. La guerrilla nadaba en dinero, e inevitablemente el liderazgo se volvió corrupto, vicioso y sediento de más. Difícilmente ya podía llamárseles revolucionarios, pero extorsionaban, secuestraban y detonaban bombas con gran éxito. Y como la guerrilla de las FARC atraía la atención de los grupos paramilitares que surgían para combatirlas, lo que sí lograron fue infligir un inmenso sufrimiento a los mismos campesinos entre los cuales vivían. Los asesinos paramilitares de El Salado acusaron a los aldeanos de simpatizar con las FARC, y fueron las FARC las que, acorraladas militarmente, por fin firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano el 24 de noviembre de 2016, y entregaron sus armas en junio de 2017.

Apenas cuarenta y ocho millones de personas habitan un territorio que casi dobla en tamaño al de Francia. Del peninsular desierto de La Guajira a los altos páramos andinos, en donde es posible caminar literalmente con la cabeza entre las nubes; de las llanuras tropicales a lo largo de la costa Atlántica hasta las profundas junglas verdes que bordean la orilla del mar Pacífico, la belleza de este país quita el aliento. Colombia tiene más variedades de colibrís, mariposas, orquídeas, ranas y cualquier otro ser vivo tropical imaginable que casi cualquier otra parte del mundo.

Aquí también son muchos los ciudadanos que sobreviven en regiones de una pobreza escandalosa, lo que se vuelve particularmente claro cuando se viaja de una ciudad moderna a, digamos, la región del Chocó, donde, por falta de caminos, sus empobrecidas poblaciones indígenas y afrocolombianas aún se

transportan en lanchas por una red de amplios ríos. Los visitantes al centro turístico de Cartagena rara vez se enteran de la existencia de un barrio periférico, el Nelson Mandela, donde unas cuarenta mil personas, en su mayoría refugiados de la violencia de lugares como el Chocó y El Salado, viven en condiciones vergonzosas. Al sobrevolar este país color esmeralda se ven anchos y brillantes ríos por toda la geografía; sombreados valles cubiertos de una retacería de fincas de café; lozanos pastizales que se extienden como capas de terciopelo hacia el Amazonas.

Lo que no se ve son las minas antipersonas.

Cuando a principios del año 2000 fracasó una ronda de conversaciones de paz, la marea de la guerra se le revirtió a las FARC, que intensificaron su uso de minas —técnicamente, artefactos explosivos improvisados, porque están hechos a mano— para contener al ejército, que venía pisándoles los talones. Esas minas son amargos *souvenirs* de la lucha guerrillera, y el Gobierno enfrenta la labor crucial de erradicarlas. Con demasiada frecuencia un campesino pisa una mina plantada mucho tiempo atrás, dejando a un niño ciego por las esquirlas o a un hombre sin una pierna o un brazo, incapacitándolo para alimentar a su familia. Según el HALO Trust, una organización mundial que se dedica a retirar o desactivar minas, hace años que Colombia figura como el país con el segundo índice más alto de víctimas de minas, después de Afganistán. Desde 1990, las minas han matado o herido a más de once mil cuatrocientos colombianos, pero tanto el ejército como los grupos guerrilleros que siguen en armas las siguen usando.

«Las minas les han hecho más daño a los campesinos que al ejército», me dice Álvaro Jiménez, experto en el tema. Jiménez fue

guerrillero (la organización a la que pertenecía, el M-19, entregó sus armas al Gobierno en 1990). Hace dieciocho años se convirtió en el encargado de la Campaña Colombiana Contra Minas, que crea y patrocina programas de reducción de daños en zonas minadas por la guerrilla. «Las minas generan muchos temores, como el de atreverse a salir de noche a buscar un médico si alguien está enfermo, o, de día, al pensar en llevar a los niños a la escuela. Normalmente los campesinos viven en una relación armoniosa con su entorno. Las minas destruyeron eso».

Jiménez me sugirió que viajara al departamento de Nariño, a una región que es un mosaico de suaves campos verdes en una tierra de onduladas colinas, y que luego siguiera por la carretera que se sumerge en el indómito trópico de la costa del Pacífico. En el remoto pueblo de Ricaurte que, al igual que muchas aglomeraciones urbanas en Colombia, es una maraña sin gracia, llena de motocicletas y de ruido, me presentaron a Cristian Marín, miembro del pueblo indígena awá, que vive no muy lejos, en un resguardo indígena. Delgado, de huesos finos y apenas un esbozo de barriga, Marín es uno de los líderes más jóvenes de los awá, elegido para resolver disputas y tratar con el mundo exterior.

Marín habla en voz muy baja y confía en la sutileza, de modo que es difícil hacerse una imagen de los daños que ha sufrido su comunidad sin recurrir a preguntas torpes y directas, fue solo en respuesta a mi cuestionar insistente que me contó de la confrontación entre el ejército y la guerrilla cerca de la casa de su familia, en la que, como suele ocurrir, ninguna de las partes resultó ganadora.

«Y como acostumbran ellos —dijo Marín—, los grupos armados minaron todo cuando ya se iban retirando. Así que la gente decidió no salir de sus casas. Tenían miedo». Cercados por el temor, imposibilitados para trabajar en sus cosechas o viajar al mercado en busca de provisiones, durante meses no se aventuraron a salir más allá de sus patios, con el sufrimiento que esto conlleva. Marín no mencionó, hasta que le pregunté de frente, que él mismo perdió a cuatro parientes cercanos, víctimas de las minas. Me pareció que era tan incapaz de sentir optimismo como un árbol lo es de volar.

Conversamos bajo la sombra de un frondoso ficus, en una plaza pública rodeada de edificios municipales anodinos. Marín trabajaba como representante awá en Ricaurte, reclutado para recibir entrenamiento en derechos humanos. «Lo que quieren hacer es algo político —dijo, encogiéndose de hombros—. Hay presupuesto: los noruegos están dando dinero». Sin embargo, admitió que el esfuerzo ayudaba a los ciudadanos awá a obtener documentos legales y a presentar quejas sobre violaciones a los derechos humanos. Y como parte de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC, un programa conjunto con personal del ejército y guerrilleros desmovilizados está iniciando el lento y riesgoso proceso de erradicación de minas. El momento actual en que no hay combates también es una gran ventaja, me dijo: ahora es más fácil para los niños awá recibir al menos la pobre educación escolar que el Estado les ofrece. «En mi escuela yo siempre estaba retrasado, porque pasaba tanto tiempo bajo el colchón escondiéndome de los enfrentamientos…», dijo Marín.

En las estruendosas ciudades, con sus sofisticados restaurantes, galerías de arte y edificios de diseñador, la gente podía olvidarse de la guerra. Aún ahora que la inversión extranjera ha pasado de un mero goteo a un río, y en las calles los embotellamientos alcanzan nivel mundial, resulta difícil recordar que esta es una economía modesta, y que tiene un Gobierno que funciona con un presupuesto dolorosamente inadecuado.

En Bogotá, en su oficina destartalada, hablé con un destacado senador colombiano, Antonio Navarro Wolff. Los ciudadanos abarrotaban una sala de espera en la que apenas habría podido estar a gusto un ermitaño. El sistema telefónico parecía haber sido instalado en 1980. Navarro Wolff, que en su día fue gobernador de Nariño, es una especie de experto en posconflicto, dado que, como líder de la antigua organización guerrillera M-19, pasó exitosamente por el proceso de desmovilización y se ha mantenido siempre al tanto de las múltiples conversaciones de paz llevadas a cabo a lo largo de los años.

Le pregunté cuál de las tareas del posconflicto debía enfrentar primero el Gobierno, en vista de las limitaciones de presupuesto y de personal. ¿La restitución de sus parcelas a los campesinos desalojados por los paramilitares? ¿Educación y resocialización de unas siete mil tropas guerrilleras desmovilizadas? ¿Exhumaciones e identificación de las decenas de miles de desaparecidos colombianos? ¿Despejar las minas?

«La cuestión principal y más urgente es solo una —respondió Navarro Wolff—. ¿Quién va a ocupar la tierra abandonada por las FARC, el Gobierno o las nuevas bandas criminales?».

Los guerrilleros y los paramilitares luchan por controlar los territorios remotos, ideales para el cultivo de la coca y el tipo de amapola que se usa para hacer heroína. «Los guerrilleros pueden irse, pero la tierra sigue ahí», dijo Navarro Wolff. Y también sigue el tráfico ilegal de drogas… y la guerra contra las drogas. «Lo que necesitamos ahora es policía. En el posconflicto la labor no será ya matar criminales, sino asegurar que no haya nuevos criminales. Para eso necesitamos una fuerza de seguridad, pero ahora tenemos apenas diez mil policías en áreas rurales», explicó.

Será una gran ironía de esta guerra si se descubre que a la larga las FARC resultaron ser, con mucho, el más barato de dos males, comparado con el costo de controlar a las feroces bandas de nuevos traficantes que se apoderan de los territorios donde alguna vez pelearon por el control guerrilleros y paramilitares. El Gobierno estima que el 5 por ciento de la tropa guerrillera se rehusó a deponer las armas. Se trata de muchachos que, con el tiempo, pueden encontrar la manera de alistarse en alguna de las llamadas *bacrim* (abreviación de «bandas criminales»). Hoy estas bandas están sobre todo involucradas en el tráfico de drogas, pero lentamente se apoderan de viejos negocios suplementarios que tenían guerrilleros y paramilitares: extorsión, secuestro y tráfico de personas.

Como me dijo Marín en la placita de Ricaurte: «Por lo menos las guerrillas tenían un comando central con el que se podían negociar» asuntos como las horas de un toque de queda, o llevar a una mujer a dar a luz al pueblo. No ocurre lo mismo con las nuevas bandas criminales. «Lo único que dicen es "plata o plomo" —me dijo

Navarro Wolff, sonriendo—. Y cualquiera que tenga algo de cerebro dirá: "Ay, prefiero la plata, porque el plomo pesa mucho"».

¿Cómo le irá al 23 por ciento de los colombianos que viven en el campo ahora que hay paz? En medio siglo más de siete millones de personas han abandonado su hogar en las zonas rurales más aquejadas por la violencia de la guerrilla y de los paramilitares. Los esfuerzos del Gobierno para reconstruir y reparar se concentran en esas regiones. Diecisiete años después de la masacre que deshabitó un pueblo, El Salado es un buen sitio para buscar los primeros resultados.

Ubicado tierra adentro, a un par de horas de la costa del Caribe, en El Salado no hay mucho que ver: un enorme bache longitudinal atraviesa el centro del pueblo y un acueducto aún sin reparar hizo que el suministro de agua fuera un problema serio en los días que estuve ahí. Sin embargo, para una mayoría de sus residentes, la nostalgia por su pueblo natal tuvo suficiente fuerza como para que dos mil personas se unieran con decisión para reclamarlo, desafiando las amenazas de muerte y sus propios recuerdos terribles.

Luis Torres, un hombre elocuente de setenta y un años, con el rostro arrugado y una asombrosa vivacidad, encabezó la campaña del retorno hace diecisiete años, y cuando las primeras ciento treinta personas aceptaron la idea de volver, reunió fondos para contratar autobuses que los llevaran. Cuando visité el pueblo, Torres trabajaba como el principal intermediario entre la comunidad y la fundación de

la revista *Semana*, que durante muchos años coordinó los esfuerzos para resucitar El Salado.

Al principio, Torres tuvo que negociar con un destacamento de las FARC, que entonces controlaba la región, la obtención de un permiso para que los residentes pudieran volver a establecerse en su pueblo. Después pasó tres meses en la cárcel, acusado de rebelión, y luego se exilió durante mucho tiempo en los Países Bajos, Suiza y España, hasta que le pareció que era seguro volver. Ahora se le veía dichoso de poder mostrar las atracciones de su pueblo natal: una torre de telefonía móvil que por fin permite a los saladeros comunicarse con el mundo exterior, una guardería, un centenar de casas nuevas para las familias más pobres de la comunidad, un par de tiendas de comestibles, una iglesia evangélica, una calle que vuelve a estar llena de vida, niños que juegan y vecinos que saludan al pasar.

«Cuando la gente volvió por primera vez, sus temores estaban muy vivos —recordó Torres—. Y había un estigma que los perseguía. En las ciudades dicen de nosotros: "Si tuvieron que dejar sus casas es porque algo hicieron". Nadie quiere contratar a un desplazado. Y, por nuestra parte, sentimos una desconfianza y un temor que no desaparecen. Hasta hace muy poco, la gente no dejaba abierta su puerta».

Dependiendo de quién llevara el inventario de las mejoras —Torres o, digamos, yo—, se podrían enumerar o bien logros heroicos y contra toda expectativa, o una modesta mejora al son de donaciones de millones de dólares, sin que se hayan resuelto muchas de las necesidades más apremiantes del pueblo, como el agua, el trabajo y la educación. Y El Salado es solo un pueblito de entre los miles que están en apuros similares. Hace apenas dos años que adquirió su

mejoría más importante: un tramo de casi veinte kilómetros de carretera que redujo el viaje a la ciudad más cercana a treinta minutos en vez de las cuatro horas de antes, según lloviera o no. Quizá la transformación de El Salado simplemente le ha permitido convertirse en una más de las comunidades sin acueducto, alcantarillado, educación o servicios de salud adecuados, donde demasiados campesinos carecen de las escrituras de las tierras que han ocupado durante generaciones, pero por lo menos viven sin violencia.

El sueño máximo de Luis Torres es este: se ve a sí mismo entre la multitud, aplaudiendo mientras se corta la cinta inaugural de una escuela técnica en su ciudad natal, una escuela que formará a los chicos que hoy van y vuelven sin rumbo en sus motos, para que tengan algo mejor que una vida de pobreza extrema. «Cuando vea cortar esa cinta, moriré en paz», me dijo.

En el centro de la nueva Colombia, los exguerrilleros que desempeñaron una parte tan importante en la creación de la antigua Colombia tienen sueños aún más grandes: «Quiero ayudar a crear igualdad, no solo para nosotros, sino para todos los colombianos. Y, ¿por qué no?, para todo el mundo», me dijo un joven cuyo nombre de guerra era Alex. Estábamos sentados en un mirador, asombrados por la amplitud del valle a nuestros pies, el verdor de sus campos y la luz dorada de la tarde. Una cocina comunitaria muy elemental quedaba a nuestra espalda, y alrededor surgía a martillazos y taladros un nuevo asentamiento: uno de los veintiséis que se han construido desde cero en los últimos seis meses, diseñados para

albergar cada uno a unos trescientos guerrilleros desmovilizados. Los asentamientos son parte de un acuerdo de 297 páginas negociado penosamente entre los líderes guerrilleros y el Gobierno. Se supone que, ahora que han depuesto las armas, debe contribuir a allanar la transición a una sociedad de consumo moderna para unos siete mil combatientes.

A pesar de la calidad improvisada de los dormitorios —un cuarto hecho de cartón yeso para cada exguerrillero o pareja de exguerrilleros, inodoros y duchas comunales al otro lado de un largo corredor—, Alex estaba realmente encantado con su nuevo entorno. Veinticinco años cumplidos, dolorosamente tímido ante los desconocidos y por completo inocente de los usos y costumbres del capitalismo, parecía y actuaba más como un adolescente, como si su vida real se hubiera detenido a los quince años, cuando huyó de su familia para unirse a las FARC. «No tenía dinero ni trabajo, ni tampoco la posibilidad de estudiar: mi familia era pobre», me explicó. Dijo que nunca se ha arrepentido del camino que tomó, pero hay que preguntarse qué tanto mejoró su situación: durante los diez años que pasó combatiendo en la guerrilla, nunca durmió bajo un techo, ni vio a su familia ni usó dinero. «Cuando pienso en todo lo que me pasó —dijo—, me parece que esos fueron años solo de sufrimiento y problemas». Casi siempre dormía en una hamaca protegida de la lluvia por un plástico. Los guerrilleros se iban a dormir todos los días a las seis de la tarde para que una conversación, una risa o un cigarrillo no delataran la ubicación del grupo. Los radios no estaban permitidos, porque un infiltrado podría colocar ahí un chip localizador. Recorriendo el país con mochilas de cincuenta kilos a cuestas, los guerrilleros comían arroz más que otra

cosa, porque era fácil de cargar y preparar. Al día siguiente de terminar su etapa de entrenamiento, me contó Alex, su grupo emboscó un puesto militar y él vio morir a tres de sus jóvenes camaradas.

«Uno siente el cambio sobre todo en la tranquilidad», dijo. Y luego están los dormitorios: «Ahora cada quien tiene la oportunidad de organizar su cuartito como le gusta. Ya no es la misma hora de dormir para todos, ha cambiado, porque a algunos les gusta ver su novela, a otros su partidito de futbol». Le preocupaba que no sería fácil administrar el subsidio mensual de alrededor de trescientos dólares que el Gobierno le da a cada combatiente desmovilizado, pero por lo pronto el dinero se lo depositaban en una cuenta de banco. «Ahora que somos civiles tenemos que aprender a manejarnos, y sabemos que allá afuera se necesita dinero para todo».

Si el Gobierno hubiera sido más osado o más rico, o si se hubiera sentido menos acorralado por la fuerte oposición a los acuerdos de paz en el Congreso y entre los colombianos en general, cada excombatiente habría recibido una cantidad mucho mayor. Suficiente para montar un puesto de arepas a la orilla de una carretera, por ejemplo, o para terminar la escuela, o, en fin, para que a la persona que se reintegra a la sociedad desde el equivalente de Marte, con solo la ropa que lleva puesta, le parezca más atractiva la legalidad que la vida en uno de los grupos criminales que siempre andan contratando a cualquiera que sepa disparar un arma. El subsidio monetario terminará en julio de 2019, igual que los territorios

temporales para la desmovilización, en donde una misión de verificación de las Naciones Unidas y destacamentos de la Policía Nacional garantizan la seguridad y protección. Era casi injusto preguntarle a Alex, que aún estaba adaptándose a los requisitos más elementales de su nueva vida, cómo se imaginaba que será su futuro al terminar el periodo de transición, pero evidentemente era algo que él y sus compañeros discutían constantemente.

«Lo que más me preocupa es la seguridad», respondió Alex de inmediato. A mediados de los ochenta, una negociación fracasada con las FARC incluyó un armisticio, una amnistía y la creación de un partido político legal: la Unión Patriótica o UP. En el transcurso de una década, más de mil militantes de la UP fueron asesinados, casi todos a plena luz del día y, con propósito digamos que educativo, en lugares públicos. Ahora las FARC se transforman en un nuevo partido que debe orientar a sus excombatientes, ganar elecciones y llevar a Colombia al nuevo mundo que, según Alex, es posible alcanzar después de tantos años que gastó en la lucha. Cuando habla con lo que podría considerarse su voz heroica, Alex reflexiona sobre un futuro de esfuerzo y felicidad colectivos, pero cuando entra en confianza sueña en voz alta con la granjita que espera le consigan los líderes de las FARC, y con el grado en enfermería o el certificado en cocina a los que otros miembros de su grupo aspiran. A él también le gustaría estudiar, terminar la primaria, obtener su diploma de bachiller. ¿En la granja? Vacila. La vida es complicada e incierta para todos hoy en día, pero ¿quién sabe? A lo mejor, al final, todo va a salir bien.

National Geographic, enero de 2018

Posdata

A diez años del histórico momento en que se dieron la mano el presidente Juan Manuel Santos, en representación del orden social colombiano, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, representante de todo lo escondido y no resuelto en el país, el proceso de paz que tanto prometía es hoy una paz sitiada, amenazada por los partidos políticos de derecha, que nunca aceptaron el principio básico de que es mejor vivir sin guerra que vivir con guerra, y por las organizaciones clandestinas en armas —aquellas que admiten vivir del comercio con sustancias ilegales, y las que dicen pertenecer a la verdadera izquierda—. La presidencia del conservador Iván Duque le quitó recursos y apoyo moral al proceso de paz, y las disidencias de las FARC que volvieron a tomar las armas llevaron la violencia de nuevo a los territorios más pobres y abandonados de Colombia. También la muerte o extradición de los grandes capos de la droga de los años ochenta y noventa —Pablo Escobar, el Clan Ochoa o los hermanos Rodríguez Orejuela— llevó a la gestación de una docena de clanes de traficantes menos sagaces y mucho más violentos, que poco a poco van disputándose esos rincones tradicionalmente abandonados, tal como lo expresó el exsenador Antonio Navarro Wolff. La segunda fuerza guerrillera de los años sesenta, el Ejército de Liberación Nacional, sobrevive y lleva el daño por dondequiera que pasa. El país ha tenido que resistir la carga que significó la entrada de más de un millón de refugiados económicos venezolanos, en un momento en que el presupuesto nacional se veía mermado

por una serie de crisis en los precios de los productos de exportación más tradicionales: café, gas, petróleo y, claro, también heroína y cocaína. Y en medio de tanta crisis se atravesó la pandemia de 2020, con todos sus daños psíquicos, sociales y económicos, fuertes y duraderos.

«En estos nueve años no se han cumplido las promesas que parecía ofrecernos la paz. El país se ha polarizado, y dentro de esa polarización hay fracturas —me dijo María Victoria Llorente, directora de una de las grandes instituciones del pensamiento político en Colombia, la fundación Ideas para la Paz—. La paz fue una coyuntura que desaprovechamos. Yo creo que quizá no estábamos preparados. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que el gran reto es cómo hacer que cambie la inequidad».

Por otro lado, es innegable que Colombia hoy es un país distinto, más moderno, y en muchos aspectos mejor. Le pregunté a Llorente sobre los cambios que veía en Colombia, buenos o malos. «Tenemos una economía mucho más grande que hace veinticinco años —dijo —. Un sistema electoral que tiene muchas salvaguardas, instituciones que, a pesar de todas las dificultades, siguen protegidas por una serie de pesos y contrapesos». Y la cifra más relevante: si en la década de 1990 llegó a haber casi noventa muertes violentas por cada cien mil habitantes, hoy la tasa es de veinticinco por cien mil.

«Yo no soy mucho de optimismo», me dijo Llorente cuando le pregunté cómo veía el futuro. «Creo más bien en el posibilismo». Hacer lo que se pueda con lo poco que se tiene sin entregarse a la derrota, dar un paso más, sobrevivir a la emboscada, conseguir financiación de un violín para la banda de música, sacar el

certificado de primaria a los cuarenta años, lograr que el Gobierno reclute algunos policías más para proteger aunque sea los alrededores de las grandes ciudades. Se hace lo que se puede en la Colombia de hoy, y es demasiado poco, pero es mucho.

12
Los rebeldes de Cali

Vine a Cali en mayo, a finales de un mes en el que toda Colombia protestó contra el Gobierno. En el transcurso de esta larga insurrección, ningún otro lugar fue tan golpeado por la violencia como esta ciudad de unos dos millones de habitantes, aireada y agradable, atravesada por un río de suave fluir y protegida del sol por enormes ceibas, jacarandas y caracolís. Cali presume de ser «la capital mundial de la salsa», y, más ambiciosamente, «la sucursal del cielo». Puede ser, pero en la mañana del 28 de mayo un oficial menor del Gobierno, rabiando porque un grupo de adolescentes tercos no lo dejaban pasar por una barricada vecinal, sacó una pistola y mató a dos a quemarropa. Los otros jóvenes lo mataron a él a golpes. Era la muerte violenta reconocida número 39 en Colombia desde el inicio de las protestas, y había cientos de desaparecidos.

Se suponía que el 28 de mayo sería un día pacífico, e incluso que los desfiles festivos quizá podrían marcar el fin de semanas de agitación. Pero en esos días brutales los manifestantes fueron atacados una vez más por la policía y por civiles armados, y para cuando amaneció, cinco personas más habían muerto. El presidente Iván Duque, un conservador incapaz y en gran medida despreciado,

impuso una ocupación militar en trece regiones principales del conflicto en Colombia, sobre todo en Cali y el departamento del Cauca. En Bogotá, la capital, corrían chismes nerviosos en las altas esferas del Gobierno: el expresidente Álvaro Uribe, eminencia gris de la política colombiana, ¿estaría buscando deshacerse del hombre que había ganado las elecciones en 2018 con el lema «El que Uribe quiere»? («No soy títere de nadie», declaró Duque a un periodista hace poco). En el cotilleo aún no se hablaba de quién lo reemplazaría, y semejante atentado contra las formalidades democráticas sería inaudito en la política colombiana, y seguramente imposible. Pero aun así, el estado de ánimo era el más tenso del que yo tuviera memoria.

Lo que se nombró aquí como el gran «estallido social» arrancó ese día. La insatisfacción y la frustración que ardían desde hacía mucho reventaron cuando el ministro de Economía de Duque presentó una extensísima reforma tributaria al Congreso. Haciendo un gran esfuerzo, casi es posible entender por qué subir los impuestos le pudo haber parecido buena idea al presidente en ese preciso momento. Colombia, que nunca ha sido rica, se vio asolada por la pandemia, con más de 3,6 millones de casos de COVID-19 reportados y casi noventa y cinco mil muertes en una población de alrededor de cincuenta y un millones de personas. El país ha cargado con inmensos costos médicos y suplementos de ingresos para los pobres, a pesar de que el año pasado la economía se encogió un 6,8 por ciento. El Gobierno necesitaba dinero, y Duque decidió obtenerlo elevando los impuestos, sobre todo a los pobres.

El proyecto de ley ampliaba la gama de bienes y servicios sujetos a un ya existente impuesto al valor agregado del 19 por ciento —el

cual, como es ampliamente conocido, devora una porción mucho más grande del presupuesto de los asalariados que de los ricos—. Para 2023, prometía aplicar un impuesto sobre la renta a quienes ganaban apenas el equivalente de 715 dólares al mes. Después de leer las cláusulas de la reforma propuesta, el novelista Juan Gabriel Vásquez remarcó la obscena ironía de gravar con un 19 por ciento los funerales en un país con una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo.

Ya se habían dado grandes marchas estudiantiles contra el Gobierno de Duque en 2018, otras más numerosas y enardecidas en 2019, para protestar por una oleada de violaciones a los derechos humanos, y nuevas manifestaciones en septiembre de 2020, en plena pandemia. Después del anuncio de este año del nuevo gravamen, los líderes sindicales llamaron a un gran paro nacional el 28 de abril. Los miembros del comité de huelga sindical son en su mayoría viejos, blancos y hombres: no estaban preparados para la espontánea, ingobernable y arrolladora toma de las calles por parte de ciudadanos cuyas vidas sus organizaciones no tocan.

Las protestas arrancaron en Cali, donde un pequeño grupo de indígenas misak derribó una horrenda estatua moderna de Sebastián de Belalcázar, el conquistador español de la región. En apenas unas cuantas horas, turbulentas oleadas de manifestantes se tomaron las calles de ciudades y pueblos a lo largo y ancho del país. No solo exigían la cancelación de la ley tributaria, querían todo un mundo nuevo: uno con un sistema de justicia que funcione, acceso a la educación y al empleo para los jóvenes, una democracia electoral

que no esté corrompida por el dinero de la droga, la verdadera implementación del acuerdo de paz que se firmó en 2016 con el grupo guerrillero más antiguo del país —las FARC—, el fin del asesinato sistemático de activistas por la paz, y un alto a la fumigación aérea de las plantaciones de amapola, porque también destruye las cosechas con las cuales subsisten los campesinos. Era una larga lista.

Al día siguiente, las carreteras, calles principales y caminos de acceso, desde el departamento sureño del Cauca hasta el de Santander en el nordeste, quedaron atravesadas por barricadas y bloqueos armados por los manifestantes. El comité de huelga incluía a los líderes del sindicato nacional de camioneros, pero ellos no representan a los miles de propietarios de camiones destartalados que a diario recogen en las fincas la producción de leche o cebollas o mangos de los pequeños agricultores, y llevan el producto al mercado, para después volver a casa y dejar el camión al lado del gallinero. Esos mismos transportes eran los que obstruían el tráfico en las carreteras y caminos del país.

Solo le llevó al presidente Duque cuatro días retirar su iniciativa tributaria, pero para entonces ya nadie le hacía caso. Jóvenes con apenas ocho años de escolaridad, que jamás lograrían obtener un buen empleo, seguían marchando al lado de jóvenes con títulos universitarios que tampoco podían encontrar trabajo. Se manifestaron los maestros y también las monjas. Llovió a mares durante días sin fin, pero las manifestaciones siguieron en aumento. Los jóvenes montaron bloqueos en las calles de las ciudades, y las mujeres se organizaron para alimentarlos y recolectar trapos y vinagre como defensa contra el gas lacrimógeno. Todos llevaban la

camiseta amarillo brillante del equipo de futbol nacional y ondeaban la bandera amarilla, azul y roja de Colombia, o bien se pintaban en el rostro un mapa del país. En las ciudades, quienes no marchaban se asomaban a las ventanas a cacerolear.

Aquellos fueron los primeros días de euforia, pero incluso entonces la terrible cifra de muertos crecía: miles de manifestantes fueron atacados con gas lacrimógeno o con lanzagranadas cargadas con granadas aturdidoras y de múltiple impacto. Cientos han perdido un ojo por culpa de una bala de goma disparada por la policía, en algunos casos, indudablemente a propósito.

En ninguna otra parte del país los manifestantes han sido tan entusiastas ni han sufrido más bajas que en Cali. Uno de los bastiones de los insurrectos es un barrio de recia clase trabajadora que se ha rebautizado como Puerto Resistencia, cuyas pulcras calles están flanqueadas por modestos edificios de dos pisos con pequeños jardines resecos al frente y escaleras de caracol por fuera, que conducen a las viviendas del segundo piso. Es un vecindario de comerciantes y tenderos, y allí, por el equivalente de tres dólares, probé la mejor comida del viaje en un «corrientazo»: sopa de verduras, arroz blanco, plátanos fritos, pollo asado y jugo de guayaba, todo muy rico. Sobre esa misma calle había cinco barricadas custodiadas por jóvenes indiferentes, mientras los vecinos seguían tranquilamente con su vida.

O al menos eso es lo que vi. Las historias de extorsión son frecuentes, y los problemas causados por los bloqueos han sido enormes. Según el Gobierno, saqueadores y vándalos —quizá

provocadores— que operan en los márgenes de la protesta nacional han causado daños por un valor de tres mil millones de dólares. Han incendiado sistemas de transporte, estaciones de policía, edificios gubernamentales y cajeros automáticos. Han volcado vehículos cargados de alimentos o refacciones. También se generalizaron la escasez y el hambre.

En Puerto Resistencia hay semáforos destrozados y restos de fogatas por todas partes. Sin embargo, las encuestas muestran que una mayoría arrasadora de caleños que no son ricos siguen firmes en su apoyo a los manifestantes, como por ejemplo el arzobispo de la ciudad, Monseñor Darío Monsalve, quien señaló que, para cincuenta mil jóvenes de Cali, tradicionalmente excluidos, «las barricadas son el único medio que tienen en su territorio» para obligar al Estado a escucharlos.

«Uno va a los sectores más pobres de Cali y encuentra anarquía por todos lados», dijo Alejandro Eder, aspirante político y heredero de una de las fortunas azucareras más grandes de Colombia. Conoce bien su país y su región después de haber trabajado en programas de paz y reconciliación durante años, pero a mí me pareció que solo tenía una parte de razón. Ciertamente, el orden tradicional se ha roto en lugares como Puerto Resistencia, reemplazado por extrañas formas de organización, en su mayoría incomprensibles para los de afuera. Es poco probable que duren, pero siguen siendo una forma de organización. La versión que vi en Puerto Resistencia la patrullaban docenas de jóvenes y unas cuantas mujeres con edad suficiente para ser sus madres —y que, seguramente, en algunos casos lo eran—. Una mujer arrugada y bajita me tomó de la manga y me jaló hacia una casa que servía como sede del movimiento y

cocina comunitaria, en la que otras mujeres les estaban sirviendo sustanciosos platos de sopa a un grupo de jóvenes. Un muchacho grandote y muy imponente estaba apoltronado en una banca cuando nos acercamos. «Levántate —le ordenó mi guía—. Habla con ella».

Le pregunté si él era vocero y me respondió de forma enrevesada que ese era un término demasiado jerárquico, y en seguida se despachó un discurso tan confuso y plagado de marxismo, new age, tercer mundo y políticas de identidad a medio masticar que me fue imposible tomar notas. Desde luego, el discurso en sí no era lo que importaba. Estaba claro que era un estudiante universitario brillante y que —como prácticamente todos los jóvenes que conocí en las protestas— nunca había logrado encontrar trabajo y vivía en un hogar con su madre soltera. «Bienvenida —dijo— al país donde los hombres no han aprendido a tomar responsabilidad por sus acciones». Un muchacho flaco que había escuchado nuestra conversación contó que se había enlistado en el ejército con la esperanza de que, cuando lo dejara, fuera contratado como jefe de seguridad o como portero, pero tampoco había encontrado trabajo. Ambos tenían veintitrés años.

El punto era este: vivían en una sociedad que los hacía sentirse basura y no les ofrecía esperanza alguna. Milagrosamente, de la noche a la mañana y sin apenas guía, salvo por la orientación que el muchacho grandote pudiera obtener de los guerrilleros urbanos y rurales igualmente despistados que forman parte del ambiente de Cali, habían organizado un mundo a su medida, donde cada joven desempleado o con una educación vergonzosamente inadecuada, tenía un lugar; donde había, por lo menos, una buena comida al día para todos gracias a la continua generosidad de los vecinos —quizá

engrosada con los frutos de una pequeña extorsión, o quizá no—, y donde podían clamar a gritos, día y noche, el odio que sentían por sus desalmados gobernantes, soñando por una vez que eran libres.

El joven que afirmó no ser vocero se negó a hablar de los tiros que se escuchan a altas horas de la noche y que mantienen despierta a la gente en los barrios, aunque Alejandro Eder, el negociador de paz, sí tenía una explicación: «En algunos de los barrios más pobres, los dueños de pequeños negocios comenzaron a contratar a chicos jóvenes para que por las noches protegieran sus locales de los saqueadores. Y alguien —supongo que se refería a los guerrilleros y traficantes de drogas— les da plata a otros *pelaos* para que vayan y saqueen y echen bala. De modo que, básicamente, estos chicos son ahora mano de obra libre, y una vez que se acabe este lío nos va a tocar entrar con todo a un proceso de desarme y reintegración».

Eder y todos los demás observadores con quienes conversé acerca de la crisis creen, con buena razón, que grupos muy opuestos entre sí (incluidos los guerrilleros de izquierda del Ejército de Liberación Nacional; los disidentes de las FARC que se desmovilizaron en 2016; lo que alguno llamó «políticos populistas que impulsan las estrategias políticas basadas en el odio» —se referían al expresidente Uribe—; las distintas bandas de traficantes de drogas bien armados; y antiguos líderes paramilitares que viven en las zonas más lujosas de la ciudad) se están aprovechando de lo que ha sido una auténtica rebelión. Están, además, los blancos conservadores que ocupan la cima de una pirámide cuya base son los negros, indígenas, mestizos, y todos los desposeídos, y que han

apoyado los intentos de Duque por desmantelar los acuerdos de paz con las FARC que tanto trabajo costó alcanzar. El colapso de esos acuerdos ha traído un incremento de la violencia, a medida que las guerrillas desilusionadas y desmovilizadas se unen a las bandas que ahora asolan las zonas rurales de los alrededores de Cali.

Además, Estados Unidos comenzó a impulsar la guerra contra las drogas en América Latina en 1973 y hoy la sostiene. A fines de los años ochenta, eran tres las figuras principales que controlaban la exportación de cocaína a Estados Unidos y gestionaban su concomitante violencia: Pablo Escobar, en la ciudad de Medellín, y los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali. Con ayuda de Estados Unidos, a Escobar lo mataron en 1993. Bajo presión de Washington, los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados a Estados Unidos una década después. Como resultado, decenas, si no cientos de grupos traficantes, cada vez más violentos e incontrolables, intentan llenar el vacío. Pelean unos contra otros y contra la guerrilla, mientras buscan consolidar su presencia en Cali. Ellos también son responsables de los tiros en la oscuridad.

A Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, lo encontré en un estado de ánimo pesaroso. En Cali el alcalde viste uniforme como cualquier otro empleado público, y ese hecho inesperado, junto con su afabilidad sin pretensiones, me llevaron a preguntarle —mientras me hacía pasar a su oficina y me ofrecía asiento— si la entrevista que había solicitado con el jefe de Gobierno de la ciudad iba a ser, más bien, con él. Cirujano de cincuenta y cinco años, Ospina es hijo de uno de los múltiples líderes asesinados del movimiento guerrillero M-19, un grupo que hace mucho se desmovilizó y se incorporó a la política de centroizquierda del país. Relativamente nuevo en la vida

pública —antes había cumplido apenas un periodo como alcalde y otro como senador—, reconoció sin problema que, como resultado de la huelga, su carrera pública había estallado en llamas. Todos hablaban pestes de él, me dijo, y sonrió lastimero.

La verdad es que Ospina apenas figuraba en la retórica de los huelguistas. Lo que se había ganado era la furia y el desprecio de la clase dirigente de Cali, en parte por la forma desastrosa en que manejó el presupuesto durante la pandemia, pero sobre todo por su fracaso a la hora de traer orden a la ciudad cuando las protestas apenas comenzaban. Es justo preguntar si alguien lo habría podido lograr, pero, según él, mitigó la violencia con medidas tras bambalinas que convencieron al Gobierno de Duque de no recurrir a la fuerza para acabar con la huelga. «Si no fuera por eso, creo que estaríamos enfrentando una guerra civil ahora mismo», me dijo. Cuando las dimensiones de la huelga y el deseo del Gobierno de destruirla se volvieron evidentes, dice Ospina, hizo un llamado a la comunidad diplomática: el 4 de mayo, más de treinta diplomáticos de alto rango, sobre todo de Europa occidental y de Estados Unidos, llegaron a Cali para expresar su deseo de que el conflicto se resolviera por medios pacíficos. «Esa protección internacional nos dio un respiro», afirmó.

Unos días más tarde, esa misma semana, el ministro de Defensa de Duque llamó al alcalde Ospina para ordenarle que no permitiera la entrada en la ciudad a una delegación del pueblo misak que viajaba a Cali desde su resguardo. Ospina señaló que el derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente en su país está garantizado por la Constitución, y se negó a acatar la orden. Cuando los misak llegaron a primeras horas de la tarde del 9 de mayo, se desató una

riña entre los residentes blancos de un lujoso conjunto residencial y una docena de los misak más jóvenes. Algunos residentes se filmaron saliendo en sus motocicletas a disparar a los misak: dos murieron. En respuesta, el presidente Duque conminó a los indígenas a «que retornen nuevamente a sus resguardos», pues «hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos».

El alcalde sintió la necesidad de enumerarme el grado de complejidad de Cali: es hogar de guerrilleros, industriales, indígenas, una clase media tambaleante, afrocolombianos —o, como él dijo, una multiplicidad de agendas—. Parecía creer que la única manera de salir de la turbulencia que vivía la ciudad era a través del diálogo, pero no logré ver de qué manera la resolución del conflicto pudiera estar en manos de Ospina, dado que los gigantescos problemas de Cali son más bien los de Colombia. Sin embargo, Ospina mantenía la esperanza de que los difusos ideales y sueños detrás de ese momento de rebelión contribuyeran al mejoramiento de su país. «Si logramos salir bien de este asunto —me dijo—, puede ser transformador».

Una tarde fresca y venteada me fui en taxi al rebautizado Puente de las Mil Luchas, esquivando bloqueos y admirando al pasar los murales de protesta —cada día había más— colocados teatralmente en algunos de los doce puntos de Cali donde se han instalado las principales barricadas, desafiando a la policía. Apenas unas dos docenas de personas vigilaban el punto: uno repartía yoyos y le enseñaba cómo usarlos a un puñado de vecinos. Dos o tres mujeres

descansaban junto a un diminuto huerto orgánico de aspecto poco prometedor. Media docena más había improvisado un comedor de beneficencia bajo una lona de plástico azul.

En la calzada a sus espaldas, una escena digna de Fellini o Kusturica: un cúmulo de actores maquillados y con vestuario claramente improvisado a partir de lo que hallaran en un mercado de pulgas. Se llamaban Teatro en Re-Existencia, dijeron más o menos a coro, y se habían reunido para llevar teatro a los barrios durante la huelga. «Todos nosotros [los colombianos] estábamos cansados y estamos exhaustos por la pandemia», dijo un actor, aunque hablaban todos al tiempo y era imposible seguir la pista de quién decía qué. «Y entonces el movimiento simplemente explotó», añadió otro. «De modo que dijimos: *¡no vamos a abandonar la resistencia!*», dijo un tercero, dichoso. Un director profesional de teatro tenía el papel de comentarista de noticias; una conocida actriz encarnó a la conductora famosa de un noticiero de derechas; una profesora de actuación dotada con gran presencia teatral hizo el papel de la Madre Patria. Pronto, la pequeña *troupe* salió a la avenida y empezó la función bajo el puente, payaseando y haciendo que un público de unos veinticinco espectadores —quienes, con toda probabilidad, jamás habían tenido dinero para comprar un boleto de teatro— riera con los buenos, abucheara a los malos y aplaudiera de todo corazón.

Vivimos días impredecibles y a menudo aterradores, y es imposible negar la tensión que se respira, pero me animó considerablemente la alegría de la representación bajo el puente. Los medios muestran

más que nada a los escuadrones antimotines con sus disfraces de Darth Vader, las golpizas y los disparos de gas lacrimógeno, que estalla formando grandes nubes. Lo que aparece con menos frecuencia son las marchas eufóricas, que son a la vez celebraciones de estar vivos tras un año de temor y pérdida por la COVID-19. Colombia tiene una gran tradición de desfiles de protesta que se ha desplegado a plenitud durante estas semanas. En Bogotá se ofrecen conciertos al aire libre con la Revolucionaria Orquesta Sinfónica, dirigida por Susana Boreal e integrada por estudiantes de música y miembros de las diversas orquestas sinfónicas de la ciudad. Las batucadas de mujeres son comunes, y siempre aparecen bailarines en zancos. La rebelión ha durado semanas, y el acceso a un teléfono con cámara ya es universal. Uno de los resultados es una rica cosecha de videos musicales para *la resistencia.*

Está por ejemplo el video «Policía no me mates», un modesto éxito local creado por unos siete hermanos y primos raperos que se llaman a sí mismos Cronic Gang, y cuyo integrante más viejo tiene diecisiete años. El grupo vive a tres horas de Cali, en el puerto más importante de Colombia, Buenaventura, mayoritariamente afrodescendiente y abrumadoramente pobre, en la costa del Pacífico. Los bloqueos no me habrían permitido viajar hasta allá, de modo que el grupo y yo hablamos por Zoom. Me sorprendí de ver cuán vulnerables eran —tan negros, tan jóvenes, tan corteses y candorosamente patrióticos.

La pobreza que los rodea era evidente aun en su video musical, en el que el grupo se para frente a un muro de concreto, con camisetas amarillas y máscaras negras. Jean Pier Valencia, de diecisiete años, alias JMenny; Elián González (alias TFP), de quince años; Junior

Arley Medina (JWEIT), de catorce; y su amigo, Julián Woodcock, de dieciocho años, se turnan para rapear, implorándole a un policía que recuerde que él pertenece a la misma raza que ellos y sufre la misma discriminación. «Veía todo el tiempo en los medios cómo la policía mataba a gente inocente solo porque salía a protestar», me contó JMenny, y se llenó de indignación. «Si la policía se creó para protegernos, ¿quién nos va a proteger de ellos?».

Al igual que sus intérpretes, la canción está llena de esperanza, a pesar de que la realidad es desoladora. Los bloqueos han mantenido a otro miembro del grupo, David Villegas, atrapado en el campo, adonde fue a visitar a su abuela. En la pantalla vi que ella vive en una pequeña construcción de ladrillo. En los peores momentos de la huelga, dijo David, su familia padeció hambre. Casi no podían hallar comida, y la que había era demasiado cara. Aun así, él sentía que la huelga era algo sumamente positivo: «Le muestra al mundo cómo luchamos por nuestros derechos. Necesitamos servicios de salud, queremos una mejor educación. ¿Cómo va a ser posible que estemos en el puerto más importante del país y ni siquiera contamos con agua potable veinticuatro horas al día?».

Los chicos de Cronic Gang quieren ser famosos, pero no pueden contar con un suministro confiable de agua, y mucho menos con una educación mínimamente adecuada. Y no parece que el arduo esfuerzo de los manifestantes en este mes para cambiar su injusto país, o para que por lo menos les presten atención, vaya a aportar algún remedio. Los manifestantes han alcanzado triunfos monumentales de todo tipo: han obligado a la remoción del ministro de Economía y anularon su proyecto de ley. El uso de lanzagranadas contra manifestantes pacíficos ahora está prohibido. Duque anunció

que el cobro de las matrículas en las universidades públicas se suspendería durante el segundo semestre de 2021. Un escarmentado sector privado anda ocupado inventando programas de empleo para los jóvenes. Más importante aún, las protestas pueden haber puesto fin a la era Uribe: su posición, antes inamovible en la cumbre de las encuestas, ahora es de menos del 73 por ciento, mientras que los índices de aprobación de Duque han caído al 18 por ciento. Sin embargo, la gran indiferencia del Gobierno ante el sufrimiento de sus ciudadanos permanece inalterada. El destino que le espera a muchos colombianos sigue siendo la violencia, un sistema educativo miserable, una economía ahora doblemente arruinada por la pandemia y por las semanas de protesta. Siendo realistas, no hay mucho que hoy se pueda cambiar en el panorama de desastres que lleva fraguándose tanto tiempo.

Pero, evidentemente, la posibilidad del fracaso era lo último que estaba en la mente de miles de caleños que se reunieron la mañana del 28 de mayo al pie de Siloé, la comuna más grande de la ciudad, en preparación para la marcha conmemorativa del primer mes del paro nacional. Era claro que el país necesitaba normalidad y que la energía de las manifestaciones masivas en las calles no podría durar mucho más, pero esas consideraciones podían esperar hasta el día siguiente. Por ahora estaban las figuras de papel maché de los políticos que más tarde serían destrozadas a palos con enorme felicidad, y música de salsa-protesta para bailar y coquetear. Había una delegación ecuménica de pastores evangélicos y sacerdotes católicos, un grupo de madres exigiendo seguridad para sus hijos, un contingente de alrededor de cien misak y miles de muchachos, flaquitos, imposiblemente jóvenes, gritando y brincando, lanzando

alegres insultos a sus gobernantes, y listos para arrancar una vez más a la ciudad, esperanzados. No será la última vez que los veamos.

The New York Review of Books, 22 de julio de 2021

POSDATA

Impulsado por la euforia de la huelga de 2021, y por el rechazo general al presidente Iván Duque, en 2022 triunfó por primera vez en la historia de Colombia un candidato de izquierda, exintegrante de una organización guerrillera. Antes de ser presidente, Gustavo Petro mostró ser un senador valiente, acusador implacable del expresidente Álvaro Uribe, y un alcalde de Bogotá mediocre y desorganizado. Como gobernante, ese fue su mejor momento. Durante los primeros tres años en la presidencia, su incapacidad para concentrarse en las tareas de gobernar y ejecutar presupuestos, su incontinencia tuitera, sus veleidades y vanidades y los escándalos de su vida personal lo han hecho navegar en el descrédito en este su último año de gobierno. Será difícil que un candidato de izquierda vuelva a ocupar pronto la silla presidencial. Petro no solo no ha podido lograr «la paz total» que prometió con tanta imprudencia; la violencia se apodera otra vez de zonas recientemente pacificadas, y la intimidación política apareció de nuevo con el asesinato del más prometedor candidato de derechas. ¿Y qué hay de los alegres muchachos que desfilaron cantando por

las calles del país no hace mucho? Seguramente no les faltarán motivos para volver a aparecer, frustrados, ilusionados y desafiantes.

HÉROES

13
Una voz contra la oscuridad

Un periodista más ha sido asesinado en México, siguiendo el patrón que ya conocemos: Javier Valdez, de cincuenta años, escribió un reportaje sobre drogas, reveló demasiada información, dijo algo que alguien no quería que dijera y lo asesinaron al mediodía en una calle concurrida cerca de su trabajo. Desde el inicio del año, otros seis periodistas —ninguno tan prominente como Javier — han sido asesinados en ciudades infestadas de narcos, pero, como él era mi amigo, esta vez los detalles duelen más. Pensándolo, agradecí que, a diferencia de muchos de los más de cien reporteros asesinados en México en el último cuarto de siglo, Javier no fue secuestrado, torturado durante horas o días, mutilado, desmembrado o colgado sin vida en un puente para que todos lo vieran.

No hay duda de que Javier debió su ejecución más o menos benévola a su prestigio: solo lo sacaron de su auto y le dieron doce balazos. Recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia y el Premio a la Valentía de parte del Comité para la Protección de los Periodistas; publicó siete libros bien recibidos sobre el venenoso mundo en el que vivía, fue surgiendo como héroe para sus colegas más jóvenes, viajó y habló sin parar sobre el hecho de que, cuando un reportero muere asesinado, nadie aparece en las

marchas de protesta excepto otros periodistas. Al parecer nadie considera que es importante tener una prensa libre o sin amenazas. En vista de que la mayoría de los reporteros asesinados desde el inicio de la guerra contra las drogas trabajaba de manera anónima para periódicos pequeños de provincia, la creencia general era que alguien con el renombre de Javier Valdez estaría a salvo. De hecho, sobrevivió décadas en la madre patria del narcotráfico: el estado norteño de Sinaloa. ¿Por qué entonces no se le permitió seguir viviendo?

Valdez creció en uno de los barrios marginales de Culiacán, capital de Sinaloa. Como la mayoría de los reporteros, sobre todo en provincia, salió remontando con las uñas el pozo de la pobreza y se graduó de la universidad con un título en sociología. Él y Griselda Triana, recién casados, hallaron trabajo como editores de textos en una estación televisiva. Eso fue hace treinta años, al inicio del segundo auge del narco en Sinaloa, el que transformó al estado de simple productor de marihuana a gran intermediario del tráfico mundial de cocaína y, con los años, en el segundo mayor productor y exportador de heroína.

Javier estaba imantado a esa historia. ¿Quién no lo estaría? Más allá de Culiacán, comunidades enteras de campesinos pasaban por auges económicos absurdos y luego sobrevivían las arremetidas de una inútil pero violenta represión gubernamental. Humildes campesinos que a duras penas sabían escribir su nombre se alzaban a alturas legendarias, y toda una cultura popular —la narcocultura— empezaba a tomar forma a su alrededor. Era una gran historia, y era toda sobre los barrios como en el que Javier creció, los niños con quienes jugó, las familias y la sociedad de cuya destrucción fue

testigo. Además, la única manera que conocía de curar el dolor hemorrágico que le causaba ver destruida su tierra natal era escribir. En 2003, cuando ya era reconocido como reportero para agencias de noticias en Sinaloa, él y un grupo de colegas fundaron un periódico en Culiacán llamado *Ríodoce*, y paulatinamente intentaron ejercer un tipo de cobertura del crimen radicalmente distinta al patrón de los periódicos de provincia, con sus planas de escándalos y noticias amarillistas del momento.

Conocí a Javier cinco años más tarde, la primera vez que fui a Culiacán a hacer un reportaje. Mentaba madres como un presidiario, tenía un rostro áspero y cuerpo de guarura mexicano, barrigón y duro. Cuando sonreía, la cara se le recogía en pliegues. Es fácil entender por qué durante los primeros cinco minutos de cualquier encuentro con un extraño exhalaba paranoia, pero en mi caso sonrió como si fuera un sol cuando le pregunté si había pensado en reunir sus breves columnas semanales para *Ríodoce* en un libro. Resultó que ya lo había hecho, pero sus escritos más representativos aún estaban por llegar. Se encontraba en proceso de refinar el estilo que le serviría tan bien en el curso de incontables columnas para *Ríodoce* y cuatro libros más: detectivesca, sentimental y sin miedo a los clichés, su voz resultaba nueva para el periodismo mexicano, e idealmente apta para un amplio público. Y lo que esa voz contó fue una revelación. Esta es la columna que apareció el día de su muerte:

> El tío ya no lo aguantó. Era la vergüenza de la familia, así que decidió meterlo a un centro de internamiento para adictos. Llamó a alguien y rápido llegó la voladora: una camioneta cerrada con siete jóvenes que lo tumbaron a empujones y patadas, lo ataron con manos y brazos y luego de someterlo, lo

metieron al vehículo para llevárselo. Salieron de ahí hechos la mocha y apenas el polvo marcó la partida.

Llegaron y lo siguieron tundiendo. Se acercó alguien que parecía el que mandaba. Bien vestido, alto, con voz gruesa. Todos se detuvieron frente a él, casi cuadrándose. Bola negra, dijo. Y todos reiniciaron los golpes. Esta vez le cortaron parte de la espalda y le abrieron la cabeza. Al diagnóstico se agregó fractura de clavícula. Se quedó ahí, tendido. Le dieron paracetamol y le gritaron al segundo día ya levántate güevón. Órale, este no es un hotel.

Lo sacudieron, le dieron polvo y reaccionó. Vámonos, tenemos que ir en la voladora por otros dos. Eso era la bola negra y él debía aplicársela a otros. De lo contrario, se lo harían de nuevo. Repartió tantos chingadazos como bolas negras y fue así que logró que lo incluyeran entre los invitados a las fiestas. Otro nivel. Cerveza, yerba y perico. Las mujeres del área femenil también estaban para ellos. Podían bailar y drogarse, y luego entrar sin permiso en sus oquedades. Una vez en la burbuja nebulosa de los viajes fantásticos no había manera de oponer resistencia.

Había permisos y premios, y también para él. Se los fue ganando a fuerza de puñetazos y patadas. De decirle sí al jefe, que era el licenciado. Lo enseñaron a delinquir y a pasar las líneas de las drogas. Le pusieron de apodo el demonio. Cuando el tío fue por él le dijeron que estaba mucho mejor. Pero no lo vio. Dónde anda. Es que fue a comprar comida y a botear en los cruceros. Pero va muy bien, pronto estará totalmente recuperado. El tío se fue, aliviado por las buenas nuevas pero no del todo convencido: no haberlo visto le dejó amarga la boca.

Ninguno como él. Les decía el licenciado tráiganme al demonio y se lo llevaban. Era bueno para los golpes y para cumplir las órdenes. Un samurái de los enervantes y las luchas callejeras. Puma de alcantarillas. El demonio llegaba y *paspas*. La víctima no se levantaba en días. Un premio para él. Sabía que podía saborear la droga que quisiera, y también a las recluidas en el área contigua. Se sumergió en las arenas movedizas del placer, de los viajes en globo y del paseo por las nubes oscuras de los sótanos. Sonrió y babeó. Y así quedó, esparcido en el piso, con viscosidades en la boca. Inerme. Cuando fueron por él para aplicar otra bola negra, el licenciado dijo ni modo. Era mi preferido. Y gritó bola negra.

A lo largo de los años, sus bocetos fueron dibujando el contorno y las sombras y relieves de un mundo al que nadie fuera de esa vida tenía acceso o era capaz de poner en palabras. Gracias al texto de «Bola negra», por ejemplo, sus lectores pudieron entender por qué unos años atrás los sicarios comenzaron a hacer redadas sistemáticas en los centros de rehabilitación de Tijuana y otros pueblos fronterizos, matando a algunos internos y llevándose a otros. Pudieron especular si «el licenciado» era el Licenciado, conocido también como Dámaso López Núñez, antiguo abogado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ahora enfrascado en una guerra cada vez más sangrienta con sus hijos por el control del imperio de drogas de la familia Guzmán. Con los reporteros como yo, llegados de fuera, que no teníamos idea de esa vida, Javier se mostró infinitamente generoso: compartía contactos, anécdotas, fuentes, consejos, invitaciones a cenar, pero nosotros sabíamos que estábamos apenas en el kínder de ese universo, mientras que Javier hurgaba en el laboratorio de química de una universidad maligna, tratando de encontrar la fórmula secreta antes de que el diabólico profesor se percatara de que alguien había estado manipulando el cromatógrafo.

«Era el más imperfecto de los hombres —dijo su esposa Griselda en el funeral—. Pero tenía un corazón del tamaño del universo». Se iba de juerga demasiado, bebía demasiado, o quizá bebía la cantidad justa para sobrevivir a la tensión de negociar lo que podía y no podía decir acerca de las corrientes mortales y los cambiantes remolinos del mundo de la droga en Sinaloa. Su valor siempre me pareció incomprensible. A principios de febrero, empezó a escribir con

frecuencia sobre el Licenciado en esbozos como el de «Bola negra», y también de manera paralela, usaba sus fuentes, anónimas y profundamente informadas, para mandar noticias a *Ríodoce* y al periódico *La Jornada* en Ciudad de México. Las amenazas a las que se estaba acostumbrando se volvieron más frecuentes y más aterradoras. El día que lo mataron, Javier acababa de salir de una reunión con el equipo de *Ríodoce*, en la que discutieron su situación de seguridad. Todos estuvieron de acuerdo en que Javier tenía que irse de Sinaloa, aunque fuera por un tiempo. Los sicarios lo interceptaron cuando se dirigía a su casa.

The New York Review of Books, 18 de mayo de 2017

14
La muerte encuentra al arzobispo

Hace treinta años me encontraba en Managua, Nicaragua, cuando mi editor en *The Guardian* me llamó desde Londres para decirme que tenía que tomar el siguiente vuelo a San Salvador: habían asesinado al arzobispo de El Salvador mientras decía misa. Recuerdo haberme reído ante la imposibilidad de una historia tan literaria: «muerte en la catedral». ¡Claro que no podía ser cierto!, pensé, y luego sentí náuseas. Óscar Arnulfo Romero, un hombre terco, modesto y no particularmente elocuente que a diario insistía en condenar la violencia y el terror que reinaban en su país era, después de todo, el jerarca de la Iglesia católica en El Salvador. ¿No lo apoyaba todo el peso del Vaticano y el respeto hasta del más fanático miembro de la ultraderecha por tan alta jerarquía? Y estaba el acto en sí: un asesinato en el momento más sagrado para el catolicismo, que es la misa. ¿Quién, en un país tan religioso, se atrevería a violar la transustanciación del cuerpo de Cristo?

Por supuesto, la noticia era cierta. Hacia las 6.30 p. m. del lunes 24 de marzo de 1980, un Volkswagen Passat rojo se acercó a una capilla pequeña y graciosa, con el techo en forma de alas. Quedaba en los predios del Hospital de la Divina Providencia, a cargo de las monjas carmelitas, y ahí mismo vivía Romero. Como casi siempre en

San Salvador, era un día caluroso, y las puertas de la capilla estaban abiertas. Romero acababa de terminar la homilía y estaba de pie junto al altar cuando un hombre alto, delgado y barbudo que viajaba en el asiento trasero del Volkswagen alzó un rifle de asalto y disparó una sola bala calibre 22 al corazón del arzobispo. Luego, sin prisa, el auto se alejó. Una fotografía granulosa en blanco y negro de aquel día muestra a la víctima en el suelo. Mientras el corazón de Romero bombea lo último de su sangre, las monjas de cofia blanca lo rodean como si fueran las puntas de una estrella, o como figuras al pie de Cristo en los murales renacentistas, que tenían la doble intención de servir como representaciones y como oración.

La estupidez es el motor de demasiados giros de la historia. La revolución sandinista, que apenas ocho meses antes había triunfado en Nicaragua, le dio alas a los sueños revolucionarios en toda Centroamérica, pero el asesinato de Romero, y el caos y el derramamiento de sangre que provocó un francotirador en su funeral el sábado siguiente, quizá fueron la chispa que detonó una sangrienta guerra civil. La guerra estalló en San Salvador apenas unos meses después del asesinato, acabó con la vida de unos setenta mil salvadoreños —gracias a la financiación y apoyo militar de Estados Unidos al gobierno de El Salvador—, y habría de durar doce años.

Resulta difícil sobrestimar el fervor con el que los campesinos de El Salvador creían en Romero y en lo que se acabaría conociendo como la Iglesia de la Liberación. Cuando él no estuvo más, poblados enteros se pusieron a disposición de los diversos grupos guerrilleros, que crearon un frente unido poco después: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El arzobispo recorrió un largo camino para llegar a su muerte. Durante los años sesenta y setenta, un gran surtido de grupos guerrilleros intentó llevar a los salvadoreños pobres a la causa de la revolución, pero solo logró reclutar estudiantes universitarios y a un porcentaje mínimo de la clase trabajadora urbana. Y por esos tiempos, un gran número de monjas y sacerdotes católicos, incluidos misioneros extranjeros, se radicalizaron cada vez más, vieron con cada vez mayor simpatía a las organizaciones guerrilleras e incluso se relacionaron con ellas. Todos los testimonios concuerdan en que el estudioso Romero no se contaba entre ellos. Ni siquiera se sentía atraído por las doctrinas de lo que se conoció como la teología de la liberación, la «opción preferencial por los pobres».

Trabajador y meticuloso, fue ascendiendo en el escalafón de la Iglesia y llegó primero a obispo de la provincia rural de San Miguel, manteniendo en todo momento una estricta distancia con lo que él llamó la «mística de la violencia» de la izquierda. Sin embargo, para entonces la insistente defensa de los derechos humanos por parte de una nueva generación de sacerdotes y monjas radicalizados, además de la decisión asesina del Gobierno de violar esos derechos, sobre todo en el caso del campesinado sin tierras, creó un pequeño ejército de conscriptos para las organizaciones guerrilleras que prometían un orden mundial igualitario y justo nacido de la revolución socialista.

Durante la presidencia del general Arturo Molina (1972-1977), el ejército y las fuerzas de seguridad se transformaron en poco más que escuadrones de la muerte: Romero observó horrorizado cómo

los campesinos de su parroquia eran desplazados, amenazados, aterrorizados y, cada vez con mayor frecuencia, baleados, apuñalados o asesinados a machetazos por soldados famélicos que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad y que blandían machetes contra los suyos. Romero se manifestó contra estas atrocidades y recibió su primera amenaza de muerte (de parte del general Molina en persona, quien, agitando un dedo en su cara, le advirtió que las sotanas no eran a prueba de balas). Y entonces ocurrió que, en 1977, poco después de que Romero fuera ordenado arzobispo, el cura jesuita Rutilio Grande, amigo cercano de Romero y organizador de campesinos sin tierras, fue asesinado a tiros en un camino rural junto a dos de sus feligreses.

Los sentimientos contradictorios de Romero sobre iglesia y deber, represión y dignidad humana, su inherente desconfianza del radicalismo y la política, su prudencia y, sin duda, su temor, parecen haberse desatado en ese momento. Con la misma determinación metódica que al parecer caracterizó su ascenso a arzobispo, pasó los siguientes tres años organizando comités de vigilancia de derechos humanos, pidiendo al presidente Jimmy Carter suspender la ayuda militar a la junta asesina, hablando claramente contra el Gobierno. «De nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre», dijo respecto a un pasajero intento de presentar mejor cara por parte de la junta militar que gobernaba entonces.

Aquellos eran los días anteriores al internet e incluso al fax, y los solitarios periódicos de oposición, *El Independiente* y *La Crónica del Pueblo*, estaban amordazados, a veces más, a veces menos (el director y editor de *El Independiente*, Jorge Pinto, sobrevivió a tres intentos de asesinato antes de exiliarse). Por lo tanto, el público

urbano en general no se enteraba de los asesinatos y desapariciones perpetrados por los escuadrones de la muerte, los oficiales del ejército y una siniestra fuerza de seguridad llamada, por motivos inexplicables, la Policía de Hacienda. Pero durante sus homilías del domingo, Romero empezó a leer en voz alta el recuento detallado de las brutalidades de la semana: las docenas de casos de tortura y asesinato de campesinos que, para entonces, ya sucedían a diario. Los sermones los transmitía la estación de radio católica, y campesinos de todo el país se reunían en torno a los aparatos de radio para escucharlos. Lo mismo hacían los militares.

El arzobispo, que alguna vez fue conservador, entrenado y educado no en El Salvador, sino en Roma, se volvió el opositor más visible del Gobierno. Luego diría que cuando vio el cadáver del padre Rutilio Grande unas horas después de su muerte, pensó: «Si lo han asesinado por hacer lo que hacía, entonces yo también tengo que recorrer el mismo camino».

Tuve una primera noción del vínculo de la Iglesia católica con los salvadoreños pobres un domingo de 1978. César Jerez, que entonces era el superior de la orden de los jesuitas en Centroamérica, me sugirió que viajara por caminitos de tierra y algunos lechos secos del río hasta un pueblo en lo profundo de los escarpados cerros de la provincia de Cabañas. Hacía años que la Iglesia hacía trabajo de organización en ese territorio, creando «comunidades cristianas de base» en las que los pobladores aprendían a leer, estudiaban la Biblia, y poco a poco adquirían conciencia de sus derechos. Pero eso no era todo. Los curas —y en

menor escala las monjas— organizaron escuelas, equipos de futbol y enfermerías. Establecieron becas en las ciudades para los estudiantes con talento. Escuchaban la confesión de todos, y enseñaban, según los principios de la teología de la liberación, que los campesinos pobres como ellos merecían heredar el reino de Dios aquí, en este mundo. En respuesta a esta oleada de activismo radical, el Gobierno y las familias gobernantes de El Salvador establecieron una fuerza de campesinos paramilitares llamada Organización Democrática Nacional (ORDEN), que trabajaba de la mano con la Policía de Hacienda.

En mi primer viaje a Cabañas el padre Jerez me asignó un guía —un joven activista cristiano—, y con él, en una casita de adobe y hablando en voz muy baja, escuché e hice preguntas a los habitantes del pueblo, que iban entrando furtivamente, uno por uno, a dar su testimonio, a pesar de que al hablar conmigo ponían su vida en riesgo. Los soplones de ORDEN, me advirtieron, eran sus mismos vecinos y andaban siempre cerca. Una por una, las víctimas contaron cómo los asesinos se llevaron al hijo de una mujer y le cortaron la garganta, y cómo otra mujer encontró a su marido en una zanja «todo tuqueadito», tan desbaratado por los machetes de los asesinos que ella ni siquiera pudo enterrarlo completo. Por último, me mostraron declaraciones meticulosamente escritas a lápiz (aquí se veía la influencia jesuita en su forma más pura), donde anotaban con todo detalle la fecha y la hora de cada ataque, y enumeraban puntualmente cada cosa de valor de la que «los ORDEN» los habían despojado. «A mí se me llevaron una docena de naranjas y cuatro velas», decía una declaración típica. «Y cortaron las *pitas* [cuerdas] de mi catre, así que no tengo cama».

Después de esta visita hice muchas otras al campo. Recuerdo ver a un hombre que se había atado a un árbol para poder trabajar la porción de tierra que había heredado sin rodar por la empinada ladera de un cerro. Pero fue apenas dos años más tarde, cuando el funeral de Romero se disolvió en un caos nefasto, que realmente comprendí la ignorancia feudal en la que se mantenía a los campesinos salvadoreños. La estampida mortal la provocó, según se cree, un francotirador apostado en la contraesquina de la catedral, y ahora la multitud refugiada en el irrespirable calor de la catedral incluía a cardenales extranjeros de túnicas carmesí, y también humildes fieles que perdieron sus zapatos, sus dentaduras falsas, sus mochilas o sus lentes en la corredera. Todos deambulaban por la vasta catedral aún sin terminar intentando comprender qué había sucedido y por qué. Un hombre pequeñito y tembloroso se acercó a mi amigo Pedro Valtierra, el fotógrafo. «Por favor, no encuentro a mi hija», suplicó, y luego repitió varias veces hasta que entendimos: «Si la puede llamar con ese su altavoz». Señalaba la cámara de Valtierra.

Gracias a un extraordinario reportaje que se publicó el mes pasado en *El Faro*, un periódico salvadoreño en línea, sabemos que el alto y delgado tirador que mató a Romero fue contratado por el hijo del general Arturo Molina, mientras que el arma y el auto para la fuga los pusieron los compañeros de tragos y asociados de los escuadrones de la muerte de un excomandante del ejército llamado Roberto d'Aubuisson. No es que nadie dudara, desde el instante en que ocurrió, que el asesinato fuera obra de d'Aubuisson. Murió de

cáncer de garganta a los cuarenta y siete años, en 1992, pero mientras vivió, este esbelto y carismático psicópata fue rey. Aunque se le arrestó brevemente, nunca fue enjuiciado por asesinato, y pronto ascendió hasta convertirse en el dirigente de la Asamblea Constituyente; cuando compitió por la presidencia en 1994, perdió, pero por muy estrecho margen. Hasta el año pasado, gobernó El Salvador el partido que él fundó, originado en el escuadrón de la muerte que también fue obra suya (fue apenas este año que se conmemoró por primera vez el aniversario de la muerte del arzobispo Romero de manera oficial, después de que ganó las elecciones presidenciales Mauricio Funes, candidato del partido establecido por los guerrilleros del FMLN).

Durante dos años, el director de *El Faro*, Carlos Dada, buscó y pudo entrevistar en dos ocasiones a uno de los sobrevivientes que conspiraron con d'Aubuisson contra el arzobispo, un expiloto de la Fuerza Aérea llamado Álvaro Saravia. Antes, cuatro presuntos conspiradores más, nombrados por Saravia, ya habían sido asesinados; otro se suicidó. Algunos, como Mario Molina, hijo del general Molina, siguen disfrutando de la buena vida, pero Saravia, perseguido por sus propios demonios, vive en abyecta pobreza en otro país latinoamericano que no se menciona en el reportaje del periódico. Quizá por pura soledad, le contó su historia a *El Faro.*

Saravia narró los detalles del sicario y el papel del hijo del presidente Molina en su contratación. También reveló que un anuncio publicado en *La Prensa Gráfica* por Jorge Pinto, dueño del periódico *El Independiente*, selló involuntariamente el destino de Romero. Aparecido la mañana del 24 de marzo, informaba a los lectores de que el arzobispo celebraría una misa en conmemoración

de la madre de Pinto aquel día a las seis de la tarde, en la capilla de la Divina Providencia. Padeciendo la resaca después de una parranda con otros miembros del grupo de d'Aubuisson, Saravia despertó para enterarse de que el jefe había ordenado el asesinato de Romero en aquel lugar convenientemente apartado.

Óscar Romero es uno de los cuatro mártires cristianos contemporáneos cuyas esculturas se alzan sobre la puerta oeste de Westminster Abbey (los otros son la Madre Isabel de Rusia, Martin Luther King Jr. y Dietrich Bonhoeffer), y es significativo que la admiración de la Iglesia anglicana sea más espontánea que la del Vaticano. Karol Wojtyla fue ungido papa a finales de 1978, y con la asistencia del entonces cardenal Joseph Ratzinger, andaba ocupado desmantelando la iglesia progresista de América Latina, reemplazando a los obispos de la teología de la liberación por otros conservadores y transfiriendo curas fuera de sus parroquias. La respuesta del papa Juan Pablo II al crimen de Romero —lo llamó «una tragedia»— difícilmente tuvo el énfasis de sus ataques al clero prosandinista cuando visitó Nicaragua cuatro años después. Lleva años estancado en Roma un movimiento espontáneo en favor de la canonización de Romero.

Sin embargo, entre las filas de la Iglesia, Romero se ha convertido en una figura de extraordinario significado, como lo atestigua cualquier búsqueda rápida de su nombre en internet. Podemos hallar evidencia de esto también en una obra que pretende conmemorar el treinta aniversario de su muerte: el documental *Monseñor: el último viaje de Óscar Romero*, dirigido por Ana Carrigan y Juliet Weber y

producido por Latin America/North America Church Concerns. El documental es, quizá sin quererlo, o por lo menos sin ningún esfuerzo, una hagiografía; el registro de una vida santa. Es una asombrosa compilación de metraje de los últimos tres años de vida de Romero, y no solo del arzobispo mismo, sino de las patrullas del ejército, las madres de los desaparecidos y los guerrilleros en continuo movimiento. Pero, sobre todo, recopila esas inolvidables misas en las que el pequeño y discreto arzobispo leía en voz alta el registro de las atrocidades cometidas por el Gobierno, mientras cientos de campesinos harapientos y perseguidos comprobaban con gratitud que alguien por fin reconocía su existencia y su sufrimiento.

Entrevisté a Romero dos o tres veces antes de que muriera, y aunque no logro encontrar ninguno de mis cuadernos de apuntes de esos años terribles, recuerdo bien que no dijo nada muy centelleante, inspirador o visionario: desconfiaba profundamente de la retórica y era resueltamente discreto. En vez de palabras, tengo el recuerdo de un gesto que solía hacer con la cabeza cuando, después de la misa del domingo, se paraba afuera de las puertas de la catedral estrechando la mano a campesinos desnutridos, de manos huesudas, que venían de lejos a escucharlo con unas cuantas monedas anudadas en un pañuelo para el viaje de regreso. Los campesinos le apretaban las dos manos, miraban su rostro e intentaban comunicarle algo acerca de lo que él significaba para ellos. Entonces el arzobispo agachaba la cabeza y desviaba la mirada: «Yo no, yo no».

El día anterior a su muerte, el domingo 23 de marzo, después de que un avión fumigador roció veneno sobre una marcha de protesta, y los reporteros casi enloquecíamos a causa de la obligación de salir

a contar cada mañana los cuerpos mutilados que la gente de d'Aubuisson dejaba en las esquinas por las noches, y las madres desconsoladas se reunían todos los días afuera de la oficina de apoyo legal del arzobispo, pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos desaparecidos, y la pesadilla despierta de El Salvador clamaba al mismísimo cielo por justicia, Óscar Arnulfo Romero usó por primera vez los puntos de exclamación en su homilía del domingo:

> Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las bases de la guardia nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la Ley de Dios que dice: NO MATAR... En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión…!

Al día siguiente lo mataron.

The New York Review of Books, 27 de mayo de 2010

POSDATA

Óscar Romero fue canonizado el 4 de octubre de 2018 en una ceremonia presidida por el papa Francisco. La fiesta de San Romero se celebra el 24 de marzo, aniversario de su asesinato.

Belleza y fe

15
El soberano arte del tamal

Diana Kennedy nació en Inglaterra hace algunas décadas (a ella no le gusta ser muy precisa sobre ese tipo de cosas) y creció peleonera, enérgica y efervescente. En 1957 llegó a México con quien pronto sería su marido, Paul Kennedy, corresponsal extranjero para *The New York Times*, y después se enamoró de verdad; de su nueva vida y de un universo de sabores, colores, texturas, formas y aromas a varios años luz de los suyos. ¿Cómo podría haberse resistido? Venía de las sosas cocinas de la Inglaterra de posguerra, y en Ciudad de México una breve caminata por el mercado de cualquier barrio era suficiente para quedar fascinada: *huacales* llenos de flores del color del oro, ráfagas del ahumado perfume de los chiles secos, el barullo de una docena de vendedores compitiendo por su atención, pirámides hasta la cintura de verduras insólitas, calabazas de todas las formas posibles, guajes, melones, amaranto púrpura, tunas de un asombroso color rosado, flores de jamaica rojo sangre y, por encima del estruendo general, los gritos metálicos de las vendedoras: «¡Cómpreme, marchantita!».

Y después, apiñarse en un puesto del mercado y esperar a que una diligente mujer de trenzas picara un poco de barbacoa, cebolla y

cilantro, y con una cuchara lo dispusiera todo sobre una tortilla y entregara el humeante bocado a sus manos ansiosas: el paraíso.

También estaban las cocineras: mujeres de piel morena con manos callosas gracias a una vida entera en contacto directo con el fuego, metiendo leña a la estufa, volteando docenas de tortillas sobre un comal de barro cocido, moliendo y picando y amasando todo el día para sus maridos o en la cocina de la patrona. Con una empatía que a menudo escandalizaba a las damas de sociedad entre las que vivía, Kennedy halló un hogar natural en esas cocinas sin lujos, y, con una tenacidad formidable de la que quizá no era consciente, se propuso aprender a cocinar a la mexicana. Devoraba libros de recetas, pero también aprendió a observar e imitar cada gesto de las cocineras.

Aquí está ella en su obra maestra *Mi México* (*My Mexico*, 1998), al final de una narración de dos páginas sobre cómo aprendió a hacer tamales de espiga con las anteras secas y tostadas (las anteras son diminutas ampollas en las que se acumula el polen de la inflorescencia masculina del maíz). Después de cosechar las flores y dejarlas secar, hay que separar el polen:

> La separación no se hacía con el viento ni lanzando las flores al aire, sino pasando el fleco de un rebozo (chal tradicional) lentamente por la superficie para que las cáscaras se adhirieran a los hilos. Pero no era tan fácil como parecía. Catalina dijo que se le había olvidado su rebozo; en realidad, se lo había prestado a su hija, que lo había perdido. Mandamos a pedir prestado uno donde unas vecinas. Elena, que tenía dos, según nos dijeron, respondió que no podía encontrar el suyo; Esther acababa de lavar su rebozo y todavía estaba mojado. Yo saqué el mío, de lana, y pensé que funcionaba bastante bien, pero no pasó la estricta prueba de Catalina. Resulta que el fleco más eficaz para su trabajo es el de un rebozo de hilo común.

> Las anteras limpias, mezcladas con parte del polen amarillo brillante que se les había limpiado con el rebozo, eran de un verde pálido luminoso, pero había que ponerlas a secar.

Uno solo puede soñar con reproducir la receta de los fragantes y esponjosos tamales hechos con esas refulgentes anteras verdes, pero lo que es igualmente importante para muchos no mexicanos es la visión íntima que ofrece Kennedy sobre la vida de los pueblos mexicanos, con sus temporadas agrícolas, su pasión por la cocina y sus chismes (¡«Por supuesto» que Elena no había perdido ese rebozo!). Dentro de no muchos años, cuando todas las tradiciones se hayan perdido y todos los mexicanos sustituyan con cubos de concentrado el embriagante y sanador caldo de pollo, y coman pan para sándwich en vez de bolillo y tomen jugo de naranja en tetrabrik en lugar de jugo exprimido al momento que es un deslumbramiento para el paladar, la obra de Kennedy les permitirá también a ellos adentrarse en ese lugar de infinita nostalgia llamado «la tradición mexicana».

Los libros de Kennedy fueron la extensión lógica de su ferviente evangelización en aras de sus descubrimientos en el Nuevo Mundo. Tras la repentina muerte de su esposo —el otro gran amor de su vida—, vivió en Nueva York, y en el deplorable paisaje alimenticio de aquellos días, que recuerdo con toda claridad, los dos o tres puestos de avanzada que servían comida Tex-Mex en Manhattan vendían unas plastas pegajosas y repugnantes que nadie en su sano juicio querría tocar. A veces sentía que yo era la única mexicana en la ciudad, añorando aunque fuera un poco de cilantro fresco o un

mango. ¡Si tan solo hubiese conocido a Kennedy entonces! Ahora la ciudad está llena de migrantes llegados de los estados de Oaxaca y Puebla, que trabajan diez y dieciocho horas al día, que traen consigo sus refinados gustos culinarios y llenan los mercados locales con las más frescas hierbas y verduras. Pero fue Kennedy la que creó el primer público entusiasta para esos productos. Buscando ingredientes aquí y allá, Kennedy dio clases en su cocina para enseñar algo de lo que había aprendido. Craig Claiborne, el gran y benévolo crítico gastronómico de *The New York Times*, se lo había sugerido, y con uno de esos consejos que se dan al vuelo y cambian la vida de quien lo recibe, durante una cena también la animó a escribir un libro.

Se dedicó a ello con el fervor que la caracterizaba, compilando, probando, aprendiendo a escribir y luego lanzando una fuerte campaña para promoverlo, hasta ganarse el afecto de los equipos de ventas en Harper's a fuerza de cocinar para ellos y luego acarrear comida para los vendedores de libros durante su convención anual. Su primer libro, *The Cuisines of Mexico* (*Las cocinas de México*, 1972), fue revelador desde el título mismo; anunciaba que la comida mexicana es tan variada regionalmente como la china o la francesa, y que prepararla es un arte culinario. Fue un éxito inmediato.

Vino a vivir a México, y construyó una casa de adobe en el hermoso estado de Michoacán, adelantada a su tiempo en su obsesión ecológica. Allí montó un jardín orgánico de plantas comestibles y, con una estufa para acampar adaptada a la parte trasera de una camionetita desvencijada, comenzó su infinito peregrinar por toda la república mexicana. La descripción que hace en *Mi México* de un viaje a Mascota, Jalisco, en busca de los dulces

de fruta perfectos es para poner los pelos de punta. Después de chocar con un autobús que venía en sentido contrario y de una larga negociación con la policía local,

> las últimas dos horas y media fueron, de lejos, las peores. Al principio, la carretera estaba sombreada por árboles a lo largo de un pequeño río, y había algunas granjas y unos cuantos niños jugando, mientras sus padres charlaban tomando una cerveza.
>
> Nos detuvieron dos veces unas enormes máquinas que intentaban despejar la carretera de una avalancha de rocas y tierra, y luego comenzamos un precario descenso cuando la carretera se estrechó considerablemente al bordear la ladera empinada. La superficie de gravilla suelta la hacía resbaladiza, y las curvas eran cerradas y ciegas… A medida que descendíamos, teníamos una vista lejana del amplio valle que se extendía a nuestros pies, y pronto divisamos los tejados de Mascota… la Esmeralda de la Sierra, como se la conoce localmente. Para entonces era ya última hora de la tarde: el restaurante del que tanto habíamos oído hablar estaba cerrado por una boda, así que nos apresuramos a ir a ver a la señora famosa por sus conservas. Había ido a misa, una misa larga, según nos dijo su hijo, pero finalmente se apiadó de nosotros y nos dejó entrar para comprar sus aclamados productos.
>
> ¿Dónde estaban los melocotones rellenos que habíamos venido a comprar? Este año no hubo cosecha de melocotones… Pero qué variedad de dulces había: *ates* [mermeladas sumamente espesas] de frutas locales —peras, manzanas, guayabas y tejocotes, un tipo de manzana silvestre —; finas láminas de conserva de fruta enrolladas con una capa de azúcar, siendo las más deliciosas las de color verde pálido y más ácidas que las demás, hechas con mangos verdes al vapor.

Por supuesto, Kennedy trabajó al lado de la cocinera para aprender a hacer este último manjar, una creación perfumada que juega en el paladar con tantas descargas contrastantes entre lo

dulce y lo ácido, lo maduro y lo que apenas está verde, que una vez me comí un gran bloque de ate de mango verde en el transcurso de un solo día y me entristeció que no hubiera más.

Kennedy coleccionó vorazmente todas las recetas que encontraba: de otros libros, de sus amigos y, cada vez más, de mujeres en todo México cuyos nombres menciona en el encabezado de las listas de ingredientes, a menudo seguidas de pequeñas viñetas. Algunas de sus mejores recetas son tan sencillas que el nombre del platillo es también su descripción, como «tortillas apiladas con salsa de guacamole y tomate» y «huevos revueltos con chorizo» (en esos casos encontramos tanto la lista completa de ingredientes como su preparación).

Su incontenible interés por la exótica vida que la rodeaba hizo que, inevitablemente, los siete libros de cocina que escribió abarcaran mucho más que una colección de recetas, pero es posible ver que en cada libro sucesivo se desviaba más de la cocina mestiza de las ciudades hacia las raíces rurales e indígenas de la cultura mexicana. Evolucionó hasta convertirse en una especie de historiadora etnobotánica muy en deuda con los escritores-exploradores del siglo XIX.

Era de esperar que alguien como ella, siempre tan consciente del paisaje y que, además, conocía los rincones más apartados del país, se enfureciera con la devastación ecológica y cultural que padece México. Quisiera mucho despotricar largamente sobre nuestras carreteras flanqueadas de basura, la pérdida casi cotidiana de especies nativas, los bosques destruidos por taladores del mercado

negro, traficantes de drogas y pobladores sin tierra, el lento desgaste de nuestros hermosos mercados gracias a Wal-Mart y otros establecimientos parecidos, y el reemplazo en los Wal-Mart locales de todo lo fresco por lo procesado —para dar un ejemplo, el reemplazo de las pasitas de uva mexicanas por los arándanos secos importados—, pero no lo haré. Es suficiente decir que el libro más reciente de Kennedy, *Oaxaca al Gusto: An Infinite Gastronomy*, es un homenaje a uno de los estados de México económicamente más pobres pero culturalmente más ricos, así como a su población indígena, cuya inmensa miseria al lado de su obstinada y frágil belleza escalda el corazón.

El libro en sí es hermoso y está repleto de fotografías, muchas de ellas maravillosas, en su mayoría tomadas por la autora. Pero, aunque parece listo para ocupar su sitio en la mesa de centro, su objetivo es claramente convertirse en el trabajo definitivo sobre el tema. Para apuntalar esa ambición, el libro recoge ensayos de varios oaxacólogos que bien podrían haberse quedado fuera (aunque lo que inexplicablemente se ha dejado fuera es un índice alfabético). Lo que cuenta es la colección de recetas. Reunidas por Kennedy durante el curso de toda una vida, revelan un universo en el que la comida es rito y sustento, donde la agricultura y la cocina forman parte de un solo y perpetuo círculo de transfiguración.

Quizá no todo el mundo sienta deseos de preparar la salsa de nido de avispas que Kennedy encontró en los alrededores de Puerto Escondido, pero uno no deja de asombrarse al leer una receta que parece llegar hasta nosotros directamente del tiempo de los cazadores-recolectores. Primer paso: encuentre su nido de avispas. Segundo paso: disfrute el sabor de unas cuantas larvitas frescas.

Tercer paso: invente el maíz, desarrolle la tortilla, muela el nido —la parte que tiene los huevos de avispa— entre una piedra y un fragmento de roca volcánica ahuecada, y échese un taquito. «Interesante y delicioso», es como Kennedy describe alegremente el resultado.

La ventana que Kennedy abre más a menudo al pasado no mira hacia la Edad de Piedra sino hacia la deslumbrante era de los grandes reinos de la preconquista, con su elaborada vida cortesana y su continua exploración del exquisito mundo de «flor y canto». Las flores se usaban para llevar un manojo a la altura de la nariz mientras se paseaba con estilo principesco, o bien para saborearlas. El libro abunda en recetas para flores de calabaza y fragantes floraciones de cacaloxóchitl (plumerias), flores de maguey y de palmera, que creo que nunca he probado.

Hay un gran número de recetas cuya base es la masa de maíz molido. En la cultura de la comida mexicana el maíz lo es todo: bebida (atole), pan (tortillas), espesante (chilpachole), masa (tamales). Las clases medias prefieren cada vez más comprar productos de harina de trigo, como el pan (que duran más en el refrigerador), pero la mayoría de los mexicanos todavía consume diariamente alguna forma del maíz. Tomemos, por ejemplo, el típico desayuno de la clase trabajadora, que consiste en un bolillo relleno con un enorme tamal picoso y ardiente (torta de tamal, o *guajolota*), servido con una taza de humeante atole de fresa o vainilla: una combinación disponible al amanecer por menos del equivalente de dos dólares afuera de cualquier estación de metro en Ciudad de

México. Como diría Kennedy: «¡Delicioso!». Los tamales merecen por sí solos uno o más libros: esponjados gracias a una generosa cantidad de manteca de cerdo y sin embargo con una textura granulosa adictiva, la masa envuelve rellenos tan simples como frijoles refritos u hojas picadas de algún tipo, o tan complicados como moles o, mi favorito, carne de cerdo en una salsa verde que pica la lengua, hecha con chiles serranos y tomatillos. Ahora, para los estirados, también hay variaciones como los tamales de langosta, y no están mal.

Luego está la tortilla, que merece una docena de tomos, de los cuales Kennedy ya escribió uno. A menos que usted sea extraordinariamente afortunada, nunca habrá comido una fragante tortilla palmeada a mano, hecha con maíz cosechado en una milpa cercana y recién molido. Debería añadir eso a su lista de dolorosos arrepentimientos. Las tortillas hechas a mano están desapareciendo a medida que las mujeres se unen a la fuerza de trabajo, y los magnates de la tortilla industrial, que sustituyen la gloriosa masa original con otra hecha a base de aserrín y lodo, arruinaron las tortillas comerciales. Estas vulgares imitaciones no se enrollan bien, lo que dificulta hacer enchiladas, por ejemplo, y sospecho que el furor por la sopa de tortilla y los chilaquiles tiene que ver con el hecho de que la forma más sencilla de hacer que las tortillas de hoy queden sabrosas es freírlas y remojarlas en alguna otra cosa (hay pocas cosas más deliciosas que una buena sopa de tortilla, pero ese es otro tema). Para quien cocina en casa, Kennedy recomienda usar el método común de colocar una bolita de masa comercial en una prensa para tortillas cubierta con dos hojas de plástico, y funciona bastante bien.

En México, los platillos que están hechos a base de masa por lo general se preparan con un maíz molido que primero se cuece con cal para suavizarlo y aflojar el hollejo —la pielecita que cubre cada grano—. Pero Kennedy encontró que muchas cocineras tradicionales en el centro de Oaxaca insisten en que el maíz que se usa para espesar moles o preparar tamales debe remojarse en ceniza de madera, por motivos que parecen estar más relacionados con el ritual que con el sabor. El libro incluye instrucciones para ese método. También en el centro de Oaxaca, encontró cocineras que preparan huevos cocinados en ceniza y, obsesivamente, anota también esa receta. «Estos huevos tienen un sabor distintivo, pero la textura ligeramente arenosa no será del agrado de todos —admite, añadiendo, siempre intrépida—, ¡aunque son saludables!». Quizá para los que hayan nacido dotados de una molleja.

Sin embargo, esta es una de varias recetas en la colección que nos llevan de regreso al inicio de los tiempos. De repente estamos acuclillados en torno a un fuego que apenas hemos aprendido a manipular. Primer paso: rostice lo que haya cazado —tapires, monos, aves— en un palo sobre la llama. Segundo paso: entierre las cosas que escarbó o buscó —yuca, calabazas, huevos— en las cenizas. Tercer paso: invente la arcilla, haga un comal y disfrute (¡por fin!) de la comida preparada sin arenilla.

El cuarto paso, quién sabe cuánto tiempo después, fue inventar la olla. Gran parte del libro de Oaxaca está dedicada a la comida de olla, y no exactamente una sopa o un guisado, sino moles caldosos: carne de res o pollo y muchas verduras maravillosas cocidas en un

caldo que cobra vida añadiéndole distintas combinaciones de chiles finamente molidos (*mole* significa comida molida, como el guacamole). A lo largo de México, estas comidas en olla a menudo se coronan con pequeñas bolitas de masa, y Kennedy nos dice cómo hacer la característica hendidura que tienen, presionando el pulgar en cada bolita antes de colocarla en la olla hirviente. En el libro de Kennedy se llaman *chochoyotes*, aunque también se les dice *ombligos*, y aquí, si me permiten los lectores a quienes ya les he pedido demasiada indulgencia, tengo una idea: en el mundo prehispánico no había cuatro direcciones sino cinco: norte, sur, este, oeste y arriba-abajo. Arriba-abajo era el *axis mundi*, el ombligo del mundo, y en esta dimensión vivía el antiguo dios del fuego. Pero como todo en el pensamiento prehispánico está unido a su opuesto, el eje que habita el dios del fuego está hecho de agua. Quizá los «ombligos» de estas recetas conmemoran la unión de agua y fuego que se lleva a cabo dentro de la olla.

Tales son los desvaríos que inspira el mundo tan bellamente representado en *Oaxaca al gusto*, con sus zambullidas en el corazón mismo de una antigua cultura culinaria. Pero a estas alturas ya se estarán preguntando, ¿y qué hay de la parte de comer? No queremos comer huevos cocinados en arenilla, y estamos cansados de todo este filosofar. Pues en el libro también hay una parte sobre comer, y debido a que los moles son lo que mejor se hace en Oaxaca, hay quince recetas para quince moles distintos. Los moles son famosos por la complejidad de su sabor, y es cierto que lleva tiempo prepararlos, pero técnicamente no son difíciles de hacer. No soy una consumada cocinera de platillos mexicanos —ni de ninguna otra cosa, por cierto—, pero decidí que debía poner a prueba el libro

preparando uno de sus moles, uno clásico, rojo, del istmo de Tehuantepec: *Mole rojo ixtepeño*. Como un primer paso indispensable, consulté el libro de Kennedy titulado *Las cocinas esenciales de México* (*The Essential Cuisines of Mexico*, 2000), donde se dan instrucciones claras para seleccionar y preparar varios ingredientes. De vuelta a la receta, trabajé lentamente y seguí las instrucciones, solo que reemplacé la manteca de cerdo que pide Kennedy con aceite de cocina, y el chocolate mexicano por el de Oaxaca, que es menos dulce, porque no lo pude conseguir.

Quité las semillas y las venas de una mezcla de chiles chipotle, ancho y guajillo, los freí rápidamente con mucho cuidado y luego los molí en la licuadora con un poco de caldo de pollo hasta convertirlos en una pasta aterciopelada. Puse a asar unas rebanadas gruesas de cebolla en el comal a fuego medio y dejé que se tostaran un poco, luego las molí con una mezcla de ajo, tomillo, laurel, pimienta, canela y un par de hojas secas de aguacate, ligeramente tostadas. Freí esa mezcla en el aceite muy caliente y añadí los chiles molidos. Asé unos cuantos jitomates muy maduros en el comal, los herví en un poco más de caldo y luego los molí muy bien. Por último, añadí unos dos puñados de pan dulce tradicional mexicano, y también el chocolate. Dejé que todo se cocinara y maridara, y luego lo probé.

¡Delicioso!

The New York Review of Books, 28 de abril de 2011

Posdata

La indomable Diana Kennedy, defensora de las maravillosas y variadas cocinas de su país adoptivo, murió el 24 de julio de 2022, a la grandiosa edad de noventa y nueve años. En 2019 aún viajaba dentro de México y al extranjero dando conferencias y cocinando.

16
La enredada naturaleza del amor
Roma, de Alfonso Cuarón

El agua cae en oleadas frente a la cámara durante largos minutos al comienzo de la película. Escuchamos el restregar de un cepillo de cerdas mientras las burbujas de jabón entran y salen flotando del encuadre, y por fin el plano se abre para revelar a una joven, con una cubeta de estaño en una mano y un jalador en la otra.

El área adoquinada bajo el cepillo es la cochera abierta de una casa en uno de los barrios más tradicionales de Ciudad de México, y cualquier espectador mexicano sabrá, sin pensar siquiera, que la persona con la cubeta es una empleada doméstica atareada en la limpieza matutina. Sabrá su ocupación antes de ver su rostro, porque tiene la tez oscura y está tan pobremente vestida que no podría ser otra cosa en una casa de ese tamaño, y porque rezuma un aire de calma y de paciencia enraizadas. Lo que no necesariamente notará es que ella, Cleo, es la protagonista de la película, porque ninguna película mexicana, fuera de las absurdas y ofensivas comedias estelarizadas por la India María, habían tenido nunca como protagonista a una sirvienta de casa.

(Solo después entendemos que eso que Cleo está tan ocupada limpiando es la más sucia de las suciedades: caca de perro, suministrada en grandes cantidades por Borras, un alegre chucho

que es el perro de la casa, pero no exactamente su *pet*. Las mascotas al estilo estadounidense no existían realmente en México en 1970, el año en que empieza la película).

Para un espectador de Estados Unidos —o al menos para aquellos espectadores que nunca han conocido a una empleada doméstica, no han sido empleadas domésticas, no conocen a nadie que emplee a una sirvienta, ya sea de jornada completa o de media jornada, ni han contratado nunca a una mujer para que les proporcione ayuda doméstica—, leer al personaje de Cleo, y por extensión comprender a sus patrones, quizá resulte más complejo. Veamos la casa con cuidado: está en la colonia Roma, un barrio que hace mucho dejó de ser elegante. Grande pero no enorme y algo deteriorada, ciertamente no es una casa lujosa. Además de Cleo y su mejor amiga —Adela, la cocinera—, viven ahí siete personas: cuatro niños que comparten dos cuartos, su padre, que es médico, su madre, química, y la abuela. Los muebles, pesados y oscuros, muy probablemente pertenecen a la abuela, y tal vez la casa también. ¿Cómo lo sé? Porque en los años sesenta, profesionales como los patrones de Cleo vivían en casas más nuevas y cómodas en los suburbios, o en apartamentos fuera del centro que eran más baratos y más fáciles de cuidar que una casa.

Esta es la casa en la que creció Alfonso Cuarón, el director de *Roma* (2018). O al menos es la recreación —meticulosa hasta la locura— de aquella casa. Y esta es la historia del recuerdo de Cuarón de una época turbulenta en su niñez. La película está filmada en paralelo a la acción, como si la cámara fuera el fantasma de Cuarón, que vuelve para visitar su infancia y observarla en silencio, con la compasión y la distancia que a veces nos otorga la fortuna, de

poder examinar nuestra juventud pecadora y la de nuestros padres. La heroína, sin embargo, es Cleo, la nana cuyo afecto, a diferencia del de los progenitores, nunca vacila ni desconcierta, y que, a diferencia de Mary Poppins, una nana distinta e infinitamente irritante que se puede ver en otras pantallas de la ciudad, sí hace milagros. Cuarón llevaba años pensando en ella: en su precoz obra maestra, *Y tu mamá también* (2001), alcanzamos a ver un minuto a Liboria Rodríguez, la verdadera empleada de la casa de la familia Cuarón, cargando una bandeja de comida por una larga escalinata y entregándosela con una afectuosa palmadita al júnior interpretado por Diego Luna. El personaje de Luna es casi ajeno a sus cuidados, su esforzado viaje por la escalera, su amor por él, su duro trabajo. Casi, pero no totalmente. Más tarde en la misma película, desde el auto en el que viaja Diego Luna como pasajero, ve un letrero en la carretera que dice «Tepelmeme», el pueblo donde nació Liboria en la vida real. El personaje de Luna lo ve y reflexiona que ese es el sitio de donde vino una nana a la que alguna vez llamó «mamá».

Así que, ¿quién es Cleo? Los subtítulos nos dicen que la lengua en la que habla con Adela, la cocinera, es mixteco, de modo que sabemos que proviene de una serranía desesperadamente pobre que comprende los estados de Puebla y Oaxaca. Su talla pequeña y la forma de su rostro lo confirman, porque las diferencias entre las docenas de nacionalidades, lenguas y costumbres de los primeros pueblos de México son tan extremadamente distintivas como las de los europeos. Habían, y sobreviven, entre otros, apaches de huesos largos en el norte, purépechas y mexicas en el centro, y zapotecas,

mayas y mixtecos de fina complexión en el sur. Tanto la Liboria de la vida real como la actriz primeriza que la representa —Yalitza Aparicio, una maestra de preescolar recién graduada— son mixtecas. Aparicio vivía en su pueblo natal en Oaxaca cuando Cuarón la reclutó para el papel de Cleo.

Por último, Cleo es parte de una familia, o más bien de dos. Pertenece a una familia allá en su pueblo, desde luego, pero *Roma* trata de la familia para la que trabaja y con la que vive. A las niñeras se las suele identificar en todas partes como «parte de la familia», y las familias tienden a reflejar las sociedades de las que son pilar. En este caso, Cleo es y seguirá siendo durante toda la película —y, entendemos, más allá de ella, al igual que la Liboria de la vida real— parte de una familia mexicana jerárquica, explotadora, desigual, inestable y sin embargo leal y, sí, amorosa también.

Cleo y Adela (representada con relajada autoridad por otra actriz mixteca no profesional, Nancy García) probablemente son parientes. Adela, la mayor de las dos, tal vez emigró a la ciudad primero, en busca, igual que Cleo, de una vida mejor que la árida subsistencia con la que ella y su familia sobrevivían a duras penas en su pueblo, con su extenuante carga de trabajo infinito que transforma a las mujeres en ancianas antes de cumplir los cuarenta. Pero a Cuarón no le interesa representar a Cleo antropológicamente. Quiere mostrarnos lo que ella era para él, y contarnos la historia de Ciudad de México y de lo que le pasó a Cleo el año en que su propia familia quedó destrozada.

La vida en la capital es a la vez emocionante y placentera para la tímida Cleo, y también para Adela, más atrevida. Comparten un cuarto atestado en la zona de servicio de la casa del patrón: ¡qué

solitas se sentirían si tuvieran que dormir cada una en un cuarto aparte! El trabajo es deliciosamente sencillo comparado con el castigo que dejaron allá en casa, y el dinero también es mejor: ¡pueden comprar una torta y un refresco cuando se les antoje! Y son afortunadas de haberse topado con buenos patrones: tienen un día libre a la semana. Como para todas las nanas que viven en casa —y, es más, para cualquier ama de casa de tiempo completo—, los días de Cleo son tan largos como los de los cuatro niños a los que cuida. Les canta para que se duerman, los despierta con una caricia, se nutre de la forma en que sus ojos se derriten de amor cuando les da las buenas noches. Cleo casi no habla cuando está con ellos, en parte porque su español no es perfecto, pero a solas con Adela se ríen y parlotean todo el tiempo en mixteco, hablando de novios, los patrones o los niños.

La emoción de ir seguido al cine en uno de esos churrigueresco palacios que antes salpicaban la ciudad es solo reemplazada por la emoción del romance. Cleo cae redonda por Fermín, un capitalino despabilado. Sabemos que el muchacho no es de fiar desde el momento en que se toma a escondidas el refresco de Cleo antes de volver con ella durante su cita, pero, al igual que ella, quedamos deslumbrados por su gracia y su belleza. Fermín le dice a Cleo lo que Cuarón quiere que sepamos: que es criatura de Nezahualcóyotl, una «ciudad perdida» en las afueras de la capital. Hoy el lugar es una ciudad en forma con un millón de habitantes, pero en la época de la película era una vasta extensión de lodo maloliente sin calles pavimentadas, postes de luz, agua o servicio telefónico, donde miles de inmigrantes que llegaban de las tierras secas del sur hallaban donde asentarse.

Fermín bebía mucho, inhalaba chemo, y en general era un desastre, le dice a Cleo, pero descubrió las artes marciales, de las cuales acaba de darnos una demostración tan cautivadora. Ahora, dice, es un hombre distinto, más poderoso. Por supuesto, embaraza a Cleo. Por supuesto, se va cuando ella le da la noticia. Por supuesto, el día que ella va a buscarlo a Nezahualcóyotl, donde él forma parte de un grupo de kendo que está entrenando con palos de madera, él niega que el niño sea suyo y la llama puta. Mientras tanto, al ver los camiones de la basura estacionados detrás del campo donde entrena, sabemos que Fermín es empleado del departamento de limpieza de la ciudad.

Y ahora sí, ya que se nos ha presentado a los personajes principales de *Roma* con calma y con algo de detalle, pero no demasiado, la acción avanza como un tanque que se tarda un poco para llegar a velocidad crucero, pero que luego es casi imposible detener. Los eventos decisivos ocurren el día de Corpus Christi, una fiesta movible que celebra la transubstanciación del cuerpo de Cristo, y que en 1971 cayó el 10 de junio. Una Cleo tremendamente embarazada va a una mueblería, junto con la abuela dueña de la casa, a comprar una cuna para el bebé que está por llegar. En la obsesiva recreación que hace el director de los eventos de la vida real de Corpus Christi, vemos a las dos mujeres pasar por una escena callejera que los habitantes de Ciudad de México han llegado a conocer bien: calles flanqueadas por vehículos militares blindados, camionetas de la policía, policías fuertemente armados y hombres tensos vestidos de civil que cargan armas no tan ocultas.

También caminan hacia la amplia Ribera de San Cosme cada vez más jóvenes, dirigiéndose al lugar de concentración de una marcha

de protesta a dos cuadras de distancia. En la vida real, habían pasado menos de tres años desde la espantosa matanza de los Juegos Olímpicos en la Plaza de Tlatelolco, y la marcha en el Corpus Christi era la protesta más numerosa desde aquel evento. Al inicio los manifestantes entonaron el himno nacional, y en el brillante paisaje sonoro de la película el canto se va acercando desde fuera de cámara. Un creciente murmullo de pánico que se levanta en las calles hace que los clientes de la mueblería corran a asomarse a las ventanas.

Aturdidos, ven cómo se rompe la protesta bajo el ataque de hombres que hacen uso de palos de kendo y pistolas. Los manifestantes se diseminan como una columna de hormigas amenazada por una antorcha, y ahora su absoluto pavor penetra la tienda hasta el mismísimo umbral del cuerpo de Cleo. Un grupo de asesinos vestidos de civil irrumpe en la sala de exhibición, con las pistolas apuntando a un aterrado manifestante. El joven recibe una bala y cae muerto; otra pistola le apunta a Cleo, y del otro lado del arma hay un rostro tallado por la adrenalina en punta feral: es Fermín. Por supuesto. Quienes recordamos la historia de la masacre de Corpus Christi sabemos que muchos de los hombres que atacaron a los manifestantes, matando a docenas de ellos, eran trabajadores del servicio de limpieza, controlados y entrenados para la ocasión por matones del partido en el poder (y la película implica que también por operativos estadounidenses). En el *shock* del reconocimiento, Fermín retrocede, a Cleo se le rompe la fuente y lo que sigue es el caos.

De niña, siempre tuve nana. Mis padres estaban en la ruina un día sí y otro también —a menudo el desayuno o la merienda podían ser un pan y café—, pero siempre hubo una empleada, y sin importar qué tan esporádicamente le pagáramos, nunca renunciaba: era así el orden del mundo. Carmela me daba de desayunar cuando mis padres no estaban. Me llevaba con ella adondequiera que fuera: al mercado, a comprar los alimentos del día, al zapatero, al parque, donde nos sentábamos en una banca a ver las palomas mientras yo me aferraba a ella, dejando caer una lluvia de preguntas. Incluso me llevaba al lejano Xochimilco, donde tenía parientes y donde, en un camino polvoso en medio de las milpas y los angostos canales, vi por primera vez un funeral: un trémulo canto en el aire, una docena de dolientes, los hombres con sombreros vaqueros de paja, las mujeres envueltas en rebozos, todos con una flor o una vela ardiendo en la luz de la tarde, y en el centro un pequeño ataúd blanco que contenía al «angelito», el niño muerto.

En *Roma* también hay un bebé, una niña perfecta en todo su cuerpecito, pero muerta al nacer, que una exhausta Cleo observa mientras la envuelven con todo cuidado en su pequeña mortaja. En el pasado, los angelitos se iban volando de sus madres con tanta frecuencia que era un acontecimiento ordinario. Mi propia abuela dio a luz a doce hijos de los cuales sobrevivieron seis. Las mujeres siempre estaban encintas y dependían de que el padre, si es que el matrimonio era estable, hallara una forma de mantener a cinco, ocho o doce hijos. O bien la mujer podía morir joven, durante el parto o a los pocos días. Lo más seguro es que el padre se casara una segunda vez y, a veces, que la nueva esposa quisiera asegurar

el sustento para la nueva familia enganchando al marido más con su propia prole que con los hijos de la unión anterior.

Las familias son algo frágil e incluso peligroso, como aprende Cleo: a lo largo de su embarazo observa el colapso del matrimonio de su patrón, a quien primero vemos llegar a casa en un ostentoso Ford Galaxie casi demasiado grande para el tamaño de la cochera. Ha encontrado un nuevo amor: su corazón le ordena abandonar a su mujer y a sus hijos, y él hace lo que el corazón le dicta. Cuarón, que concentra la película sobre la vida de Cleo, pero también sobre su propia vida de niño, obtiene aquí su pequeña venganza: el Galaxie se dirige directo a un montón desatendido de caca de perro, y el padre mismo pisa otro de los esfuerzos del animal cuando se va de casa por última vez.

Como productor, escritor, camarógrafo, editor y director de *Roma*, cuando empezó a concebir esta película Cuarón tal vez se preguntó qué tanto de su canción de amor para su nana podría entenderse fuera de su país, o si un comentario —una traducción, en realidad— sería un complemento necesario para algunos espectadores. Lo que resulta evidente es que no hizo concesiones al público extranjero, para el cual cada segundo de la película es inevitablemente menos transparente de lo que lo es para los mexicanos. Tampoco será transparente para quienes carezcan de las referencias culturales que permitan entender que el problema central que Cuarón está abordando es la naturaleza enredada del amor.

Una vez entrevisté a casi dos docenas de trabajadoras domésticas sobre su labor. Fue difícil lograr que las empleadas jóvenes hablaran conmigo, sobre todo cuando venían del campo: el temor a parecer ignorantes, a decir la palabra equivocada, a perder su trabajo, a

hablar, hacía que casi todas las jóvenes a las que me acerqué en parques, supermercados o paradas de autobús sencillamente me dieran la espalda y se alejaran. Pero las mujeres de más edad tenían mucho que decir. Un número sorprendente afirmó estar contento con la familia con la que trabajaba, aunque una mayoría aplastante expresaba fuertes quejas sobre sus salarios. Pero lo que escuché con más frecuencia fue la furia que sentían contra patrones anteriores que las habían despedido sin aviso y sin pensar en sus sentimientos. «¿Y los niños? —preguntaban—. Nos corren porque sí, tenemos que abandonar a los niños cuando ya aprendimos a quererlos, y luego hay que encariñarse con otro niño, y siempre con el miedo de que la despidan a una, y de que otra vez te vayan a despedir y otra vez los vayas a perder». Una mujer lloró mientras me explicaba el problema: «Ellos nunca piensan en que amamos a esos niños».

Ninguna de ellas hablaba, a menos que yo preguntara con insistencia, de que, así vivieran en casa de los patrones, la mayor parte tenía sus propios hijos al cuidado de abuelas y tías en los lejanos estados de Oaxaca, Hidalgo o Guerrero.

Después me pregunté: ¿cómo se desenmaraña el corazón de una mujer cuando se encuentra en este arreglo imposible? Trabaja para garantizarles a sus hijos un mejor futuro que el que ella enfrenta, pero su hijo puede estar en casa comiendo carne dura y sopa aguada, mientras ella se alimenta como una emperatriz. Los niños por los que se preocupa exigen con terquedad el último modelo de celular cada año, mientras que en casa la familia entera puede compartir un solo teléfono con la pantalla rota. Los hijos del patrón irán a las mejores universidades, aprenderán cosas inteligentes, se moverán con facilidad en el mundo. Los hijos de ella tratarán de

obtener educación suficiente para graduarse de los insignificantes trabajos que tienen sus padres. Ella conoce íntimamente a los hijos de la casa; sus hijos no la conocen bien en absoluto. ¿Resiente a los hijos de su patrón por esta monstruosa diferencia? ¿O —miremos el asunto de frente— los ama más a ellos que a sus propios hijos? El que las mujeres que entrevisté pudieran amar a los niños que cuidaban —y amarlos, de hecho, hasta el punto del desgarramiento — me parecía un milagro de generosidad.

Y así ama Cleo a los cuatro hijos de la familia. Incluso obra un milagro para ellos, salvando a dos de los cuatro de ahogarse durante un viaje a la playa, aunque nunca haya visto el mar y no sepa nadar. Pero he aquí lo que Cleo puede por fin admitir: no quería tener a su bebé, la niña que nació muerta, hija de Fermín el asesino, y la culpa amenaza con ahogarla. «Pobrecita», no quería darla a luz, confiesa. «Pobrecita, no la quería». Ama más a esos cuatro niños.

Pasan tantas cosas en *Roma*… ¡Está tan llena de vida, de vida mexicana! Dos gansos copulan en una fiesta de Año Nuevo, un hombre sale disparado de un cañón, los perros cagan y saltan de felicidad. Los vendedores callejeros pregonan sus bienes, un noruego canta, el maíz crece, hombres jóvenes mueren asesinados, los ricos bailan la conga y una muchacha pobre de la región mixteca pierde un bebé que no quería tener, salva a dos niños, se perdona a sí misma y sube por una tambaleante escalera exterior hacia la azotea, donde lavará la ropa de la familia después de un viaje transformador. Cuando vi la película en Nueva York, el auditorio entero quedó en silencio mientras aparecían los créditos encima de una larga y meditativa toma de la escalera y el cielo, hasta que la

pantalla se oscureció, y todos suspiraron, y salieron a seguir viviendo.

The New York Review of Books, 7 de febrero de 2019

17
Claudia Andujar
Testigo de la última lucha de los yanomami

Todo lo apabullante del espacio público de São Paulo, la capital económica de Brasil —el ruido, las pululantes multitudes, la infinita fila de autos y autobuses— se exacerba en la Avenida Paulista, un tramo de concreto con brillantes torres de oficinas de vidrio que la vigilan de un extremo a otro. El sol del mediodía tropical hace rebotar astillas de luz en las torres, la hora pico de la tarde convierte las amplias aceras de la avenida en una escena tumultuosa y, en resumen, todo en este paisaje urbano parece confirmar la sospecha de que el capitalismo de hoy marchita o desvirtúa todo lo que toca.

Es con un sentido de alivio piadoso, entonces, que una viajera podría encontrarse en una tranquila sala de exhibición varios pisos arriba de la Avenida Paulista, deambulando por un bosque visual de imágenes de los primeros habitantes de la cuenca del alto Amazonas: una retrospectiva de la obra de Claudia Andujar, fotógrafa brasileña nacida en Suiza, titulada *A luta Yanomami* («La lucha de los yanomami»), montada en el Instituto Cultural Moreira Salles. Andujar documentó por primera vez a los yanomami en 1971. Sus fotografías en blanco y negro —suspendidas del techo a la altura de la mirada— forman en conjunto un retrato del pueblo yanomami, alguna vez feroz en su independencia y aislamiento, pero que ahora

lucha por sobrevivir. En este recinto de paredes blancas uno tiene la libertad de contemplar las infinitamente extrañas y elaboradas vidas de seres humanos que, en la primera de las dos salas, se muestran subsistiendo a partir de lo que nosotros consideraríamos absolutamente nada.

En primer lugar, no tienen ropa. Los hombres se atan el prepucio con un hilito y luego lo anudan a un segundo hilo alrededor de la cintura, de manera que el pene siempre apunte alegremente hacia arriba. Las mujeres usan un collar de cuentas diminutas y el más pequeño de los mandiles. Un poco de pintura en el rostro, un carrizo de palma a través del tabique nasal, una o dos plumas, y listo.

Las comunidades yanomami que aparecen en estas imágenes viven sobre todo en un enorme *shabono* (a veces también llamado *maloca*), un recinto circular de paja que es a la vez el hogar de todo un clan y una representación simbólica del universo. Las familias viven en secciones asignadas del *shabono* con una o dos ollas para cocinar y una hamaca de red por persona. Hay alguna que otra cosa más: flechas de junco y cerbatanas para soplarle uno al otro rapé alucinógeno en las fosas nasales (solo lo usan los hombres); ollas donde se prepara veneno para la punta de las flechas, alucinógenos y medicinas de varios tipos; banquillos para los ancianos shamanes.

En las fotografías más tempranas, las diversas baratijas que trajeron los misioneros y los antropólogos —machetes, espejos, radios, pantalones cortos— no son evidentes. La rutina diaria de la comunidad que se muestra aquí incluye algo de caza, que llevan a cabo los hombres, felices cuando logran traer a casa un mono grande o un pecarí para la cena. Las mujeres atienden las cosechas de plátano y calabaza del *shabono* y cocinan.

Las imágenes que expone Andujar de esta cultura grupal son intentos de traducir la intensa vida espiritual de la comunidad a un lenguaje visual, y son en extremo hermosas. Los jóvenes parecen ángeles: llevan el cabello adornado para un día de fiesta con plumón blanco como la nieve que, si estoy leyendo bien el espléndido catálogo, arrancan del pecho de los polluelos de buitre. En un río centelleante, la piel marrón de las jóvenes parece de terciopelo. De noche, las múltiples fogatas de un *shabono* han sido fotografiadas desde el exterior para que la luz centellee y parpadee a través de las endebles paredes de junco, y todo ello se vea como una nueva galaxia rodeada de estrellas.

Sin embargo, del otro lado de esta neblina de embeleso, es difícil eludir una pregunta incómoda: las fotografías, ¿revelan un mundo mágico ahora perdido, un giro alternativo en el extenso camino de la evolución que no hemos sabido tomar, a nuestro pesar, o acaso ocultan una verdad más desagradable y salvaje? Depende de las fuentes. Los yanomami —la denominación de los antropólogos para las diferentes tribus y clanes que viven en una patria designada a lo largo de la frontera entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela— ascienden hoy a unas veinticinco mil personas. Ocupan alrededor de trescientos mil kilómetros cuadrados de selva amazónica, parte de la cual fue cedida a los grupos que vivían en Venezuela en 1991, y el resto por Brasil en 1992.

En 1968, un antropólogo de nombre Napoleón Chagnon escribió un libro notorio en el que afirmaba que las distintas tribus yanomami vivían, según las describió, en un estado de «guerra crónica». Según Chagnon, el mundo yanomami era de un machismo infernal: a menudo los conflictos entre tribus estallaban por las mujeres, que

eran escasas debido a la costumbre del infanticidio de las bebés al nacer. Así, para Chagnon, la violación y el rapto evolucionaron hasta convertirse en la causa principal de los conflictos intercomunitarios: los hombres que lograban matar al mayor número de enemigos tenían acceso al mayor número de mujeres. En consecuencia, engendraban el mayor número de hijos, y por lo tanto sus genes se distribuían más ampliamente. Las tribus, escribió Chagnon, tenían el irritante hábito de exigir regalos de una manera poco sutil e insistente. Los «hombres corpulentos, desnudos, sucios, horrendos» apestaban y se volvían particularmente antiestéticos cuando les salía moco verde de las narices después de una sesión con la cerbatana de rapé.

¿Qué tan cierta es esa imagen? Bueno, en parte lo es y en parte no. Olvidémonos de los mocos: Chagnon, que escribió en un estilo tajante, intentaba hacer un libro opuesto al de Margaret Mead, cuya *Adolescencia, sexo y cultura en Samoa* (*Coming of Age in Samoa*, 1928) había recibido críticas por romantizar a los nativos. Su advenedizo contendiente pretendía lograr un enfoque estrictamente fáctico, pero se le colaron ciertos sesgos. Para empezar, la gente del Amazonas es pequeña: en promedio mide alrededor de 1,5 metros, así que difícilmente se les puede llamar «corpulentos». Además, los antropólogos que vivieron con las tribus durante mucho más tiempo que Chagnon reportaron que, de hecho, entre ellos la guerra era algo inusual. R. Brian Ferguson escribió en 1995 un libro rebatiendo a Chagnon. A esto le siguió un feroz ataque del activista defensor de los pueblos indígenas Patrick Tierney, quien pasó años investigando el paso de Chagnon por la selva y publicó un libro sobre ello en el año 2000.

Una de las acusaciones iniciales de Tierney —que una campaña de vacunación contra el sarampión, en parte patrocinada por Chagnon, pudo haber contribuido a una epidemia que devastó a las comunidades amazónicas— ha sido refutada, pero no resulta fácil discutir su afirmación de que los métodos de investigación de Chagnon alteraban a las comunidades que estudiaba de forma dañina. Tierney denunció, por ejemplo, la imprudente práctica que seguía Chagnon de repartir machetes y otros objetos valiosos como sobornos para obtener información secreta de los miembros de la tribu.

En realidad, el amargo debate sobre el libro de Tierney y el trabajo de Chagnon giró en torno a otra serie de cosas, incluidas la santidad de la investigación académica y el concepto de lo primitivo, pero una cuestión que no se tocó es por qué mujeres como Margaret Mead vieron lo mismo que sus colegas varones de una manera tan distinta. ¿Por qué las fotografías de Claudia Andujar muestran un mundo en el que los padres son cercanos a sus hijos, todos se bañan con placer en estanques y ríos, y los días de fiesta son una explosión de felicidad tanto para hombres como para mujeres? ¿Por qué escribió durante décadas sobre el sentimiento de calma y plenitud —de *hogar*— siempre que se encontraba entre los yanomami? Quizá ella y Mead eran sentimentales. Quizá abordó a sus sujetos de otra manera y vio cosas que otros no podían ver. También pudo haber sentido que era mejor no publicar nada negativo acerca de aquel pueblo frágil, tan brutalmente atacado.

Andujar nació con el nombre de Claudine Haas en Neuchâtel en 1931, en el seno de una familia estricta. Su padre, próspero dueño de una fábrica, era judío; su madre, protestante. Aunque su padre y gran parte de esa rama familiar murieron en Dachau y Auschwitz, Claudine logró emigrar y se fue a vivir a Nueva York con un tío. Mientras Claudine —ahora Claudia— conocía, se casaba y se divorciaba de un joven inmigrante español llamado Julio Andujar, se graduaba de Hunter College y comenzaba a pintar al óleo, su aventurera madre se fue a vivir a Brasil con su prometido rumano. En 1955 Claudia fue a visitarla allá y terminó quedándose para siempre.

Transcurrido un año de su vida en São Paulo, Andujar se convirtió en una fotógrafa profesional, retratando al pueblo karajá en el norte-centro de Brasil. Para cuando llegó a una misión católica en el corazón del territorio yanomami, había viajado de un extremo a otro de Brasil durante quince años, tomando fotografías de las comunidades indígenas para publicaciones brasileñas. Los indígenas que aparecen en la segunda sección de la retrospectiva de Andujar, un piso debajo de la primera, usan ropa: camisetas sucias o *shorts* rotos, casi nunca los dos a la vez. Chancletas, lentes oscuros, a veces un brasier para las mujeres, quienes con frecuencia aparecen retratadas de maneras que incomodan.

La fotógrafa llegó a territorio yanomami en el preciso momento en que la dictadura militar de Brasil, fiel a su lema *Ordem e progresso* («orden y progreso»), trazaba una carretera en mitad del Amazonas, con la esperanza de hacer de la selva un edén agrícola para los inmigrantes sin tierras del resto del país. Cuarenta y cinco años después, esa carretera sigue sin terminarse y no hay ningún edén.

Más bien, la apertura del Amazonas atrajo leñadores, mineros en busca de oro, cazadores de recompensas, operadores de maquinaria pesada, taberneros y ladrones de tierras, todos ellos portadores de enfermedades, que pasarían por el territorio yanomami para dejarlo sembrado de cadáveres, suspendidos estos —según la costumbre religiosa del pueblo— en jaulas de lianas por toda la bóveda del bosque.

En la exhibición solo hay una imagen de estos «entierros aéreos», y sería imposible adivinar lo que son. Sin embargo, es apropiado que esta segunda sección de la muestra esté montada un piso abajo de la primera, porque describe el descenso al infierno de la modernización con la que se han topado todos los pueblos indígenas, desde Nueva Zelanda hasta el Amazonas. El recorrido que aquí se presenta ofrece una perspectiva descarnada que ya nos es conocida, aunque Andujar eligió hace mucho dejar fuera las peores imágenes de enfermedad y muerte.

La dislocación cultural y el sufrimiento físico de los que Andujar fue testigo la impactaron tanto, y al parecer la hicieron reflexionar tan profundamente sobre el genocidio en Europa, que ya para los años ochenta la fotografía se volvió una preocupación secundaria para ella. Junto con un grupo de médicos, inició una campaña de servicios de salud y de vacunación en tierras yanomami. Con el antropólogo Bruce Albert, su amigo y misionero católico, Carlo Zacquini, y Davi Kopenawa, el chamán yanomami, traductor y defensor de los derechos indígenas, Andujar luchó incansablemente para conseguir la designación de un amplio territorio o resguardo para el pueblo indígena que tanto había llegado a amar. Es gracias a ella y a sus colegas activistas que hoy existe el Territorio Indígena

Yanomami. Al proteger a los yanomami, también ha protegido, hasta ahora, las innumerables criaturas y la asombrosa ecología de ese pequeño rincón del Amazonas.

A sus setenta y ocho años, Andujar padece los efectos de una vida accidentada. La malaria le pasó factura, y también sufre de artritis y otros males. Aun así, mediante un vuelo fletado, logró visitar los territorios yanomami no hace mucho, en 2017, viajando dos horas por un camino selvático en una silla de ruedas impulsada por su viejo amigo Zacquini. Es, indiscutiblemente, una mujer de vena heroica. Sin embargo, Chagnon no estaba del todo equivocado en sus observaciones acerca del papel de la violencia en la cultura yanomami, de modo que uno se pregunta si Andujar no lo vio o si decidió no plasmar ninguna imagen de la situación de las mujeres, quienes, según múltiples testimonios, eran en efecto sometidas a violaciones, secuestros y abusos contemplados dentro de las tradiciones de su cultura. Quizá dio por sentado el maltrato a las mujeres, como lo hizo alguna vez la inmensa mayoría de la gente en el mundo. En todo caso, se deduce —a partir de un libro coescrito por Albert y por Kopenawa— que la fuente de la violencia entre los yanomami han sido casi siempre pleitos que se extienden a lo largo de generaciones, iniciados tal vez por algún incidente que se interpretó como una falta de respeto hacia un anciano o un ancestro, o bien por llamar a alguien por su nombre secreto.

En muchos aspectos, a los viejos debates sobre identidad y primitivismo, por los que alguna vez se luchó con tanta pasión, se les acaba el tiempo, igual que a la mayoría de los pueblos indígenas

que hicieron surgir semejantes controversias. Aun entre los románticos más ilusos, hace mucho que se ha aceptado que la cultura aborigen desaparecerá inevitablemente. La pregunta siempre ha sido de qué manera el cambio traumático llegará a tribus aisladas o sin contactar, y cuánto control tendrán esos pueblos sobre su transición a una sociedad capitalista moderna: ¿hasta qué punto podrán decidir qué quieren retener de su cultura y cómo incorporar la nueva?

Davi Kopenawa, Claudia Andujar y Bruce Albert han luchado durante décadas por obtener para los pueblos indígenas el derecho a decidir. Pero el nuevo presidente reaccionario de Brasil, Jair Bolsonaro, ha descartado la discusión. El área natural reservada para las tribus nativas ha sido uno de los logros significativos de Brasil, pero estos territorios enfrentan la presión constante de una variedad de especuladores de todo tipo, incluidas la industria agropecuaria y la del petróleo.

«No hay tierra indígena que no contenga minerales», dijo Bolsonaro en una entrevista el año pasado, haciendo campaña bajo su promesa de no ceder más tierras a los indios. «Hay oro, estaño y magnesio en esas tierras, especialmente en la Amazonia, el área más rica del mundo. No entro en ese embuste de defender la tierra para el indio». Al tomar el poder, transfirió la responsabilidad de los asuntos indígenas al Ministerio de Agricultura. Desde su elección, infinidad de pequeños recortes al presupuesto han desestabilizado la economía de subsistencia de los yanomami.

Desde luego, los yanomami no son los únicos que están bajo amenaza con este nuevo régimen: todos lo estamos. Actualmente, el Amazonas pierde casi ocho mil kilómetros cuadrados de selva cada

año. Resulta aterrador contemplar el impacto que tendrá la acometida de Bolsonaro sobre ese territorio en el cambio climático durante los siguientes cuatro años de su presidencia.

«En un sentido muy real, el daño que Bolsonaro le hará al medio ambiente, ya lo hizo», me dijo un amigo brasileño hace poco. Más allá de la legislación que entrega el Amazonas y sus comunidades indígenas al Ministerio de Agricultura, más allá de los recortes al gasto y los decretos hostiles, más allá de cualesquiera depredaciones legales que sigan, existe una nueva sensación de que cualquier terrateniente o empresario que sienta deseos de matar a uno o dos indios a tiros, o de despejar unos cuantos miles de hectáreas para la ganadería, puede hacerlo impunemente. Vigilar el Amazonas exige enormes cantidades de dinero y un compromiso político inquebrantable. Bajo el régimen de Bolsonaro, es como si se hubieran apagado todas las cámaras de seguridad.

Una lucha por sobrevivir que ha durado medio milenio puede estar a punto de llegar a su fin. Algunos de los últimos pueblos indígenas que quedan sobre la faz de la tierra —y que, al observar el mundo, ven una realidad maravillosamente distinta a la que nosotros percibimos— están completamente indefensos ante este nuevo presidente. Y quizá pronto lo único que quede de su presencia en la tierra sean las gloriosas fotografías de Claudia Andujar.

The New York Review of Books, 17 de abril de 2019

18
Secretos del Otromundo maya

A orillas de un pequeño maizal cerca de las ruinas de la ciudad maya de Chichén Itzá, en la escasa sombra de un árbol tropical, una voz rebota alocadamente desde la boca de un insignificante pozo a ras del suelo: «¡Lo vi! ¡Lo vi! —proclama el grito—: ¡Es verdad!».

Inclinado sobre la boca del pozo, el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda necesita asegurarse de que le están gritando lo que ha añorado escuchar durante tantos meses. «¿Qué es verdad, Arturo?». Y su compañero arqueólogo, Arturo Montero, que flota en el fondo del pozo, vuelve a gritar: «¡La luz del cénit! ¡Es cierto! ¡Funciona! ¡Baja!». Y lanza un grito de alegría extática.

Lo que De Anda espera con ansia que determine su amigo Montero es si el agua del fondo de este anónimo pozo natural, que en realidad es un *cenote* —un desmoronamiento de la superficie terrestre que abre hacia un río subterráneo—, funcionó como reloj sagrado y cronómetro para los antiguos mayas. Dos días del año, el 23 de mayo y el 19 de julio, y solo en los trópicos, el astro sol alcanza su cénit: es decir, queda perfectamente perpendicular a la Tierra, y, por lo tanto, durante el minuto que dura en esa posición, en la tierra no se proyecta ninguna sombra. El hecho de que el cenote se encuentre directamente al noroeste de la escalinata

principal de El Castillo, la famosa pirámide central de Chichén Itzá, y dentro de los límites urbanos de esa misteriosa ciudad, hizo que la pregunta de De Anda resultara especialmente provocadora.

¿Será que, siglos atrás, los sacerdotes mayas aguardaron en este mismo cenote para observar y corregir las mediciones del ángulo del sol cuando llegaba a su cénit? ¿Venían aquí durante la época de sequía para dejar angustiadas ofrendas y, otras veces, para dar gracias por una cosecha abundante? ¿Creían que este era un lugar donde el sol y las generosas aguas se unían y daban luz a la vida? Estas y otras preguntas sobre la relación de los mayas con sus dioses, su ciudad sagrada y su calendario, tan extraordinariamente preciso, es lo que los dos arqueólogos investigaban.

De Anda, reconocido por sus habilidades como arqueólogo subacuático, trabaja en el cenote Holtún solo esporádicamente y con mínima financiación. Montero, de la Universidad del Tepeyac, llegó al pozo con recursos propios. Estuvo en la cercana ciudad de Mérida el 23 de mayo, dirigiendo un seminario de arqueoastronomía en la Universidad de Yucatán, donde De Anda es profesor. Esa mañana, un día después del cénit, por fin se dirigían al cenote Holtún. El inicio fue desastroso: una llanta pinchada, falta de gasolina y otros obstáculos les hicieron llegar al pozo justo cuando el sol estaba por alcanzar su posición casi exactamente igual a la del cénit del día anterior. Faltando minutos, Montero y Dante García Sedano, un alumno de posgrado, batallaron con sus trajes de buceo, se aseguraron a un arnés, y un grupo de campesinos mayas de la localidad los bajaron al pozo.

Ahora Montero gritaba y silbaba, y los campesinos hacían descender primero una balsa de goma y luego a mí. De Anda,

empapado en sudor por las abrasadoras temperaturas de Yucatán, tenía problemas con su traje de buzo, pero por fin a él también lo bajaron unos veinte metros dentro del pozo, con lo que, con toda seguridad, los cuatro nos convertimos en las primeras personas en siglos en observar el recorrido que el dios sol traza por esas aguas.

Bajo la angosta boca del cenote las paredes se abren para convertirse en un domo gigante parecido a una catedral, a no ser por las raíces de los árboles que se han abierto paso entre la roca en su intento por llegar a tomar agua. Traspasando la pequeña apertura —terminada en piedra y en forma de rectángulo, quizá para imitar las cuatro esquinas del cosmos maya—, el rayo de luz solar bailaba como el fuego sobre el frágil artesonado de las estalactitas que nos rodeaban. La orilla del agua también pareció incendiarse cuando le pegó la luz, y bajo la superficie, siempre de una negra oscuridad, las aguas se prendieron y se tornaron de un translúcido azul turquesa. Los rayos del sol quedaron tan cerca de la vertical que Montero supo que el día anterior, en el momento del cénit, un pilar de luz se había sumergido directamente en el agua. No era necesario ser maya para conmoverse.

Durante las últimas dos décadas los arqueólogos empezaron a prestarle gran atención al papel de las cuevas, al cénit del sol, y ahora —gracias a De Anda— a los cenotes, en las creencias y la visión del mundo de los antiguos mayas de Yucatán. Los arqueólogos sabían que los mayas consideraban las cuevas y los cenotes como bocas que se abren a otro mundo habitado por Chaak, el dios de la lluvia dadora de vida, pero las consecuencias de este

hecho para la arquitectura y la planeación de las ciudades apenas comienza a aclararse.

En 2010, De Anda, que para entonces se había sumergido en infinidad de cenotes, comenzó a explorar Holtún gracias a una invitación de Rafael Cobos, reconocido arqueólogo y director del proyecto que ha investigado y mapeado cientos de estructuras antiguas, promontorios y cenotes en la región de Chichén Itzá. De Anda también contaba con la cooperación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un día, al examinar los muros del cenote Holtún unos cuantos metros bajo el agua, emergió de un pequeño hueco y se golpeó la cabeza contra una protuberancia del muro. Quedó asombrado al encontrar que era una repisa natural de piedra. Sostenía una ofrenda con un cráneo humano, cerámica, el cráneo de un perro, huesos de venado y cuchillos de doble filo, probablemente para sacrificios, todo ello colocado ahí con gran orden siglos atrás. La lámpara que llevaba en la cabeza apuntó directamente abajo, a las profundidades del cenote, donde se revelaron columnas rotas, un jaguar antropomorfo tallado y una figura similar a los hombrecillos de piedra del Templo de los Guerreros de Chichén Itzá, esculpidos de modo que parece que sostienen el cielo. Sin duda, este pozo en medio de un maizal era un sitio sagrado.

Ahora, tres años después, De Anda y Montero descubrían no solo una conexión entre el cénit del sol y Holtún, sino al parecer también el papel del sol y del cenote en la ubicación y la orientación de la pirámide de El Castillo de Chichén Itzá. Ya se sabía que durante el equinoccio de primavera una serpiente de luz baja ondulando por un lado de la escalera central de la pirámide: algo que miles de turistas presencian cada año. Algunos hacen la breve caminata hasta el

famoso Cenote Sagrado que, durante los siglos en que Chichén Itzá fue una gran ciudad estado, recibió en su boca innumerables seres humanos y otras ofrendas preciosas. En las primeras horas del 23 de mayo, el día del cénit, Montero fue a la pirámide central y descubrió que el sol, K'inich Ajaw, se eleva alineado por la esquina noreste de la pirámide. Luego se alinea con la escalera oeste de la pirámide y con el cenote de Holtún, escondido en el maizal.

Para calibrar su calendario, célebre todavía, y con razón, los mayas tenían que determinar los días del año en los que el sol brillaba directamente sobre ellos, ni una fracción de un grado más abajo o más arriba. Montero y De Anda especularon que los astrónomos mayas esperaban cada año dentro del pozo Holtún, durante esos dos momentos de cénit, cuando el pilar vertical de luz atraviesa el agua sin reflejarse en el domo.

La astronomía era una actividad sagrada para los mayas, al igual que lo eran la arquitectura y la planeación de las ciudades. Ahora De Anda y Montero piensan que no solo Holtún, sino también otros cenotes pueden haber desempeñado un papel importante a la hora de determinar dónde se erigían los edificios. El Cenote Sagrado queda al norte de la pirámide de El Castillo. Dos cenotes más quedan al sur y al suroeste. El cenote Holtún, directamente al noroeste de la pirámide, pudo haber completado la configuración de diamante que permitía a los mayas del norte, los itzaes, determinar dónde construir su ciudad sagrada y en qué ángulo colocar su pirámide principal. Si más estudios corroboran esto, se revelarán las coordenadas más importantes del complejo diseño de Chichén Itzá.

Al menos eso es lo que espera De Anda. Pero ese día él y Montero ya habían logrado mucho. El sol recogió sus lanzas de luz y continuó

su camino por la superficie de la Tierra, mientras en la renovada oscuridad los dos arqueólogos hablaban emocionados acerca de lo que habían visto y lo que significaba. «¡Un abrazo, hermano!», exclamó Montero, y los dos hombres se lanzaron uno al otro en el agua y se palmotearon ruidosamente las espaldas.

En la superficie, un equipo de campesinos mayas, en *shorts* y chancletas, trabajaron arduamente para sacar a los exploradores de nuevo. A nuestro alrededor había maizales que crujían porque esperaban la lluvia desde hacía tiempo, pero el encargado del grupo, Luis Un Ken, un hombre sonriente, respetado por todos en su pueblo cercano, es por naturaleza optimista. «Llovió bonito el otro día —dijo, secándose el sudor de la cara—. Se movió Chaak».

Para hombres como Un Ken, los dioses siguen muy vivos, y Chaak, amo de cenotes y cuevas, está entre los más importantes de todos. Para beneficio de las cosas vivas, desde el cielo vierte el agua que guarda en jarrones de barro dentro de las cuevas. Chaak es uno y es muchos: cada trueno es una acción separada de Chaak, que rompe una jarra para permitir que caiga la lluvia. Cada dios habita una capa diferente de la realidad, junto con docenas de dioses alternadamente complacientes y feroces, que viven en trece Otromundos arriba y nueve Otromundos abajo. Juntos, llenan la vida de los mayas de sueños, visiones y pesadillas, un complicado calendario de tiempos agrícolas y rituales de fertilidad, y un firme sentido de cómo deben hacerse las cosas. «Chaak se movió», dijo Un Ken, lo que significaba que la temporada de siembra ya venía.

La ausencia de Chaak puede causarle a los mayas de Yucatán incalculables desastres que solamente se pueden entender a plenitud cuando uno se para en la dura y lunar superficie de su

antiguo imperio: una inmensa placa de roca porosa cárstica o caliza. La lluvia se cuela por el carso y alimenta las prístinas aguas freáticas. Debido a la porosidad del carso, ningún río o arroyo corre por la superficie de estas tierras (los cenotes son, de hecho, sumideros que dan acceso al manto freático). Desde el avión se ve un verde mar de selva densa. A nivel del suelo la selva tropical es rala: árboles larguiruchos cuyas tercas raíces están adaptadas a las bolsas de tierra que salpican el áspero carso. Dondequiera que esas bolsas de tierra son suficientemente grandes, los mayas siembran maíz o *milpa*: una sabia combinación de maíz, frijol, chile, tomate y calabaza que constituye su fuente básica de proteína. Pero el maíz es una cosecha hambrienta que extrae los nutrientes de la tierra. Durante miles de años los agricultores milperos han mantenido la productividad de sus pequeñas parcelas quemando una porción distinta de árboles cada año y plantando en las cenizas, que son benéficas para el maíz. Llamamos a esto deforestación, pero para los mayas significa sobrevivencia.

En cuanto al agua para los cultivos… bueno, ahí es donde entra Chaak. Solo las lluvias estacionales pueden hacer que el maíz crezca, y deben llegar en un orden lacerantemente preciso: nada de lluvia en invierno, porque en marzo los campos y el bosque deben estar lo bastante secos para que prendan fuego; un poco de lluvia a principios de mayo para que la tierra se suavice y reciba la siembra; luego una lluvia muy suave para que las semillas retoñen y el hermoso dios del maíz tierno aparezca en forma de una mazorca apenas formada; por último, mucha lluvia para que los tallos de maíz crezcan buscando el cielo y engorden los granos de sus mazorcas.

En cualquier punto del ciclo anual la irregularidad de las lluvias se traduce en una ración más pequeña de alimento para una familia.

La cuestión arqueológica que está aún por resolverse es por qué las grandes ciudades estado de los mayas de Yucatán colapsaron una tras otra. El milagro es que hayan sobrevivido, alimentadas por un maíz que crece en condiciones tan severas como estas.

Sin embargo, sobrevivieron —y prosperaron también— a veces recogiendo una cosecha abundante y a veces, como Guillermo de Anda piensa que ocurrió en el pozo de Holtún, colocando ofrendas en el cenote durante las sequías prolongadas, cuando el nivel freático puede bajar hasta seis metros. Con una población que se estima en millones, los itzaes construyeron tantas ciudades —en el seco norte, siempre junto a un cenote dador de vida— que uno empieza a pensar que la selva yucateca es el hágalo-usted-mismo de un arqueólogo: cualquiera puede tropezar con una ruina intacta. De hecho, un par de días después de la aparición del cénit en Holtún, caminaba al amanecer por un sendero entre milpas y selva a unos cuantos kilómetros de Chichén Itzá con el arqueólogo y espeleólogo Donald Slater, cuando dijo: «Ahí está», e indicó con el mentón que mirara a nuestra derecha. ¿Ahí estaba qué? Vi maizales a nuestra izquierda y bosque a nuestra derecha. «Ahí», insistió Slater. Solo árboles blancos, delgados y frágiles y, atrás de ellos, más árboles. Luego, lo que parecía un borroso grosor del bosque como a cincuenta metros resultó ser una colina empinada. Desde luego que no hay colinas empinadas en ninguna parte de los alrededores. Pero hay pirámides. Esta era particularmente alta, y su esquina suroccidental daba exactamente a la entrada de una cueva muy grande.

Para los mayas la cueva habría sido una boca, las quijadas muy abiertas de una deidad devoradora, o una de las moradas de Chaak. Slater esperaba documentar su afirmación de que esta cueva era un punto de observación sagrado desde el cual se daba la bienvenida al sol el día de su cénit, y que esta pirámide —que se conoce, pero nunca se ha explorado— se construyó o al menos se orientó específicamente en relación con la cueva.

Antes de nuestra visita, Slater le había pedido a un equipo de campesinos mayas que limpiaran de maleza la cara oeste de la estructura, para poder observar con más claridad la huella del cénit del sol. A la entrada de la cueva, Slater señaló los restos de unos escalones toscamente labrados siglos antes, quizá para brindarle acceso a los chamanes a estas aterradoras fauces de la Tierra. Slater especula que los sacerdotes del sol habrían pasado la noche anterior al cénit ayunando, bailando y cantando con música de tambores y flautas de cerámica de doble cámara, como las halladas en las profundidades de la cueva, alabando al dios sol por llegar al cénit una vez más, y traer consigo las lluvias.

Parados donde alguna vez quizá se pararon los hombres sagrados, la pirámide entera se erigía imponente ante nosotros. Esperamos. A las 8.07 a. m., un abultado globo anaranjado apareció detrás de la pirámide, y dio la impresión de hacer una pausa momentánea antes de surgir hasta la cima y mostrarse —de manera cegadora— en toda su gloria, desbordando nuestra cueva con su luz de fuego. Siglos antes, en los dos días del cénit, explicó Slater, el sol habría llevado a cabo su danza luminosa en lo que ahora son las ruinas de la plataforma, en lo alto de la esquina suroeste de la estructura.

Para los mayas, observadores del cielo, las pirámides de Yucatán —otras de las cuales estaban alineadas con el sol creciente y el sol poniente en días de equinoccio y cénit— se habrían visto no como un montón de piedras ligadas a la tierra por su mismo peso, sino como guardianes cósmicos del tiempo: estructuras anhelantes en constante interacción con los cielos. Y la interacción de K'inich Ajaw, el sol y las aguas sagradas de Chaak era la danza de la vida que hacía posible la fertilidad de los maizales.

Yo andaba en mi propia y modesta búsqueda de Chaak. Recorría la península de Yucatán en busca de antiguas creencias y rituales conservados por los mayas actuales, que pudieran ayudarme a comprender su vínculo con sus gloriosos ancestros. Gran cantidad de mayas aún viven en comunidades agrícolas sumamente pobres, pero Chaak es todavía de primordial importancia para ellos, y se le celebra estacionalmente en una larga oración colectiva de llamado a la lluvia que se conoce como Cha Chaak.

A unos ciento treinta kilómetros al sureste de Chichén Itzá, cerca de la región que hoy se conoce por el ilusorio aunque glamuroso nombre de Riviera Maya, está el pueblo de Chunpón. Forma parte del territorio designado por el Gobierno como Zona Maya, que cubre una porción considerable de la península de Yucatán. Visité Chunpón acompañada por un hombre llamado Pastor Caamal. Trabaja por cuenta propia como guía de turistas, pero, al igual que Luis Un Ken y muchos vecinos suyos, es *cruzoob*, adepto de la Cruz Parlante, un culto que data de finales del siglo XIX, cuando estalló la sangrienta insurrección maya conocida como la Guerra de Castas. Los mayas de

Yucatán intentaron librarse de la espantosa opresión del Gobierno mexicano con la ayuda de una cruz de la capilla de Chunpón que había comenzado a hablar, alentando a los rebeldes. La Cruz aún vive en Chunpón, y Caamal, descendiente de los guerreros mayas, es uno de sus custodios. Dos semanas al año monta guardia en un sitio al que no pueden acceder más que los cruzoob.

«Los cruzoob son básicamente los mayas que sobrevivieron», me dijo Caamal una tarde calurosa, mientras avanzábamos a una velocidad alarmante por una carretera plana hacia su pueblo natal. Caamal exageraba: la guerra de Castas fue un conflicto estrictamente local, y hay alrededor de cinco millones de mayas viviendo en el área que abarca el sur del mapa de México, así como gran parte de Belice y Guatemala, el oeste de Honduras y el oeste de El Salvador. Pero es cierto que en Yucatán la guerra llegó prácticamente a cada pueblo.

Le pregunté a Caamal cómo conciliar la diferencia entre los antiguos dioses mayas y Jesucristo, a quien los mayas invocan con frecuencia, en ocasiones llamándolo Nuestro Señor Muy Santa Cruz Tres Personas. «Somos politeístas», respondió Caamal. Sorprendentemente, casi no hay presencia católica en la zona. En su lugar hay *hmem*: chamanes, sanadores y hechiceros que por lo general descubren su vocación en sueños, para luego mediar entre los dioses y sus desamparados devotos.

En respuesta a mi cada vez más desesperada pregunta acerca de dónde podría presenciar un ritual Cha Chaak para convocar la lluvia, Caamal respondió que su propio hmem tal vez sabría de algún Cha Chaak, aunque ya estaba llegando a su fin la temporada de peticiones al dios de la lluvia.

En el brutal calor del mediodía hicimos una breve escala en Chunpón, en el enclave de casitas redondas hechas con bahareque y palma que constituyen el hogar de su numerosa familia. En la choza ovalada de la cocina colgaba una fila de hamacas, cada una ocupada por un familiar de Caamal que conversaba tranquilo mientras se mecía despaciosamente. Habría hecho menos calor sin el fogón —tres grandes piedras en el suelo de tierra con brasas refulgiendo bajo un gran comal de hierro—, pero las brasas de la cocina se tenían siempre vivas. La feroz y diminuta madre de Caamal me miró con furia a mí, una visita «española» o «no maya», y preguntó explícitamente a su hijo, en maya, cuándo pensaba yo quitarme de su hamaca e irme, pero las reglas de la hospitalidad, tan fijas como el movimiento de las estrellas, dictaban que se ofreciera comida. Hizo algunas tortillas y me las ofreció, acompañadas de carne y chiles. Deliciosas, por cierto.

De vuelta a la carretera, pasamos por kilómetros de delgados árboles proyectándose desde la superficie blanco hueso (y dura como un hueso) del carst. Nos detuvimos en el pueblo de Chun-Yah, que, al igual que muchos otros en la Zona Maya, carece de telefonía celular o de comunicación terrestre con el mundo exterior, y solo tiene escuelas rudimentarias. En su propio complejo polvoso de chozas ovaladas con techo de paja, Mariano Pacheco Caamal, el mentor y hmem de Caamal, me recibió con una gran sonrisa.

Don Mariano me dijo que sabía cómo usar cuarenta tipos distintos de plantas para curar enfermedades y sanar fracturas y mordeduras de serpiente. Durante una etapa particularmente frágil para su

amigo Pastor, don Mariano construyó un anillo de fuego invisible a su alrededor. En sus sueños aprendió qué preguntar a cada dios y en qué día de la semana hacerlo. Sabía dónde encontrar cuevas sagradas.

Don Mariano llevaba puestos vaqueros recortados y chancletas, y era notable la falta de pertenencias en casa de un hombre de su edad y prestigio. Hablaba solo un español rudimentario, y como mi dominio de la lengua maya es nulo, Pastor tuvo que traducir mis preguntas de distintas maneras para comunicar su significado. Le pregunté a don Mariano cómo sabía él que era maya. El hmem de suaves modales parpadeó detrás de sus gruesos lentes. «Porque somos pobres», dijo. Volví a preguntar. «Por lo que comemos, el color de nuestra piel, nuestra estatura», respondió, y luego se le ocurrió una respuesta mejor. «Porque aquí no hay fábricas, máquinas, humo. En la noche tenemos paz, silencio. En la mañana digo: "Hoy voy a hacer esto o aquello". Nuestro trabajo nos pertenece. Cuando uno trabaja para fuereños, ellos dicen: "Dame tu tiempo". Pero los mayas somos nuestros propios gobernantes».

¿Sabía si estaba por convocarse a algún Cha Chaak? ¡Ay! Don Mariano solo pudo confirmar que yo había llegado tarde. En Chun-Yah, como en cualquier otra parte, el tiempo para sembrar e invocar a la lluvia ya había pasado. Gentilmente me explicó cómo se monta una ofrenda para Cha Chaak en su pequeña parte del universo maya: un altar rectangular, o mesa de ofrendas, como de un metro de ancho, elaborada con ramas y algunas tablas, representa el mundo. Los distintos alimentos para Chaak se colocan en estricto orden junto con recipientes hechos de *guaje* (*Leucaena leucocephala*), llenos hasta la mitad con una bebida fermentada,

sagrada, que se llama *balché* y se prepara con corteza de árbol. Otros guajes se llenan con agua bendita tomada de un cenote o de una cueva oculta. La ofrenda de comida ritual se compone de trece piezas de «pan» —tortillas gruesas hechas con trece capas de masa — que representan las trece capas del Otromundo superior. El pan se envuelve en hojas de *bakaalché*, una enredadera nativa, y se cuece en un *pib*, un hoyo del tamaño más o menos de un ataúd, cavado cerca del altar. Se coloca una cruz al centro de la mesa, atrás de las ofrendas, para que supervise el ritual.

Me atreví a decirle a don Mariano que había escuchado hablar de unos *sapitos*, niños pequeños que se acuclillan en la base de la mesa del altar y alientan al Chaak a acudir al rito, imitando el llamado de las ranas durante la época de lluvias. Pastor y el hmem se miraron y sonrieron.

«Escuchó eso [cerca de Chichén Itzá], ¿verdad? —dijo Pastor. Imitó a los niños que imitaban a las ranas—. Hacen *lek lek lek* —sonrió de nuevo—. Muy bonita costumbre. —Sonrió de oreja a oreja —. Aquí nosotros no hacemos eso».

Para cuando llegué al pueblito de Yaxuná, la ceremonia casi había terminado. Durante dos días sus habitantes y su hmem, desesperados por que cayera la lluvia, se esforzaron sin descanso y sin dormir para convencer a Chaak de que llegara hasta ellos. Caminaron por un largo sendero a través del bosque hasta una cueva secreta y bajaron a su centro por medio de un peligroso sistema de cuerdas para traer el agua bendita que exige la ceremonia. Dejaron levantado el altar, cavaron el pib, hicieron un enorme gasto para comprar las trece gallinas gordas de la comida ritual, guarecieron el altar toda la noche mientras rezaban y bebían

balché, amasaron las trece capas de panes hechos con maíz y semillas de calabaza —que ninguna mujer tenía permitido tocar—, cocieron el pan en el pib y, cuando los sacaron de su cama ardiente, dejaron abierto el pib para que el vapor pudiera elevarse directamente hasta el dios de la lluvia a manera de ofrenda.

Y ahora el hmem, Hipólito Puuc Tamay, un hombre de piel curtida y de movimientos lentos, que traía puesta una gorra de beisbol roja y una camisa lavada muchas veces ya, se colocó frente al altar rezándole a Chaak, a Jesucristo, a todos los santos, a san Juan Bautista, a las fuerzas de la tierra y el cielo, y de nuevo a Chaak, para que dejara que la santa bendición de la lluvia cayeran sobre ellos y sobre todas las comunidades mayas de los alrededores; para que todos pudieran sobrevivir otro ciclo completo del sol. Bajo instrucciones del hmem, uno de los pobladores se acuclilló sobre una roca, detrás y a un lado del altar, muy quieto. Solo soplaba de vez en cuando en un guaje de los que usa Chaak para almacenar el viento. Era un vecino del pueblo, pero también era el dios-lluvia, y se sentaba con los ojos cerrados para no perjudicar la ceremonia con su mirada terrible. Otros dos participantes lo habían llevado hasta el altar, de espaldas, para que pudiera recibir la bendición neutralizante del hmem.

Y ahí estaban también las ranitas: cinco niños ligeramente abochornados, acuclillados al pie del altar del mundo, uno en cada esquina, uno en el centro, cuatro de ellos diciendo *hmaa*, *hmaa, hmaa*, y el quinto *lek, lek, lek, lek, lek*, una combinación de sonidos asombrosamente parecidos al croar de las ranas por las noches cuando llueve.

De la nada surgió un viento en la planicie. Retumbaron truenos en la distancia azul.

Mientras la comida ceremonial de pollo y pan de maíz con semillas se distribuía entre los hombres exhaustos, comenzó a llover: una ligera y refrescante lluvia de verano. Era señal, dijo el hmem, de que Chaak recibió su mensaje y estaba complacido con los rezos de la gente. Pronto, quizá, la tierra estaría lista para la siembra.

National Geographic, agosto de 2013

19
Santos del desconsuelo

El preso conocido como el Niño entró en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito hace nueve años. Alto y desgarbado, con una sonrisa bobalicona, da la impresión de no haber dejado atrás la infancia, aunque el recuerdo de sus crímenes le pondría los pelos de punta a cualquiera. Abandonado por su padre a los siete años y criado por sus abuelos maternos, tenía veinte cuando cometió el asesinato que lo trajo a esta prisión en el norte de México. A su amigo Antonio —muy lavado y planchado, siempre alerta, de movimientos rápidos y ojos redondos— lo echaron a la misma celda, acusado de secuestro. «Desde entonces somos amigos», dice uno mientras el otro asiente.

Nadie sabe a ciencia cierta cuándo saldrá de la cárcel, pero el Niño tiene motivos para mantener la esperanza: confía en una entidad protectora que, según él, evitó que los celadores descubrieran un par de objetos prohibidísimos que estaban en su posesión y que pudieron haberle aumentado la condena por décadas. «Los guardias no vieron nada, aunque estaban parados ahí nomás», dice. Este ser sobrenatural lo cuida cuando sus enemigos le andan rondando, afirma Antonio, atestiguando la fe de su amigo. Te protege aun después de que toda tu gente se ha olvidado hasta de tu nombre y

te quedas, como dice el dicho, sin tan siquiera un perro que te ladre. Esta hacedora de milagros, esta guardiana de los indefensos y del pecador más irredento, se llama la Santa Muerte.

Ella es apenas una de tantas figuras del otro mundo a las que acuden los mexicanos conforme el país se ha visto abrumado por todas las dificultades posibles: la sequía, el colapso del turismo —que le pisó los talones a un brote de fiebre porcina—, seguido de cerca por el desgaste de las reservas de petróleo, principal producto de exportación, la debacle económica y, sobre todo, el desdichado auge del narcotráfico y su horripilante violencia, tan publicitada. Los crímenes cometidos por los traficantes son insistentemente aterradores y han trastornado tanto la gobernabilidad del país que los mexicanos comunes y corrientes a menudo se preguntan en voz alta si las mafias no habrán ganado ya la guerra contra el Estado.

«Las presiones emocionales, las tensiones de vivir en una época de crisis, llevan a la gente a buscar figuras simbólicas que la ayuden a enfrentar el peligro», dice José Luis González, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y especialista en religiones populares. Entre las figuras hay deidades afrocubanas que a últimas fechas han hecho la travesía a estas tierras nuevas, así como criminales transformados en hacedores de milagros, como el mítico bandido del norte de México conocido como Jesús Malverde. Incluso hay santos del Nuevo Testamento que han hecho la reconversión para ofrecer no solo la salvación, sino también el éxito. En este universo espiritual en expansión, el culto que sin duda se ha expandido más ampliamente es el de la Santa Muerte —una figura

calcada de los esqueletos de Halloween, con las mismas largas túnicas y guadaña—. Y, al menos a primera vista, es el culto más extravagante de todos. «Si lo ves desde la perspectiva de un país que en los últimos diez años se ha familiarizado peligrosamente con la muerte —dice González—, puedes ver que este esqueleto es una referencia simbólica muy concreta y muy clara a la situación actual».

Desconocida para la mayoría de los mexicanos hasta hace poco, esta figura de la muerte es un esqueleto, pero difiere fundamentalmente de las *calacas* juguetonas que se exhiben el Día de Muertos, la jornada en que los seres queridos difuntos vuelven para compartir con los vivos unas cuantas horas de festín y rememoración. Los altares de Santa Muerte ahora pueden hallarse en todo México, en las esquinas y en las casas de los pobres. Hombres y mujeres la siguen por igual. En el corazón de Ciudad de México, en un vecindario que siempre ha sido bronco y desafiante, cada primer día del mes Enriqueta Romero encabeza una sesión de rezo en honor del esqueleto.

A la vez áspera, malhablada y maternal, Romero está entre las primeras y más efectivas propagandistas de un culto que, para algunos, empezó en los pueblos que bordean el golfo de México. También en California y en Centroamérica, los jóvenes encienden velas en honor a la Santa Muerte y se tatúan su imagen en la piel, en medidas que van de chica a extra grande. Hace algunos años, la Secretaría de Gobernación anuló el registro de la Santa Muerte como religión legítima, sin el menor efecto. En los puestos de periódicos se venden videos instructivos que enseñan cómo rezarle a la Santa, e incluso hay intelectuales sofisticados que han comenzado a decir que es un culto *muy auténtico*.

No es solo la crisis, sino también el tipo de problemas que ahora enfrenta la gente lo que ha avivado la expansión de los cultos. Digamos, por ejemplo, que vives en una de las ciudades fronterizas con Estados Unidos, atravesada por el negocio de las drogas, y que el traqueteo de las ametralladoras estalla cada noche, llenándote de terror a las balas perdidas. ¿No es comprensible pedirle protección a un forajido como Jesús Malverde, venerado por los traficantes? Los mexicanos que conservan una fuerte conexión con la Iglesia católica podrían acudir más bien a san Judas Tadeo, San Juditas. En un momento en que abundan las situaciones en las que todos pierden, el aumento de su popularidad solo es comparable al de la Santa Muerte, quizá porque en la Iglesia católica a San Juditas se le conoce como el santo patrono de las causas perdidas.

Hace quince años, Daniel Bucio, un hombre recio, curtido por el sol, le rezó por primera vez a san Judas. Nueve años después, me dice, el santo respondió sus plegarias y le concedió a su madre la liberación de una larga y dolorosa enfermedad. Ahora Bucio viene cada mes a la otrora majestuosa iglesia colonial de San Hipólito, hoy ladeada sobre sus cimientos, justo detrás del principal corredor turístico del centro de Ciudad de México. Acude para agradecer a la milagrosa estatua de san Judas que fue donada a la iglesia hace unos treinta años por una mujer colombiana, según me contó un cura que conoció la iglesia en aquel entonces. A los historiadores del narco tal vez les interese la siguiente coincidencia: fue hace alrededor de treinta años que los traficantes de Medellín, Colombia —famosos por su devoción a san Judas— establecieron lazos

comerciales con sus contrapartes mexicanas. La fiesta oficial de san Judas es el 28 de octubre, y miles de sus seguidores se sienten inspirados a ir a rezarle ese día, todos los meses, y especialmente en octubre. Ese día, en la parroquia se celebran dieciséis misas, desde el amanecer hasta el atardecer, y los devotos se hincan para llegar de rodillas a la estatua del santo, pidiéndole ayuda, protección y una oportunidad de sobrevivir. Las multitudes son tan grandes que la policía tiene que acordonar varios carriles de las avenidas alrededor.

A Daniel Bucio le encantan estas romerías: los empujones de la gente, la comida callejera y el infinito desfile de estatuas de san Judas, algunas tamaño más que natural, otras, pequeñas, pero decoradas de manera fantástica. La de Bucio, fiel a las antiguas tradiciones religiosas de su pueblo natal, luce un tocado de plumas y una tilma —la capa hasta los tobillos que usaban los gobernantes mexicas— recubierta de lentejuelas. Sin embargo, en años recientes, el placer que le producen a Bucio estos peregrinajes mensuales se ha visto empañado por las multitudes cada vez mayores de jóvenes sin sonrisas y mujeres con tatuajes y cadenas, que llegan en grupo y se abren paso a empujones entre la multitud, a menudo intercambiando, en veloces transacciones, lo que parecen pequeños dulces envueltos. Bucio cree que sabe en qué andan.

«Por desgracia, a muchos de estos muchachos les ha dado por venir aquí —dice—. Ensucian el nombre de Nuestro Señor y el de San Juditas, que nada tienen que ver con eso del narco. Si todos los que vienen lo hicieran con sincera devoción, no se vería este tipo de gente».

El padre Jesús García, un miembro de la orden de los claretianos, menudo y jovial, oficia buena parte de las misas en honor a San

Judas y es consciente de que hay gente que da la impresión de querer ganar mucho dinero muy rápido, y que por eso vienen a esta iglesia a rezarle al santo. Pero el padre se esfuerza en señalar que la nueva devoción a san Judas va más allá de clases sociales y ocupaciones. «El otro día vino un político a pedirme que lo ayudara a rezar dizque para tener éxito en las elecciones. ¡Imagínese!», exclama, divertido. No le hace caso a los que dicen que san Judas es un narcosanto. «Por ahí dicen que cuando la estatua de San Juditas lleva su báculo en la mano izquierda significa que trabaja para los traficantes de drogas, y tonterías por el estilo». El padre Jesús dice que prefiere enfocarse en la multitud de nuevos feligreses, cuya devoción —esa sí— es incuestionablemente auténtica.

A juzgar por las apariencias, los traficantes mexicanos son los únicos que no tienen por qué sentirse desesperados en medio de la crisis que ahora obsesiona a sus compatriotas. Los narcos de por acá, envidiablemente bien ubicados para su oficio, transportan casi toda la cocaína que se consume al norte de la frontera. También siembran y contrabandean gran parte de la marihuana, además de un porcentaje cada vez mayor de los estimulantes químicos tan demandados por los consumidores estadounidenses. Utilizan la violencia como un medio particularmente efectivo de comunicación, desfigurando a sus víctimas de forma atroz y exhibiendo sus cadáveres para que todos los vean y sepan cuán poderosos son los capos de la droga, y les teman.

En sus orígenes, los traficantes —que alguna vez fueron un pequeño grupo de gente del campo unido por relaciones de

parentesco— eran oriundos, sobre todo, del estado mexicano de Sinaloa. Ubicado entre el golfo de California y la Sierra Madre Occidental, a unos quinientos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, Sinaloa es en general un estado agrícola y pobre. Pero resultó ser el lugar ideal para un comercio clandestino al servicio del mercado estadounidense. La actividad de los primeros traficantes se restringía casi exclusivamente a sembrar marihuana en las montañas o comprarla de otros productores a lo largo de la costa del Pacífico, para luego pasarla de contrabando a Estados Unidos. Durante décadas, esta fue una operación de comparativamente bajo riesgo y bajo volumen, y la poca violencia existente se daba al interior del mundo de la droga.

En los años setenta, el Gobierno mexicano, en coordinación con Estados Unidos, llevó a cabo una serie de operativos contra los traficantes de Sinaloa. Fue como tratar de deshacerse de un virus inyectándolo en el torrente sanguíneo. Varios «soldados rasos» de la droga fueron encarcelados o dados de baja, pero la mayoría de sus líderes escaparon de Sinaloa ilesos y establecieron operaciones en estados vecinos y en las principales ciudades a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. En cada nueva ofensiva militar, los traficantes se desplazaban a una nueva región y salían fortalecidos. Conforme aumentaba el riesgo, crecía el número de traficantes, que se hacían con más y mejor armamento, y en cada nueva ciudad y región sobornaban a más políticos y policías. No había manera de detener el tráfico de drogas, porque funcionaba según una fórmula infalible: vender bienes ilegales a un enorme sobreprecio a los consumidores que lo puedan pagar, y reclutar la fuerza de trabajo, sobre todo entre hombres jóvenes, sin dinero ni futuro,

desesperados por calzar los mejores tenis, ser muy machos y sentirse poderosos. Para los años ochenta quedó establecido un nuevo orden: los capos de la droga controlaban tanto al bajo mundo como a los miembros clave de las fuerzas de seguridad en ciudades como Guadalajara, Tijuana y Juárez. En un precario arreglo para lograr la paz —que, sin embargo, duró años—, las familias traficantes se dividieron el territorio, quedándose cada quien con una ciudad importante, o «plaza».

En los años noventa se rompió la *pax narca* entre las familias desplazadas de Sinaloa. Comenzaron a luchar sanguinariamente entre ellos mismos por el control de los principales puntos de tránsito en la frontera, y luego siguieron peleando, a veces con, y en ocasiones contra, un advenedizo grupo traficante que no tenía ninguna conexión con Sinaloa. Se trataba del autodenominado Cartel del Golfo, del estado de Tamaulipas, en la otra costa del país: la del golfo de México. De los del Golfo se escindieron los Zetas, un grupo de militares y policías entrenados como fuerza de élite antinarcóticos que luego se torcieron. Los mexicanos comunes y corrientes tuvieron su primera noción de cuán brutal iba a ser la violencia relacionada con las drogas en septiembre de 2006, cuando un grupo de hombres vestidos de negro entró a una discoteca al borde de una carretera y echó al suelo el contenido de una bolsa de basura. Salieron rodando cinco cabezas cercenadas.

La nueva era había llegado, y los soldados de a pie en la escalada de la guerra contra las drogas enfrentaban la posibilidad de una muerte terrible. Empezaron a acudir cada vez más a la muerte misma en

busca de protección. Fue durante los primeros operativos antidrogas que el mito de Jesús Malverde, el narcosanto primordial, se expandió más allá de las fronteras de Sinaloa. Según la leyenda, Malverde fue un forajido del siglo XIX que robaba a los ricos para darle a los pobres. Murió en la horca por sus pecados, y luego comenzó a hacer milagros desde la tumba. Su culto despegó en los años setenta, después de que un antiguo vendedor de la calle, Eligio González, empezara a rezarle. Sentado tranquilamente afuera del santuario de Malverde en Culiacán, la capital de Sinaloa, Jesús, el robusto y serio hijo menor de González, me contó la historia del milagro. En 1976, Eligio trabajaba como chofer cuando lo apuñalaron y balearon en el transcurso de un asalto. Lo dieron por muerto, pero le rezó a Malverde —cuyo único monumento en ese entonces era una pila de rocas donde se decía que estaba su tumba— prometiéndole construir un santuario en su honor si le salvaba la vida. Y como sobrevivió, cumplió su palabra.

González parece haber comprendido que la gente solo entendería la verdadera importancia de Malverde si tenía una imagen de él que pudiera venerar. Pero, por desgracia, no hay fotografía alguna de él ni, de hecho, ninguna evidencia de que haya existido jamás. En los años ochenta, González le pidió a un artesano del barrio que creara un busto de yeso: «Hazlo medio como Pedro Infante, medio como Carlos Mariscal», le dijo, siendo Pedro Infante una famosa estrella de cine nacida en Sinaloa y Carlos Mariscal un guapo político local.

El santuario de Malverde es un templo improvisado de bloques de hormigón, situado justo frente al complejo de oficinas del Gobierno del estado de Sinaloa, y sus paredes verdes están tapizadas por dentro y por fuera con testimonios de los creyentes. El busto de

yeso se venera en una caja de vidrio rodeada de docenas de ramos de flores, sobre todo de plástico. Muchas de las fotos y placas grabadas que lo acompañan tienen la imagen de una planta de la marihuana o un «cuerno de chivo»: un rifle AK-47. Nadie disputa seriamente la condición de narcosanto de Malverde: en Sinaloa se da por hecho que, cuando un traficante de altura le quiere rezar, se cierra la calle entera para que pueda hacerlo en paz. Pero, como señaló un guardia de la prisión de Culiacán, Malverde ya es tan popular entre los sinaloenses de todos los estratos que en realidad es más un símbolo de identidad.

En Ciudad de México, el director de penitenciarías no permite la entrada a reporteros que se nieguen a firmar una declaración donde se comprometen a no escribir «propaganda» en favor del culto a la Santa Muerte. Pero en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, el director de la prisión me permitió hablar con algunos de los reos sobre su fe, sin condiciones preestablecidas. Escoltada por los guardias a través de una serie de puestos de control y corredores, me sorprendió un largo corredor a cielo abierto cuyo muro izquierdo estaba decorado con alegres imágenes de Blancanieves, Piolín, Bob Esponja y otros personajes por el estilo. Estas figuras, me explicó un guardia, se pintaron a solicitud de los prisioneros, para que los niños no se sientan tan aterrorizados cuando vienen a pasar los días feriados con sus papás. Frente al muro de las caricaturas hay una gran reja de alambre de púas y, detrás, una serie de edificios parecidos a hangares, que deben

alcanzar temperaturas infernales en el calor sinaloense. Están rodeados de pasto y hay, incluso, algunos árboles.

Aquí es donde Antonio, el acusado de secuestro, escribe corridos —un par de ellos incluso ya fueron grabados—, y donde el Niño, el asesino convicto, clava alfileres en un marco de terciopelo negro y les enreda hilos de colores brillantes para formar elaborados diseños de la Virgen de Guadalupe, Jesucristo y la Santa Muerte. Se enteró por primera vez de su existencia en la televisión, lo que podría parecer una fuente algo extraña para semejante revelación espiritual, pero fue el camino que se le abrió tras los muros de ese recinto metálico. Ahora nada puede quebrar su fe en su nueva protectora.

Hablamos bajo la sombra de un árbol frondoso, varios presos y yo sentados alrededor de una mesa tambaleante que un par de reclusos sacaron y limpiaron con esmero. Unos cuantos presos que al principio nos rodearon acechantes finalmente permanecieron de pie, en silencio, asintiendo mientras Antonio explicaba lo que le da a la Santa Muerte su atracción especial: «La Muerte siempre está a tu lado: incluso si es solo una estampita que pones encima de tu catre, sabes que ella no se va a mover, que nunca se va a ir».

La abuela del Niño le dijo que, si alguna vez sale de la cárcel, no quiere verlo, y tampoco quiere que su hija lo vuelva a ver jamás. Pero, a diferencia de los suyos, la Muerte sí lo necesita: «Si le prometes una flor blanca y no se la traes, te sientes mal —dice él—. Ella llora y entonces te sientes mal». Por eso, a ella le cumple las promesas que le hace.

Se acerca el mediodía y el calor aumenta con rapidez. Los reos intercambian señas y uno de ellos va a su galpón y regresa con una

jarra rota de plástico con agua, que sirve con inesperada cortesía a la visitante inusual. Pregunto acerca de los rumores que circulan sobre los rituales para la Santa —la Santísima, la Flaquita, la Niña Blanca—, en los que se dice que puede haber sangre humana o incluso sacrificio humano. Un recluso de otra cárcel, donde las condiciones eran infinitamente peores, me había asegurado que eso era cierto.

El Niño y Antonio solo dicen que la Santa Muerte concederá tus oraciones, pero solo a cambio de un pago, y ese pago debe ser proporcional al tamaño del milagro solicitado. El castigo por incumplir la deuda que uno tiene con ella es terrible.

Conversamos un rato más, y, a pesar de las temperaturas que deben convertir sus celdas en hornos, algo tiene el entorno de su encierro —la amplitud de la prisión, el pasto, los árboles, incluso la camaradería con la que los reclusos tratan al solitario guardia que está de turno del otro lado de la malla— que hace que el lugar parezca casi agradable. «[El guardia] se pasa doce horas al día aquí —dice Antonio—. Está tan preso como nosotros».

Mientras los hombres descansan, su cordialidad conmigo hace posible imaginar por un momento que no son culpables de crímenes terribles, que su fe en la Santa Muerte es tan solo una cuestión de preferencia y no una necesidad desesperada. Le pregunto al Niño si cree que, cuando salga, podrá llevar una vida normal.

Su rostro se tuerce en una sonrisa amarga: «¿Con todo lo que he hecho? —dice—. En el instante que me asome del otro lado del portón ya me van a estar esperando para matarme». Nos damos la mano, y él y Antonio me agradecen la oportunidad de hablar.

Regreso al otro México, donde la esperanza también exige una fe inmensa.

National Geographic, mayo de 2010

Agradecimientos

No hay razón alguna por la que cualquier ser humano quiera gastar su tiempo hablando con una reportera o un reportero; tan seductores y traidoras somos. Sin embargo, la gente nos habla siempre, con generosidad y paciencia, y así se nutrieron estos relatos. Son cientos los que contribuyeron con sus conocimientos o con su profunda experiencia de la vida a estas páginas, y a veces corrieron riesgos terribles para ayudarme a entender. Una lista muy incompleta incluye a las siguientes personas, con disculpas a los muchísimos que quedaron fuera gracias a mi arbitraria memoria: Malú Aguilar, Santiago Aguirre, Enrique García, Kau Sirenio, Eduardo Guerrero, Marcela Turati y Periodistas de a Pie, Gustavo de la Rosa, Jason Berry, Froylan Enciso, Luz Mely Reyes, Raúl Peñaranda, Alonso Salazar, María Victoria Llorente, Claudia García, Zoilamérica Narváez y Dora María Téllez, ambas sobrevivientes del brutal régimen de Nicaragua, Pedro Abramovay, Emmanuel del Real, Nicole Bravo, David Holiday, los hermanos Carlos y Óscar Martínez y Marisa Martínez. Están también, de forma destacada, Teodoro Petkoff, agredido brutalmente los últimos años de su vida por el régimen de Nicolás Maduro, y todos los aguerridos reporteros sobrevivientes o asesinados por el narcotráfico de América Latina.

Son muchos también los queridos amigos que a lo largo de los años me han brindado casa, comida, un oído solidario y sus extraordinarios conocimientos. Brian Nissen, Carlos Dada, Rafael Noboa, Salomón Kalmanovitz, Juanita León, Margarita Martínez, Karen de Young, Cynthia Arnson, Peggy Engel, Fredy Flórez, Donald Donovan y Jennifer Lake, Esther Allen y Nathaniel Wice, Elisa Jiménez, Patrick Iber, Adriana Martínez, Bertha Navarro, Mafe Márquez, y Mariclaire Acosta y John Burstein han sido fuente de consuelo y ayuda hasta en los peores tiempos. Sergio y Tulita Ramírez, Ramón Jimeno, Mac Margolis, Carlos Fernando Chamorro y Álvaro Jiménez siempre me ayudaron a ir un paso más allá en las investigaciones para mis reportajes. Guillermo Osorno, Damian Fraser y Jennifer Homans han leído y mejorado siempre mis infinitos borradores.

Como reportera, viajo siempre sola para mantenerme tan expuesta como sea posible a la realidad circundante. Pero nunca he trabajado sola. Dondequiera que vaya siempre ha habido gente joven y brillante como Luis Mendoza, Nicole Bravo y Carlos Salinas Maldonado, que me han ayudado a trazar el camino y que nunca se han reído de mi ignorancia.

Cuando lo pienso, no alcanzo a creer la suerte que he tenido a lo largo de décadas, escribiendo para los editores de medios que han sido pilares de la cultura. En la revista *National Geographic* Oliver Payne tomó mis páginas y las convirtió en textos que hasta a mí me gustaron, mientras que el resto del equipo editorial hacía prodigios con la verificación de la información, los mapas y las gloriosas fotografías. Algunos de los textos más complicados y extensos se publicaron por primera vez en *The New Yorker*, donde David

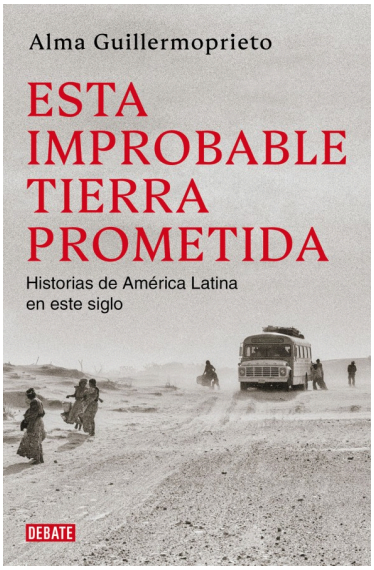
Remnick, editor de una revista que es uno de los mayores baluartes de la cultura editorial, siempre me ha ofrecido apoyo y espacio. Más de la mitad de mi vida profesional ha transcurrido entre las páginas de *The New York Review of Books*, y nada me produce mayor orgullo. Gracias a Hugh Eakin, Michael Shea y Matt Seaton, que ejercen el oficio de editor con mano de cirujano y ojo de artista, y a la heroica Emily Greenhouse, que le ha imbuido nueva vida a una revista indispensable y sin igual.

Este libro no existiría sin la energía, el optimismo, y la inagotable generosidad de Miguel Aguilar en Penguin Random House, donde siempre he encontrado un hogar. Va también mi profundo agradecimiento al paciente y laborioso Ignasi Ruiz y a todo el equipo editorial de la casa por la amabilidad y buen hacer que caracteriza su trabajo siempre, y que para este libro hizo particular falta.

Este será el último libro de reportajes que publique, pues he ejercido un oficio de jóvenes mucho más allá de lo que me correspondía. Va dedicado a los reporteros que sé que existirán en el futuro, porque a pesar de las dificultades y los peligros sin fin, este es un oficio irresistible, y porque todos saben que, aunque no nos quieran, hacemos falta.

Va dedicado también a Néstor, con la esperanza de que en algún rincón del mundo haya encontrado paz.

Un retrato imprescindible de la violencia, el poder y la belleza de América Latina en este siglo.



Durante más de cuarenta años, Alma Guillermoprieto ha recorrido incansablemente Latinoamérica, entrevistando a asesinos y a las familias de sus víctimas, hablando con barrenderos y artistas, con ruidosos carnavaleros y religiosos circunspectos, con políticos reflexivos e histriónicos mandatarios. Guillermoprieto extrae lazos comunes entre personas y contextos diversos, como los efectos de la guerra contra las drogas en regiones rurales y empobrecidas o las experiencias de aquellos involucrados en la violencia de Estado o patrocinada por los cárteles. Al mismo tiempo, muestra cómo el arte de estas regiones traduce la nostalgia y el dolor en algo hermoso o cómo el periodismo puede levantar la voz contra la injusticia. En

Esta improbable tierra prometida, su tercer volumen de crónicas, completa su complejo y siempre convincente retrato de la Latinoamérica de nuestro tiempo, en toda su tragedia y gloria y en una era de populismo y demagogia, e intenta, una vez más, responder a la gran pregunta sin resolver: ¿cómo cambiamos nuestro futuro para que no se parezca tanto a nuestro pasado?

«Alma Guillermoprieto es una cronista inigualable de nuestra América, que en su prosa virtuosa sabe penetrar con mirada aguda los conflictos y los dramas de los países del continente, para darnos retratos certeros sobre la opresión y las injusticias, rebeliones, conflictos y ansias de cambio, sin olvidar nunca, como periodista que a la vez es escritora, que de por medio están los seres humanos».
Sergio Ramírez

Alma Guillermoprieto nació en México, pero en su adolescencia se mudó a Nueva York, donde estudió danza moderna. En 1970 fue contratada para impartir clases de danza en la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Sus recuerdos de esa época componen La Habana en un espejo (Literatura Mondadori, 2005). Inició su carrera periodística en 1978 como reportera en América Central para el diario The Guardian, y después para The Washington Post, del que fue redactora de planta en los años ochenta. También fue jefa de la corresponsalía para América del Sur del semanario Newsweek. Desde 1989 escribe sobre América Latina para The New Yorker y The New York Review of Books. Ha recibido, entre otras, las siguientes distinciones: Premio a los Medios de la Latin American Studies Association (1992), MacArthur Foundation Fellowship (1995), miembro de la American Academy of Arts and Sciences (2001), Doctorado Honoris Causa por la Baruch University (2008), Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara (2008) y el Overseas Press Club Award (2009). Es miembro del consejo ejecutivo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Es autora, entre otros libros, de Samba (1990), Al pie de un volcán te escribo (1995), Los años en que no fuimos felices (1998) y Las guerras en Colombia (2000).



Titulo original: *The Years of Blood. Stories from a Reporting Life in Latin America*

Primera edición: mayo de 2026

© 2026, Alma Guillermoprieto
c/o Indent Literary Agency
www.indentagency.com
© 2026, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona
© 2026, Laura Emilia Pacheco, por la traducción
© 2026, María Luisa Rodríguez Tapia, por la traducción de «La invasión sorpresa de Venezuela», publicada por acuerdo con *El País*

Diseño de la cubierta: Penguin Random House Grupo Editorial
Imagen de la cubierta: © Pablo Ortíz Monasterio

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes de propiedad intelectual al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Ninguna parte de este libro puede ser utilizada o reproducida con el propósito de entrenar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial. PRHGE se reserva expresamente la reproducción, la extracción y el uso de esta obra y de cualquiera de sus elementos para fines de minería de textos y datos y el uso a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados (art. 67.3 del Real Decreto Ley 24/2021). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
En caso de necesidad, contacte con: seguridadproductos@penguinrandomhouse.com

ISBN: 979-13-87904-93-7

Compuesto en: M.I. Maquetación, S.L.

Facebook: PenguinEbooks
Facebook: debatelibros
X: @debatelibros
Instagram: @debatelibros
YouTube: penguinlibros
Spotify: PenguinLibros

«Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro».

EMILY DICKINSON

Gracias por leer este libro.

En **penguinlibros.club** encontrarás las mejores recomendaciones de lectura.

Únete a nuestra comunidad y viaja con nosotros.

penguinlibros.club

Penguin
Random House
Grupo Editorial

penguinlibros

[1] Disponible en <https://short.do/lPv3kq> y <https://short.do/gx5zZJ>.> y <https://short.do/gx5zZJ>.

[2] Véase «La megacárcel que Bukele inauguró en El Salvador, el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo», BBC News Mundo, 1 de febrero de 2023, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina.64491586>.

[3] La versión original de este monólogo ya no se encuentra en línea, de forma que se ha traducido del inglés al español. (N. de la T.)

Índice

Esta improbable tierra prometida. Historias de América Latina en este siglo

Introducción. Una vida de reportera en América Latina

De demonios y dolor

1. La misión del padre Maciel
2. Confesiones de un asesino
3. Con dinero baila el perro
4. El pavoroso duunvirato de Nicaragua
5. En la tierra de los niños asesinos
6. La verdad o la vida
7. Los 43

De gobernantes y rebeldes

8. Evo Morales, el redentor fracasado de Bolivia
9. No llores por mí, Venezuela
10. La invasión sorpresa de Venezuela
11. Colombia busca la paz
12. Los rebeldes de Cali

Héroes

13. Una voz contra la oscuridad

14. La muerte encuentra al arzobispo

Belleza y fe

15. El soberano arte del tamal

16. La enredada naturaleza del amor

17. Claudia Andujar

18. Secretos del Otromundo maya

19. Santos del desconsuelo

Agradecimientos

Sobre este libro

Sobre Alma Guillermoprieto

Créditos

Notas